



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela Profesional de Sociología

Dictadura y universidad: el gobierno autoritario y privatista de la Comisión Reorganizadora de San Marcos (1995-2000)

TESIS

Para optar el Título Profesional de Licenciado en Sociología

AUTOR

Kevin Roger LAZO CAÑETE

ASESOR

Dr. Julio Víctor MEJÍA NAVARRETE

Lima, Perú

2020



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.

Referencia bibliográfica

Lazo, K. (2020). *Dictadura y universidad: el gobierno autoritario y privatista de la Comisión Reorganizadora de San Marcos (1995-2000)*. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Sociología. Escuela Profesional de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

ANEXO 4

Información Complementaria (metadatos complementarios)

Código ORCID del asesor(es)	0000-0002-4170-5643
Autor DNI (obligatorio) Pasaporte/carnet de extranjería (sólo extranjeros)	Kevin Roger Lazo Cañete 47216048
Asesor DNI (Obligatorio)	Julio Víctor Mejía Navarrete 08425674
Código ORCID del autor	0000-0002-7454-8146
Grupo de Investigación	- -
Financiamiento	- -
Ubicación geográfica donde se desarrolló la investigación (Incluirse localidades y/o coordenadas geográficas)	Av. Carlos Germán Amézaga 375 Ciudad Universitaria de la UNMSM Cercado de Lima-Lima-Perú 12°03'21.8"S 77°05'03.9"W
Año o rango de años que la investigación abarcó	Un (1) año.
Disciplinas OCDE	-Sociología - http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.01 -Temas sociales - http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
VICEDECANATO ACADEMICO

**ACTA PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADO EN SOCIOLOGIA**

*En Lima a los cinco días del mes de noviembre del dos mil veinte, reunidos mediante la Plataforma GOOGLE MEET, bajo la presidencia del Dr. Manuel Jerjes LOAYZA JAVIER y con la asistencia de los miembros del Jurado y del Vicedecano Académico de la Facultad, se dio inicio a la **sustentación virtual de la Tesis** presentada por el Bachiller **Kevin Roger Lazo Cañete**, para optar el **TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA** titulada:*

“DICTADURA Y UNIVERSIDAD: EL GOBIERNO AUTORITARIO Y PRIVATISTA DE LA COMISIÓN REORGANIZADORA DE SAN MARCOS (1995 – 2000)”

A continuación, se formularon las preguntas y observaciones por parte de los miembros del Jurado. Luego de absueltas, el Jurado procedió a calificar la exposición de la Tesis obteniendo la nota:

*..... **18 dieciocho (Sobresaliente)**.....*

*El Jurado, de conformidad al Reglamento General de Grados y Títulos de la Facultad, acordó otorgar al Bachiller **Kevin Roger Lazo Cañete**, el **TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO** en Sociología y para dar constancia se extendió la presente Acta y firmaron:*

Dr. Manuel Jerjes Loayza Javier
Presidente

Mg. Ananías Máximo Huamán Talavera
Miembro

Dr. Pedro Maguín Jacinto Pazo
Miembro

Dr. Julio Víctor Mejía Navarrete
Asesor



UNMSM

Firmado digitalmente por QUIROZ
CHUECA Francisco Felipe FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.11.2020 17:39:41 -05:00

Dr. Francisco Felipe Quiroz Chueca
Vicedecano Académico (e)

Dedico este trabajo a Miguelina Cañete Meza y Nilo Lazo Pacheco, mis padres, por haber sido la base necesaria y principal para el desarrollo de esta tesis

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN	
1.1. Planteamiento del problema	10
1.2. Formulación del problema	12
1.3. Objetivos	12
1.4. Hipótesis	12
1.5. Justificación	13
1.6. Metodología	13
1.7. Tabla de consistencia	15
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	
2.1. Antecedentes	17
2.2. Perspectivas teóricas	21
2.3. Contexto político-económico	43
2.3.1. La política general del gobierno de Fujimori	43
2.3.1.1. La aplicación del neoliberalismo	43
2.3.1.2. El golpe de Estado (1992)	49
2.3.1.3. El control de instituciones	52
2.3.1.4. La represión del sector popular (1995-2000)	54
2.3.2. La política educativa del gobierno de Fujimori	59
2.3.3. La política universitaria del gobierno de Fujimori	68
2.3.3.1. La política de privatización de la universidad	69
2.3.3.2. La política represiva	88
2.4. Marco conceptual	100
CAPÍTULO III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	
3.1. El gobierno autoritario de la CORE-SM	102
3.1.1. La intervención o la raíz autoritaria de la CORE-SM	103
3.1.1.1. Preparando la intervención de SM: el agente Paredes	103
3.1.1.2. El inicio de la intervención: la inconstitucional Ley 26457	111
3.1.2. La concentración del poder en la CORE-SM o sobre la eliminación del cogobierno universitario	124
3.1.2.1. La constitución de la CORE-SM	124
3.1.2.2. Las prerrogativas de la CORE-SM	125
3.1.2.3. La reestructuración orgánica en los planes de trabajo de la CORE-SM	126
3.1.2.4. El proceso de la reestructuración orgánica del gobierno de San Marcos	128
3.1.3. La represión ejercida por la CORE-SM	140
3.1.3.2. La expulsión de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes o sobre la “depuración” de la universidad	140
3.1.3.3. La reincorporación	156
3.1.3.4. Espionaje	158
3.2. El gobierno privatista de la CORE-SM	162
3.2.1. La privatización en los planes de la CORE-SM	163
3.2.2. Evolución de las tarifas	166
3.2.3. Los recursos directamente recaudados por el centro preuniversitario	171
3.2.4. La sistematización de los recursos directamente recaudados	173
3.2.5. La política de informatización y su financiamiento mediante los RDR	176
3.2.6. Evolución porcentual de los RO y RDR respecto al presupuesto total anual (1988-2000)	181
3.2.7. Interpretación	182
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES	184
CAPÍTULO V. RECOMENDACIONES	189
CAPÍTULO VI. BIBLIOGRAFÍA	191
CAPÍTULO VII. ANEXOS	202

INTRODUCCIÓN

La política general del gobierno de Fujimori implicó el inicio sistemático de la aplicación del neoliberalismo en el Perú. Eso es sentido común en la Sociología; sin embargo, pocas veces se han investigado los cambios concretos que dicha política ha producido en la Educación y, específicamente, en la universidad peruana.

Nosotros no queremos eludir esa necesidad teórica, por eso hemos escogido este tema; y lo hemos delimitado a lo más cercano: la UNMSM. En este sentido, al indagar sobre la historia reciente de nuestra universidad hemos descubierto que la etapa que más debiera haberse investigado, por representar el inicio de la actual deplorable situación de San Marcos, no está lo suficientemente investigada. Nos referimos a la etapa en la que San Marcos fue vapuleada, pisoteada y, lo peor, ajustada por la fuerza al molde neoliberal: el proceso de reorganización desarrollado por la poco conocida Comisión Reorganizadora de San Marcos (1995-2000).

Así, y presentándose la empresa demasiado ardua frente a nuestra capacidad material, hemos decidido analizar el gobierno de la CORE-SM; y, es más, hemos limitado este análisis a dos de sus ámbitos: político y económico. Por ello nuestro problema principal se plasma en la pregunta ¿Cuál fue el carácter político y económico del gobierno de la Comisión Reorganizadora de San Marcos (1995-2000)? Debemos resaltar que un ámbito crucial que dejamos de lado es el académico, el cual tiene que ver principalmente con la cuestión de los docentes y la orientación teórica; cuestiones que en este lustro se reconfiguraron en gran medida. Dos hechos centrales al respecto son 1) las expulsiones arbitrarias de docentes y la incorporación de otros afines a la CORE-SM y 2) el sistemático cambio de mallas curriculares en todas las Escuelas de la UNMSM.

La delimitación de nuestra investigación tiene como criterio orientador ir de lo general a lo específico en cuanto a la política estatal. Primero partimos por diferenciar dos políticas contrapuestas: una desarrollada por el Estado y otra por el pueblo organizado. De ambas escogimos analizar la política desarrollada por el Estado para luego ir especificando nuestro objeto de estudio con el siguiente esquema: política general del Estado dirigido por el gobierno de Fujimori → política educativa → política universitaria → política universitaria en el quinquenio 1995-2000 → política aplicada a la UNMSM (1995-2000): gobierno de la CORE-SM → ámbito económico y político del gobierno de la CORE-SM. Es decir, analizamos la política proveniente del Estado desde lo más general hasta lo más específico pero teniendo como eje a nuestro problema principal. Con esto esperamos que se comprenda que nosotros, conscientemente, no nos hemos planteado analizar la respuesta

organizacional y política de la comunidad universitaria sanmarquina frente al gobierno de la CORE-SM.

Otras preguntas aledañas que nos hicimos, importantes pero que no necesariamente formaron parte del planteamiento formal del problema fueron ¿La subversión dominaba San Marcos en 1995? ¿La CORE-SM fue un método empleado por el Estado como parte de una política contrasubversiva? ¿Cuál fue el objetivo de la CORE-SM? ¿Tenía planes de trabajo la CORE-SM? ¿Cuál era la orientación de la CORE-SM? ¿Es cierto que la CORE-SM mejoró la UNMSM? ¿Cómo y por qué se impone la CORE-SM? En esta parte, consideramos necesario dejar claro solo lo referente a la cuestión de la subversión y la contrasubversión. Cuestión sobre la que profundizamos en el Cap. II.

Tanto a nivel nacional como a nivel de la UNMSM, la subversión, entendida sucintamente como la movilización política armada de un sector del pueblo con el objetivo de tomar el poder y transformar la sociedad, finalizó prácticamente en 1994. Así, la política contrasubversiva y todo lo que ella implica tuvo sentido hasta dicho año. En el caso de la UNMSM, la instalación de la base militar estuvo enmarcada en el objetivo de vencer a la subversión; pero su permanencia, más allá de 1994, respondió ya no a la lucha contrasubversiva sino a la represión generalizada de toda oposición al régimen fujimorista y a garantizar la ejecución de las políticas de la CORE-SM. Por ejemplo, los pelotones del Ejército garantizaron la permanencia fáctica de Paredes en el decanato de San Fernando cuando este pugnaba con Reátegui por alcanzar el rectorado; resguardaron la instalación de la mayoría de decanos impuestos por la CORE-SM; se enfrentaron a la comunidad universitaria con tal de garantizar la ejecución de las acciones dispuestas por la CORE-SM o sus decanos; etc. Es decir, los militares fueron el brazo armado, violento, represivo y el soporte principal de la CORE-SM.

Por estas razones, sostenemos que la política contrasubversiva en general evolucionó –en función a los objetivos del régimen- a una política represiva pero de menor intensidad que tuvo como objetivo la represión a toda manifestación organizada de oposición al régimen fujimorista y como táctica el uso de un supuesto grave peligro subversivo. En este mismo sentido la política contrasubversiva en la universidad evolucionó o cambió a una política represiva (1994 en adelante) pero de menor intensidad que tenía como objetivo ya no la eliminación (encarcelamiento y desaparición) de la guerrilla sino la represión (estigmatización, amedrentamiento y encarcelamiento) de organizaciones no guerrilleras opositoras al régimen; todo esto en función a perpetuar el régimen fujimorista.

En base al marco teórico, los resultados de esta investigación y a modo de

conclusión y aporte teórico respecto a la política universitaria de este quinquenio, consideramos que esta política represiva de menor intensidad aunada con la política de privatización y el ajuste académico constituyen una única política que denominamos política de control y ajuste de la universidad peruana, principalmente de la pública. Política que inició en 1995 y se agudizó en el caso de las universidades intervenidas mediante Comisiones Reorganizadoras.

Por otro lado, para poder responder todas las preguntas planteadas nos hemos valido de fuentes y técnicas diversas; para comprender la política de la CORE-SM hemos analizado sus planes de trabajo, Resoluciones Rectorales, Reglamentos, Memoria de trabajo y los discursos de su presidente, Paredes Manrique. Adicionalmente, para desarrollar el análisis del ámbito económico hemos analizado y procesado los datos recogidos de los compendios estadísticos producidos por la Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM y los Tarifarios de toda la década del 90. Asimismo, estos datos han adquirido un tono vívido con las entrevistas que hemos realizado, los documentos históricos proporcionados por actores de dicho periodo y los testimonios recogidos en el Informe de la Comisión de la Verdad de San Marcos-2001.

Finalmente, teniendo como referencia los antecedentes nacionales e internacionales y el contexto social nacional y utilizando las perspectivas teóricas hemos hecho ejercicio de la abstracción o síntesis e interpretación; es decir, hemos ordenado y catalogado los datos entorno a políticas y, a su vez, hemos establecido el tipo de relación entre las políticas y entre estas y los organismos gobernantes desde una perspectiva crítica y democrática, como la planteada por Aníbal Pérez (2011). Así, mediante la interpretación ha sido posible caracterizar el gobierno de la CORE-SM; porque el carácter de algo es la síntesis y la definición de sus cualidades.

Dicho todo esto, ¿qué queremos lograr con esta tesis? pues queremos contribuir en esclarecer una etapa crucial de la historia reciente de la UNMSM y en caracterizar el aspecto político y económico del gobierno universitario más negro de las últimas décadas: la CORE-SM. Y buscamos esclarecer para que la comunidad universitaria sanmarquina y nacional tenga mejores herramientas teóricas en su lucha por una universidad peruana gratuita, democrática, autónoma, nacional y científica, pues solo así está/rá en correspondencia con las necesidades de desarrollo del pueblo.

En relación al cuerpo de la tesis, haremos referencia solo a dos de los capítulos por ser los más complejos: el II y el III.

Sobre el Capítulo II, Marco Teórico: Abordar el gobierno de la CORE-SM implica

comprender su contexto político y económico; es decir, el gobierno encabezado por Fujimori y, específicamente, su política educativa y universitaria. Por estas razones ha sido inevitable que nuestra investigación incorpore en su marco teórico estos aspectos; lo cual hemos hecho mediante el apartado denominado contexto político-económico. Asimismo, los antecedentes de que nos hemos servido presentan justamente también el mismo abordaje.

Para comprender la utilización de la categoría *gobierno universitario* debemos comprender que este responde al desarrollo histórico particular de la Universidad en Latino América y, específicamente, en el Perú; a la relación de autonomía frente al poder del Estado y a su particularidad plasmada en el cogobierno mediante órganos colegiados. En base a esta realidad es obvio que no es lo mismo hablar del gobierno de un país, como parte de un Estado, y hablar del gobierno universitario. Por estas razones, sería un error confundir ambas categorías. En este sentido, nosotros utilizamos, como base de nuestras variables, al *gobierno universitario*.

En efecto, el gobierno universitario autoritario y el gobierno universitario privatista son las dos variables que, cual dos puertas de entrada, permiten exponer las perspectivas teóricas entorno a ellas y que presentamos a través de sus textos más logrados.

Finalmente, el marco conceptual permitirá al lector comprender la acepción y/o orientación que se utiliza en la tesis respecto a las categorías principales.

Sobre el Capítulo III, Análisis e interpretación de resultados: Sus dos partes generales devienen de las dos variables y de su concreción en el caso de la CORE-SM: 1) el gobierno autoritario de la CORE-SM y 2) el gobierno privatista de la CORE-SM. La primera parte, a su vez, se divide en tres aspectos. El primer aspecto analiza la intervención o la vulneración de la autonomía universitaria, la cual consideramos el origen o la raíz autoritaria de la CORE-SM ya que fue la acción que posibilitó el desenvolvimiento posterior de los otros aspectos. Una característica importante, por lo necesaria, de este primer aspecto es que resaltamos el desenvolvimiento de algunos actores, como Paredes Manrique, en la consecución de la intervención. El meollo de este aspecto es observar la correlación política y la coordinación directa entre el gobierno de Fujimori, mediante Marta Chávez, y el grupo liderado por Paredes.

El segundo aspecto, en síntesis, trata sobre cómo la CORE-SM concentró autoritaria e injustamente el poder y cómo así esto tiene como contraparte la eliminación del cogobierno universitario. En el tercer aspecto se sostiene que las expulsiones fueron principalmente métodos de represión contra los opositores de la CORE-SM y, por ende, del

régimen fujimorista. Adicionalmente se da cuenta del contexto represivo concretado en el espionaje, la presencia militar, etc., todo esto ejecutado por organismos del Estado como la DINCOTE, el SIN, la Base Militar y la CORE-SM.

La segunda parte, el gobierno privatista de la CORE-SM, es más pequeño pero más sólido. Con este apartado hemos logrado demostrar que el proceso de privatización de la UNMSM se consolidó mediante el proceso de reorganización (1995-2000) dirigido por la CORE-SM. Por esta razón, el meollo de esta segunda parte es el cuadro titulado “Porcentaje que representan los RO y RDR del presupuesto anual total de la UNMSM (1988-2000)”. Demostración que se sostiene mejor al comprobar que en los últimos veinte años el porcentaje promedio de los RDR no dista significativamente de lo alcanzado en el último año de gobierno de la CORE-SM: 47,97%. Es decir, que se ha seguido la pauta legada por esta comisión privatista.

Como punto importante, quiero agradecer a todas las personas que han contribuido en la construcción de esta tesis, principalmente a dos: al Psic. Moisés Vargas Osorio, quien con sus escritos sobre el problema y su apoyo en cuanto a fuentes representó la puerta de ingreso a esta investigación; y al Hist. Alejandro Salinas Sánchez, activo constructor del importante Archivo de la Facultad de Ciencias Sociales y su primer director. Este Archivo significó la fuente principal de la documentación oficial emitida en el periodo de la CORE-SM, aspecto medular para el sostenimiento concreto de la Tesis.

Finalmente, saludamos a los interesados en esta tesis porque refleja una actitud democrática y les solicitamos difundirla todo lo posible.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El neoliberalismo comenzó su aplicación en América Latina mediante la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, en 1973. Fueron los denominados "Chicago Boys" los que asesoraron la política económica de este régimen teniendo como guía las ideas inculcadas en EEUU por los principales intelectuales de esta concepción. Su posterior expansión fue planificada y conducida por los organismos económicos más importantes a nivel mundial: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional (Butrón, 2018).

En el Perú este nuevo modelo empieza su implementación sistemática con el gobierno de Fujimori. Por esta razón, la política general del régimen se caracterizó por la reestructuración del Estado al vender varias grandes empresas al capital privado, reduciendo así el rol estatal en la economía y también su capacidad de gasto; se impulsó el capital privado mediante la privatización generalizada, afectando también a la Educación; finalmente, se consolidó la política contrasubversiva.

Paralelamente, en la década del 90, organismos internacionales como la CEPAL, UNESCO Banco Mundial sintetizaron diversas propuestas educativas que se habían ido generando en este ámbito específico como parte de la implementación del neoliberalismo en general. Así, por ejemplo, en el documento *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad* (1992), la CEPAL y la UNESCO plantean que la universidad pública de América Latina debe cubrir su déficit presupuestal con recursos provenientes del sector privado, dentro del cual considera a las familias (Brunner, 1994). Esta y otras medidas fueron aplicadas, por ejemplo, en Chile; país que fue tomado como ejemplo por el gobierno de Fujimori (García y Salvador, 1997).

Así, determinada la política general y específica, la política educativa tuvo como objetivo el ajustar la educación en el Perú al engranaje neoliberal en marcha, cuyo eje es el ámbito económico. En este sentido, se requería que se consolide la privatización en todos los niveles de la Educación, la elitización de la composición social estudiantil, la lucha contrasubversiva, la represión y la difusión de una ideología que forme a la niñez y juventud peruana en la reproducción del sistema impuesto (Rodríguez, 2007; Ponce, 2002; Yalle, 2008 ;Vargas, 2002a).

Por consiguiente, siendo la Universidad un nivel de la Educación en general, la política universitaria tenía que contribuir a alcanzar los objetivos educativos del régimen. Por esta razón, el gobierno emitió varios decretos y leyes para el ámbito universitario:

Decretos, N° 726 (1991), N° 700 (1991), N° 739 (1991), N° 882 (1996); Leyes N° 26302 (1994), N° 26439 (1995), N° 26457 (1995). En conjunto, y correspondiéndose con la política educativa, estas normas tuvieron el objetivo de privatizar la universidad peruana, militarizar las universidades como parte de la lucha contrasubversiva, vulnerar la autonomía universitaria, controlar la universidad para reprimir la oposición al régimen y ajustar el contenido académico de la universidad en función al neoliberalismo (Mejía, 2017; Rodríguez, 2007; Ponce, 2002; Yalle, 2008; Vargas, 2002a).

Especificando aún más, del conjunto de políticas y leyes emitidas para la Universidad peruana, existe una política por la cual se intervinieron seis (UNMSM-Lima, UNE-Lima, UNFV-Lima, UNHV-Huánuco, UNSLG-Ica, UNJFSC-Huacho) de la universidades públicas del país en la década del 90. Nos referimos a la política que profundiza la intervención universitaria mediante Comisiones Reorganizadoras (Rodríguez, 2007). En el caso de la UNE y la UNMSM esta política se inicia el 25 de mayo de 1995 con la Ley N° 26457, se desarrolla mediante las Leyes N° 26614 (1996), N° 26797 (1997), N° 26880 (1998), y finaliza con la Ley N° 27366 del 4 de noviembre de 2000 -que cesa todas las comisiones interventoras.

La CVR (2003) concluye de manera general que ésta política tuvo como objetivo el controlar y subordinar las universidades según los intereses del régimen fujimorista. Otras investigaciones (Vargas, 2002; Rodríguez, 2007; Yalle, 2008) también concluyen de manera categórica que esta política tuvo como principal objetivo el ajustar la universidad en función al modelo económico neoliberal tanto en lo económico como en lo teórico o académico.

Sin embargo, si bien existe una caracterización general de dicha política interventora, no existe una investigación concreta y sistemática del gobierno de la CORE-SM. Este vacío, consideramos, representa un problema teórico que debe resolverse. En efecto, y en base a las condiciones de lo investigado hasta ahora, delimitaremos nuestra investigación al análisis del carácter político y económico del régimen de gobierno de la Comisión Reorganizadora de San Marcos, limitándonos conscientemente a no investigar su carácter académico debido a limitaciones materiales y teóricas. Centramos en la cuestión política para consolidar, teniendo como base los antecedentes, el análisis del carácter político de la CORE-SM y centramos en la cuestión económica dada su casi nula investigación.

Adicionalmente, debemos dejar claro, también como parte de la delimitación del problema, que nos concentraremos en analizar las políticas ejecutadas por la CORE-SM en ligazón con las políticas del gobierno de Fujimori; esto implica que no analizaremos la

política que desarrollo el movimiento universitario en respuesta a aquella, como lo ha hecho en parte Yalle (2008).

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema Principal

¿Cuál fue el carácter político y económico del gobierno de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM (1995-2000)?

1.2.2. Problemas Secundarios

1. ¿Cómo se constituyó el gobierno autoritario de la CORE-SM?
2. ¿Cómo se desarrolló la privatización en el proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000)?

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. Objetivo General

Definir el carácter político y económico del gobierno de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM (1995-2000)

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Determinar cómo se constituyó el gobierno autoritario de la CORE-SM.
2. Determinar cómo se desarrolló la privatización en el proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000).

1.4. HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis General

El gobierno de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM (1995-2000) tuvo un carácter autoritario y privatista.

1.4.2. Hipótesis Específicas

1. El gobierno autoritario de la CORE-SM se constituyó mediante la intervención autoritaria, la concentración del poder y la represión que ejerció.
2. El proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000) implicó la consolidación del proceso de privatización de esta universidad.

1.5. JUSTIFICACIÓN

La educación universitaria, así como la Educación en general, tiene una repercusión muy grande en la cultura y, por ende, en el desarrollo de nuestra sociedad. Por esta razón es necesario que la teoría no se rezague respecto al desenvolvimiento de la universidad; esto es más urgente cuando se trata del análisis de periodos cruciales, como el caso del proceso de reorganización al que fue sometida la UNMSM entre 1995 y el 2000.

En este sentido nuestra investigación se justifica porque contribuye a conocer las principales políticas que la CORE-SM ejecutó y, así, comprender la relación que estas tuvieron con la política general que el Estado, entonces dirigido por el gobierno de Fujimori, desarrolló. Además, sobre esta base, y con una disposición sintetizadora, contribuye a definir el carácter político y económico del régimen de gobierno de la CORE-SM.

Consideramos que esta tesis contribuye a que la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, trabajadores no docentes) comprenda más de la historia reciente de la UNMSM y, por ende, tenga mayor capacidad de prevenir intervenciones universitarias y defender el cogobierno, la gratuidad y las libertades académicas y políticas propias de una universidad democrática y autónoma.

Finalmente, consideramos que esta tesis servirá como referente y estímulo de futuras investigaciones sobre la UNMSM de la década del 90; las cuales, por varias razones, deben ser desarrolladas principalmente por los miembros de la comunidad universitaria.

1.6. METODOLOGÍA

1.6.1. Método de investigación

La investigación utilizará el enfoque o **MÉTODO MIXTO** ya que utilizará el enfoque cuantitativo porque se analizarán datos económicos y el enfoque cualitativo para la cuestión política y la abstracción general.

1.6.2. Tipo o diseño de investigación

Será principalmente **DESCRITIVO y EXPLICATIVO** porque nuestro objetivo es analizar datos económicos, para así contribuir en la descripción de la política económica de la Comisión Reorganizadora; además se describirán el conjunto de políticas desenvueltas por dicha Comisión. Y, como segunda etapa, se explicará el carácter de dichas políticas y, por ende, de la Comisión.

1.6.3. Fuentes de investigación

- Principalmente lo proporcionarán las oficinas correspondientes de la UNMSM: datos económicos, presupuestales, costos de tasas, Resoluciones Rectorales.
- Leyes, Decretos, pronunciamientos, etc.
- Informes, cuadros estadísticos, tesis, libros, ensayos, diarios, videos.

1.6.4. Técnicas de investigación

- Procesamiento de datos económicos en cuadros estadísticos.
- Análisis de datos, documentos, informes y textos teóricos.
- Entrevistas a profundidad.
- Triangulación para articular la información y lograr una interpretación consistente.

1.7. TABLA DE CONSISTENCIA

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
<u>Problema principal</u> ¿Cuál fue el carácter político y económico del gobierno de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM (1995-2000)? <u>Problemas secundarios</u> 1. ¿Cómo se constituyó el gobierno autoritario de la CORE-SM? 2. ¿Cómo se desarrolló la privatización de la UNMSM en el proceso de reorganización (1995-2000)?	<u>Objetivo general</u> Definir el carácter político y económico del gobierno de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM (1995-2000) <u>Objetivos específicos</u> 1. Determinar cómo se constituyó el gobierno autoritario de la CORE-SM. 2. Determinar cómo se desarrolló la privatización de la UNMSM en el proceso de reorganización (1995-2000).	<u>Hipótesis general</u> El gobierno de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM (1995-2000) tuvo un carácter autoritario y privatista. <u>Hipótesis específicas</u> 1. El gobierno autoritario de la CORE-SM se constituyó mediante la intervención autoritaria, la concentración del poder y la represión que ejerció. 2. El proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000) implicó la consolidación del proceso de privatización de esta universidad.	GOBIERNO UNIVERSITARIO AUTORITARIO	-Intervención autoritaria o vulneración de la autonomía universitaria	.Vulneración del marco legal que ampara la autonomía: Análisis de la Ley N° 26457 (1995), Ley N° 26614 (1996), Ley N° 26797 (1997), Ley N° 26880 (1998), y la Ley N° 27366 (2000). . Creación, imposición y prerrogativas de la Comisión de Reorganización UNMSM: Análisis de la Ley N° 26457, Resolución Suprema N°150-95-PCM y Resoluciones Rectorales.	1. Procesamiento de datos económicos en cuadros estadísticos. 2. Análisis de datos, documentos, informes y textos teóricos. 3. Entrevistas a profundidad. 4. Triangulación para articular la información y lograr una interpretación consistente.
				-Concentración del poder	.Reestructuración orgánica del gobierno y vulneración del cogobierno mediante la disolución de Asamblea y Consejo universitario y Consejos de Facultad: Planes de la CORE-SM, Resoluciones Rectorales y Reglamentos.	
				-Represión	.Expulsión arbitraria de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes: Resoluciones Rectorales, Reglamentos. .Trabajo de inteligencia coordinado entre el SIN, DINCOTE y la Comisión Reorganizadora con el objetivo de reprimir la oposición al régimen: Informes, Resoluciones Rectorales.	
			GOBIERNO UNIVERSITARIO PRIVATISTA	-Mayor privatización de la UNMSM	.Planificación y sistematización de la privatización: Planes de la CORE-SM, Reglamentos, Resoluciones Rectorales. . Privatización del presupuesto de la UNMSM: Evolución del porcentaje de Recursos Directamente Recaudados respecto al presupuesto anual total de la UNMSM (1990-2000) .Incremento constante de las tarifas cobradas por matrícula, carné, constancias, grados, etc. (1990-2000): Tarifarios, tarifas, Resoluciones Rectorales.	

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

Respecto a lo avanzado por la investigación previa sobre la política universitaria desenvuelta por el régimen fujimorista -CVR (2003), Rodríguez (2007) y Vargas (2002b)- consideramos que se caracteriza por tener una visión general de la problemática universitaria en la década 1990-2000, centrar en lo político y tener una posición crítica y de rechazo a la política desenvuelta por el régimen. En efecto, se describen y critican las principales leyes dadas para la universidad peruana, las cuales buscaron privatizarla, reprimirla, controlarla y ajustarla al modelo económico neoliberal (Rodríguez, 2007; Vargas, 2002a, b; Ponce, 2002).

La limitación más importante la hallamos en no desarrollar el análisis de las cuestiones académica y económica de la política universitaria, siendo esta última la menos investigada. Otra vacío es que en la mayoría de investigaciones se cae en la generalidad, hacen falta investigaciones más específicas, concretas y delimitadas a una universidad o a un ámbito (económico, académico, político) en específico.

En cuanto a la década del 90, los análisis de la política universitaria, al resaltar el aspecto contrasubversivo de dicha política, centran en el quinquenio 1990-1995 debido a que la guerra interna finalizó en ese periodo (CVR, 2003; Ponce, 2002; Burt, 2006). Y dentro del análisis de este lustro se centra en la militarización de las universidades públicas, en las desapariciones y asesinatos por parte de las FFAA (Cerrón, 2007; CVR, 2003).

Respecto al segundo quinquenio 1995-2000, los antecedentes tienen serias limitaciones en el análisis tanto de la política contrasubversiva o represiva como de la política universitaria en general. Entre las principales excepciones tenemos al Taller de Investigación Popular (en adelante TIP) que publica en el 2007 su investigación titulada *La Universidad Nacional de Educación 'Enrique Guzmán y Valle' y la educación en la sociedad peruana contemporánea* en donde caracteriza a la Comisión Reorganizadora de la UNE (CORUNE) como privatista, elitista, represora y de haber pretendido quitarle a la UNE el carácter de universidad.

En el caso de la UNMSM, Vargas (2002 a y b), Ponce (2002) y Yalle (2008) logran analizar los aspectos sociopolíticos desenvueltos en este segundo lustro; y respecto a la elitización, Garfias (2015), de manera excepcional ha logrado desarrollar una investigación importante. Sin embargo, no existe ninguna investigación concreta y sistemática sobre el proceso de privatización en este periodo. Por otra parte, se llega a la conclusión de que fue un paquete de leyes la que sustentó la intervención administrativa a las seis universidades

públicas (CV-SM, 2002a; Vargas, 2002b).

En relación a la CORE-SM debemos resaltar el trabajo de Vargas Osorio (2002a), en donde se logra aclarar la correlación política interna de esta universidad y su relación con los agentes estatales que ejecutaron la intervención; correlación que nos permite comprender cómo fue posible el inicio del proceso de reorganización en San Marcos. Además, ha avanzado en analizar de manera general algunas de sus importantes acciones políticas como la expulsión de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes y la relación entre la CORE-SM, el SIN y la DINCOTE en función a un espionaje sistemático de la comunidad universitaria con el fin de reprimir cualquier oposición al régimen.

Analizando principalmente la situación de la comunidad universitaria en dicho quinquenio, Yalle (2008) ha avanzado en analizar las condiciones sociopolíticas sobre las que se asentó la CORE-SM y el punto de vista que tuvieron las organizaciones de izquierda respecto a esta comisión. Asimismo el capítulo de Testimonios del Informe (2002) realizado por la Comisión de la Verdad de San Marcos (2001) es un material que a pesar de no haber sido procesado ni por la propia CV-SM contribuirá en nuestra investigación ya que recoge las múltiples denuncias hechas a la CORE-SM por parte de la comunidad universitaria de la UNMSM. Además, este Informe avanzó en el análisis crítico del marco legal en el que funcionó la CORE-SM, denunciando la inconstitucionalidad de sus actos y concluyendo que se ejecutaron actos corruptos y autoritarios en contra de la comunidad universitaria.

Asimismo, la investigación de Cabrera (2000), quien fue secretario general de la UNMSM bajo el régimen de la CORE-SM, realizó un análisis de la forma en la que esta comisión administró y condujo la universidad, llegando a la conclusión de que el "estilo autoritario" que lo caracterizó fue un *mal necesario*.

Así, sobre la base de este conjunto de antecedentes y la definición que hace Linz (1978) de gobierno autoritario, caracterizamos hipotéticamente como autoritario al gobierno de la CORE-SM.

Sintetizando estos antecedentes respecto a la CORE-SM, prima una perspectiva descriptiva, difusa, superficial y general. Por ello consideramos que existe un vacío en cuanto al análisis detallado y sistemático de su orientación, planes, políticas y acciones. Hecho este análisis sistemático podremos caracterizar (en el ámbito político y económico) de manera objetiva a la Comisión Reorganizadora, cuestión que tenemos como objetivo de la presente investigación. En conclusión, consideramos que ya hay avances sobre la caracterización de las políticas de la CORE-SM pero aún no es lo suficientemente

sistemática y profunda, en esto queremos contribuir.

Con respecto al aspecto académico, se encontró un incipiente análisis de la orientación teórica que el régimen de Fujimori desarrolló, llegando a caracterizarlo como pragmático, utilitarista y mercantilista en el marco de la imposición de una sola forma de teorizar que está en función al sistema económico mundial (TIP, 2007; Vargas, 2002b; Rodríguez, 2007). Como ya lo planteamos, nuestro trabajo de investigación no abordará la cuestión académica; sin embargo, debemos advertir que los antecedentes no han analizado a profundidad este aspecto, lo cual les ha impedido consolidar una crítica -y menos una propuesta- sistemática frente a la propuesta teórica o académica que propone el régimen. Este es un vacío importante.

Los antecedentes internacionales provienen principalmente de Chile y Argentina para el caso Latinoamericano y de los regímenes fascistas en el ámbito Europeo. Estas investigaciones también priorizan el análisis de la cuestión política. En el caso de A.L. se concluye que hubo una sujeción total, por comunidad de intereses principalmente, de las autoridades universitarias hacia los regímenes dictatoriales de Pinochet y Videla, por ejemplo. Seguidamente, se centran en la descripción detallada del proceso de reestructuración del poder en las universidades, en el control militarizado de los campus, sedes y dependencias de especial interés de las FFAA, en las detenciones masivas seguidas de tortura, encarcelamiento y asesinatos (Monsálvez, 2015; Errázuriz, 2017 y Seia, 2018); comparándonos con la profundidad de estas investigaciones, la investigación nacional es incipiente.

Otro aspecto que se resalta con Julián (2016) es la cuestión académica, dando cuenta de la “depuración” de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes y el cierre de sedes y Escuelas relacionadas a las Ciencias Sociales y Humanidades bajo el argumento de fomentar la subversión, en un primer momento, y de ser “inviabiles” en el modelo económico neoliberal, en un segundo momento. Sobre esta cuestión, como lo hemos dicho ya, la investigación nacional también está rezagada.

Es importante resaltar el trabajo de Guadalupe Seia (2018, Argentina), *La dictadura contra la Reforma Universitaria*, pues nos muestra la necesidad de no perder de vista la historia de la Universidad en el siglo XX, la cual necesariamente debe tener como eje a la contradicción entre Reforma y Contrarreforma Universitaria; y, sobre esta base, también analizar la política universitaria en la década de los 90.

Si bien estos antecedentes internacionales contribuyen como referentes teóricos

principalmente de los ámbitos político y académico, es casi nulo, al igual que en el caso peruano, el análisis de datos económicos en cuanto a los procesos de privatización y elitización; el cual permitiría tener una imagen integral de la política universitaria en América Latina.

Finalmente, Morente (2005), contribuye con su análisis de la depuración docente bajo los regímenes fascistas de Europa a que podamos comparar esta política con lo sucedido en A.L. para así encontrar semejanzas pero sin descuidar las particularidades.

2.2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS

2.2.1. SOBRE GOBIERNO UNIVERSITARIO AUTORITARIO

A. BRUNNER, JOSÉ. “GOBERNANZA UNIVERSITARIA: TIPOLOGÍA, DINÁMICA Y TENDENCIAS”. 2010.

Brunner considera dos criterios para, en base a ellos, presentar cuatro tipos de gobierno universitario. El primer criterio se ubica en el ámbito del gobierno y es la legitimidad; el segundo se ubica en el ámbito de la gestión y es la efectividad.

Así, como producto del cruce de ambos criterios –cual ejes- resultan cuatro cuadrantes o cuatro tipos de gobierno universitario: Burocrático, Colegial, De partes interesadas y Emprendedor.

-El Burocrático está sujeto al Estado y es menos efectivo. Es propio del tipo de gobierno universitario cuando este era, en el siglo XIX, “un instrumento del Estado como proyecto moderno” y tenía, en este sentido, a la ciencia como eje de su actividad.

-El Colegial es autónomo del Estado pues “los académicos dominaban la organización y la dirigían a la manera de una ‘oligarquía académica’”, pero menos efectivo. Así, “expresa a la comunidad académica frente al medio exterior como entidad moral independiente”.

-El De partes interesadas es más efectivo y más autónomo; “combina emprendimiento con colegialidad” y se aplicaría principalmente en la universidad pública. Este tipo de gobierno se basa en el enfoque de stakeholders. “Bajo esta perspectiva la gobernanza se preocupa simultáneamente de los partícipes internos... y externos”. Con partes interesadas se refiere a los partícipes externos que no son más que el gobierno nacional, municipios, empleadores [empresas], ONGs, sociedad civil. Su sentido es que la universidad “se adapte a, y pueda actuar sobre, el medio externo”. Así, “por esta vía, se hace cargo de sus tradiciones colegiales y de autogobierno y busca combinarlas con las múltiples demandas que surgen de las partes interesadas externas”.

Sobre el gobierno en este modelo señala que es una junta o consejo de gobierno (“board”) la que se hace cargo de la conducción estratégica y está compuesta por miembros internos y externos. Y el manejo de los asuntos académicos permanecería a cargo de un organismo de base colegial.

Sobre la gestión, señala que se reorganiza “bajo los postulados del *New Public Management*” cuyas características centrales son: utilización de estándares e indicadores de desempeño; preferencia por organizaciones más livianas, especializadas, planas y

autónomas; sustitución de las relaciones jerárquicas por contratos; **énfasis en la calidad del servicio y orientación hacia el consumidor**; colaboración público-privada y con el tercer sector, y **prioridad otorgada a los valores de eficiencia e individualismo**.

Presentando una crítica a este tercer modelo plantea que “con esto la universidad se transforma en una ‘empresa de servicios’ cuyas funciones se mercantilizan y cuya misión se vería reducida a la generación de ganancias (Olsen, 2005) en el espíritu del capitalismo académico (Slaughter y Rhoades, 2004)”.

-El Emprendedor o de emprendimiento privado, está sujeto a un “principal” o propietario que actúa de manera determinante desde el exterior; es decir, si bien está sujeto, no lo está al Estado como en el caso del modelo Burocrático. Y, como contraparte, es más efectivo. Por estas características este modelo está concebido para universidades privadas.

Para presentar las condiciones de la gobernanza universitaria emprendedora Brunner se basa en Clark:

-Sobre el gobierno. Existe una relación directa y jerárquica entre el propietario y los agentes administrativos de la universidad; en este sentido, es necesario un contrato claro y definido.

Este tipo de universidad está dirigido por un consejo compuesto principalmente por miembros externos, los cuales se “identifican e interpretan cambios en el entorno externo”, fijan la visión de largo plazo y se ocupan de la estrategia.

Igual que en el caso del CIII [De partes interesadas], el núcleo de conducción requiere contar con posiciones ejecutivas fuertes, dotadas de las necesarias facultades para adoptar decisiones difíciles y manejar riesgos y recursos, y con suficiente apoyo de la comunidad. Es decir, se requiere contar con un mínimo de colegialidad, aunque sea bajo modalidades acotadas de asesoría, consulta y consejo.

-Sobre sus organismos centrales o su “columna vertebral”. Compuesta por facultades, escuelas, institutos que deben apuntar a una alta generación de recursos [RDR] y, para ello, contar con una buena estrategia de marketing. Además, deben tener vinculación con las *partes interesadas* y relaciones internacionales.

-Sobre el aspecto económico. Es una universidad con “una base diversificada de ingresos que reduce la dependencia institucional respecto del subsidio fiscal”.

Propone que el consejo o board de la institución monitoree de cerca e individualmente los flujos de ingresos, apruebe constantemente planes de inversión y reinversión –debería operar, dice, como una agencia de capital de riesgo-, desarrolle una estrategia de precios como parte del modelo de negocios de la institución, distribuya los ingresos y el excedente entre la universidad y sus departamentos o facultades, vigile la legitimidad académica de

estas operaciones para mantener la confianza en ellas, y se ocupe de crear y desarrollar capacidades gerenciales y profesionales en este ámbito.

-Sobre el aspecto idiosincrático. La necesaria difusión de una “cultura emprendedora en la organización” para que sirva como “argamasa” en la consolidación teórica y práctica de todo el organismo universitario en función al modelo emprendedor.

Hecho el análisis de los cuatro tipos propuestos, pasa a exponer su interpretación de la relación entre el Estado y la Universidad en el apartado titulado “Renovación de la gobernanza pública”. Aquí plantea que “el Estado planificador e interventor es reemplazado por el ‘Estado evaluativo’”, lo cual expresa, a nuestra consideración, la concepción que plantea, en medio del nuevo modelo económico (neoliberal), la nula intervención y construcción por parte del Estado en el ámbito económico y su limitada función para el caso universitario de encausarlo a lo que demanda el mercado.

Respecto a la política de financiamiento condicionado, Brunner señala lo siguiente: “Mediante la adopción de nuevas estrategias y modalidades de asignación de financiación fiscal –preferentemente a través del uso de mecanismos de tipo mercado- los gobiernos buscan inducir cambios en la conducción de las universidades: nuevas formas de gobernanza, fijación de prioridades y metas, autoevaluación en función de indicadores de desempeño, foco en la eficiencia interna y externa, atención hacia las demandas y expectativas de partes interesadas ajenas a la comunidad universitaria, ganancias de productividad académica, generación de excedentes, contribución al desarrollo regional y local, internacionalización, etc

Respecto a las características de la estructura de un gobierno universitario emprendedor señala:

El generalizado reforzamiento de las posiciones ejecutivas, el ensanchamiento de las funciones gerenciales, la sustitución parcial del poder colegial de los académicos por la autoridad investida en un estrato administrativo superior. Mas esto es evidente: las formas colegiales de gobierno han sido puestas en cuestión, debilitándose con ello el Cuadrante II junto con un fortalecimiento y renovación del Cuadrante I. Sobre todo, se está provocando un progresivo traslado de la gobernanza de las universidades públicas hacia el Cuadrante III [emprendedor].

Complementamos la crítica que Brunner hace al cogobierno o el modelo “Colegial” con el siguiente párrafo extraído de un texto suyo “Educación superior en A.L.: Una agenda de problemas, políticas y debates en el umbral del año 2000” (1994), en el que se encuentra gran semejanza con la línea desarrollada por el MINEDU: “las universidades oficiales [públicas] no han descubierto hasta el presente una forma de gobierno que combine un grado suficiente de legitimidad interna y de eficacia, hallándose la mayoría de ellas trabadas por un modelo de cogobierno burocratizado que es altamente sensible a las presiones

corporativas de los sindicatos o agremiaciones docentes y del personal no-académico. Asimismo deben actuar dentro de un marco de restricciones legales y administrativas que, frecuentemente, introducen un grado adicional de ineficiencia, sin por otro lado servir como efectivos controles de calidad o como mecanismos de coordinación del sector público institucional” (p. 20).

Consideramos que el tema central de este texto de Brunner es el hecho de explicitar a modo de tesis que existe una tendencia generalizada que enrumba la gobernanza universitaria hacia el modelo emprendedor. Esta tendencia estaría relacionada, aunque no lo plantea de manera explícita, a la explosiva “evolución privada” de la universidad. Evolución que está –dice Brunner- influenciada por cuatro factores: 1. Los fines y criterios del propietario; 2. La regulación y licenciamiento por parte del Estado; 3. La evaluación externa pro acreditación y 4. La asignación condicionada de presupuesto por parte del Estado hacia las universidades públicas con el objetivo de “crear condiciones favorables para la acción emprendedora de las universidades”.

Dilucidada esta “evolución privada” se puede ver con mayor nitidez la contradicción producto de la tendencia que encausa la universidad hacia el modelo de emprendimiento privado. Esta contradicción general (colegial contra emprendedor) nos permite identificar dos contradicciones específicas o tensiones: entre lo público y lo privado y entre el autogobierno (que sin problema se puede entender como cogobierno) y una gestión de carácter emprendedor (con un dueño que determina).

En síntesis, estamos ante la contradicción entre una universidad pública que funcione con presupuesto del tesoro público, responda a las necesidades sociales y esté gobernada por los estamentos de su comunidad universitaria mediante los órganos colegiados que encarnan el cogobierno y una universidad privada o pública en proceso de privatización que funciones con cada vez más RDR y menos RO, responda al mercado capitalista y no necesariamente a las necesidades sociales y esté gobernada por ejecutivos y dueños que tienen el poder concentrado y no por la comunidad universitaria y en donde el cogobierno sea prácticamente inexistente. Es decir, una universidad tipo empresa.

B. MINISTERIO DE EDUCACIÓN-OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. “LA UNIVERSIDAD EN EL PERÚ”. 2006

Esta perspectiva teórica tiene como base la idea de que la Universidad debe adaptarse al sistema económico que predomina a nivel mundial.

Teniendo este punto como base, para fines del ámbito del régimen de gobierno, toma como referente a un organismo natural y, por ende, bien ubicado en el capitalismo: la empresa capitalista. Así, para el caso del gobierno universitario recogen y pretenden aplicar los criterios cardinales de la organización empresarial: flexibilidad, eficiencia, eficacia y la especialización.

Enseguida comprendemos que esta posición plantee la mayor concentración del poder de gobierno en el Rector, pues están concibiendo que este debe actuar cual gerente general de una empresa o, mejor aún, cual propietario. Y, obviamente, dicho poder no debe ser inferior a ningún organismo pues esto dificultaría la unilateral y rápida toma de decisiones, cuestión contraria al criterio de eficiencia. Ligado a esto, esta línea teórica plantea legitimar el mayor poder del Rector mediante su elección por votación universal.

Esta mayor concentración del poder en el Rectorado o la “Alta Dirección” significa el rebajamiento del poder del cogobierno universitario; se está vulnerando el cogobierno, el cual está plasmado en los órganos colegiados: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejo de Facultad. Y, en este sentido se comprende que sea principalmente el estudiantado y su tercio estudiantil el más golpeado mediante los siguientes argumentos: 1) son los principales corruptos (mercenarios y objetos de clientelaje) y 2) son demasiado ignorantes como para gobernar. Este último argumento apunta a que se restrinja con el criterio académico la postulación de los estudiantes, lo cual vulnera el derecho a la libre participación política.

Con respecto a los organismos administrativos de nivel intermedio, plantean que deben ser instancias especializadas, conformadas por técnicos y elegidos mediante criterios técnicos ligados al nivel de conocimientos. Están por la despolitización de la gestión universitaria. Teniendo como base estos criterios, rechazan la intromisión de la política en la elección de los equipos administrativos valiéndose del rechazo a la corrupción (clientelaje en base a las cuotas de poder). Sobre este análisis y propuesta, consideramos que hay un error de concepción: la intención de considerar ajenos el conocimiento y la política; la técnica y la política; la administración y la política. Nosotros consideramos que no existe en la realidad tal enajenación entre uno y otro aspecto.

Así, esta propuesta de mayor concentración del poder en el vértice de la estructura de gobierno universitaria viene acompañada de la propuesta de despolitizar la administración del nivel intermedio para así tecnificarla, especializarla en pro de la eficiencia universitaria.

Lo anterior corresponde a la estructura de gobierno de una universidad en particular. Para el caso de la universidad peruana, en general, proponen la creación de un Sistema Universitario Nacional y un organismo que lo dirija; y, ligado a esto, concretizar las funciones del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).

2.2.2. SOBRE GOBIERNO UNIVERSITARIO PRIVATISTA

A. ONU: CEPAL Y UNESCO PARA AMÉRICA LATINA. “EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO: EJE DE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CON EQUIDAD” (1992)

En función a nuestra investigación, es central el apartado 6 “Compromiso financiero de la sociedad con la Educación” del capítulo VI “Acciones y medidas”. En este apartado parten por plantear que el financiamiento público de la Educación debe ser relativamente estable; y, de no poder garantizarse esto, señalan, se deben proteger algunos sectores o “partidas presupuestarias más vulnerables a las fluctuaciones inesperadas de los ingresos fiscales”.

Frente a este problema de rebaja del financiamiento público, plantean como “una solución” la diversificación de las fuentes de financiamiento; lo cual implica que el presupuesto de las instituciones educativas públicas ya no se limite a los recursos fiscales (provenientes del Estado) sino que se aumente “la contribución del sector privado, ya sea de los hogares o de las empresas”.

Más adelante, desarrollando esta idea general, plantean que el financiamiento privado debe aplicarse principalmente en el nivel superior (técnico y universitario) mediante las pensiones (denominados también aranceles), el financiamiento de programas y capacitaciones, la creación de exenciones y estímulos tributarios a favor de los que donen en Educación, becas privadas, etc.

Además, plantean que una forma de aplicación de financiamiento privado es la recaudación y uso de “fondos públicos locales”; lo cual en nuestro país se relaciona con el intento de municipalización de la Educación básica, desarrollada por el gobierno de Fujimori y García.

También proponen que “la legislación y las políticas estatales deben incentivar el acercamiento entre las instituciones de educación superior y las empresas a fin de lograr que éstas participen más activamente en el desarrollo científico y tecnológico del país y en la formación y capacitación de los recursos humanos”. En nuestro país esto se llevó al extremo con el DL 882 de 1996.

Relacionando la concreción de la diversificación de fuentes de financiamiento con el grado de autonomía, sostienen que esta es una relación positiva. Idea que también se encuentra en el documento “La universidad en el Perú” (2006) y en el Plan de Reorganización 1996-1997 de la CORE-SM.

En este sentido, **un aspecto particularmente importante para nuestra investigación es que en este documento estos organismos plantean establecer “mecanismos de valorización de los servicios universitarios a precios de mercado”.**

En el segundo apartado de este acápite plantean que la asignación de los recursos fiscales debe ser regulada de acuerdo a los objetivos y prioridades de desarrollo. Sin embargo, esta propuesta es abstracta ya que simplemente evaden el hecho de que en cada país existen diferentes concepciones de lo que es desarrollo.

Desarrollando esta idea, plantean tres mecanismos que permitirían lograr que la asignación fiscal sea “eficiente”: 1) asignación en proporción directa al número de matriculados en la institución; 2) asignación en base a una evaluación posterior o los resultados y 3) asignación previa evaluación de los proyectos.

Además, se señalan mecanismos y modalidades que “alientan la asignación eficiente del financiamiento privado a las instituciones públicas” en base a la experiencia del crédito brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el tercer apartado se plantean tres mecanismos mediante los cuales el financiamiento público se debe desenvolver:

- 1) Se debe cubrir el financiamiento de la educación básica.
- 2) En base al criterio de *equidad*, “quienes pueden pagar el costo de su educación lo hacen mientras que los estudiantes de escasos recursos deben tener acceso a un plan solidario de becas y préstamos del Estado a fin de poder cubrir la diferencia entre los costos y el valor de los aranceles y la parte que pueden financiar con sus ingresos propios o familiares”.
- 3) “Asimismo se pueden concentrar las becas de acceso a la educación superior en algunas especialidades consideradas más decisivas para el desarrollo productivo del país. Es importante asegurarse, sin embargo, de que los criterios estratégicos no entren en pugna con el cumplimiento de los criterios de equidad”¹.

En el apartado 8 “Mecanismos y fuentes de financiamiento” del capítulo VII “Costo y financiamiento de la estrategia” plantean las medidas necesarias para poner en marcha su propuesta de reforma educativa, la cual exponen en los primeros capítulos y, en esencia, apunta a lograr los objetivos de desarrollo planteados por la ONU.

¹ Por ejemplo, este tercer mecanismo se ha concretado en el Perú con el programa Beca 18.

Así, sostienen que son tres las fuentes de recursos pro reforma educativa, que requiere del 3.9% del PBI: El Estado, el sector privado (familias y empresas) y el sector externo (BM, BID, otros países y ONGs). De estas fuentes, plantean que el Estado debe dar la mayor parte (2,5%), seguido del Privado (1%) y, finalmente, el Externo (0.5%).

Sin mayor argumento o análisis de la situación plantean que debido a que el financiamiento público (Estatual) tiene una tendencia a la baja se debe apostar por el financiamiento privado. El cual, añaden, está relacionado a una “mayor eficiencia”. Al respecto, sostienen que se conseguirá mayor financiamiento privado mediante cursos, programas nuevos ligados a las necesidades empresariales (institutos, diplomados, cursos de especialización, etc.) y, secundariamente, pensiones; las cuales se deben aplicar principalmente a la clase alta. Sobre las pensiones añaden que, aplicando el criterio de equidad, se debe propender a que estas no sean costeadas por los pobres. Con esto, como vemos, la equidad es transversal y muy importante en su discurso sobre el financiamiento privado. Respecto al financiamiento privado, debemos resaltar que lo encauzan a que este contribuya en alcanzar los objetivos empresariales.

Finalmente, a modo de medidas en función a lograr que el Estado consiga el aquel 2.5% del PBI, plantean que este debe arribar a un “consenso nacional” que establezca el eje educación-conocimiento como aspecto central del desarrollo; y, en este sentido plantean las tres siguientes medidas: 1) Del presupuesto educacional, centrar en la Primaria y la investigación tecnológica empresarial en pro de la equidad y la competitividad, respectivamente; 2) Reasignar fondos desde, por ejemplo, Defensa y Deuda externa, hacia Educación y conocimiento; 3) Elevar y extender impuestos.

B. BRUNNER, JOSÉ. EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA LATINA: UNA AGENDA DE PROBLEMAS, POLÍTICAS Y DEBATES EN EL UMBRAL DEL AÑO 2000. (1994)

En este texto se parte por plantear que existen los siguientes procesos en marcha: la multiplicación y diferenciación de las instituciones; la creciente participación del sector privado; la ampliación y diversificación del cuerpo docente y el aumento del número y variedad de los graduados. Seguidamente se plantea que la educación superior sufre varios y profundos problemas: desajustes estructurales en el sistema de educación superior; parálisis institucional; mal funcionamiento de los sistemas; agotamiento del modelo de coordinación; financiamiento en tiempo de crisis.

Una segunda parte del texto muestra las reformas y leyes que varios países de la región han desarrollado para hacer frente a los problemas planteados arriba. “Las políticas

y medidas que están siendo impulsadas en los varios países apuntan todas en una misma dirección general, al punto que puede hablarse del surgimiento de una específica pauta de cambios que parece estar emergiendo en América Latina. De acuerdo con esa pauta, se busca desplazar la modalidad de coordinación de los sistemas desde el actual régimen con su inadecuada mezcla de elementos de coordinación burocrática, corporativa y política hacia una coordinación basada en nuevas formas de financiamiento y la adopción de controles de calidad y eficiencia”.

En la tercera parte se presentan las propuestas de organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNESCO y la CEPAL para solucionar los problemas planteados y enrumbar la educación superior en base a los criterios de calidad, equidad y eficiencia que aquellos plantean.

Este documento considera el problema del financiamiento como uno entre varios que forman un problema complejo. En relación a la privatización de la Universidad, nos sirve pues se basa en datos regionales en comparación con datos mundiales sobre el financiamiento de la educación superior. Nosotros centraremos en tres apartados: la creciente participación del sector privado; el financiamiento en tiempo de crisis y las propuestas del BM, UNESCO y CEPAL.

Sobre el primer punto, este estudio demuestra la gran expansión del sector privado en América Latina: “No sólo ha aumentado espectacularmente el número de instituciones privadas sino que, además, en varios países —como Brasil, Colombia, Chile, El Salvador y República Dominicana— la mitad o más de la matrícula de tercer grado se encuentra localizada en instituciones de dicho sector. En varios otros países —como México, Perú y Venezuela — alrededor de un tercio o más de la matrícula no-universitaria es ofrecida por instituciones que pertenecen al sector privado (Cuadro N°3). En general, puede estimarse que más de 2 millones de alumnos cursan sus estudios en instituciones privadas de nivel universitario y no universitario, de los cuales aproximadamente la mitad pertenece a Brasil” (p, 3) Vemos que el sector privado ya en 1994 se mostraba vigoroso debido a las políticas aplicadas por la mayoría de gobiernos desde 1980 aproximadamente. Esta situación se ha profundizado en la actualidad, con lo cual podemos sostener que la tendencia de la privatización existe y es galopante. Ejemplo concreto es el caso de la universidad peruana en la década del 90.

En el punto titulado “financiamiento en tiempo de crisis” (p, 36) se presentan argumentos cuantitativos que, guiados por el criterio de equidad, tienen el objetivo de priorizar el gasto público educativo en el nivel preescolar y primario y no en el nivel terciario

(superior). “A pesar del bajo gasto promedio por alumno en educación superior (excepto Brasil), varios países de América Latina destinan de todos modos una proporción más alta de recursos fiscales a los alumnos de este nivel que los países industriales, en relación al ingreso por persona. La mayoría, además, gasta —expresado como múltiplo del producto per cápita— 4 o más veces por alumno terciario que por alumno matriculado a nivel preescolar y de la enseñanza primaria, a pesar de que en el promedio de la región las tasas medidas de retorno social a la educación básica son más altas que las tasas de retorno social a la educación superior”.

Argumentan, pues, que la educación preprimaria y primaria genera mayor retorno social que la educación superior. Entendemos que dicho retorno social se comprende como la ganancia económica que genera. Consideramos que esto es comprensible debido a que nuestra economía subdesarrollada es utilizada por los países desarrollados y las grandes empresas, como fuente de mano de obra barata (la cual necesita educación básica principalmente), como mercado que consume las mercancías de aquellos países y empresas y como fuente de recursos naturales. Así, lejos de criticar esta estructura económica mundial injusta, Brunner argumenta a favor de la consolidación de esta.

Otro aspecto a criticar de esta propuesta es que se basa en los postulados de Hayek sobre la “equidad”. Hayek señala que el Estado debe garantizar solo la educación básica de las personas pero de ninguna manera la superior. Y debe garantizar ello para así generar una base homogénea sobre la cual los individuos inicien su carrera educativa; tras lo cual, señala, cada individuo según su posibilidad y si quiere, podrá seguir educándose. Esto se corresponde a su total rechazo de la intervención del Estado en la economía y en la vida colectiva; esto implica el rechazo del planeamiento económico y, por ende, educativo, según objetivos nacionales (colectivos).

Finalmente, se desprende, de esta propuesta de Brunner y la mayor privatización en marcha, que la disminución del presupuesto para la Educación (también en marcha) golpeará principalmente a la educación superior y, de manera más grave, a la universidad pública.

En el tercer punto, sobre las propuestas del BM, UNESCO y CEPAL, Brunner señala que para poder solucionar el problema de la educación superior no hay más alternativa que el ajuste o adaptación de esta al sistema en cambio. Y, en este sentido señala que “la pauta latinoamericana emergente de cambios de la educación superior es convergente, en lo esencial, con las políticas recomendadas por diversas agencias internacionales”.

Sobre la propuesta de la CEPAL y UNESCO, se refiere al documento “Educación y conocimiento: Eje de la transformación productiva con equidad” (1992), el cual plantea, en relación al financiamiento (o sustento económico): “la estrategia presentada por CEPAL-UNESCO, junto con insistir en la necesidad que existe de aumentar los recursos públicos destinados a la educación, **aboga por una diversificación de las fuentes de ingresos de las universidades y demás instituciones de enseñanza superior. Señala que las instituciones universitarias y de formación técnico-profesional son las que tienen mayores posibilidades de obtener aportes del sector privado y propone adoptar una serie de medidas, como por ejemplo: otorgar fondos públicos de contrapartida respecto de los recursos generados por los propios establecimientos, extender franquicias tributarias en favor de las empresas para financiar actividades educativas y de capacitación, racionalizar el uso de los recursos públicos hoy ineficientemente gestionados, establecer mecanismos de valorización de los servicios universitarios a precios de mercado.** Sugiere que una proporción de las asignaciones fiscales deberían canalizarse mediante mecanismos que estimulen a las instituciones receptoras a incrementar la eficiencia y la relevancia de las actividades que acometen. Propone adicionalmente el empleo de mecanismos que permitan vincular el ingreso de las instituciones a juicios evaluativos, los que podrían materializarse mediante el cobro de aranceles, la asignación de recursos asociada a la medición de resultados o su asignación en función de costos de los insumos y de metas pactadas”.

La propuesta de “diversificación de las fuentes de ingresos” significa prácticamente la privatización de los servicios educativos, siendo central el cobro (pensiones) a los estudiantes, a lo que denominan “aranceles” en estas propuestas.

Refiriéndose a la propuesta del Banco Mundial, se basa en “el más reciente documento de estrategias para la educación superior del BM”:

*Según la apreciación del Banco Mundial, la educación superior se hallaría en crisis en todo el mundo. Tanto los países desarrollados como en desarrollo estarían enfrentando el desafío de mantener o mejorar la calidad de su educación superior en un período en que los presupuestos educacionales —y particularmente el gasto por alumno— estarían siendo comprimidos. Según esta Agencia, un número de países industriales estarían respondiendo a la crisis del financiamiento mediante la adopción de políticas innovadoras dirigidas a aumentar la eficiencia de la educación superior, por ejemplo a través del “financiamiento de fórmula” como en el caso de Holanda, o **mediante una mayor captación de recursos privados**, como en los casos de Irlanda y Australia. En cambio, señala que a pesar de las severas restricciones fiscales que experimentan los países en desarrollo, éstos habrían hecho escasos avances en el camino de reformar sus sistemas de educación superior. Sin embargo, agrega, la experiencia de unos pocos de estos países, como Chile, muestran que sería posible lograr un sistema de educación superior que funcione adecuadamente, se diversifique y se expanda incluso mientras disminuye el gasto público por alumno.*

En esencia, este es un argumento que busca solucionar la crisis fiscal mediante la privatización, y se toma como ejemplo (obligado) a Chile e incluso a los países del primer mundo. Así, su reforma pasa por la privatización, principalmente.

Para mejorar esta situación, el Banco Mundial propone una estrategia basada en cuatro elementos esenciales: (i) estimular una mayor diferenciación de las instituciones, incluyendo el desarrollo de instituciones privadas; (ii) proporcionar incentivos a las instituciones públicas para que diversifiquen sus fuentes de financiamiento, incluyendo una coparticipación de los alumnos en la recuperación de costos y vinculando el financiamiento público estrechamente al desempeño; (iii) redefinir el rol del gobierno en relación a la educación superior, y (iv) introducir políticas explícitamente diseñadas para dar prioridad a objetivos de calidad y equidad. Considera que en cada país, de acuerdo a sus circunstancias, nivel de ingresos y grado de desarrollo educacional, estos objetivos tendrán que ser alcanzados gradualmente y por diferentes caminos, venciendo la resistencia del 'patrón predominante de la educación superior pública'. Esto último hace referencia al hecho de que sea el Estado el principal sostén económico de la educación superior.

El punto i significa el fomento de la creación de instituciones privadas; el punto ii significa que las instituciones públicas incrementen sus Recursos Directamente Recaudados (RDR) y, por ende, se vayan privatizando; el punto iii implica el progresivo abandono económico por parte del Estado y la mayor "autorregulación" de las instituciones de E.S. en función de la mayor "eficiencia"; el punto iv refiere a la creación de una política, desde el Estado, que garantice la "calidad", "equidad" y "eficiencia" en base a "estímulos".

La siguiente cita nos sirve para ver lo concreto de las propuestas dadas por el BM: "El Banco Mundial ha propuesto como una meta indicativa que las instituciones oficiales logren reunir, mediante ingresos propios provenientes de fuentes no-gubernamentales, un 30 por ciento de sus gastos corrientes, meta que sería posible alcanzar según mostrarían los casos de Corea, Jordania y Chile".

Brunner, en base a su amplio estudio del desarrollo de la "nueva pauta" concluye que "en casi todas partes, como vimos, los gobiernos esperan que las instituciones aumenten sus ingresos propios, sea mediante el cobro de aranceles, la venta de servicios o una más activa participación en diversos mercados".

Brunner señala que el BM concibe que "los sistemas deberían transferir su centro de gravedad desde el ámbito de la protección estatal al ámbito competitivo del mercado, o viceversa". Esto nos sirve a modo de síntesis de la política general que desenvuelve el BM. Otro aspecto de esta política general es el planteamiento de que "en la mayoría de los países en desarrollo el grado de participación gubernamental en la educación superior excede con mucho lo que es económicamente eficiente". Ambas síntesis son de Brunner a partir del BM; sin embargo, este autor considera que esta forma de plantear el problema es

demasiado “ideológico” y no “práctico” y critica, por ejemplo, la segunda cita afirmando que dicha “intervención, más que ser excesiva, está mal diseñada y produce efectos perversos”.

En base a esta errada intervención, Brunner plantea la necesidad de la “autonomía de gestión”, la cual “es importante sobre todo en el caso de las instituciones públicas de nivel universitario y no universitario. Supone acabar con los controles burocráticos minuciosos sobre sus autoridades, flexibilizar el régimen laboral y salarial de su personal académico y no-docente, reconducir el papel de los sindicatos corporativos hacia pactos laborales que faciliten la modernización de la gestión institucional, diversificar las fuentes de ingreso financiero e introducir nuevas modalidades de gobierno institucional, que faciliten una gestión eficaz, un uso más eficiente de los recursos y racionalizar la administración institucional”. Esto se complementa con la propuesta de que la universidad, cual empresa, debe tener mayor relación con el mercado: “introducir elementos de competencia que hagan posible una mayor incidencia de los mercados en la operación de los sistemas”.

Finalmente, consideramos necesario presentar el marco general que envuelve la propuesta privatista. Este marco propone un “nuevo contrato entre los sistemas [universitarios] y los gobiernos”, e implica “modificar los patrones de financiamiento de la educación superior, sustituyendo los actuales mecanismos de asignaciones automáticas por otros más sensibles al desempeño académico de las instituciones, a su eficiencia interna y a los resultados provistos por las evaluaciones o vinculados estrechamente a sus metas de desarrollo, capacidad de generar recursos propios o de competir por recursos públicos. Sólo en estas circunstancias puede esperarse que surja un contexto más favorable para consolidar el patrón emergente de cambios, estimular a las instituciones a innovar y a adaptarse a las demandas de la sociedad”. Como vemos estos lineamientos fueron aplicados por los gobiernos nacionales y universitarios desde la década del 90 en el Perú. Actualmente también han sido profundizados por la ley universitaria 30220.

C. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ. OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA. “LA UNIVERSIDAD EN EL PERÚ”. 2006

Partiendo de una revisión general del % del PBI que destinan los países latinoamericanos para la Educación, concluyen que el Perú se encuentra rezagado. El promedio de A.L. es del 4% y el Perú hace décadas destina menos del 3%.

Otro aspecto que resaltan es que del total del presupuesto destinado a Educación, el 95% es para “gastos corrientes”, que en la práctica son solo remuneraciones (99%). De esto deviene que califiquen a MINEDU como mero administrador de planillas.

En cuanto a la Educación Superior plantean que “una mejora sustantiva de la calidad de la Educación Superior da como resultado la mejora de los otros niveles de la Educación” y “para ello, la inversión pública es decisiva, sobre todo en áreas estratégicas como la investigación que exigen una inversión muy alta y tienen un retorno a largo plazo”. Al respecto, señalan, citando a UNESCO, que el presupuesto público destinado a la Educación Superior fue solo del 0,71% del PBI en el 2002.

Un aspecto importante que se analiza es la relación entre el gasto público (financiamiento proveniente del tesoro público) y el gasto privado (financiamiento proveniente de las pensiones que pagan los estudiantes, principalmente en la universidad privada) en la Educación Superior. Enseguida, informan que el 58% proviene del Estado y el 42% del sector privado, situación que “coloca a nuestro país por debajo del promedio de los países que forman la OECD que es de 78,2% de gasto público y 21,8% de gasto privado”.

Posteriormente el análisis de la evolución del presupuesto destinado a la Universidad Pública expresa una conclusión nítida: los Recursos Ordinarios (proveniente del tesoro público) tienen una clara tendencia en que va disminuyendo y, por el contrario, los Recursos Directamente Recaudados (proveniente del pago que hacen los estudiantes) tiene también una clara tendencia de constante incremento.

Siguiendo este análisis señalan que “la inversión estatal por alumno en las universidades públicas ha sufrido un deterioro relativo en los últimos años, situando al Perú en niveles muy inferiores a otros países de la región” y, en comparación con la OECD, “nuestra inversión debe considerarse extremadamente baja”.

Entrando al análisis comparativo –año y fuente- del gasto por estudiante en universidades públicas se concluye que “de 1995 a 2004, mientras el tesoro público ha disminuido su participación porcentual en el gasto por alumno, pasando de 84% a 62%, la universidad incrementó significativamente su participación en el gasto por alumno mediante la generación de recursos directamente recaudados, pasando de 16 a 38%”. Esta realidad es determinante en la confirmación de nuestra tesis de la progresiva privatización de la UNMSM.

Pero, lejos de rechazar la privatización mediante el incremento de los RDR, plantean que “se trata pues de un esfuerzo notable y meritorio que, no obstante, lejos de ser estimulado, ha tendido más bien a una suerte de penalización por parte del Estado, que no sólo retrajo su participación presupuestal, sino que impone condiciones poco flexibles para el manejo de los recursos directamente recaudados, dificultando la eficiencia en su gestión”.

En otro apartado de este capítulo afirman una tendencia a la descapitalización de las universidades públicas. Por descapitalización entienden la reducción de los recursos empleados en infraestructura y logística en pro de la actividad investigativa.

Esta descapitalización, argumentan, tiene como causa el decreciente presupuesto asignado por el Estado. “Para el año 1995, los ingresos provenientes del Tesoro Público constituyeron el 85% del presupuesto de las universidades públicas, mientras los recursos directamente recaudados por ellas representaron el 15%, situación que varía el año 2000 donde los recursos del Tesoro Público descendieron a 70% mientras los RDR ascendieron a 30%. El año 2004 el Tesoro Público aportó el 67% y la universidad 33% respectivamente”. Esta situación llega a casos alarmantes (considerando el año 2003) como el de la UNI (67% RDR y 33% RO), UNFV (52% RDR y 48% RO) y UNMSM (49% RDR y 51% RO).

Nosotros interpretamos que frente al abandono presupuestal de la Universidad Pública por parte del Estado, aquella, lógicamente, cada vez invertía mayor porcentaje de su presupuesto en las actividades que le permiten subsistir a corto plazo y mediano plazo: remuneraciones. Y, paralelamente, implementa nuevas modalidades –y/o las desarrolla- de recaudación de RDR.

“El año 1995 el gasto corriente constituía el 72,23% del presupuesto y el gasto de capital el 27,7%;...mientras el año 2004 el porcentaje de gastos corrientes alcanzó el 87,8% en tanto el gasto de capital fue de 12,2%. Este aumento acelerado del gasto corriente es sumamente peligroso; está llevando a las universidades públicas del país a debilitar el cumplimiento de tareas fundamentales como la investigación, reduciéndose a la condición de instituciones meramente profesionalizantes”, esta situación llega a casos extremos como el de la UNI (92,82%), UNMSM (92,2%), UNSAA (94,79%), UNT (93%).

Señalan que de seguir dicha tendencia, las universidades se convertirán en meras entidades administradoras de planillas y, no podrán mejorar sustancialmente. Preocupados señalan que los RO solo alcanzan para el 42,6% de los gastos corrientes de la UNI, y el 66,87% de la UNMSM, “con tendencia a disminuir”.

Crítica

Todos estos datos son muy importante para analizar el ámbito económico y el proceso de privatización de la Universidad Pública. Sin embargo, los autores no plantean de manera directa su propuesta. Interrelacionando e interpretando lo que nos muestran llegamos a las siguientes conclusiones: 1. Están por una mayor inversión en la Universidad, sin discriminar entre RO y RDR. 2. La inversión debe

destinarse principalmente al ámbito de la infraestructura (locales, bibliotecas y laboratorios que mejoren las condiciones para la investigación): capitalización, en su concepción. 3. Consideran que los RO deben destinarse principalmente a las remuneraciones, por eso rechazan y les preocupa la tendencia en la que los RO ya no alcancen para cubrirlas; y, en contraparte, consideran que los RDR deben destinarse principalmente a la habilitación de las condiciones básicas de calidad (infraestructura pro investigación, esencialmente). 4. En base al punto anterior, proponen una “política de generación de recursos propios” y, ligado a ello, mayor libertad frente al control estatal (trabas burocráticas) para el uso financiero propio y flexible; cuestión que no debe mellar los fondos provenientes del tesoro público. Sobre esto, en sus recomendaciones sí llaman a que el Estado debe otorgar más recursos pero condicionándolo a su ajuste (y consecuentes logros) acorde a la política diseñada por el organismo que dirija el sistema universitario.

Es necesario resaltar que conciben a las remuneraciones como “pagos no recuperables”; interpretamos que están concibiendo a los docentes o administrativos como elementos que no contribuyen en la mejora del nivel educativo y, por el contrario, a la infraestructura como determinante de aquella. De esto se desprende que no planteen en absoluto la necesidad del incremento de los Recursos Ordinarios mediante la *exigencia* al Estado y, por lo menos en esta parte (pues si lo hacen sucintamente en el apartado de conclusiones), tampoco la necesidad del incremento de las remuneraciones a docentes y administrativos. Consideramos que toda esta lógica es unilateral y, por ende, errada.

Resumiendo, proponen que se desarrollen (mediante el destrabe y la mejora de servicios) los RDR en función de sostener la política de “capitalización” en pro del ámbito investigativo que, finalmente, en su concepción, devendrá en mayor calidad. Así, apuestan por la mayor privatización de la Universidad Pública y solo están en contra del abandono estatal de la UP en lo que respecta a las remuneraciones y en cuanto esté condicionado al ajuste –mediante el SINEACE y la, ahora, SUNEDU- de la universidad al sistema económico y cultural: el capitalismo.

En el último apartado de este capítulo, en el **ámbito del uso de presupuesto universitario** (RO y RDR) por parte de las Universidades Públicas, denuncian la burocratización a la que conduce el control estatal. En consecuencia, plantean que la Universidad Pública necesita mayor libertad en el manejo de su presupuesto. Agregan que la UP, por su naturaleza académica, no debe someterse a la regulación que el Estado desenvuelve en cualquier entidad pública.

Por estas razones denuncian la falta de autonomía, “coactan su autonomía”, en este aspecto y propugnan que ello se debe respetar. “Es preciso establecer para la universidad un sistema de rendición de cuentas flexible, por resultados antes que por procesos, reforzando su autonomía administrativa”.

Además, basándose en los criterios empresariales ya expuestos, plantean que esta situación hace que la universidad pública sea menos competitiva que la universidad privada.

Respecto a su apelación a la autonomía económica, consideramos que su concepción es limitada a rechazar las “trabas burocráticas del Estado en el libre uso del presupuesto” y a exigir mayor libertad para la “capacidad gerencial”; sin embargo, no son conscientes de que si se quiere mayor autonomía se debe exigir principalmente mayor presupuesto público pues esto es garantía de una mejor constitución en pro del libre desenvolvimiento de las actividades: autonomía. Aspecto que será mellado cuanto más se recurra a los RDR.

Sintetizando esta última parte, su objetivo principal es destrabar lo burocratizado producto de la centralización estatal para así utilizar los recursos (RO y RDR) con flexibilidad y priorizando cuestiones referentes a la “calidad”. Solo por esto apelan a la autonomía universitaria económica frente al Estado.

2.2.3. SOBRE GOBIERNO UNIVERSITARIO AUTORITARIO Y PRIVATISTA

A. PÉREZ, ANÍBAL. UNIVERSIDAD EN TIEMPOS NEOLIBERALES. PERÚ, ARGENTINA Y CHILE. 2011

Caso peruano

Sobre el eje del gobierno universitario Pérez señala que bajo el gobierno de Fujimori se suprimió el cogobierno. “En cuanto al eje gobierno universitario, Fujimori se encargará de ‘reorganizar’ las universidades públicas, suspendiendo los procesos democráticos colocando interventores dependientes del Ejecutivo, esto so pretexto de la persecución del enemigo interno, encarado en la figura de Sendero Luminoso. Este proceso se llevará a cabo mediante una sistemática violación de Derechos Humanos”.

Y vinculando la política general del régimen fujimorista y la política universitaria aplicada por este, plantea: **“En síntesis, si tomamos como eje de análisis el gobierno universitario, podemos sostener que tras la aplicación de reformas neoliberales en Perú, existió una suspensión de los derechos democráticos de autogobierno”**

En relación a la política económica o, como Pérez lo denomina, el “financiamiento”, plantea: “En cuanto al eje financiamiento, bajo la constitución de 1993 se asigna a los padres el deber de educar a sus hijos, privatizando con ello el antiguo derecho inherente a toda persona humana”. En esto vemos que Pérez también entiende la privatización como el proceso por el cual va cambiando el ente (del Estado hacia la familia) que sostiene económicamente la educación de un estudiante.

Examinando el DL N° 882 (Ley de promoción de la Inversión en la Educación) afirman que esta permitió “abrir la oferta privada de educación ampliando la oferta académica y permitiendo el lucro con ella”. Y como una de las consecuencias privatistas de este DL, señalan que tras “la publicación de este decreto, se generará una explosión de Universidades Privadas en todo el país, las cuales poseen fines lucrativos y mantienen un régimen de pago de aranceles por parte de los particulares que decidan consumir en el mercado de la educación”.

Refiriéndose al porcentaje del PBI asignado a la educación y el presupuesto asignado a la universidad pública y citando a López Marga, señala: “Mientras en 1986 se destinó un 3.6% del PIB en educación, en 1990 este cayó a un 2.2%, para evidenciar una leve alza en 1995 del 3.1% con una nueva caída al 2.9% en 2005. A su vez, con respecto a los orígenes del financiamiento para las Universidades públicas, estas han pasado de recibir en 1998 de un 75% de aporte Estatal, a un 67% para el 2000. Al mismo tiempo en 1998 obtuvieron mediante recursos propios un 25% de su presupuesto y en el año 2000 un

33%. Esto demuestra claramente la tendencia hacia el autofinanciamiento de las propias universidades estatales provocada por la mercantilización de la educación”. Concluye esta parte afirmando que “bajo el eje financiamiento, se puede sostener que existe un crecimiento desregulado de la oferta privada, permitiendo lucrar en este ámbito, además de un claro desligamiento del aporte Estatal con las universidades”.

Con respecto al vínculo entre los organismos financieros internacionales y los mecanismos de evaluación de la calidad concluye que “la creación de agencias de calidad de la educación superior, son políticas promovidas por los organismos internacionales como el FMI y el BM”.

Caso argentino

Respecto al caso argentino bajo el régimen de Menem señala que “la característica principal de la educación superior neoliberal de Menem y común al caso peruano es la amplitud totalmente descontrolada de la oferta académica para instituciones privadas de educación superior”; y, refiriéndose al presupuesto de la universidad pública, “al mismo tiempo se evidencia una tendencia al autofinanciamiento, esto debido a que según datos de la OCDE, para el 2000 un 66,2% del presupuesto de las Universidades públicas vino desde el Estado, mientras que el 33,8% es de origen privado”.

Refiriéndose al vínculo entre las exigencias del Banco Mundial y el autofinanciamiento de las universidades públicas señala: “El cobro de aranceles en ese caso es fundamental, al respecto Facundo Solanas sostiene: **‘en parte del diagnóstico realizado por el Banco Mundial (BM) en 1991 se anunciaba la necesidad de arancelar la universidad.** El informe sostenía lo siguiente: Existe una conciencia creciente de la necesidad de proporcionar recursos adicionales a las universidades. Como lo ha indicado la experiencia habida en otros lugares, la única forma de generar fuentes de ingresos estables para las universidades estriba en la recuperación de los costos, al menos parcial, mediante el cobro de derechos de matrícula a los estudiantes (Banco Mundial, 1991)’ ”.

A modo de conclusión en relación a ambos ejes y en base a un análisis comparativo señala “bajo el eje financiamiento el caso argentino es altamente similar con el caso peruano: explosión universitaria, aumento de la matrícula (cobertura) y disminución del Estado. La gran diferencia son los sistemas de cogobierno que si bien en Perú aún existen, fueron desarticulados e intervenidos por Fujimori y en el caso de Menem se han mantenido”. Sobre esto último, es necesario aclarar que Pérez se está refiriendo al gobierno de Menem. Porque si analizamos gobiernos anteriores como los de Perón, Evita o las FFAA, la

situación de la universidad fue atroz ya que se violó sistemáticamente los derechos humanos, se suprimió el cogobierno y la autonomía (Seia, 2017).

Caso chileno

Respecto al caso chileno, bajo el régimen de Pinochet, señala que “se suprimieron los ejercicios democráticos del cogobierno universitario”. “Al mismo tiempo que se perpetraban los atroces crímenes, la dictadura triunfante implementará un proyecto global de tipo neoliberal”.

Vinculando dictadura y política universitaria, señala: “Cómo se puede apreciar, la configuración legal del sistema de educación superior chileno fue establecido bajo la dictadura militar. Esto posibilitó la implantación global de un modelo neoliberal para el ámbito educacional, con la menor resistencia posible”. Y citando a Corvalán, Pérez afirma que “Ese proyecto [neoliberal], en las condiciones históricas entonces existentes en Chile, sólo podía instaurarse mediante un régimen dictatorial”. Lo mismo podemos afirmar para el caso peruano con Fujimori.

Al igual que en el Perú gobernado por el régimen fujimorista, en Chile se configuró un marco legal en función a la política privatista. “En cuanto a los pilares del sistema en la década de los noventa lo encontramos en la Constitución de 1980 impuesta bajo la dictadura. En ella se otorga un nuevo carácter al Estado, denominado como subsidiario, muy a fin a las políticas neoliberales **otorgando a las familias el deber de educar a sus hijos. Con esto, se desliga el Estado del deber de otorgar educación y al igual que en el caso peruano se particulariza en la familia, llevándolo por ello al ámbito de lo privado**”. Acá, nuevamente, vemos que la privatización es el proceso en el que el sostén económico para la educación va transitando desde el tesoro público (Estado) hacia el tesoro privado (familiar o estudiantil).

“En cuanto al eje financiamiento, podemos decir que en el caso chileno no existe gratuidad en la enseñanza, ni en universidades públicas ni privadas. El Estado genera varios tipos de becas que no cubre todo el arancel de pregrado, obligando a los estudiantes a endeudarse con créditos estudiantiles o pagar en efectivo las diferencias”. En el Perú, Germaná (2002) propuso también la creación de un “fondo autónomo para el financiamiento de la universidad” que, cual banco, financiaría a los estudiantes de pregrado a condición de que paguen, cuando trabajen, un “crédito con intereses muy bajos”.

En relación al marco legal que configuró el gobierno universitario, da cuenta de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza dada por Pinochet en 1990. “Este ámbito se

encuentra regulado en los Estatutos Orgánicos de cada una de las Universidades públicas de Chile, las cuales en ningún caso permitían el cogobierno Universitario. Esta es una de las particularidades propias del caso chileno en relación con los otros dos países analizados, puesto que en los vecinos del cono sur se mantienen, bajo la era neoliberal, los gobiernos estudiantiles. En el caso peruano es mucho más cercenado que en el Argentino, pero no se suprimió en totalidad su existencia. El autoritarismo chileno heredado de la dictadura es muy fuerte en comparación con nuestros vecinos, ya que bajo los gobiernos de la Concertación no habrá legislación alguna “desde arriba” a fin de retornar a los sistemas de cogobierno universitarios en el país. De hecho entre 1990 y el 2007, sólo una universidad tiene una especie de cogobierno (Universidad de Chile) bajo la figura de un senado universitario que no tiene potestades deliberativas en las materias relevantes, como conducción y elección de figuras unipersonales”.

El siguiente párrafo nos permite ver la magnitud del país que más a profundidad ha privatizado su educación en América del Sur: “Con respecto a la inversión directa del Estado para sus propias Universidades, podemos decir que en la actualidad es paupérrimo. **Por ejemplo, en su presupuesto general del 2008, la Universidad de Valparaíso recibió un total de 7,9% de aporte fiscal directo, cerca de un 9% se generaban mediante prestación de servicios y el resto, vale decir el 83,1% del total es financiado con los aranceles de los propios estudiantes, es decir se ha trasladado el costo de la educación a las familias desligándose el Estado de este.** Con este último ejemplo se muestra que en comparación con los dos casos anteriores, el chileno es el más neoliberalizado y crítico”. Esto nos permite ver el peligro de la tendencia privatista, que también presenta el Perú.

Concluye el caso chileno afirmando que “el sistema neoliberal chileno muestra un ostensible crecimiento del sector privado, con cobro de aranceles a los estudiantes bajo un porcentaje enorme de endeudamiento y sin gobierno estudiantil. Este perverso sistema fue implantado en la dictadura militar y consolidado además de profundizado bajo los gobiernos democráticos”.

La síntesis de su perspectiva teórica la podemos encontrar en la siguiente cita:

Tomando como eje de análisis el financiamiento, podemos señalar que el elemento homogéneo en los tres casos estudiados es el crecimiento desregulado de la oferta universitaria privada y el desligamiento del Estado en sus aportes directos. Por otra parte, los elementos heterogéneos guardan relación con el eje gobierno estudiantil, manteniéndose en el caso Argentino, y suprimiéndose temporalmente en el caso peruano, y no existiendo en el caso chileno. Finalmente tanto Argentina como Perú ha mantenido educación pública gratuita en tiempos neoliberales, al contrario de Chile.

2.3. CONTEXTO POLÍTICO-ECONÓMICO

2.3.1. La política general del gobierno de Fujimori

2.3.1.1. La aplicación del neoliberalismo

A. Las OFIS y el Programa de Ajuste Estructural

La posición económica que ocupa el Perú en el sistema económico mundial es la de un país dependiente y sujeto a las medidas económicas de los organismos financieros internacionales (OFIS) como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales, a su vez, defienden los intereses del capital financiero mundial monopolizado en algunos bancos.

Esta condición del país tampoco vario bajo el régimen del “Gobierno Revolucionario de las FFAA” (1968-1980) encabezado por Velasco Alvarado principalmente; pues “la deuda externa había pasado de 1800 millones de dólares en 1968 a 9361 millones de dólares en 1980” (Butrón, 2018, p.37). Además, “en 1977 había 174 empresas en propiedad del Estado en comparación a las 40 que había en 1968. Para mantener – económicamente - el abultado número de empresas, los gobiernos de turno decidieron financiar a las mismas con recursos provenientes de deuda externa” (Butrón, 2018, p. 67)

Estos dos indicadores nos señalan que el Estado peruano dependía de los préstamos para dinamizar la economía peruana (en este caso, adquirir o crear empresas) y, por lo tanto, se mantenía sujeta a las condiciones que daban los organismos acreedores.

Este mecanismo de sujeción (cuyo sustento teórico se denominó “industrialización por sustitución de importaciones” y fue impulsado por los OFIS y por la CEPAL) pronto dejó de ser el que requerían aquellos monopolios en su carrera por seguir acumulando riqueza y no ser derrotados en la competencia mundial propia del capitalismo. Es así que varios organismos financieros ligados a los intereses de las transnacionales norteamericanas diseñan un Programa de Ajuste Estructural (en adelante PAE) cuyas medidas se plasman posteriormente y de manera sencilla en el famoso Consenso de Washington (1989).

Obviamente, este PAE no fue recomendado sino impuesto mediante el condicionamiento que los OFIS plantearon a los países sujetos a estos mediante la deuda externa. Al respecto señala Butrón (2018):

La deuda externa latinoamericana se terminaría de oficializar en agosto de 1982, año en que México se declara en bancarrota financiera. Seguidamente “en tan solo unas semanas toda la región cayó en lo que posteriormente se conoció como la crisis de la deuda” (Kuczynski, 2003, p. 46)

Es así como el asentamiento del Neoliberalismo en Latinoamérica encontró en la deuda externa el caballo de Troya ideal para que toda América Latina se incline hacia este modelo económico (p. 19).

Asimismo, Sheahan (2001), citado por Butrón (2018) señala que:

En el curso de la década de 1980 las instituciones internacionales se volvieron cada vez más insistentes acerca de la necesidad de que los países hicieran reformas estructurales totales. Pudieron hacerlo porque la crisis de la deuda hizo que los países en desarrollo fueran más dependientes del crédito de las agencias internacionales (Sheahan, 2001, p. 205).

Sobre el PAE, Chossudovsky, citado por Manco (1994, p. 28), señala lo siguiente:

El “Programa de ajuste estructural” patrocinado por el FMI constituye un poderoso instrumento de reestructuración económica que afecta el nivel de millones de personas. La implementación del ajuste está directamente ligada a este proceso de empobrecimiento global. La aplicación de la ‘medicina económica’ del FMI conduce a una reducción del poder adquisitivo real de la población y al fortalecimiento de una economía exportadora basada en mano de obra barata: el mismo ‘menú’ de austeridad presupuestaria, liberalización del comercio y privatización, es aplicado simultáneamente en más de 70 países deudores en el tercer mundo y en Europa del Este. Los países deudores renuncian a su soberanía económica y al control sobre la política monetaria y fiscal, y se instala un ‘tutelaje económico’ por las instituciones financieras internacionales (IFIS): los gobiernos que no se amoldan a las ‘metas de rendimiento’ del FMI son puestos en una lista negra. Al quedar un país en esta lista, las inversiones y la transferencia de tecnología se congelan y los créditos de importación y exportación son bloqueados.

Las políticas de manejo de la deuda por parte de los países y las instituciones acreedoras se utilizan para ‘reestructurar’ las economías del tercer mundo, ya que constituyen mediante las cláusulas de condicionalidad impuestas por el FMI-BM, la base para reorientar ‘apropiadamente’ la política macroeconómica de los países deudores. (Chossudovsky, 1992: 23)

En base a esto, Manco concluye que esta es “una reestructuración de nuestras economías para ‘oxigenar’ las tendencias recesivas de las economías centrales y dominantes, en particular la de los Estados Unidos, y una forma de ‘resolver’ el problema de la deuda externa para reforzar las relaciones de dominación en un nuevo escenario mundial marcado por la globalización internacional y las políticas de ‘libre comercio” (Manco, 1994, p. 28)

Y, agravando esta condición, en el caso peruano, Armeane Choski –citado por Manco-, vicepresidente del Banco Mundial señaló lo siguiente:

Si comparo lo que ha hecho el Perú en términos de reformas, la manera como se ha mantenido a ellas contra las dificultades existentes; creo que ningún otro país lo ha hecho. Las reformas peruanas son superiores a las chilenas, que en algún momento fueron destacadas como el modelo de lo que debería hacer un país, lo mismo que las mejicanas; las reformas peruanas han llegado a niveles mucho más profundos y se están ejecutando mucho más rápidamente (Entrevista en Gestión 9/2/93).

Según Joseph Stiglitz (2002) la PAE es un plan sistemático que consiste en lo siguiente:

Primero.- Los gobernantes, por “presión” del FMI, son “obligados” a **privatizar** las distintas

empresas estatales.

Segundo.- Los gobernantes aplican la política de **liberalización del mercado de capitales**, que consiste en la no intervención del Estado en la economía beneficiando de esta manera a los “inversores extranjeros”.

Tercero.- Los gobernantes aplican la política de **precios regulados por el mercado**, que consiste en incrementar los precios de los alimentos.

Cuarto.- Los gobernantes aplican la política de **libre comercio**, que consiste en aplicar las reglas del FMI, OMC y el BM que benefician a las potencias extranjeras. En una de las cláusulas establecidas por la OMC, se establece el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS), que no es más que la mercantilización de la educación y la salud.

B. Las medidas neoliberales y el inicio de su aplicación en América Latina y el Perú

Las medidas de este ajuste económico en el caso peruano fueron dos generales: estabilización y ajuste. El primero se componía de la estabilización de precios, reducción de inflación y saneamiento fiscal. El segundo, de la privatización, liberalización comercial y financiera o desregulación y la reinserción financiera internacional. En otros términos Gonzáles de Olarte (1994) señala que la fórmula apoyada y financiada por el Banco Mundial y el FMI fue: estabilizar, liberalizar, desregular y privatizar.

Para profundizar un poco más sobre este PAE, analizaremos las diez medidas sintetizadas por John Williamson -en base a lo planteado por el FMI, el BM y el Departamento del Tesoro de los EEUU- en el documento titulado el Consenso de Washington (1989).

- 1. Permanente disciplina fiscal.-** Es decir, evitar desórdenes macroeconómicos como la inflación, déficits fiscales para que así los inversionistas tengan la seguridad de ganar.
- 2. Reducción del gasto público.-** Implicó el recorte presupuestario principalmente en relación a los subsidios dados a las empresas públicas.
- 3. Reforma tributaria.-** Significó la recaudación tributaria eficaz. Al respecto, Boloña, el segundo ministro de economía de Fujimori, señalaba que el gasto del Estado dependía de los impuestos recaudados.
- 4. Tasas de interés fijadas por el mercado.-** Sin embargo, se debían aplicar intereses “positivos”, es decir atractivos a los inversionistas con el fin de evitar la “fuga de capitales”.

5. **Competitivas tasas de cambio.-** Implicaba mayor seguridad para que los agentes privados inviertan en exportaciones.
6. **Desbloqueo de la política comercial.-** Implicaba la disminución de aranceles, la eliminación de los permisos de importación. Esto con el objetivo de “liberalizar” la importación.
7. **Liberalización de la inversión extranjera directa.-** Con el objetivo de darle mejores condiciones a la inversión del capital proveniente de empresas transnacionales.
8. **Privatización de las empresas públicas.-** Fue el punto más apoyado por el Banco Mundial y el FMI (Butrón, 2018, p. 23). El argumento era que las empresas privadas eran más eficientes.
9. **Política desreguladora.-** Con el objetivo de fomentar la competencia; lo cual requería de la dación de leyes y normas que permitieran la penetración más fácil y directa del inversionista.
10. **Seguridad legal que proteja la propiedad privada.-** Implicaba la construcción del marco legal que proteja las inversiones.

Al respecto Jiménez (2000) señala que “...según este Consenso, los recursos deben asignarse sólo a través del mercado, el Estado debe ser neutral, debe privatizar sus empresas y algunos servicios (seguridad social, educación, etc.) y debe redefinir su tamaño en función del principio de la austeridad y el equilibrio presupuestal” (p. 4).

Respecto a las consecuencias de estas medidas, Manco (1994), señala lo siguiente:

En otras palabras, el costo y la factura del financiamiento de la estabilización y de las llamadas “reformas estructurales” la pagan los trabajadores en el más amplio sentido de la palabra.

Los diversos programas de estabilización aplicados desde 1976 y en particular a partir del Fujishock de agosto de 1990, más las reformas estructurales, han tenido y tienen efectos absolutamente negativos para los trabajadores. Con los primeros se disminuye y se controla el poder adquisitivo de los salarios. Con las reformas se privatiza la actividad empresarial del Estado y en especial se promueve una “mayor flexibilidad en el mercado laboral, introduciéndose la posibilidad de despidos por razones económicas, tecnológicas y estructurales...” (Carta de Intención ante el FMI, 1993-1995).

Ya a mediados de la década del 70, mediante el régimen dictatorial de Pinochet, y con el asesoramiento de los discípulos de Friedman y Hayek en la Universidad de Chicago (EEUU): los “Chicago Boys”, en Chile se experimentó por primera vez la aplicación de las medidas económicas neoliberales². En este mismo sentido, los países de esta región

² La privatización fue una de las medidas más importante del PAE y fue aplicada a profundidad por el gobierno fujimorista. Sobre esta, Gonzáles de Olarte (1998), citado por Butrón (2018), señala: “La privatización fue iniciada con la venta de empresas públicas y posteriormente con la transferencia de ciertas funciones y servicios del Estado al sector privado. Esta es probablemente la reforma más importante, puesto que está cambiando la estructura de la propiedad empresarial, constituye el incentivo para atraer al capital extranjero y contribuye a redefinir la ideología económica (Gonzales de Olarte, 1998, p. 55)”.

siguieron esta tendencia.

Ya que fue concebido inicialmente para esta región, la privatización se aplicó con mayor fuerza en esta parte del mundo. Así, por ejemplo, en cuestión de infraestructura (área clave de privatización) América Latina representó la mitad de todas las inversiones hechas en los países en vías de desarrollo entre 1990 y 2003

Según esto último, se puede entender que los países latinoamericanos estuvieron concentrados en sacar adelante programas masivos de privatización (Butrón, 2018, p. 27).

Respecto a las consecuencias, señala Sunkel (2007), citado por Butrón:

Los resultados son sumamente preocupantes: crecimiento económico insuficiente y altamente inestable; fuerte concentración del poder económico; aguda y creciente desigualdad tanto en los propios países desarrollados como en los subdesarrollados y una cada vez abrumadora distancia entre ellos; pérdida de los bienes y espacio públicos, con fuerte exclusión social, pobreza y deterioro ambiental. La democracia, el principal logro político, también se ha ido desvirtuando y está severamente amenazada en muchos países (Sunkel, 2007, p. 473).

En el caso peruano, el Programa de Ajuste Estructural o la aplicación del neoliberalismo tuvo sus precedentes tanto en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry de Acción Popular como de Alan García Pérez del APRA. Como ejemplo de esto, Manco (1994) da cuenta de lo siguiente:

En 1989 el Banco Mundial publicó un informe titulado Perú: Políticas de control de la hiperinflación y de recuperación económica, donde comentaba los planes privatizadores y de reestructuración elaborados por CONADE durante la gestión aprista. En dicho informe se plantea por primera vez, la privatización en su conjunto de la actividad empresarial del Estado, criticando las políticas populistas y subsidiadoras que descapitalizaron las empresas estatales, aunque consideraba explicable que el Estado se reserve determinadas áreas estratégicas (p. 48).

Sin embargo, fue el gobierno de Fujimori el que aplicó dicho PAE desde el inicio de su gobierno, a profundidad y de manera sistemática. Esto se explica si comprendemos que en el periodo de elecciones el candidato Fujimori fue la carta elegida por las OFIS. Y en el periodo previo a su instauración se compenetró con estas medidas y el núcleo que las difundía tiempo antes en el Perú. Este núcleo o grupo estaba conformado, al iniciar, por Montesinos, un sector poderoso de las FFAA, Hernando de Soto y Pérez de Cuellar y, además, se valía de lo profusamente difundido y preparado³ por el grupo “liberal”⁴ que aglomeró Vargas Llosa.

³ Por ejemplo, Vargas Llosa, citado por Manco (2018), como parte de su agitación señalaba que: *No se sale de la pobreza redistribuyendo lo poco que existe sino creando más riqueza. Para ello hay que abrir mercados, estimular la competencia y la iniciativa individual, no combatir la propiedad privada sino extenderla al mayor número, desestatizar nuestra economía y nuestra psicología, reemplazando la mentalidad rentista, que lo espera todo del Estado, por una moderna que confíe a la sociedad civil y al mercado la responsabilidad de la vida económica* (Vargas, 1993, p. 46).

Por este motivo y su fiel sujeción a los mandatos favorables a las grandes potencias, como Gran Bretaña, con cuya Reyna logró entrevistarse, Vargas Llosa fue considerado un “Margaret Thatcher latinoamericano” (Butrón, 2018, p. 54).

⁴ Sobre este grupo, Manco (2018, p. 45) señala: “Después de la fallida estatización de la banca (1987) el Perú fue testigo del fortalecimiento de una nueva derecha intelectual, orgánica, conservadora y liberal que ante el derrumbe y descomposición del

Así, como bien lo señala Pease (2003) citado por Butrón (2018), el gobierno fujimorista se puso “en la línea del Consenso de Washington cuyo objetivo no era un simple ajuste, donde fuera necesario, sino el rumbo neoliberal, la destrucción de los modelos precedentes agotados, etc.”.

En este sentido, el gobierno Fujimorista elaboró en base al PAE y el Consenso de Washington su plan económico.

Durante las semanas post segunda vuelta, De Soto y el fallecido economista Carlos Alberto Rodríguez Pastor elaboraron el ‘fujishock’, plan que fue expuesto a fines de junio en Nueva York a Fujimori y a los representantes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones Unidas, los principales acreedores del Perú en ese momento.

“El nuevo presidente del Perú logra acuerdo sobre deuda”, tituló el 1 de julio [de 1990] el diario estadounidense “The New York Times”, donde Fujimori anunció, por primera vez, la aplicación del shock económico. (El comercio, 2015)

Obviamente, si un PAE es diseñado por las OFIS según el interés de los monopolios, el que sufrió las consecuencias fue el pueblo. Esto es expresado nítidamente por Quijano (1998), citado por Butrón (2018), al señalar que el “shock” (anunciado el 8/8/1990) implicó “el aumento de los pobres en un 70% en un solo día”.

Este conjunto de medidas neoliberales fueron la base sobre la cual el gobierno fujimorista asentó su política general; y, en función a esta, a su vez, desarrolló su política educativa y universitaria.

Así, el neoliberalismo comenzó su aplicación en América Latina mediante la dictadura encabezada por el general Augusto Pinochet, en 1973. Fueron los denominados “Chicago Boys” los que asesoraron la política económica de este régimen teniendo como guía las ideas inculcadas por los principales intelectuales de esta concepción: Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, en Estados Unidos. Su posterior expansión fue planificada por los organismos económicos más importantes a nivel mundial: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y siempre en función a los requerimientos de los monopolios mundiales.

En el Perú, es con el gobierno dirigido por Alberto Fujimori, iniciado en 1990, que se profundiza la aplicación de este modelo. Por esto, la política general del régimen se caracterizó por la reestructuración del Estado al vender varias grandes empresas al capital privado, reduciendo así el rol estatal en la economía y también su capacidad de gasto; por el impulsó del capital privado mediante la privatización generalizada, lo cual afectó también

“Socialismo realmente existente” y la ineficiencia y desprestigio de las políticas populistas, asume las banderas del libre mercado, la libre competencia como el sistema para superar el atraso y el subdesarrollo”.

a la Educación; y, finalmente, por la consolidación de su política contrasubversiva.

Sin embargo, para comprender el proceso de privatización de la universidad peruana no basta con haber analizado de manera general las medidas propias del PAE o del neoliberalismo; tenemos que, además, conocer el proceso constituyente de la concepción según la cual la Educación es una mercancía más y que, por lo tanto, debe estar sujeta, como cualquier mercancía, a las medidas neoliberales. Concepción que, además, tiene un segundo aspecto, mucho más peligroso: la orientación pro neoliberal del contenido educativo.

La progresiva sistematización de dicha concepción, luego hecha política, la podemos rastrear en documentos hechos por organismos de grupo empresariales monopólicos a nivel mundial y, como método de canalización de los intereses de estos, por organismos nacidos del ámbito universitario y organismos dependientes de la ONU. Esto lo desarrollaremos en el acápite sobre la privatización de la universidad peruana; la cual no es más que un aspecto de la política neoliberal aplicada al ámbito universitario.

2.3.1.2. El Golpe de Estado (1992)

El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 permitió al régimen fujimorista la profundización de la concentración del poder en el presidente y las Fuerzas Armadas, en detrimento de la clásica división de poderes del Estado planteada por el liberalismo, de la democracia y, por ende, de los derechos humanos. Con este poder, Fujimori pudo implementar su política neoliberal y contrasubversiva de manera directa y efectiva.

El gobierno de Fujimori no revirtió la tendencia del Estado a asignarle cada vez mayores prerrogativas a las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión. Esto como contraparte del incremento incesante de la violencia en todo el país; que llevó al Estado a declarar en estado de emergencia gran parte del territorio nacional. Analizando esta tendencia, Pedraglio sostiene lo siguiente:

En síntesis: el autogolpe cerraba un largo círculo de creciente excepcionalidad en el Perú, iniciado en abril 1980 con el inicio de la lucha armada por Sendero Luminoso, y más exactamente con la instalación, en enero de 1983, del primer Comando Político Militar en Ayacucho. Esta excepcionalidad —que se expresó inicialmente en la creación de estados de emergencia permanentes— se acrecentó años más tarde con la crisis económica, el desenfreno de la hiperinflación —a fines de la década de 1980— y el ascenso, sobre todo en las ciudades, de la actividad de Sendero. El golpe sintetizó un momento definitivo de quiebre porque transformó la “democracia excepcional”—combinación de autoridades electos con control militar directo de amplios territorios del país— en un gobierno presidido por un civil pero sustentando abiertamente en las Fuerzas Armadas. El Estado peruano encontraba finalmente una forma autoritaria de reconstruirse (Pedraglio, 2014, p. 121).

Debido a los graves problemas económicos y la polarización de la guerra interna, el gobierno de Fujimori necesitaba mayor campo de acción en la aprobación y ejecución de sus políticas. Si bien el congreso no le había negado de plano el paquete de decretos propuesto por el Ejecutivo en noviembre de 1991, sí habían objetado algunos aspectos en lo referente al incremento de las prerrogativas de las FFAA y el SIN. Esta fue una de las razones que apuntaló la concreción del plan del golpe de Fujimori.

Al respecto, Pedraglio (2014) señala que "técnicamente fue un golpe militar bajo la forma de un autogolpe del Poder Ejecutivo y, en particular, del presidente de la República contra los otros poderes del Estado y contra los derechos ciudadanos. Sin embargo, no debe olvidarse que este proceso de captación del estado por la lógica militar se inició desde la década anterior cuando el poder democráticamente elegido, puntualmente desde el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, decidió abdicar de su poder en favor de los altos mandos militares. Los golpes contra la democracia, inicialmente en un ámbito regional, tenían, por tanto, una larga data y habían trazado una profunda huella en el quehacer político del país" (p. 122).

En este sentido, Degregori, citado por Pedraglio, afirma que "no cabe duda que la razón central del autogolpe fue que a esas alturas Fujimori no podía permitir la modificación de esa estrategia antsubversiva sobre la cual se basaba su alianza con las Fuerzas Armadas, estrategia que subordinaba a la sociedad civil y en la cual el presidente y los militares tenían la última palabra" (p. 122).

Sin embargo, las reales razones que llevaron a concretar el golpe de Estado fueron difundidas a la población de forma tergiversada o simplemente falsa. "La incompetencia de los políticos y 'la amenaza terrorista', constituida por la guerrilla Sendero Luminoso, fueron los pretextos utilizados para la implantación de la legislación de excepción, con la cual se extendió el control policial de la población y se criminalizó todo tipo de oposición" (Honorio, 2009, p.68).

Bajo estas condiciones y preparado el terreno, el 5 de abril de 1992 Fujimori ejecutó el golpe de Estado e implicó la disolución del congreso y la intervención del Poder Judicial, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría General de la República, el CNM y el JNE. Asimismo, instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, cuyos objetivos constan en el Decreto Ley N° 25418, Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y de Reconstrucción Nacional, publicado el 7 de abril de 1992.

Moralizar la administración de justicia y las instituciones vinculadas a ella; y el Sistema Nacional de Control, decretando la reorganización integral del Poder Judicial, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Ministerio Público y de la Contraloría General de la República...pacificar el país dentro de un marco jurídico que garantice la aplicación de sanciones drásticas a los terroristas a fin de que, dentro de un clima de paz y orden interno nuestra sociedad se desarrolle adecuadamente.

Entre otros puntos también estableció en este DL la promoción del “desarrollo de una economía de mercado” y la reorganización de “los servicios sociales de educación, salud, vivienda y generación de empleo, con especial énfasis en el sistema educativo y en el desarrollo cultural de la nación”.

Hecho esto, las FFAA, el SIN y el Ejecutivo en general tuvieron mayor campo de acción. Efectivamente, concentrado el poder en el Ejecutivo y sin contrapesos políticos-legales provenientes de los otros poderes del Estado, el accionar de las FFAA se vio imbuido de mayores prerrogativas. Al respecto, la CVR (2003) señala lo siguiente:

El 5 de abril de 1992, mediante el golpe de Estado que quebró el orden constitucional, el gobierno de Fujimori promulgó una serie de disposiciones que endurecieron la legislación antiterrorista (DL 25475, 25499, 25659, 25744) sin contemplar el respeto de garantías mínimas del debido proceso. Asimismo, se encargó de extender, a través de la promulgación de varios Decretos Ley, las prerrogativas militares, ampliando su poder en las zonas de emergencia y en la actividad contrasubversiva. Con ello, se amplió la discrecionalidad de las fuerzas del orden, en una evidente disminución de los controles democráticos de sus acciones contrasubversivas. Simultáneamente continuaron las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por diversos agentes estatales, entre ellos el escuadrón de la muerte denominado grupo Colina (Barrios Altos, La Cantuta, etc.) en operaciones desde inicios de los noventa. En efecto, gracias a las amplias atribuciones permitidas por ley, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) empezó a planear y ejecutar operaciones especiales de inteligencia por cuenta propia, utilizando para ello personal de unidades operativas de las FFAA como si fuera personal a su disposición.

Además, la CVR, citada por Pedraglio, señala que “el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 significó el colapso del Estado de derecho y mostró además la debilidad del sistema de partidos” (Pedraglio, 2014, p. 125).

La respuesta internacional fue mayoritariamente contraria al golpe, tal como lo refiere García (2001): “Con las serias advertencias de la Administración estadounidense y la suspensión de su cooperación o con la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Venezuela y Panamá o como la colectiva suspensión de la cooperación por parte de la Unión Europea, así como la reacción colectiva de la Organización de Estados Americanos que condenó el golpe, amenazó con sanciones y envió una comisión de observación y negociación al país. Por su parte, tanto el BID como el FMI enviaron ambiguas señales hacia la Administración golpista” (p. 69).

Este rechazo internacional contribuyó a que Fujimori "acordara un plan de retorno a la democracia compuesto por tres etapas: las elecciones de noviembre de 1992 para delegados del Congreso Constituyente (que formarán el CCD encargado de la redacción de la nueva Constitución); las elecciones municipales de junio de 1993 y la votación del referéndum constitucional" (García, 2001, p. 70). Sin embargo, este plan de retorno a la democracia no implicó que el gobierno democratizara el proceso de reconfiguración de los tres poderes ni la democratización del Estado. Así, este plan sirvió principalmente para apaciguar la crítica de los organismos internacionales.

En el ámbito económico el gobierno golpista pudo aplicar con celeridad los lineamientos diseñados por los organismos financieros internacionales. Al respecto García (2001) señala que "mientras tanto, Fujimori ratificó al ministro de Economía y le dio amplias libertades para acelerar el programa acordado con los organismos multilaterales, hecho que neutralizó parcialmente las críticas internacionales" (p. 70).

En este sentido, Degregori (2001) da cuenta de "la vista gorda de la OEA y la ambigüedad de los EEUU, que si bien reprobaban el autogolpe, apoyaban la política económica del régimen, convertido en modelo de fidelidad al cumplimiento de los acuerdos con los organismos financieros internacionales" (p. 47). En resumen, la reacción internacional contraria al golpe se limitó a lo "diplomático" y, por otro lado, en la práctica, se apoyó la celeridad en la aplicación del neoliberalismo.

El golpe fue solo un paso en la consecución de los objetivos del régimen. El siguiente fue la recomposición del poder legislativo y dar una nueva constitución neoliberal. En relación a este proceso, García (2001) señala lo siguiente:

La nueva Constitución fue el instrumento mediante el cual Fujimori intentó recuperar la institucionalidad que él mismo había violado tras el autogolpe. Fue aprobada por el Congreso Constituyente Democrático en el que Fujimori consiguió la mayoría con ayuda de un nuevo movimiento afín al Gobierno, Nueva Mayoría, que proclamaba nuevos perfiles de líderes exentos de ambición política, que se autorreconocían como auténticos defensores y promotores del pueblo', y posteriormente ratificada popularmente por un estrecho margen en un referéndum celebrado el 31 de octubre de 1993 cuya limpieza fue puesta en duda. El proyecto constitucional consagró amplias atribuciones para el Ejecutivo y estableció la reelección presidencial; limitó las funciones del Legislativo, que fue reducido a una sola Cámara. En materia de derechos humanos, además, representó un retroceso en términos del reconocimiento de los tratados internacionales, y redujo las obligaciones del Estado hacia los ciudadanos en sus derechos económicos y sociales (García, 2001, p. 71).

2.3.1.3. El control de instituciones

La concentración del poder y la centralización de decisiones se fueron profundizando desde el inicio el gobierno de Fujimori. Esta tendencia fue desarrollada principalmente por

Vladimiro Montesinos y el organismo que dirigió: el SIN. Producto del golpe de Estado, la vorágine de concentración del poder terminó por consolidar el control de los organismos del Estado y/o a las personas que no estaban alineadas a la política de gobierno. En este sentido, García (2001) señala lo siguiente:

En esa misma noche del 5 de abril, después de que Fujimori trasladase su residencia al Cuartel General del Ejército fueron disueltos el Congreso, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Procuraduría General de la Nación. En los días siguientes, Fujimori destituyó a los miembros de la Corte Suprema y cesó a 150 jueces; depuso a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y a la dirigencia del Banco Central de Reserva. Para reemplazar a estos funcionarios, el Servicio de Inteligencia Nacional proporcionó los nombres de las personas cercanas al Gobierno, dispuestas a «someterse» sin dudas ni murmuraciones, a las órdenes del Ejecutivo. Para impedir que dichas medidas fueran cuestionadas, se modificaron los recursos de amparo y hábeas corpus. Además, los locales partidistas y sindicales fueron ocupados por los militares (García, 2001, p. 69)

El control de las instituciones del Estado se hizo con el objetivo de efectivizar la ejecución de las políticas económicas neoliberales y contrasubversivas. Es decir, buscó que el Estado sea más eficaz en la lucha contrasubversiva y en la aplicación del neoliberalismo. Por esta razón, las FFAA y las políticas económicas fueron las que primero se fortalecieron tras el golpe. "El 5 de abril 1992, las Fuerzas Armadas ocuparon los edificios públicos mientras el presidente Fujimori anunciaba el cierre del Congreso de la República. Durante el autogolpe fueron saqueados los archivos del poder judicial. Al día siguiente el ministro de economía Carlos Boloña Behr anunció la aplicación del conjunto de reformas económicas neoliberales. Mediante el autogolpe se cerró el Congreso y se reformó el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría General de la República y el Poder Electoral; lo anterior permitió llevar a cabo las iniciativas que el gobierno de Fujimori representaba" (Honorio, 2009, p. 2009).

Disuelto el Poder Legislativo, solo quedó el Poder Judicial como contrapeso del Ejecutivo, por esta razón Fujimori elaboró una política de control total del PJ. "Otro gran perjudicado fue el Poder Judicial que perdió totalmente su independencia y autonomía. Tres de los siete miembros del Tribunal Constitucional fueron destituidos, se retiró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se destituyó fiscales y jueces considerados no proclives o enemigos del Gobierno, se creó una planta judicial de jueces interinos y quedaron por fuera de la carrera judicial un 80% de los jueces. El Gobierno argumentó que todas estas medidas estaban destinadas a combatir al grupo Sendero Luminoso y al MRTA" (FIDH, 2008, p. 6).

Vargas (2002) analizando los objetivos de trasfondo y la política general que explica el golpe de Estado y el consecuente control de instituciones, plantea lo siguiente:

*En la segunda mitad de la década (95-2000), la estrategia fujimorista consiste en consolidar las reformas de Estado y la dictadura. Interviniendo para ello, ajustando y dictando leyes en función a sus planes, **las instituciones vitales de la superestructura del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso de la República, Colegios Profesionales y por supuesto intervenir política y militarmente las principales universidades públicas del país, calificado por el gobierno como “reductos del terrorismo”**. La consigna era liquidar estos espacios organizados de protesta y resistencia social que pervivían oponiéndose al gobierno dictatorial y su política neoliberal privatista (Vargas, 2002b).*

Así, para el plan general del régimen fujimorista la disolución del congreso y el control de las instituciones del Estado fue solo un medio; su objetivo era reconfigurar la economía peruana y acabar con la subversión. "La disolución del parlamento, la clausura del poder judicial y de los órganos de control y su reemplazo por cuerpos de funcionarios afines al gobierno, y la criminalización de la oposición permitieron al gobierno Fujimori acelerar el desenvolvimiento de su agenda" (Honorio, 2009, p. 68).

Fujimori, para no ser objeto de mayores críticas y salvaguardar una imagen democrática desarrollo paso a paso un plan de recomposición del Congreso, el cual utilizó para elaborar una nueva Constitución Política. "La cámara legislativa fue restaurada, pero ahora era un Congreso unicameral, donde existía un mayor control por parte del Poder Ejecutivo. De hecho, el partido de Fujimori, Cambio 90-Nueva Mayoría, dominaba fácilmente esa nueva institución, que había convertido al Congreso, según muchos críticos, en una sucursal para el régimen. Este nuevo cuerpo legislativo tuvo la tarea de redactar la nueva Constitución" (Burt, 2006, p. 35).

Es decir, si bien en la forma se recompusieron los tres poderes del Estado, estos, tras el control y ajuste realizado por Fujimori, se habían convertido en brazos del Ejecutivo. Así, el plan de regreso a la legalidad liberal que manda tener tres poderes se había cumplido, pero terminó favoreciendo al mismo régimen fujimorista. Además, la nueva Constitución (1993) terminó por imbuir de mayor legalidad y coherencia a todo el aparato configurado por el gobierno.

2.3.1.4. La represión del sector popular

Controlado el Estado, el régimen dirigido por Fujimori y Montesinos tenía que enfrentar el rechazo de un creciente sector de la población. Esta tarea tuvo que ser asumida sin dudarlo por parte del gobierno ya que estaba en juego la perpetuación del régimen. En este sentido, Tanaka, citado por Hermoza plantea que "la segunda fase del régimen

fujimorista se caracterizó por la construcción de un proyecto autoritario, superada la incertidumbre política tras la derrota estratégica de Sendero Luminoso a partir de 1992" (Hermoza, 2018, p. 16)

Burt (2006), analizando las tácticas represivas aplicadas por el régimen sostiene que existieron dos principales: "Se pueden percibir dos tipos de estrategia en este periodo. Primero, el régimen buscó reafirmar su éxito en el frente contrainsurgente. Por ejemplo, sobredimensionó las capturas de dirigentes senderistas de segundo orden. Esto hizo recordar a los ciudadanos la amenaza latente de los terroristas y cómo el régimen combatió a los insurgentes" (p. 48). "La segunda estrategia desplegada en este periodo fue la de socavar la credibilidad de la oposición al asociarla discursivamente con el terrorismo" (p. 49); asimismo "el régimen continuó jugando a la política con el terror con el objetivo de desacreditar a las fuerzas de la oposición y perpetuarse en el poder. Esto lo hizo insistiendo en que el terrorismo era una amenaza latente, además de vincular las protestas sociales legítimas -como las manifestaciones realizadas por la oposición- con las actividades ilícitas de las organizaciones terroristas" (p. 29)

Vinculando la táctica de estigmatizar a la oposición (población y activistas políticos) y el papel de la televisión, la CVR señala que:

Entre las maniobras desarrolladas, destacó la recurrencia a la acusación o calificación de terroristas, dada por miembros del gobierno a actividades desarrolladas por la oposición o incluso a algunos de sus propios miembros. Desde 1998, ya con un mayor control de los medios de comunicación masivos, sobre todo de los canales de televisión, se aprovecharon una serie de oportunidades. Será frecuente por ejemplo intentar disuadir a los ciudadanos de participar de marchas de protesta circulando rumores acerca de la presencia de elementos senderistas infiltrados en ellas, organizando el reparto supuestos volantes «senderistas» para ello, entre otros.

Utilizando los medios de comunicación controlados como su principal arma, el gobierno recreó la imagen de la protesta social como rezago del «terrorismo» y desorden. De esta manera, polarizaba el espectro político entre el terrorismo, el desorden e inseguridad y la posibilidad que el gobierno ofrecía —la eficacia de la mano dura a cambio de orden y seguridad—. Las movilizaciones de protesta eran presentadas por la televisión adicta al régimen como hechos «terroristas» y no como lo que eran, muestran de oposición política al régimen, que no dejaba otros canales de expresión. Si bien esto se verá mucho más claramente durante la «Marcha de los 4 suyos», había empezado mucho antes, en un trabajo psicosocial de menor escala o proporciones, que incluyó la puesta en marcha de más operaciones especiales de inteligencia —incluyendo espionaje y sabotaje— contra miembros de la oposición. A diferencia de años anteriores en que las operaciones se centraban sobre todo en personajes públicos, en estos años llegarían a estar destinadas a incluso a dirigentes estudiantiles (CVR, 2003, p. 122)

Así como la televisión, los periódicos denominados "chicha" cumplieron el mismo papel. Analizando también el rol de los medios de comunicación, Degregori (2000), citado por García, señala que "con los *talk-shows* y los diarios amarillos como puntas de lanza, el Gobierno desplegó su estrategia política, que tenía tres ejes: a) La propaganda masiva a favor del Gobierno, especialmente a través de avisos del Ministerio de la Presidencia, tanto que para 1999 el dinero gastado por el régimen en publicidad era mucho mayor que el

invertido por la industria cervecera, tradicionalmente la principal anunciadora; b) El desarrollo de una campaña masiva e inédita de difamación, calumnia contra los candidatos de la oposición; c) La reavivación de viejos miedos o la inoculación de otros nuevos: miedo al terrorismo de SL y el MRTA, pero también a las FARC colombianas; miedo a la posibilidad de interrupción de los programas asistenciales; miedos más difusos transmitidos por los *talk-shows*" (García, 2001, p. 74).

Con el control de los medios de comunicación masivos, el gobierno fujimorista podía difundir masivamente y a diario su posición. Este tipo de prensa contribuyó a que la población tenga claro los objetivos, el enfoque del régimen y las consecuencias con las que amenazaba a los que no se alineaban a su política. Así, los miles de casos de violación de DDHH y esta prensa terminaron por inmovilizar a la población en base al miedo.

Temor que estaba fundado debido a que era evidente que las desapariciones y asesinatos eran parte de una política sistemática, como lo prueban los casos La Cantuta, Barrios Altos, Universidad Nacional del Centro del Perú, entre otros. Así, el gobierno rechazaba toda oposición, sea o no subversiva. Existía, pues, el peligro de ser capturados en las marchas de protesta contra el régimen y ser acusado de terrorista, cuestión por la cual se afrontaba un encarcelamiento seguro y, muy probablemente, vejaciones y la consecuente inseguridad familiar.

En este sentido Burt (2011) sostiene que "con frecuencia, los activistas expresaban su repudio hacia las políticas económicas del régimen de Fujimori, hacia sus prácticas autoritarias, así como ante abusos contra los derechos humanos y la manipulación de las organizaciones de base, pero permanecieron renuentes a desafiar públicamente al régimen. Una activista comunitaria, al preguntársele por qué ella y otras personas que compartían su punto de vista no participaron en protestas públicas contra el régimen, respondió inequívocamente: 'Quien habla es terrorista' " (p.318).

Por otra parte, como parte de la política de perpetuación del régimen se aprovechó la ya desplegada estructura de las FFAA en el territorio nacional para así poder reprimir cualquier oposición con mayor efectividad. "La proliferación de bases militares en comunidades rurales y barriadas urbanas otorgó a las Fuerzas Armadas un vasto poder para controlar a los pobres urbanos y rurales. Se desplegaron programas de 'acción cívica' para conquistar los corazones y mentes de la población local, permitiendo al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas supervisen y controlen más fácilmente sus movimientos" (Ibíd., p.336).

El gobierno fujimorista, como muestra de los gravísimos niveles represivos que alcanzó, llegó a estigmatizar incluso a los defensores de los Derechos Humanos al acusarlos de terroristas. "En este contexto, el espacio para la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos básicos (como el debido proceso), se fue contrayendo. En efecto, Fujimori atacó con frecuencia a quienes defendían tales valores catalogándolos como poco menos que servidores del terrorismo" (Ibíd., p. 331).

Pero la represión no fue la única política dirigida a la población. La otra política apuntó a la movilización de la población en función del apoyo al régimen fujimorista. Burt (2011) relacionando ambas políticas sostiene que "en el Perú de Fujimori, de la mano de políticas y estrategias diseñadas para movilizar el respaldo popular, las élites estatales desarrollaron estrategias para penetrar, controlar e inmovilizar a la sociedad civil...Y el uso del miedo y la intimidación por parte del régimen mantuvo a los grupos de oposición desorganizados y a la defensiva y, por ende, incapaces de sentar las bases para desafiar prácticas autoritarias del régimen de Fujimori" (p.318).

La represión fue tan efectiva en un periodo que la incapacidad de la población no solo llevó a la desarticulación organizacional sino hasta la búsqueda de la solución individual. "Tal como Lechner (1992) menciona en su estudio comparativo sobre los regímenes militares del Cono Sur, la instrumentalización del miedo no requiere de represión, tan solo es necesario reforzar la ausencia de alternativas: 'Basta con inducir una sensación de incapacidad personal y colectiva para lograr cualquier influencia efectiva en la esfera pública'. La única alternativa para la gente común en tales situaciones es buscar refugio en la vida privada, contribuyendo así a un proceso de atomización o anomia" (Burt, 2011, p. 332) Y, relacionando la atomización lograda por la represión y el característico individualismo del neoliberalismo, agrega que "el modelo económico neoliberal implementado por el régimen de Fujimori, el cual evadía las explicaciones estructurales de la pobreza y la violencia y, en cambio, enfatizaba la responsabilidad individual, encajó con este proceso de atomización y lo reforzó" (p. 333).

En este sentido, vinculando el papel de los organismos financieros internacionales, el rol del Estado dirigido por Fujimori y su política represiva, Honorio (2009) sostiene una rotunda crítica:

En el caso del Perú, el neoliberalismo se aplicó sobre la base del desmonte de las reglas de la democracia liberal, ejemplo de ello fueron el autogolpe de Estado de 1992, las privatizaciones mediante decretos dictatoriales, la recomposición corrupta de la

institucionalidad, la fraudulenta prolongación del régimen, el vasto genocidio étnico llevado a cabo y el otorgamiento de amnistía a los miles de crímenes cometidos. El inmenso despliegue de violencia evidenció que para los intereses de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales las reglas democráticas, los derechos sociales y las garantías civiles son cuestiones secundarias. El desarrollo del neoliberalismo exigió la implantación de un Estado terrorista que destruyó numerosas organizaciones populares para cumplir con los propósitos de la monopolización transnacional (Honorio, 2009, p.73)

Resumiendo este acápite, consideramos que la represión popular en el segundo gobierno de Fujimori tuvo como un elemento central a los medios de comunicación pues con estos podía influenciar diariamente en la opinión de la población en función a los lineamientos de la política gubernamental. Y el otro elemento central de su represión fue el uso que le dio a la recientemente derrotada subversión. Con estos dos elementos, a su vez, logró desarrollar tres tácticas represivas: a) el despliegue militar -a pesar del fin práctico de la subversión-, b) la movilización de la población en base al miedo creado frente a supuesto rebrote subversivo y, ligado a lo anterior, c) la estigmatización, mediante el calificativo de "terrorista", de la protesta popular y de los políticos opositores.

2.3.2. La política educativa del gobierno de Fujimori

La política educativa de Fujimori, al igual que su política general, es el resultado de la aplicación de la política educativa diseñado e impuesto por los OFIS. Por ello, primero analizaremos esta política.

Como segunda parte de este acápite analizaremos brevemente algunas medidas importantes aplicadas por el régimen fujimorista en la educación básica y superior no universitaria. Esto con el objetivo de comprender cómo los criterios educativos de las OFIS se aplicaron en la Educación en su conjunto y, por ende, de manera sistemática y no de manera aislada o solo en la superior universitaria.

2.3.2.1. La política educativa de las OFIS

Para comprender la política privatista de la universidad, primero debemos analizar la política educativa específica diseñada por los Organismos Financieros Internacionales (OFIS) como parte de su propuesta neoliberal.

A pesar de que en el Consenso de Washington se trazaron políticas para la educación, y estas fueron reforzadas con documentos que posteriormente emitieron el BM y el BID, aun no se consolidaba un modelo, un cuerpo, un sistema de ideas que sustentara las diversas políticas, que las unificara, justificara a todas y vinculara lógicamente. Por ello, la UNESCO conformó una comisión internacional con la misión de sistematizar y sustentar dichas políticas. A partir de entonces se han ido generando una serie de documentos y se ha ido afinando según cada región dicho modelo. Es así que podemos mencionar que son cuatro las políticas educativas promovidas por las OFIS:

1.- Reducir el déficit fiscal: Lo cual coincide con las políticas concertadas en el Consenso de Washington. Esta política está orientada a que en los países del tercer mundo el gasto fiscal se canalice al pago de la deuda externa y en los países superpotencia se cuente con una reserva para el salvataje de las crisis. Las políticas implementadas en función a este objetivo son: 1. Descentralización financiera; 2. Gasto asumido por los “usuarios” del “servicio”.

El objetivo de ambas políticas es la transferencia de la responsabilidad nacional de los costos de la Educación a los individuos y a las comunidades locales, es un tránsito al desentendimiento total del Estado respecto a la financiación de la Educación. Es decir, estamos ante la política de privatización; lo cual apunta al desconocimiento de la Educación

como un derecho fundamental. Además, se plantea el criterio de “autonomía” en relación a que cada institución o comunidad local debe generar recursos propios para su desarrollo.

Y, aplicando su criterio de equidad y la medida de financiación mixta (Banco Mundial), plantean que se debe priorizar la educación inicial y primaria para que sean gratuitas; que se debe cobrar selectivamente en la educación secundaria; y que en la educación superior se debe “diversificar las fuentes de financiamiento” (UNESCO y CEPAL).

2.- Responder positivamente a las necesidades económicas de las OFIS: Pretender formar profesionales no según las necesidades de la sociedad en su conjunto; sino según las “demandas del mercado”, lo cual no es otra cosa que las demandas de los monopolios empresariales transnacionales. En nuestro caso buscan formar “técnicos” con mano de obra barata.

3.- Mercantilización de la educación: Los monopolios, en su búsqueda desesperada de mayores ganancias, transforman en mercancías todo lo que se pueda. Por ello, esta vorágine terminó por incorporar la Educación en el mercado mundial; lo cual supuso el inicio de su comercialización.

Siguiendo la lógica económica, pasaron a constituir la Educación⁵ como un sector económico dentro del cual opera una rama económica. Siendo esto así, la mercantilización de la Educación tiene dos aspectos interdependientes:

3.1. General: Tiene como base la concepción por la cual se la considera una mercancía y, por ende, sujeta a todos los criterios y políticas económicas neoliberales. La concreción más general de esto es el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) conducido por la Organización Mundial del Comercio (OMC) –de los cuales el Perú es parte desde enero de 1995. Este AGCS surge del interés de hacer negocio con los servicios hasta ahora poco explotados. Su objetivo declarado es “liberalizar el comercio de servicios” a escala mundial, basándose en principios como el de “acceso a mercados” que establece que “la financiación pública es un elemento de distorsión de los mercados” que se debe evitar.

Al respecto, Sanz (2006) señala lo siguiente:

⁵ En esta tesis, cuando nos referimos a Educación, nos referimos a la concepción predominante en la sociedad actual: la transmisión de conocimientos dado por un centro educativo, sea público o privado. No estamos utilizando la concepción que sostiene que la Educación no solo se da en un centro educativo sino también mediante los medios de comunicación, el arte, etc.; es decir, en todo lugar y a toda hora.

En un contexto de necesidades y demandas de conocimiento tan amplias, en el que los recursos públicos no son suficientes para abastecerlas, solamente caben dos salidas, o se aumenta la fiscalidad para que los Estados puedan afrontar dichos gastos o se encarga al mercado que satisfaga esta demanda. En una política mundial en donde domina la política del máximo al mercado no parece extraño que la educación y especialmente la educación superior quede integrada en el mercado internacional. Las negociaciones llevadas a cabo por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para liberalizar el comercio de los servicios favorecen esta tendencia y es fruto al mismo tiempo de sus pretensiones. Desde 1995, El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) ha cambiado las perspectivas de la enseñanza superior como servicio. La formación, la capacitación superior y el conocimiento, en términos generales, constituyen desde entonces un mercado formal de orden internacional y determinados gobiernos ya han suscrito compromisos de liberalización en materia de servicios educativos o están invitando a las distintas empresas de formación a que se instalen en sus países.

En el documento *La organización mundial del comercio y la Educación Superior* de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2005) de España señala en el mismo sentido lo siguiente:

El capital humano constituye un factor de producción básico para la actividad económica que, como otros factores productivos constituidos por el sector servicios (transporte, telecomunicaciones, servicios tecnológicos) constituye la base para que la actividad empresarial se desarrolle en condiciones de competitividad adecuadas. La educación también adquiere gran relevancia como factor para atraer inversión. Su desarrollo es, por tanto, de una gran relevancia, debiendo conocerse cómo se encuadra el sector de la educación en las negociaciones de servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

3.2. Particular: Una vez concebida y tratada como cualquier mercancía o servicio, se procedió a organizar su mercantilización de acuerdo a su particularidad. Por ejemplo, para el sector industrial, petrolero o farmacéutico también diseñaron particulares “reglas de juego”. Así, en el caso del “sector Educación” diseñaron criterios, estándares y políticas o medidas en función a su sistematización a nivel mundial. Sistematización que sirve, inevitablemente, a los intereses de los monopolios.

Existe un aspecto que está ligado a esta organización económica del “sector Educación”: la orientación brindada a los educandos. Esta orientación, obviamente pro neoliberal, se encuentra desarrollada a profundidad en dichas “reglas de juego”. “Por supuesto, el contenido de la educación deseable está vinculado a las necesidades empresariales en materia de empleo” (Sáez, 2014, p. 3)

Los criterios⁶ centrales diseñados son la calidad, equidad, pertinencia, la eficiencia y la eficacia⁷; todos provenientes, lógicamente, del ámbito empresarial neoliberal. Los estándares son establecidos y medidos por los procesos de licenciamiento y acreditación.

El desarrollo de esta organización mercantil de la Educación en Europa es ilustrativa. En este continente la Mesa Redonda de Empresarios Europeos⁸ (ERT, por sus siglas en inglés) ya en 1989 reclamaba una “mayor influencia de la industria en los programas de estudio” y denunciaba que el sistema educativo europeo “permitía a los estudiantes elegir estudiar materias inútiles para trabajar”. Estas ideas fueron sintetizadas en su libro “Educación para los Europeos: hacia la sociedad del aprendizaje” (1994), “en el que se adopta el concepto de sociedad del aprendizaje, muy próximo a sociedad cognitiva, ya que ambos parten de una misma idea: la educación es una actividad que dura toda la vida. Además el eje central se ubica en las competencias y en los respectivos criterios de evaluación” (Sáez, 2014, p. 3).

A su vez, estas orientaciones planteadas por la ERT fueron asumidas en el *Libro blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y aprender- Hacia la sociedad cognitiva* (1995) elaborado por la Unión Europea a través de su Dirección General de Educación, Formación y Juventud. En el preámbulo de este libro se señala que este “lleva a la práctica el Libro Blanco ‘Crecimiento, competitividad, empleo’” y que es determinante en la competitividad económica.

En este sentido, Sanz (2006) señala lo siguiente:

La Mesa Redonda de los Industriales Europeos (ERT)” que es sin duda alguna la corporación más influyente en toda la política educativa de la Unión Europea, en los informes sobre la educación y la formación en Europa que este importante grupo de industriales comienza a hacer públicos a partir de 1989, incide reiteradamente en la

⁶ En el caso peruano se puede evidenciar su aplicación sistemática en las múltiples leyes del ámbito educativo. A modo de introducción a este tema específico sirve analizar la *Propuesta del glosario de términos básicos de evaluación, acreditación, y certificación del SINEACE*.

⁷ Para el caso de América Latina, estos criterios son desarrollados en el documento elaborado por la UNESCO y la CEPAL: *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad* (1992). Y, en el caso de la universidad peruana, en el documento *La universidad en el Perú: razones para una reforma universitaria* (2006) cuyo precedente directo es el *Diagnostico de la Universidad Peruana: Razones para una nueva reforma universitaria* (2002); ambos elaborados por el MINEDU.

Si bien ya en el gobierno de Fujimori estos criterios se habían puesto en práctica, estos documentos lograron sistematizarlos y, por ello, fueron la base teórica principal de la Ley Universitaria 30220 (2014); ley con la cual estos criterios y sus respectivas medidas finalmente se han puesto en práctica de manera sistemática.

⁸ “Es un poderoso grupo empresarial de la región europea fundado en 1983. Agrupa a 47 empresas monopólicas con presencia en varios países (Nestlé, British Telecom, Renault, Volvo, Siemens, etc.) y su propósito es influir en la política europea. Las empresas que conforman la ERT facturan un monto equivalente al 60% de la producción industrial del continente y tienen 4 millones de trabajadores. El presupuesto de varias de estas empresas es similar al PBI de algunos estados europeos” (Sáez A., 2014).

necesidad de no dejar la formación en las manos exclusivas del mundo de la cultura académica.

En su informe de 1994 sobre educación y formación, decía que se había acabado el tiempo en que los Estados reglamentaban la atribución de diplomas y que era necesario pasar a la "cartilla personal de competencias" destinada a convalidar las competencias adquiridas en el empleo y librada por organismos privados".

En 1995, en una reunión extraordinaria con el G7, (ERT, 1995) esta organización proclama que si la llave de la competitividad de Europa reside en sus niveles de conocimiento y competencia, la responsabilidad de la formación debe en definitiva ser asumida por la industria.

Por otra parte y desde la perspectiva de la comercialización de la enseñanza, la ERT, introduce nuevos planteamientos que conducen al trato comercial de la educación de la misma manera que, desde principios de los 80, Margaret Thatcher venía haciendo con otros servicios públicos como los teléfonos, los ferrocarriles, las compañías aéreas y servicios del agua.

Con respecto a la sistematización, la Unión Europea impulsó desde 1998 la constitución de un "Espacio Europeo de Educación Superior" (EEES) con el objetivo de establecer puentes entre los diferentes sistemas educativos a fin de garantizar de que la movilidad nacional e internacional de los trabajadores no represente contratiempos ineficientes para las empresas. "El EEES es un ámbito de integración y cooperación de los sistemas de educación superior con el objetivo de crear un escenario unificado de niveles de enseñanza en todo el continente que permita la acreditación y movilidad de estudiantes y trabajadores por todo el territorio europeo" (EU-LAC y FLACSO, 2017, p. 240).

2.3.2.2. La política educativa básica y superior no universitaria⁹

En el régimen Fujimorista "las reestructuraciones que se dieron en el campo de la economía y en el Estado en general, debían ir acompañadas igualmente en el campo de la educación que responda a los mismos objetivos, de esa manera contribuir al reforzamiento del sistema vigente" (Rodríguez, 2007, p. 10).

Por consiguiente, para implementar el neoliberalismo en general y la política educativa de las OFIS, en específico, Fujimori dio una serie de normas desde prácticamente el inicio de su régimen. Las más sistematizadas estuvieron dirigidas hacia la Educación básica (primaria y secundaria) y la Educación superior no universitaria: institutos.

Respecto a la "racionalización" del MINEDU:

En 1992, con la R.M. N° 0177-92-ED (28 de febrero), el D.S.E. N° 21-PCM/92 (13 de marzo) y el D.L. 25762 (1° de octubre) reconfiguran la estructura orgánica del MINEDU y reducen el salario de los trabajadores en este ministerio y se da la "Ley orgánica del

⁹ Para desarrollar este apartado nos hemos basado principalmente en el trabajo de investigación "El primer gobierno de Fujimori y la Política Educativa 90-95" (1997) realizado por Roberto García y Amelton Salvador de la UNCP.

MINEDU”, respectivamente. Las tres normas se basan en el criterio de la “racionalización” y tienen el objetivo de reducir el número de trabajadores de este ministerio y su salario para que así el Estado gaste menos y pueda “ahorrar” para pagar la deuda externa, principio insalvable del neoliberalismo. Esta normativa particular del MINEDU se consolidará con el D.L. N° 25957 (7 de diciembre) y el D.L. N° 26003 (26 de diciembre) que establece el porcentaje máximo de trabajadores de cada entidad pública y el “programa de incentivos para la ‘renuncia voluntaria’”, respectivamente. Además, con el D.L. N° 26359 (23 de setiembre de 1994) el MINEDU estuvo facultado para contratar personal de servicio con mínimos derechos, lo cual eliminaba la estabilidad laboral.

Respecto a la Educación Básica:

El 5 de noviembre de 1991 se da el **primer intento de privatización educativa** al emitirse el DL N°699, que promovió la concesión o “cesión en uso” de los colegios estatales a promotores no estatales para su administración. Con esto aparecía por primera vez la figura de estudiantes pagantes. Este DL se derogó gracias al rechazo del SUTEP y la población.

En el segundo semestre de 1992, se da la **segunda intentona privatista** que ahora se buscaba concretizar mediante la “municipalización”. Sobre la preparación de esta política García y Salvador (1997) señalan:

Jaime Yoshiyama es quien dirige y contrata un cursillo de 15 mil dólares en el ILD del asesor de Carlos Boloña. El 16 de julio viajan a Chile Varillas, Jorge Castillo, Jerry Espino y Carlos Montero a recibir clases de ultraliberalismo en educación. “El ministro A. Varillas recibe un reciclaje acelerado sobre el modelo chileno en el instituto de Hernan Buchi, el ministro de economía de Pinochet, fue un viaje secreto y provechoso, pero se trata de dos realidades distintas” (Caretas 6/8/92 p. 19). “Varillas se pudo enterar allí de todos los detalles del modelo chileno y al parecer por lo enunciado se dispuso a tomar dicho modelo al estilo de calco y copia sin pretensiones de creación heroica” (Ibíd., p. 18) y entre los detalles generales esta la instrumentación para el gran cambio con cuatro etapas: 1. Preparación del traspaso, a cargo de un grupo de trabajo. 2. Ejecución del traspaso, sacando a docentes. 3. Dar la ley para la libertad de la enseñanza. 4. Aplicar el nuevo sistema educativo.

Este segundo intento de privatización se concreta en los Decretos Leyes N° 26011, 26012, 26013 emitidos el 7 de diciembre de 1992. El DL 26011 (“Ley de participación comunal en la gestión y administración educativa”) manda que de las funciones administrativas de los centros educativos ya no se ocupen las USEs (ahora UGEL) ni las Direcciones Departamentales de Educación sino las COMUNED (Consejos Municipales de Educación). Esta transferencia formaba parte de la táctica del progresivo abandono de la Educación básica por parte del Estado. El DL 26012 (“Ley de la financiación de la educación”) Establecía la forma de financiamiento de las COMUNED, cuyo criterio sería el

número de estudiantes. Además, establecía que cada COMUNED podía generarse recursos, los cuales, en última instancia provendrían del bolsillo de los padres de familia. El DL 26013, complementando el aspecto administrativo y económico de los DL anteriores, establecía mecanismos para “mejorar” los aspectos cognitivos y académicos. Finalmente, el 26 de mayo de 1994 se derogaron los tres D.L. (26011, 26012 y 26013) debido a oposición del pueblo y a que la propuesta estatal no se había preparado lo suficiente.

Con el D.S. N° 48-94-ED (28 de setiembre del 94) “autorizan a los centros educativos para que realicen actividades destinadas a la obtención de ingresos que les permitan cubrir sus necesidades” con la clara intención de mermar la asignación presupuestaria a los centros educativos como parte del abandono estatal. Esto se empalma con la Ley 26549 “Ley de Centros Educativos Privados” (2 de diciembre de 1995) y su Reglamento (DS N° 001-96-DE del 2 de febrero del 96) que plantea sistemáticamente estímulos y autonomía para el trabajo en la educación privada. “Con esta norma ahora cualquier persona puede tener un centro educativo con fines de lucro, a esto también apoya la ley del impuesto a la renta que dice ‘...no son sujetos pasivos del impuesto las universidades y los centros educativos y culturales’”; a esto se suma la libertad axiológica que obtienen al decidir qué cursos priorizar y cuáles dejar de lado.

Otra política importante que nos permite ver la ligazón entre la política educativa peruana y los organismos financieros internacionales es la creación del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Peruana (MECEP) que desarrolló a su vez el Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD 1995-2001) dirigido al magisterio nacional y el Plan Nacional de Capacitación de la Gestión Educativa (PLANGED 1996) dirigido a los directores de los centros educativos. Estos planes buscaban actualizar a los docentes en función a los cambios en el Diseño Curricular.

El MECEP nació como respuesta al Diagnóstico General de la Educación (1993) realizado por el Banco Mundial y en el cual se identificaron tres problemas principales: *baja calidad, inequidad e ineficiencia*. Este programa fue financiado por el Banco Mundial y se basó en los criterios que este estableció.

Respecto al fomento de los institutos privados:

El D.S. N° 06-93/ED (16 de febrero del 93) simplifica y flexibiliza la normativa para la creación de institutos; la R.M. N° 78-94-ED (3 de marzo del 94) efectiviza la autorización de institutos de institutos y escuelas superiores; el D.S. N° 05-94-ED (6 de marzo del 94) sirve para dar el “Reglamento General de Institutos y Escuelas públicas y privadas”, con el cual se flexibiliza el trámite para su funcionamiento. Esta norma es más completa que la emitida

en febrero del 93; la R.M. N° 0523-94-ED (9 de marzo del 94), con la que se aprueban los formularios y tarifas; el D.S. N° 14-90-ED (5 de junio del 94) da el “Reglamento de Institutos Superiores Pedagógicos” para así impulsar la desprofesionalización de la carrera pública magisterial en detrimento de la formación pedagógica de nivel universitario.

En esencia, esta normativa consolidó la inversión privada en la educación superior no universitaria (Institutos principalmente) como parte de la privatización de la educación. Esto tenía como contraparte el abandono estatal. Todo esto, finalmente, afectó enormemente la economía de las ya empobrecidas familias peruanas; y no permitió educarse a los jóvenes que no contaban con montos que les permitieran pagar las mensualidades.

La experiencia del Bachillerato¹⁰

El Bachillerato se concibió como un cuarto nivel post básico de dos años de duración que atiende a los jóvenes egresados del cuarto grado de educación secundaria, gratuito en instituciones públicas. Esta política dio a conocer por primera vez en la CADE¹¹ 97 y se anunció oficialmente el 28 de febrero de 1998, la cual fue designada como un nivel intermedio entre el colegio y la universidad y tenía como objetivo según el gobierno “acabar con la desigualdad existente en el ingreso a las universidades, es decir con la ventaja de quienes tienen la capacidad económica para pagar una academia de preparación”; además, añadía el gobierno, que el tiempo en el bachillerato era el mismo que los jóvenes dedicaban a dedicarse para su ingreso a la universidad. Sin embargo, el verdadero objetivo del gobierno era formar masivamente una mano de obra juvenil útil y funcional al modelo neoliberal en marcha; es decir, útil para cubrir las necesidades laborales de las empresas que en ese momento invertían raudamente -principalmente en el ámbito del comercio y servicios. En esto vemos la concreción de las políticas educativas de las OFIS.

Fueron tres los objetivos que se trazó el Bachillerato: 1. Consolidar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de la vida democrática como ciudadanos. 2. Lograr una mejor inserción laboral ya que se recibe una orientación eficiente dentro de los diversos campos laborales y se fortalece las competencias que les permitirán adaptarse flexiblemente a los constantes cambios del mundo laboral y aprovechar sus

¹⁰ Para el desarrollo de este apartado nos hemos basado en el trabajo de investigación “La política educativa peruana y los resultados de los objetivos del bachillerato durante el gobierno de Alberto Fujimori” sustentado por Hinostroza, Moises y Tasta, César en el 2001 en la UNCP. Para mayor información sobre el Bachillerato ver el portal web: <http://bachilleratoperu.galeon.com/bachill.htm> (visitado el 16 de setiembre de 2019).

¹¹ La Conferencia Anual de Empresarios es organizada por el Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE) y agrupa a las grandes empresas privadas (cuyo organismo principal es la CONFIEP) del Perú para coordinar sus acciones económicas en relación a la Educación, Universidad, Minería, etc. La experiencia del Bachillerato también nos permite identificar la directa relación entre intereses empresariales, el neoliberalismo que aplicó ferozmente Fujimori y su política educativa.

posibilidades.3. Consolidar formación para que puedan seguir cualquier tipo de educación superior, al haberse desarrollado las capacidades indispensables para un permanente aprendizaje. Junto a estos objetivos se plantearon cinco áreas en donde desarrollar las competencias: 1.Científico-tecnológico. 2. Comunicación. 3. Economía y gestión empresarial. 4. Desarrollo humano. 5. Desarrollo laboral.

Así, considerando la política neoliberal del gobierno y también la política contrasubversiva, se tenía planeado consolidar en los jóvenes ya no solo una formación técnica, flexible y apta para el “flexible mercado” (inestabilidad laboral) sino también una consciencia que apruebe, defienda y reproduzca voluntariamente el mercado neoliberal y el régimen político que lo sustenta.

2.3.3. La política universitaria en el gobierno de Fujimori

Como parte de la política educativa, la política universitaria también se encausó según los lineamientos neoliberales, en general, y educativos, en específico, de las OFIS. “En el nuevo escenario de la sociedad capitalista globalizada se requiere que la universidad esté en condiciones de articularse coherentemente a la estructura productiva dominada por las empresas transnacionales cuyo objetivo exclusivo y excluyente es el beneficio lucrativo en perjuicio de las necesidades sociales mayoritarias, que debe ser la razón fundamental de la tarea universitaria” (Rodríguez, 2007, p. 10).

Siendo esa su orientación, el gobierno emitió abundantes leyes y decretos para generarse un marco legal capaz de ir concretando tal política: Decretos N° 700 (1991), N° 726 (1991), N° 739 (1991), N° 882 (1996); Leyes N° 26302 (1994), N° 26439 (1995), N° 26457 (1995). En conjunto, estas normas, así como la política universitaria, tuvieron el objetivo de privatizar la universidad peruana, militarizar las universidades como parte de la lucha contrasubversiva, controlar la universidad para reprimir la oposición al régimen y ajustar el contenido académico de la universidad en función al modelo económico impulsado por el régimen; todo lo cual tuvo como trasfondo la vulneración de la autonomía universitaria.

En la presente investigación profundizamos en dos aspectos de esta política universitaria, por estar vinculadas directamente al análisis del régimen de la Comisión Reorganizadora de San Marcos (CORE-SM): la privatización (1990-2000) y la represión. Sobre este segundo aspecto, planteamos que, a su vez, se expresa de dos maneras diferentes, una que se centra en la guerra contrasubversiva en el ámbito universitario (1990-1994) y otra, que le sucede, que se centra en la represión contra el movimiento universitario que se opone al régimen dictatorial en vías de consolidación (1994-2000). Este segundo tipo de represión lo ubicamos dentro de lo que hemos denominado política de control y ajuste, política particular que combina la privatización, la represión pro hegemonía fujimorista y la reestructuración total de la universidad en función de ajustarla cual engranaje a la máquina neoliberal, todo lo cual es dirigido por autoridades universitarias afines a la política del régimen, y, en las universidades con mayor resistencia a este, por Comisiones Reorganizadoras.

2.3.3.1. La política de privatización de la universidad

La privatización de la universidad es parte de la privatización de la Educación que, a su vez, es parte de la política educativa diseñada por las OFIS y ejecutada por el gobierno de Fujimori.

Esta política, como hemos visto en el acápite precedente, fue diseñada por organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CEPAL y la UNESCO. Por ejemplo, en el texto "Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad" (1992) plantean que, como parte de la "diversificación de las fuentes de financiamiento" de la educación, existe "un espacio para el aumento de la contribución del sector privado, ya sea de los hogares o de las empresas" (p. 187).

Diseñado el sistema de privatización de la Educación, Fujimori procedió a implementarla. Esta implementación estuvo envuelta de palabras bien vistas o categorías generales que caracterizaban la demagogia de este gobierno. "La orientación neoliberal del gobierno fujimorista no tuvo necesidad de explicitar su orientación teleológica respecto del tipo de sociedad y de educación, salvo frases sueltas como modernidad, calidad educativa, libertad de enseñanza. La cuestión es que con un programa neoliberal no es posible un proyecto nacional de educación. Las políticas neoliberales en marcha desde 1990 corresponden a las exigencias de las agencias extranjeras (FMI, BM, BID) para subordinar las economías del tercer mundo, privatizarlas y obligarlas a pagar la deuda [externa]" (Morrillo, 2005, p. 4)

La política privatista en el ámbito universitario se da mediante dos tácticas paralelas e interdependientes: 1) promoción de la universidad privada con fines de lucro (ejemplo: DL N° 882), que tuvo como una de sus consecuencias el incremento explosivo de universidades privadas; 2) ahogo presupuestal de la universidad pública y, a la vez, fomentar que esta genere Recursos Directamente Recaudados (RDR) para cubrir el vacío presupuestal dejado por el Estado. A continuación, después de revisar el marco legal que implicó esta política, revisaremos ambas tácticas.

2.3.3.1.1. Marco legal

Bastaron pocas normas dirigidas al ámbito universitario para quebrar su carácter público y gratuito y reconfigurarlo según el molde neoliberal.

Decreto Legislativo N° 739 (1991)

Esta norma se emite teniendo como base la Ley N°25327, mediante la cual el Congreso había delegado facultades al Ejecutivo para *legislar en materia de pacificación nacional, fomento del empleo y crecimiento de la inversión privada*.

El DL N°739, dado el 8 de noviembre de 1991, y manda se modifiquen algunos artículos de la entonces vigente Ley Universitaria N° 23733. Así, plantea la obligatoriedad de la asistencia a clases y la no participación en “*actos que alteren el orden y desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Dichas sanciones son: Amonestación, Suspensión y Separación de la universidad*”. Y en el artículo 2 señala: “*Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo, caso contrario perderán la gratuidad de la enseñanza*” y que “*quienes utilicen los ambientes e instalaciones de la Universidad con fines distintos a los de la enseñanza, administración, bienestar universitarios, serán expulsados de la Universidad y puestos a disposición de la autoridad correspondiente*”.

En relación a la política privatista es necesario resaltar el artículo 2 de este DL, ya que mediante uno de sus elementos se adiciona a la Ley 23733 el condicionamiento de la gratuidad de la educación universitaria (en las universidades públicas). “*Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo, caso contrario perderán la gratuidad de la enseñanza*”.

Analizando el derrotero de esta particular forma de privatizar la universidad pública e incluso evidenciando su profundización en vinculación con una política represiva, tenemos como ejemplo a la Resolución Rectoral N° 3540-CR-95 dado el 19 de setiembre de 1995 por Manuel Paredes Manrique y refrendado por la Comisión de Reorganización. Esta RR señala en su primer inciso lo siguiente: “Establecer que se pierde el derecho a ser alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos al desaprobado un curso en tercera matrícula, cualquiera que sea el creditaje del curso o la condición del alumno”; y, en relación directa con la privatización, su inciso cuarto señala que “**los alumnos que deban hacer matrícula en uno o más cursos en segunda matrícula abonarán un recargo del 100% en el monto total de la matrícula...En el caso de realizar tercera matrícula, el recargo será del 100% sobre el monto de segunda matrícula...**”.

Constitución Política de 1993

Todos los cambios legales que impulsaron la privatización de la Educación se consolidaron una vez promulgada la nueva Constitución, la cual fue elaborada en 1993 y

entró en vigencia el 1 de enero de 1994 (y rige hasta ahora). Así, ahora a nivel constitucional, se quebró la gratuidad de la educación.

Para comprender estos cambios, veamos de manera comparada el artículo referido a la gratuidad de la educación universitaria: Constitución de 1979: **“Art. 25. La educación impartida por el Estado es gratuita en todos sus niveles”**; Constitución de 1993: **“En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho de educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios”**. Aquí ya se condiciona la gratuidad de la educación universitaria pública.

Siguiendo con la revisión de este marco privatista: Art. 15: **“Toda persona, natural o jurídica, tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas y el de transferir la propiedad de éstas, conforme a ley”**, cuestión relacionada a lo planteado en el Art. 58.: **“La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”**. Así se garantiza un marco jurídico, del más alto nivel, favorable a la privatización de la educación, en donde el Estado **“facilita y vigila la libre competencia”** (Art. 61).

La privatización y el ahogo presupuestal por parte del Estado son interdependientes. “Consecuente con la concepción política de que el Estado es un pésimo administrador y que debe eximirse de participar en la economía y en la prestación de servicios básicos, consideran que, al igual que en la economía, el problema educativo también se soluciona con la privatización. Así, se impone la orientación de minimizar e inhabilitar al Estado” (Rodríguez, 2007, p. 10).

El Decreto Legislativo N° 882 de 1996

El 8 de noviembre de 1996 se emite el Decreto Legislativo N° 882: Ley de Promoción de la inversión educativa”. Esta norma es muy importante debido a su alcance -pues abarca a todos los niveles y modalidades de la Educación peruana- y a la sistematización que hace en base a normas anteriores de la política privatista. Para profundizar en su análisis citamos sus primeros artículos:

Artículo 1.- La presente Ley establece condiciones y garantías para promover la inversión en servicios educativos, con la finalidad de contribuir a modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y la cobertura. Sus normas se aplican a todas las Instituciones Educativas Particulares en el territorio nacional, tales como centros y programas educativos particulares, cualquiera que sea su nivel o

*modalidad, institutos y escuelas superiores particulares, **universidades** y escuelas de posgrado particulares y todas las que estén comprendidas bajo el ámbito del Sector Educación. Artículo 2.- Toda persona natural o jurídica tiene el derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades en la educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa. Artículo 3.- El derecho a adquirir y transferir la propiedad sobre las Instituciones Educativas Particulares, se rige por las disposiciones de la Constitución y del derecho común. Conlleva la responsabilidad del propietario en la conducción de la institución y en el logro de los objetivos de la educación. Artículo 4.- Las Instituciones Educativas Particulares, deberán organizarse jurídicamente bajo cualquiera de las formas previstas en el derecho común y en el régimen societario, incluyendo las de asociación civil, fundación, cooperativa, empresa individual de responsabilidad limitada y empresa unipersonal.*

En efecto, es evidente la política de privatización –con fines de lucro- de la Educación, de la cual es parte la Universidad. Con respecto a este DL, Rodríguez (2007) realiza la siguiente crítica:

1. Cualquier persona natural o jurídica, llámese sociedad anónima, cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada, etc., puede promover y conducir cualquier institución educativa, según el art. 2.

2. El Estado abandona su función de otorgar una educación gratuita a la población, otorgando al sector privado todas las facilidades para que pueda crear y conducir cualquier institución educativa en todos sus niveles: inicial, primaria, secundaria, institutos, universitaria e incluso estudios de postgrado.

3. El objetivo de este Decreto Legislativo es proporcionar a la inversión privada todas las garantías, y de esa manera pueda ampliarse la oferta de los servicios educativos, convirtiendo a la educación en una simple mercancía, expuesta a las leyes del mercado; ello explica la sistemática restricción del presupuesto destinado a la educación universitaria en particular.

4. De conformidad al art. 2 de la mencionada norma, las instituciones educativas pasan a tener una finalidad lucrativa, lo que obviamente se obtiene elevando las pensiones y tasas educativas, reduciendo el costo de las planillas remunerativas.

5. A partir de la vigencia de dicho dispositivo legal, todas las instituciones educativas particulares pasan a ser negocios privados con fines de lucro, de tal forma que estas instituciones al convertirse en asociaciones, fundaciones, cooperativas o empresas individuales de responsabilidad limitada o sociedades anónimas, ya no se regirán por ninguna ley universitaria, sino por la ley de su sector al que pertenecen, en consecuencia, a quienes tendrán que rendir cuenta de su gestión ya no es a la Asamblea Nacional de Rectores, sino a INDECOPI y a la SUNAT.

6. Al convertirse la universidad en empresa privada, obviamente el propietario sustituirá los órganos de gobierno universitario y será quien administre su empresa educativa con la lógica del beneficio mercantilista, la universidad habrá dejado de ser la comunidad de docentes, estudiantes y graduados, tal como lo establece la Constitución Política del Estado, desapareciendo los órganos de gobierno, como son la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Consejos de Facultad.

7. En cuanto a los grados y títulos, estos pueden ser otorgados por cualquier institución educativa, con excepción del grado de Bachiller que es privativo de las Universidades. Los grados de Maestro o Doctor, pueden conferirlos las Escuelas de postgrado o las Universidades; cabe destacar que las Escuelas de postgrado pueden crearse independientemente de las Universidades; de esta manera se desnaturaliza completamente el art. 22 de la Ley Universitaria 23733, el que establece los requisitos para poder acceder a los grados académicos y títulos profesionales.

Vargas (2002b) señala que “efectivamente, en plena crisis económica e institucional a la cual fue condenada la universidad pública, se promovió el crecimiento de universidades privadas en oposición a la Ley Universitaria N° 23733” y que “modificó y trastocó la propia Ley Universitaria N° 23733 en lo referente al gobierno universitario, la gratuidad de la enseñanza, la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y el desconocimiento total del cogobierno estudiantil”. En este sentido, Flores (2001), señala lo siguiente:

A través del Decreto Legislativo 882 se crea la Ley de Promoción de Inversión en la Educación. Esta ley introduce, por primera vez en el país, el modelo empresarial en contraposición al modelo asociativo de universidad, según el cual la autonomía de que gozaba la comunidad universitaria como un todo frente a otros poderes sociales, y la libertad de cátedra de que estaban investidos los docentes, desaparecen para ellos y se desplazan hacia los propietarios de dicha institución quienes por propia disposición de la ley rigen sus comportamientos en concordancia con la ley económica de la máxima ganancia... implica la cancelación de la democracia en la universitaria (p. 9).

Además, Flores (2001) con respecto a la repercusión del DL 882 en el gobierno de la universidad señala que “a partir de aquí las autoridades no son más elegidas por la comunidad universitaria sino designadas por el o los propietarios quienes tienen, por supuesto, la potestad de despedir en cualquier momento a la autoridad” (p.12); “la ideología de los propietarios, condicionada a sus intereses económicos, será el cartabón [plantilla] al que deberá ceñirse la comunidad de maestros y alumnos” (p.14); y concluye sosteniendo que “el DL 882 establece un régimen de dictadura al interior de la universidad, de guante blanco probablemente, pero dictadura al fin y al cabo” (p. 13).

Otro aspecto importante de este DL es el tratamiento dado a las instituciones privadas en el ámbito tributario pues estas eran favorecidas por el Estado; por ejemplo, en cuanto a la reinversión, el Art. 13 señala que "las Instituciones Educativas Particulares, que reviertan total o parcialmente su renta reinvertible en sí mismas o en otras Instituciones Educativas Particulares, constituidas en el país, tendrán derecho a un crédito tributario por reinversión equivalente al 30% del monto reinvertido". Esto evidencia la profundidad y el carácter sistémico de la política de privatización de la Educación.

En el mismo sentido Mejía (2017) señala que "el predominio de la universidad empresa se viene consolidando en el Perú desde 1996 por la dación del Decreto Legislativo 882 como parte de las políticas neoliberales impulsadas por el régimen fujimorista" (Mejía, 2017, p. 208). En este mismo sentido podemos concluir que el DL 882 así como las demás normas privatistas, por ser parte de la política universitaria, terminaron por mellar los principios democráticos (autonomía, gratuidad, cogobierno, libertades académicas y políticas) de la universidad peruana y, por ende, de la universidad pública, al verse ésta obligada a "competir en el mercado" para así sobrevivir el déficit presupuestal. Es decir, el proceso de privatización contribuye a socavar los principios democráticos de la universidad pública.

2.3.3.1.2. Fomento de la universidad privada con fines de lucro

Uno de los componentes en la política de privatización de la universidad peruana es el fomento de la universidad privada¹². Este fomento se normó principalmente en el DL 882 y significó la flexibilización de los requisitos requeridos y en la importante ayuda en términos tributarios y financieros que el Estado le dio a los privados que invirtieron en la creación de universidades con fines de lucro.

Al respecto, la Oficina de Coordinación Universitaria (órgano dependiente de MINEDU) emitió en su informe sobre la situación universitaria (2006) señala que "la promulgación del Decreto Legislativo N° 882 (1996), llamada 'Ley de promoción de la inversión en la educación', legalizó la tendencia ya manifiesta en la mayoría de universidades privadas de tipo asociativo a la apropiación privada de los excedentes con

¹² En el caso de América Latina, Saenz (2006) señala: *Un estudio reciente sobre educación terciaria en América Latina y el Caribe reveló que la acelerada expansión de la tasa de matrícula y la mayor diversificación institucional de la región no tuvieron su origen en esfuerzos del Estado sino que, más bien, han surgido como respuesta del sector privado a la creciente demanda social y a los cambios ocurridos en el mercado del trabajo (BID, 1999). Muchos países de la región han presenciado el impresionante auge de las instituciones de educación terciaria privadas en los últimos quince años pasados. En Brasil el 71% de la matrícula en educación superior pertenece a centros privados. En la República Dominicana y El Salvador la tasa de matrícula estudiantil en instituciones terciarias del sector privado subió aproximadamente de 25% en 1970 a cerca de 70% en 1996 (García Guadilla, 1996).*

finés de lucro, por parte de pequeños núcleos de directivos con pleno control de la institución. Desde entonces ha ocurrido una proliferación de universidades presididas por la lógica de la acumulación privada de capital, la mayor parte de las cuales, acogándose a dicho dispositivo legal posee propietarios privados” (MINEDU, 2006, p. 60)

Como consecuencia de este fomento se dio un incremento vertiginoso de las universidades privadas. Al respecto tenemos el siguiente cuadro:

Crecimiento del número de universidades públicas y privadas					
Creación de nuevas universidades	Públicas	Privadas	En Lima	En provincias	Total
Hasta 1960	8	1	4	5	9
1961-1965	10	7	8	9	17
1966-1970	3	2	2	3	5
1971-1975	1	0	0	1	1
1976-1980	3	0	0	3	3
1981-1985	2	9	1	10	11
1985-1990	1	4	1	4	5
1990-2000	5	16	9	12	21
Total en 2001	33	39	25	47	72

Fuente: Grade (1990: 25) y ANR (Dirección de Estadística e Informática). Elaboración CVR (2003).

Analizando históricamente la relación entre el número de estudiantes y el número de universidades, el informe arriba citado señala que “en 1980 existían en el Perú 35 universidades, 25 públicas y 10 privadas, con un total de 257,220 alumnos, correspondiendo 183,317 a las públicas y 73,903 a las privadas; es decir, existía un claro predominio, en magnitud, de la universidad pública sobre la privada. En 1994 el número de universidades se equilibró: 28 públicas y 28 privadas. Con la creación y acción del CONAFU las universidades privadas superaron en número a las públicas. En dos décadas prácticamente se duplicó el número de universidades y de alumnos” (MINEDU, 2006, p. 17). Y, remontándonos un poco más atrás, Ribeiro (2010) citado por Mejía (2017) señala que “hasta 1950 solo existían 5 universidades, 4 estatales y 1 privada, con alrededor de 20 000 estudiantes; en 1970 se contaba con 34 universidades, 20 de ellas estatales y 111 572 estudiantes” (p. 202).

Y, analizando el porcentaje de crecimiento de las universidades en el Perú, concluye de la siguiente manera: “Así pues, en solamente cinco décadas, hasta la fecha [2006], las

universidades en el Perú pasaron de ser 6 a 85, lo cual significa un aumento de [1416%]. Las universidades públicas pasaron de ser 5 a 35, aumentando así en 700%, mientras **las universidades privadas aumentaron de 1 a 50, lo cual significa un crecimiento de 5000%**. La población estudiantil pasó de 30,102 en 1960 (no hay información anterior disponible) a 504,767 en el año 2003, habiendo aumentado en un 1,672%" (MINEDU, 2006, p. 59)

Entre 1995, año de su creación, y el 2000, CONAFU autorizó el funcionamiento de 18 universidades privadas y 3 públicas. Para el 2006 eran ya 35 públicas y 50 privadas y, actualmente (2020), existen 51 universidades públicas y 92 universidades privadas (entre asociativas y societarias).

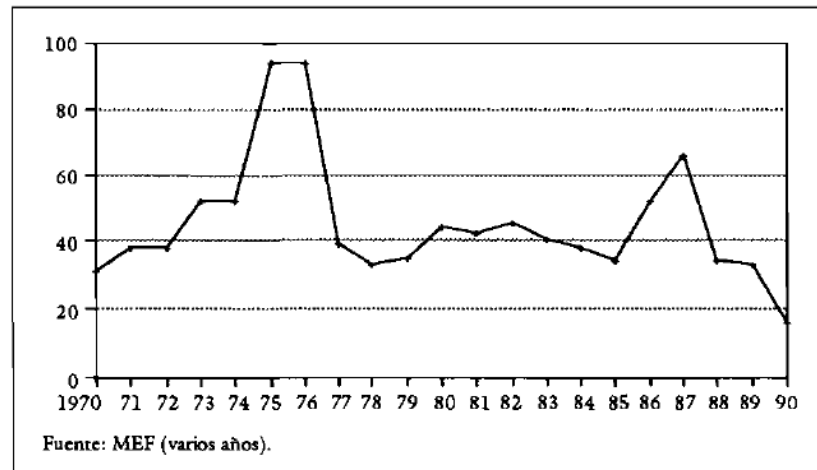
Así, el fomento de la universidad privada (con fines de lucro) en el periodo 1995-2000 significó el crecimiento inmenso de este tipo de universidades, lo cual, a su vez, trastocó la universidad peruana. Este incremento, sumado a la privatización de la universidad pública, expresan la magnitud y nocividad de la política privatista de la universidad. En este sentido, Mejía (2017) sostiene que "la expansión de la universidad peruana desde la segunda mitad del siglo XX está llevando a la hegemonía del neoliberalismo en la educación superior. En realidad, las políticas neoliberales denotan la voluntad de desarrollar un mercado universitario donde predominen la privatización e inversión de capital y las preferencias de la riqueza mercantil".

2.3.3.1.3. La privatización de la universidad pública

Los textos básicos en cuanto a los datos estadísticos para analizar este acápite son el Informe elaborado por la Oficina de Coordinación Universitaria (OCU) del MINEDU: "La universidad en el Perú" (2006) y el artículo "Financiamiento de las universidades públicas en el Perú: respuestas a la crisis y al ajuste académico" editado por GRADE (1993).

Este artículo de GRADE ya da cuenta en 1993 del proceso de privatización de la universidad pública. Señala que esta implica una tendencia histórica en el que el presupuesto asignado por el Estado declina, como se observa en el siguiente gráfico:

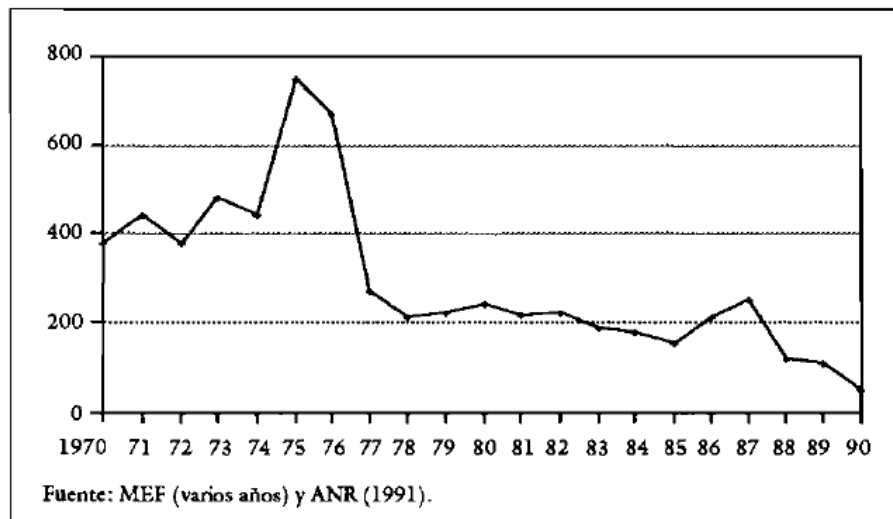
Gasto total en universidades públicas (en billones de intis de 1990)⁷



Fuente: GRADE, 1993

En este sentido, complementa GRADE (1993) que “mientras que en 1970 el gasto promedio anual por cada estudiante de universidad pública fue equivalente a 380 millones de intis de 1990, los gastos por alumno en 1990 sólo sumaron 54.17 millones de intis. Convirtiendo estas cifras a dólares constantes de 1990, con fines comparativos y para poder resaltar lo magro de esta última cantidad, la caída fue de 1,455 a 262.46 por alumno, monto que probablemente ha continuado reduciéndose” (GRADE, 1993, p. 14). Adjuntamos la tabla que elaboró al respecto:

Gasto por alumno en universidades públicas (en millones de intis de 1990)



Fuente: GRADE, 1993

La CVR (2003), analizando también dicha declinación contribuye con esta tabla:

CRECIMIENTO DEL ALUMNADO EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DECRECIMIENTO DEL PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO INVERTIDO EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO: 1965-1980

Año	Número de alumnos en universidades públicas	% del Presupuesto Nacional invertido en el sistema universitario
1960	27,040	6.0
1965	54,170	4,8
1970	81,486	3,4
1975	127,819	2,3
1980	183,317	1,9

Fuente: Asamblea Nacional de Rectores. Citado en CVR (2003)

Así, GRADE (1993) había identificado ya entonces un proceso de privatización de la universidad pública que explicaba de la siguiente manera:

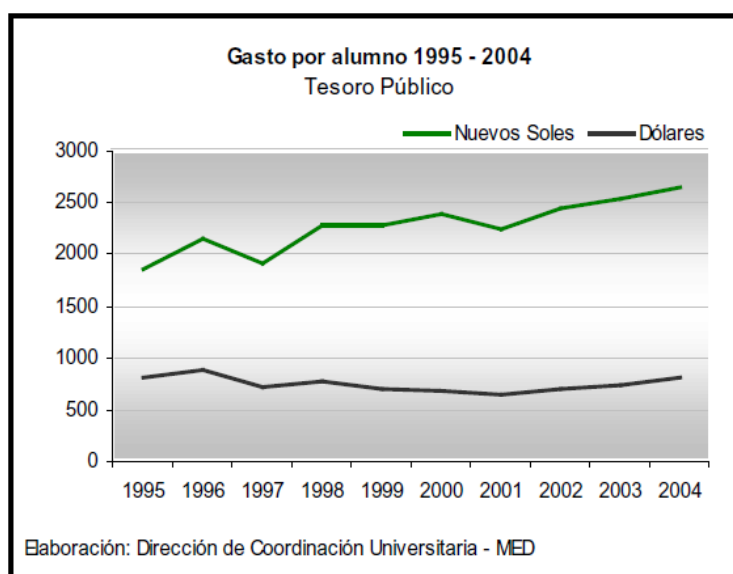
Ante la escasa probabilidad de un aumento real en las transferencias del Tesoro Público, las universidades estatales se han visto inducidas a buscar salidas de emergencia a la asfixia financiera que las ha colocado ante un no muy lejano peligro de cierre (GRADE, 1993, p. 10).

Además, señala que este proceso “de «privatización» de la educación universitaria en el Perú resulta así una tendencia que se hace marcada durante los años ochenta” y que lo que caracteriza a esta tendencia “no es sólo un mero cambio en el sector (público o privado) que domina la oferta educativa. La «privatización» también emerge bajo la forma de una penetración gradual de criterios de mercado en el manejo de los recursos en las universidades públicas” (p. 13). En este sentido, concluye que las universidades públicas estaban encaminadas en imitar a las universidades privadas. Sin embargo, GRADE (1993) lejos de rechazar este proceso de privatización planteo, siguiendo los criterios y medidas de las OFIS, que las universidades públicas debían consolidar la recaudación de recursos propios.

Al respecto Rodríguez (2007) señala que “en el contexto de una sociedad mundializada, en la que domina la ideología neoliberal, la Universidad tiende hacia una pérdida de la autonomía universitaria, reducción del presupuesto, presionando a las autoridades universitarias a elevar las tasas educativas y mercantilizar ciertos programas educativos”; sin embargo, en el caso peruano, aquella presión a las autoridades, en la abrumadora mayoría de las universidades públicas, no fue necesaria ya que nuestras autoridades, como en el caso de la UNMSM, fueron afines a la privatización.

El segundo texto base, MINEDU (2006), parte por una revisión general del % del PBI que destinan los países latinoamericanos para la Educación y concluye que el Perú se encuentra rezagado: el promedio de A.L. es del 4% y el Perú hace décadas destina menos del 3%. Y especificando este análisis del caso peruano señalan que el presupuesto público destinado a la Educación Superior fue solo del 0,71% del PBI en el 2002.

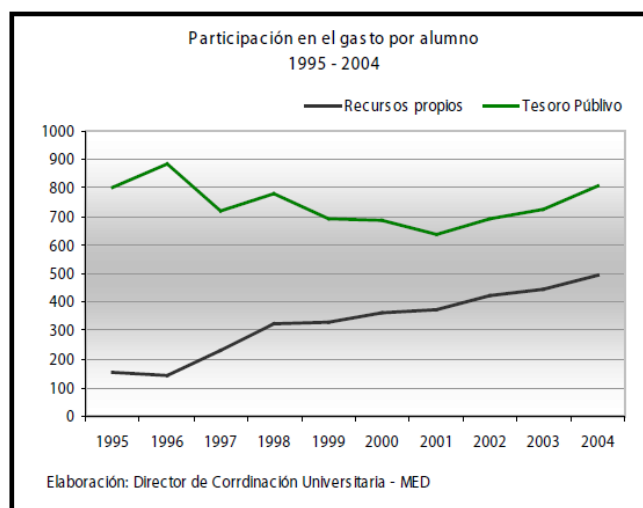
Siguiendo este análisis señalan que “la inversión estatal por alumno en las universidades públicas ha sufrido un deterioro relativo en los últimos años, situando al Perú en niveles muy inferiores a otros países de la región” y, en comparación con la OECD, “nuestra inversión debe considerarse extremadamente baja”. Así, respecto al quinquenio que nos interesa, dan cuenta de que el gasto por estudiante en 1995 equivale a \$ 806 dólares, mientras que en el año 2001 equivale a \$ 638 dólares (p.104); declive que se puede apreciar en el siguiente gráfico:



Fuente: MINEDU, 2006

Seguidamente, comparando la participación del Estado y la Universidad –en base a sus RDR- en el gasto por estudiante, señala que en el año 1995, de \$ 955 dólares de gasto, el tesoro público participó con \$ 802 dólares y la universidad con \$ 153 de recursos directamente recaudados; y en el año 2001, de \$1,013 dólares de gasto, el tesoro público participó con \$ 638 dólares y las universidades con \$ 375 dólares¹³. Este dato es importante para descartar cualquier hipótesis que sostenga que el incremento del monto de recursos ordinarios asignados significó un incremento real del presupuesto universitario.

¹³ En términos porcentuales, esto significa que de 1995 a 2001, el Estado ha disminuido su participación al pasar del 84% al 63%, mientras que la universidad pública ha incrementado su participación al pasar de 16% a 37%.

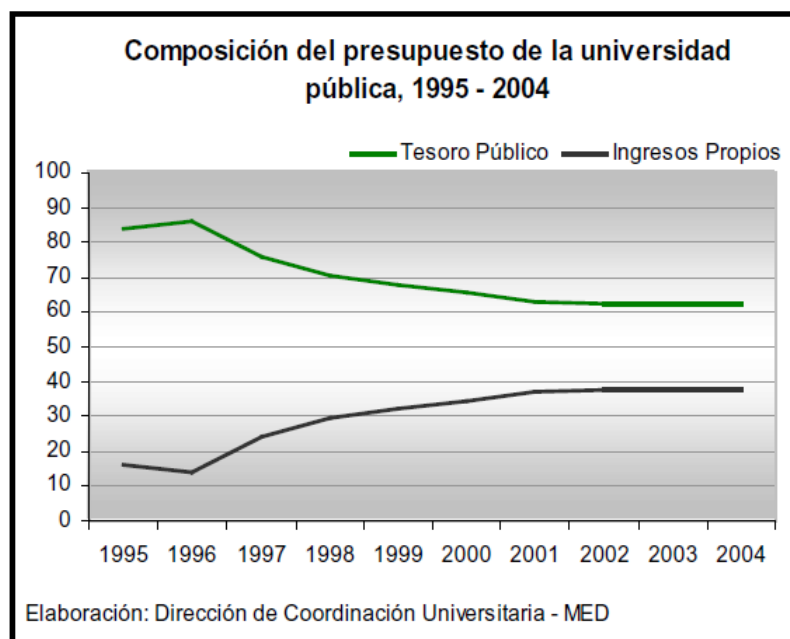


Fuente: MINEDU, 2006

Al respecto García y Salvador (1997), señalan que “Trahtemberg en su texto ‘Educación Peruana: entre la economía, la política y la educación’ (IPAE 93) menciona ‘a pesar de los esfuerzos de las universidades estatales, no se puede ocultar que si en 1970 el estado invirtió 1400 dólares por alumno al año; en 1989 invirtió 360 y en 1991 bajó a 100’”. En este sentido, Mejía (2017) afirma que “la privatización de la universidad peruana ocurre no solo como resultado de un marco jurídico, sino principalmente por la disposición expresa del mismo Estado” (p. 203). Y, analizando la repercusión en la universidad estatal, este mismo autor señala que “la merma estatal a la universidad pública es parte del proceso de privatización de los servicios de educación, salud y seguridad propiciado por la globalización neoliberal que se desarrolla desde los años ochenta”.

MINEDU (2006) al analizar la composición del presupuesto de la universidad pública nos presenta datos sumamente esclarecedores:

Para el año 1995, los ingresos provenientes del Tesoro Público constituyeron el 85% del presupuesto de las universidades públicas, mientras los recursos directamente recaudados por ellas representaron el 15%, situación que varía el año 2000 donde los recursos del Tesoro Público descendieron a 70% mientras los RDR ascendieron a 30%. El año 2004 el Tesoro Público aportó el 67% y la universidad 33% respectivamente” (OCU-MINEDU, 2006, p. 106). Esta situación llega a casos alarmantes (considerando el año 2003) como el de la UNI (67% RDR y 33% RO), UNFV (52% RDR y 48% RO) y UNMSM (49% RDR y 51% RO). Al respecto Mejía (2017) afirma que “en las universidades públicas alrededor del 50% del presupuesto tiene su origen en los recursos propios obtenidos del mercado educativo (p. 208).



Fuente: MINEDU, 2006

En consecuencia, el análisis de la evolución del presupuesto destinado a la Universidad Pública expresa que los Recursos Ordinarios (proveniente del tesoro público) tienen una clara tendencia en que va disminuyendo y, por el contrario, los Recursos Directamente Recaudados (proveniente del pago que hacen los estudiantes; por ejemplo en la CEPRE SM) tiene también una clara tendencia ascendente o de constante incremento. Esto lleva a la conclusión de que, siguiendo lo diseñado por los organismos internacionales, son las familias de manera directa, y no el Estado, las que sostienen cada vez más la educación universitaria de sus hijos.

Esta realidad es determinante en la confirmación de nuestra tesis de la progresiva privatización de la UNMSM. En este sentido Morrillo (2005) señala que “la privatización de la educación apareció como planteamiento orientado a reducir la responsabilidad del Estado de brindar los servicios esenciales a la población como lo es la educación en el marco del desarrollo humano. Informes del Banco Mundial revelan que las familias han aportado el 46% del gasto en educación. La educación ha sido entendida como empresa en la que los sujetos de la educación son considerados insumos orientados a la rentabilidad y no al desarrollo humano” (p. 6).

Así, en base a estos sólidos datos y argumentos, sostenemos que el proceso de privatización del sostenimiento económico de la universidad pública o simplemente la privatización de la universidad pública tiene su raíz u origen en el abandono o ahogo presupuestal a la que fue sometida por parte del Estado; abandono que, a su vez, deviene de la política de privatización de la universidad peruana que éste desarrolló.

2.3.3.1.4. Privatización y elitización

Con el advenimiento del neoliberalismo desarrollado a profundidad por Fujimori, la sociedad peruana y, específicamente, su juventud, vio cambiada su composición. La clase media empobrecida se vio obligada a matricular a sus hijos en universidades públicas y ya no privadas; y las clases populares, al ser más golpeadas aún, ya no pudieron sostener a sus hijos en la universidad pública; y aquellos estudiantes que trabajaban para educarse tampoco pudieron seguir costeándose los cada vez más altos costos de la universidad pública. Así, se produjo el cambio de la composición social de las universidades públicas.

En otras palabras, la composición social de las universidades públicas inicia así su elitización; se desaloja masivamente a los sectores populares de San Marcos. Un aspecto relacionado a esto es que con este desalojo se van los más proclives a radicalizar su actividad política en la universidad. De ello deviene que la posición política mayoritaria dentro de San Marcos ya no es la de los 70 u 80s sino se caracteriza por el individualismo y pragmatismo al buscar un rápido ascenso social sin preocuparse por lo social o político; esta actitud política favoreció las políticas del régimen fujimorista (Vargas, 2002b)

Para analizar la relación entre crisis económica y composición social, Yalle (2008) utiliza la categoría de "movilidad social descendiente". Así, señala que esta tiene su raíz en la crisis económica y el viraje hacia el neoliberalismo a ella ligada, las cuales causaron que los hijos de las clases medias ya no puedan pagar universidades o centros superiores particulares, por lo que fue la universidad pública su principal opción de educación superior; en este mismo sentido (decaimiento), los hijos de las clases más empobrecidas que antaño pudieron acceder únicamente a la educación superior mediante la universidad pública y gratuita, en la década de los 90 ya no pueden costear las academias, el examen de admisión y menos los costos por servicios educativos que la universidad pública en proceso de privatización exige, por lo que ya no pueden ingresar ni sostenerse en la universidad pública. Por esta razón se da un cambio en la composición social de las universidades públicas.

Con esta nueva composición social también cambió el carácter político del movimiento estudiantil, pues ya no era propenso a la radicalización como antaño, lo cual fue favorable al plan dictatorial de Fujimori por no representar oposición importante a la instalación de la Comisión Reorganizadora (1995-2000). Esta ligazón entre composición social y carácter político no fue planteada por Yalle; sin embargo, su aporte sobre la elitización es importante.

Otro aporte es el hecho por la revista "Nueva Universidad" (1996). Plantea que la Universidad privada es la que está siendo priorizada y beneficiada de la política neoliberal fujimorista debido a que esta puede costear su modernización con el dinero cobrado a los miles de estudiantes. Y la Universidad pública está siendo abandonada por el Estado, por lo que, para sobrevivir, busca igualar a la Universidad privada mediante la implementación de cobros; política que repercute en **“el despoblamiento de los sectores populares de la universidad”**.

Además, según sostiene esta revista, la Universidad privada está ligada al poder estatal, lo cual no sucede con la pública. En la entrevista al Dr. Germaná, este señala que “se quiere hacer de la universidad una empresa que funcione con los mismos criterios con los que se maneja una empresa capitalista” y que “están cristalizándose dos proyectos principales. De un lado, el de la modernización de la universidad que consiste en subordinarla a las necesidades del mercado, donde una de las consecuencias es la privatización de la educación superior, esto es, la conversión de la educación en una mercancía, lo que acentuará su elitización. De otro, aunque en sentido estricto no se trate de un proyecto, pues constituye un conjunto de intuiciones y atisbos que tienen que ser desarrollados, la propuesta de crear una universidad preocupada por resolver los problemas científicos, tecnológicos y culturales de las grandes mayorías nacionales que el proceso de modernización capitalista excluye de manera inexorable”.

En relación a la tendencia privatista de la universidad peruana y su relación con la elitización, el Dr. Germaná sostiene en dicha revista que: “Al considerar que las universidades deben ser eficientes y competitivas, se está restringiendo la posibilidad de que los estudiantes de las capas medias pobres y de las clases populares accedan a la universidad. La creciente privatización de la universidad estatal no hace sino profundizar las tendencias...: la existencia de universidades elitizadas frente a universidades masificadas, con el agravante que significa que la masificación alcanza a importantes sectores de las capas medias”.

También, dentro de esta revista se encuentra una refutación a la idea que sostiene que el principal problema de la universidad es su masificación; y la hace Fausto Villafrute en su ensayo “Cuestionando la llamada ‘Modernización de la Universidad’”: “Hace unos años se pensaba que un factor determinante del deterioro de la calidad educativa y la crisis de la educación superior era la masificación de la Universidad; hoy, con el proceso de despoblamiento y elitización de la Universidad, se puede decir que la Universidad de élite tampoco resuelve estos problemas. Se percibe que dicha Universidad no cumple con uno

de sus principales objetivos: *seleccionar a los mejores alumnos*. **Hoy vemos que con el encarecimiento de la educación superior, puede acceder a ella quien tiene dinero por más microcéfalo que sea; en cambio, aquel que carece de recursos, por más capacidades que tenga, sigue condenado a tener, a lo más, derecho a una instrucción elemental”.**

En el acápite titulado “La reelitización. Los costos del acceso y el desalojo de los sectores pobres, 1990-2000”. Garfias parte por identificar que en los inicios de los 90 comienza a subir el número de postulantes a SM, el cual había bajado bastante a fines de los 80 debido a la crisis económica y política. Otro aspecto identificado por Garfias es la reducción de la matrícula causada por “el régimen fujimorista, que promovió la conformación de universidades privadas (...) los cuales terminaron absorbiendo la demanda de un vasto sector de clases medias y bajas que no lograron cupos en las universidades públicas y que no tenían los recursos económicos suficientes para solventar sus estudios en las universidades privadas de mayor antigüedad y prestigio por ser estas sumamente caras”. Lo planteado aquí por Garfias es consecuencia de la política de privatización de la universidad que desarrolló Fujimori, la cual tiene como segundo aspecto importante la “diversificación de fuentes de ingreso” que no es más que la implementación de cobros a los estudiantes de las universidades públicas (Recursos Directamente Recaudados).

Concluye Garfias el análisis de este tercer momento planteando que “la composición social de los estudiantes de San Marcos viró en los años noventa de popular a clase media”, clase media que tiene una característica peculiar: son la primera generación de hijos de los provincianos que llegaron a Lima en los setenta. **“La conclusión de este estudio es que las desigualdades estructurales de origen de los jóvenes postulantes fueron fundamentales en la definición del carácter de la expansión de la matrícula universitaria, y en la de la naturaleza misma de la universidad pública en el Perú de la segunda mitad del siglo XX. Estas desigualdades fueron determinantes en las probabilidades de acceso, la elección de las carreras y el desempeño académico de los estudiantes; en resumen, jugaron un papel central en la trayectoria de los jóvenes universitarios”** (p, 154).

2.3.3.1.5. Críticas a la privatización de la universidad

En relación la normativa privatista, Vargas señala que “la pretendida modernización fujimorista –vía decretos de urgencia N° 723, 730 y 739- buscaba reorientar la universidad según las necesidades del capital, del nuevo modelo de dominación que se constituyó en el Perú”. Y, parafraseando a Germana, agrega: “Desde este punto de vista se quiere hacer de la universidad una empresa que funcione con los mismos criterios con los que se maneja una empresa capitalista. Este proyecto de modernización de la universidad consiste en subordinarla a las necesidades del mercado, donde una de las consecuencias es la privatización de la educación superior pública, esto es, la conversión de la educación en una mercancía –para el lucro personal- lo que acentuará su elitización” (Vargas, 2002b, p. 21).

Además, relacionando la estigmatización de las universidades públicas y la privatización de la universidad peruana, Vargas plantea que la difusión de la percepción de la Universidad pública como reductos de terroristas impacto positivamente en la promoción de la Universidad privada; es decir, en la privatización.

Morrillo, en relación a la privatización de la educación plantea que “la educación es concebida como una mercancía sujeta al libre juego de la oferta y de la demanda en el mercado, cuyo propósito final es la obtención de ganancia. En esta categoría se ubica a los materiales educativos, el uso de la infraestructura educativa, la orientación de los contenidos curriculares y los mismos sujetos de la educación (profesores y alumnos)” (Morrillo, 2005, p.5).

Siendo más específicos en la crítica, en relación a la UNE, en el análisis que realiza el TIP sobre la aplicación del neoliberalismo en La Cantuta, dividen en dos quinquenios la década del 90. A la primera parte (90-95) la califican como **“un proceso de privatización militarizado, con genocidio [siendo el crimen de La Cantuta 1992 lo más representativo], para destruir la heroica resistencia del movimiento democrático a la aplicación de esos planes, un neoliberalismo a sangre y fuego”**. El análisis del segundo quinquenio (95-2000) lo subdividen en cuatro apartados: 1) Despidos masivos; 2) Mediocridad académica; 3) La Cantuta como “botín de guerra” y 4) Plan de destruir la universidad pública por universidad de “élites”.

Para esta parte, nos sirve lo que plantean en el punto 4, pues allí se critica la postura de Manuel Burga en lo referente a incrementar los “‘recursos propios’, eximiendo la responsabilidad del Estado en detrimento del pueblo en la universidad”; además critican a

Sota Nadal por pretender hacer de la universidad un “modelo industrial competitivo” o una “universidad empresa”. Finalmente se critica al expresidente de la ANR Francisco Delgado de la Flor quien plantea que “‘no pagar no es ético’, y que el Estado debe destinar las rentas sólo a ‘carreras productivas’ y no a las carreras de ‘tiza y saliva’ y que en estos últimos sean los propios estudiantes quienes solventen la carrera de su preferencia” (TIP, 2007, p. 69)

En relación al caso específico de la UNMSM, la Comisión de la Verdad de San Marcos propone que la universidad no debería recibir solo rentas por parte del Estado sino un porcentaje del Presupuesto de la República “de tal manera que cuando los ingresos nacionales aumenten lo hagan proporcionalmente para la asignación Universitaria, y no asistamos al deprimente panorama de insistir rogatoriamente por el aumento de rentas, para obtener como respuesta que la Universidad debe aumentar los ingresos propios, y cuando esto ocurre, es decir se obtiene ingreso propio, entonces en el Presupuesto siguiente la Universidad verá disminuida sus rentas”. Seguidamente señala que la UNMSM no tiene un plan estratégico para incrementar rentas propias y evitar que el Estado disminuya las rentas asignadas. Esta propuesta, si bien tiene el buen objetivo de incrementar las rentas universitarias, también incentiva la generación de Recursos Directamente Recaudados, cuestión que es un aspecto central del proceso de privatización de la universidad.

La revista Nueva Universidad (1996) plantea que la Universidad privada es la que está siendo priorizada y beneficiada con la política neoliberal fujimorista debido a que ésta puede costear su modernización con el dinero cobrado a los miles de estudiantes; por el contrario, la Universidad pública, plantea, está siendo abandonada por el Estado, por lo que, para sobrevivir, busca igualar a la Universidad privada mediante la implementación de cobros, política que repercute en “el despoblamiento de los sectores populares de la universidad”. Además, añaden, la Universidad privada está ligada al poder estatal, lo cual no sucede con la pública.

En la entrevista que esta revista le hace al Dr. Germaná, señala que “se quiere hacer de la universidad una empresa que funcione con los mismos criterios con los que se maneja una empresa capitalista”. En este sentido, continua Germaná: “están cristalizándose dos proyectos principales. De un lado, el de la modernización de la universidad que consiste en subordinarla a las necesidades del mercado, donde una de las consecuencias es la privatización de la educación superior, esto es, la conversión de la educación en una mercancía, lo que acentuará su elitización. De otro, aunque en sentido estricto no se trate

de un proyecto, pues constituye un conjunto de intuiciones y atisbos que tienen que ser desarrollados, la propuesta de crear una universidad preocupada por resolver los problemas científicos, tecnológicos y culturales de las grandes mayorías nacionales que el proceso de modernización capitalista excluye de manera inexorable”.

2.3.3.2. La política represiva

Con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Fujimori agudiza su autoritarismo. Esta etapa se caracteriza porque implicó la mayor concentración del poder en el Ejecutivo y una rigurosa política represiva con el fin de resguardar la ya mermada estabilidad del gobierno.

Es en este marco que se debe comprender la represión que el régimen aplicó en las universidades, la cual no siempre tuvo el mismo carácter ni objetivo en el transcurso del gobierno fujimorista.

2.3.3.2.1. Relación y diferencias con la política contrasubversiva en el ámbito universitario

Cuando nos referimos a la represión fujimorista contra los universitarios, nos imaginamos a los militares en los campus; sin embargo, es importante que aclaremos que dicha permanencia no siempre respondió a los mismos objetivos.

En este sentido, las intervenciones militares a las universidades peruanas, principalmente públicas, fue frecuente desde que se inició la subversión (1980). Posteriormente, esta presencia militar se consolidó en algunas universidades (UNCP, La Cantuta, San Marcos, UNI y Hermilio Valdizán) a partir de mayo de 1991 mediante la instalación de bases militares denominadas por el Estado "Bases de Acción Cívica de la División de Fuerzas Especiales (DIFE)". Estas permanecieron en dichas universidades a pesar de que prácticamente la subversión había sido derrotada (1994) –CVR, 2003; Ponce, 2002; Burt, 2006-, e incluso siguieron allí una vez iniciado el gobierno de las Comisiones Reorganizadoras (1995), llegando a retirarse recién en 1998, cuando se iniciaba la caída del régimen.

Estas intervenciones militares fueron avaladas con el Decreto Legislativo N° 726 (12-XII-91) y la Ley N° 25416 (12-III-92). Paralelamente, para el ámbito de la organización interna de la universidad, específicamente en el ámbito teórico-académico, se dieron los Decretos Legislativos N° 700 Y 739.

El DL 700¹⁴, con su primer artículo mandó que sea el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Educación, quien diseñe el perfil y el currículo en base a los cuales se formen los

¹⁴ En su primer considerando señala que "no existen en el Sistema Educativo vigente objetivos y contenidos educativos orientados a contrarrestar la acción subversiva que viene acentuándose..." y manda en su Art. 1 que "el Ministerio de Educación...debe proponer las características para un nuevo perfil del docente peruano y su consiguiente estructura curricular, que responda a los valores que consagra la Constitución y las Leyes a fin de alcanzar los objetivos de la Educación Nacional. *Las Universidades desarrollarán los mismos programas de formación magisterial formulados por el Ministerio de Educación, adecuando su implementación mediante*

docentes peruanos, vulnerando así la autonomía académica de la universidad. Y, con su segundo artículo mandó que los centros educativos de nivel primario, secundario y terciario (universidades e institutos) cambien o “reajusten” sus programas curriculares en correspondencia con la “pacificación” o, mejor dicho, con la lucha contrasubversiva.

El DL 739¹⁵, teniendo como base la lógica de que cuanto más tiempo un estudiante permanezca en la universidad más probabilidad hay de que se convierta en “terrorista”, da una serie de medidas que presionan al estudiante a dedicarse solo a la asistencia a clases y la aprobación de cursos, lo cual se agravaría en el caso de la UNMSM bajo la CORE-SM al delimitarse un número de años límite de la permanencia en la universidad; todo lo cual, de no cumplirse, conlleva a la expulsión, la pérdida de la gratuidad de la educación, los beneficios dados por el bienestar universitario (comedor y residencia, principalmente) y la imposibilidad de ser representante estudiantil.

Además de estos dos Decretos Legislativo, el Estado emitió el Decreto Legislativo N° 726 el 12 de noviembre de 1991, con el cual, vulnerando nuevamente la autonomía universitaria, generó condiciones para intervenir las universidades con las fuerzas armadas.

Interpretando los motivos de la prórroga de las bases militares desde un enfoque más general, la CVR plantea que el gobierno de Fujimori extendió el despliegue de las FFAA en todo el país como parte del uso político del “terrorismo” y con el objetivo de consolidar su régimen. A esto la CVR denomina “**contrasubversión sin subversión**”. Al respecto, en el capítulo “La década de los noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori” sostiene lo siguiente:

Lejos de revertirse, el proceso de corrupción normativa continuará el resto de la década, con el objetivo de asegurar la perpetuación del régimen. Para ello, el gobierno utilizará, con fines electorales y de control político, la estructura militar desplegada con pretexto de la contrasubversión, en un contexto en el que la subversión se replegaba. Explotará mediáticamente, con fines de acumulación política, las últimas acciones de gran impacto de la guerra interna que concluyeron en éxitos, al tiempo que manipulaba los miedos de la población con la amenaza del «terrorismo». Así, las operaciones antisubversivas dejaron de ser un medio para capturar líderes subversivos y terminar finalmente con las acciones del PCP-SL y del MRTA, para convertirse en un medio de propaganda para el gobierno, en el mejor de los casos, y en una cortina de humo, en el peor, tapando los excesos y los delitos que se denunciaban cada vez con más frecuencia. Esto fue posible en gran medida por el progresivo y casi total control de medios de comunicación masivos, comprados con el dinero del Estado (CVR, 2003, p. 61).

A pesar del evidente declive en las acciones subversivas, resaltado por la misma propaganda oficial, el régimen no disminuyó el número de zonas de emergencia sino que mantuvo un esquema de contrasubversión sin subversión. En efecto, hacia mediados de 1995 se

Convenio”. Y su Art. 2, “dispóngase la evaluación de los programas curriculares de todos los niveles y modalidades a fin de reajustarlos orientándolos a los fines de pacificación y restitución de los valores que afiancen la formación integral”.

¹⁵ Su argumento principal señala que “...es obligación del Gobierno cautelar que los alumnos de los Centros de Educación en todos los niveles, y especialmente en las universidades, se dediquen exclusivamente a la formación académica y profesional en armonía con las normas legales vigentes, y evitar que los estudiantes permanezcan indefinidamente en las universidades y se dediquen a actividades relacionadas al terrorismo”.

contabilizaba un aproximado de 68 provincias y 3 distritos del país que aún se encontraban bajo estado de excepción. En agosto de 1994, por ejemplo, cuando Pérez de Cuellar iniciaba su campaña electoral al frente de UPP, el Presidente del Comando Conjunto de las FF.AA. Nicolás Hermoza Ríos aseguraba que el terrorismo estaba vencido en un 95% y que sólo faltaba capturar a algunos cabecillas sin base de apoyo (CVR, 2003, p. 112)

Un argumento más que sustenta que la subversión y la política contrasubversiva ya no existían prácticamente a partir de 1994 es que la misma CVR, al abordar el segundo gobierno de Fujimori, delimita su investigación al **“aprovechamiento político que el gobierno hiciera en estos años de la estructura contrasubversiva desplegada a nivel nacional”** (Ibíd., p.112).

Así, utilizando este método se denominaba “terroristas” también a los opositores a las políticas del gobierno, con el objetivo de estigmatizarlos y reprimirlos con una opinión pública favorable. “Entre las maniobras desarrolladas, destacó la recurrencia a la acusación o calificación de terroristas, dada por miembros del gobierno a actividades desarrolladas por la oposición o incluso a algunos de sus propios miembros” (Ibíd., p. 122)

En este sentido, Vargas (2002b) parafraseando a Valladares (2001) señala lo siguiente: **“Dirigentes tanto sindicales como estudiantiles eran desprestigiados, difamados y otros tantos fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados o desaparecidos. Dentro del discurso oficial, los unos eran denominados ‘políticos tradicionales’ y los otros simplemente ‘terroristas’”**.

En el caso universitario, Ponce (2002) señala que:

La siniestra labor del SIN en la universidad no era para combatir a los grupos subversivos, ya que habían desaparecido de la escena universitaria desde el año 1994, sino para perseguir, amedrentar y socavar todo tipo de oposición democrática al régimen dictatorial. Esta labor habría sido iniciada pensando identificar y detener a los grupos subversivos que operaban en las universidades públicas, esta tarea la habrían iniciado desde el año 1991. Pero en el curso de los años y de manera especial en el año 1997 se redefiniría esa labor de inteligencia para el seguimiento de los grupos democráticos opositores a la dictadura. Ningún grupo organizado de San Marcos se salvó de la labor de seguimiento, infiltración y soplónaje. Todos estuvimos en la mira del SIN (p. 34).

Otra prueba del fin práctico de la subversión y la contrasubversión es la drástica caída del número de víctimas en los años 1993 y 1994 en comparación a los años previos. Por ejemplo, en la UNCP, considerando el periodo 1989-1993, 1992 representa el 35,6 % de víctimas y 1993 tan solo el 5,6% (CVR, 2003, T.V, p, 696). Y en el caso de la UNMSM¹⁶,

¹⁶ Considerando el caso de los 57 estudiantes y 1 docente recluidos en el penal Castro Castro. En base al “Informe de la subcomisión de violencia política y derechos humanos sobre el caso de estudiantes sanmarquinos detenidos y recluidos en el penal de régimen especial ‘Miguel Castro Castro’” (CV-SM, 2002).

Consideramos importante referir aquí las conclusiones respecto al tratamiento que se le ha dado a estos presos:

-El 57% de estudiantes ingresó a la UNMSM entre 1987 y 1990.

antes de diciembre de 1992 fueron capturados el 39% (22 est.); en el año 1993 fueron capturados el 32% (18 est.); en el año 1994 fueron capturados el 14% (8 est.) Es decir, hasta 1994 fueron capturados el 85% (48 est.). Ninguno fue capturado en 1995; solo 4 fueron capturados en 1996; 2 en 1997; 1 en 1998 y 2 entre el 2000 y el 2001.

En base a las razones enumeradas, planteamos que la política contrasubversiva en general y la política contrasubversiva en la universidad finalizó en 1994. Por esto, consideramos que la represión en el periodo de las Comisiones Reorganizadoras ya no se caracterizaba por ser contrasubversiva sino por la persecución a las organizaciones de estudiantes (grupos políticos, centros federados, centros estudiantiles, tercio estudiantil), docentes y trabajadores no docentes que supusieran un peligro para la perpetuación y hegemonía del régimen fujimorista, en general, y de la Comisión Reorganizadora, en específico.

En resumen, el inicio de la instalación de bases militares estuvo enmarcada en el objetivo de vencer a la subversión; pero su permanencia, más allá de 1994, respondió ya no a la lucha contrasubversiva sino a la concentración del poder en el presidente y a la perpetuación del régimen fujimorista, lo cual supuso el accionar militar contra toda oposición democrática desde los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Y en el caso de las universidades intervenidas esta presencia militar acompañó y se integró a los gobiernos de las Comisiones Reorganizadoras.

En este sentido, la política contrasubversiva en general evolucionó —en función a los objetivos del régimen- a una política represiva pero de menor intensidad que tuvo como objetivo la represión a toda manifestación organizada de oposición al régimen fujimorista y

-El 47% (35 est.) fueron capturados por la DINCOTE. El 34% por la PNP. Al ser la DINCOTE un organismo especializado en contrasubversión, se prueba que estos estudiantes fueron detenidos en el marco de esta política.

-El 95% (54 est.) fueron torturados. De estos estudiantes, el 37% fueron golpeados; el 21% ahogados; el 13% colgados; el 8% electrocutados; al 5% se le practicó un simulacro de ejecución; el 4% fue sometido a inanición; al 2% se le inyectó un sedante; entre otros. Esto prueba el uso sistemático de la tortura como método contrasubversivo.

-Como consecuencia de las torturas el 81% de estudiantes encarcelados sufre de enfermedades. Por ejemplo: Dolor de la columna, piernas, costillas, brazos, movimientos involuntarios; ansiedad, insomnio, depresión, fobia, amnesia, cefalea, adormecimiento; desviación del tabique, T.B.C., asma, entre otros.

-Respecto a las condenas a los estudiantes, esta subcomisión señala que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 permitió al Estado implementar “condenas largas y de por vida que van desde los 20 años hasta la cadena perpetua y donde se niega el derecho de reincorporarse a la sociedad negándoles principalmente los beneficios penitenciarios”. Esto prueba la concreción de la normativa reconfigurada por Fujimori.

-En rechazo a la sistemática tortura practica por el Estado se señala la violación del “artículo 5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su inciso 2 dispone que: ‘nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Toda persona privada de su libertad será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’”

Otras conclusiones a las que arriba la subcomisión son las siguientes: “1) Los estudiantes detenidos eran alumnos regulares en la universidad. 4) El hombre es un ser social; sin embargo las condiciones carcelarias (régimen de visita, locutorios, media hora de patio al día, 23 horas del día en encierro) han apuntado a negarles a los estudiantes detenidos su esencia humana. 5) La mayoría de los estudiantes detenidos (82%) están por [quieren] estudiar y trabajar”.

como táctica el uso de un supuesto grave peligro subversivo. En este mismo sentido la política contrasubversiva en la universidad evolucionó o cambió a una política represiva (1994 en adelante) pero de menor intensidad que tenía como objetivo ya no la eliminación (encarcelamiento y desaparición) de la guerrilla sino la represión (estigmatización, amedrentamiento, encarcelamiento) de organizaciones no guerrilleras opositoras al régimen; todo esto en función a perpetuar y hegemonizar el régimen fujimorista.

2.3.3.2.2. Represión contra el estudiantado universitario de Lima (1995-2000)

Hecha esta aclaración sobre la política represiva en el ámbito universitario se comprenderán mejor las consecuencias contra la comunidad universitaria, principalmente los estudiantes, en el periodo 1995-2000.

Es importante analizar la organización estudiantil frente a acciones del régimen de Fujimori que consideraron mellaban la democracia. "Protestas espontáneas. Así recuerdan varios ex dirigentes estudiantiles las movilizaciones universitarias que organizaron durante el gobierno del hoy extraditado Alberto Fujimori: contra la Ley de Amnistía a los miembros del Grupo Colina (1995), por la destitución de tres magistrados del Tribunal Constitucional (1997), por la no aprobación del Referéndum que hubiera impedido la reelección de Fujimori (1999), y en apoyo a la marcha de los Cuatro Suyos (2000)"¹⁷. Al respecto, señala la CVR que "los reclamos se centraron en romper con el modelo autoritario impuesto por el régimen de Alberto Fujimori y en la demanda por el respeto a la institucionalidad democrática y los DDHH —aún se recordaba el asesinato de los estudiantes de La Cantuta en 1992. Las movilizaciones estudiantiles fueron masivas y pacíficas, de manera que lograron un amplio nivel de aceptación ante la opinión pública" (CVR, T. III, p. 637)

Estas movilizaciones se caracterizaron por ser masivas y, a pesar de la represión, confrontativas en algunos momentos. "Intentamos darle un cariz de movilizaciones pacíficas, pero pedirles eso a los estudiantes que tenían sus universidades tomadas con militares fue complicado", comenta Javier Coello, presidente del Centro Federado de la Universidad Agraria en dichos años (Ibídem).

Esta reorganización estudiantil estaba marcada aún por el miedo que el Estado había logrado causar en los estudiantes debido a las matanzas que cometió. "A los 22 años, Iminovich Gonzales estudiaba Literatura en la Universidad La Cantuta. A esa corta edad llegó a ser la dirigente principal de la Coordinadora Estudiantil. 'Luego de la matanza

¹⁷ La República, "Jóvenes defensores de la democracia". Luis Arriola Ayala. 1/10/2007

de los estudiantes y del profesor, en la universidad se vivía como zombies. Ningún estudiante quería participar en política' " (Ibídem).

Un aspecto central que contribuyó a que la represión contra los universitarios se practique sin significativa oposición fue la estigmatización que el Estado promovió mediante los medios masivos de comunicación como la TV, diarios chicha y radio. "La identificación de la universidad con la violencia y la estigmatización de los sanmarquinos como terroristas, producirá que las respuestas represivas del Estado fueran cada día más violentas" (CVR, T.V, p. 658). Este nivel represivo se plasmó en altos niveles de violencia, al respecto la CVR concluye que fue el Estado el que "más golpeó" a la comunidad universitaria, siendo el causante del 67% de muertos o desaparecidos de estudiantes universitarios y técnicos entre los años 1980 y 2000.

En efecto, "durante el régimen fujimorista, caracterizado por ser una dictadura civil militar, se impuso una política de total sometimiento de las universidades, instrumentalizando la institución universitaria en la conservación y reforzamiento del orden social vigente, sometiéndola a un proceso de desideologización y despolitización, que no era otra cosa que la imposición de la ideología neoliberal compatible con su proyecto político" (Rodríguez, 2007, p. 10).

Ponce (2002) señala que "la universidad pública se convierte en una extensión del poder coercitivo y parte de la campaña de disciplinamiento social del régimen autoritario, para ello se hace necesario su control y la intervención autoritaria a través de las fuerzas armadas y Comisiones Interventoras para así controlar los focos de rebelión contra su Estado policiaco. La política en la universidad entra en receso y los pocos espacios que quedan y hacen política organizada se ven en la precariedad de lograr legitimidad, porque reina un clima que cuestiona la política organizada. La política expresada en organizaciones colectivas es objeto de hostigamiento y persecución".

A diferencia de lo avanzado sobre la represión y la política contrasubversiva en el ámbito universitario entre 1990-2000, la investigación sobre la política represiva en el periodo 1995-2000 en el ámbito universitario es mínima. En este sentido, la presente investigación contribuye en analizar la represión que la Comisión Reorganizadora de la UNMSM ejerció en esta universidad.

2.3.3.2.3. El control y ajuste de la universidad mediante Comisiones Reorganizadoras (1995-2000)

Como parte de la política de control y ajuste, existe una política particular por la cual se intervinieron seis (UNMSM-Lima, UNE-Lima, UNFV-Lima, UNHV-Huánuco, UNSLG-Ica, UNJFSC-Huacho) de las universidades públicas del país. Nos referimos a la política que profundiza la intervención universitaria mediante Comisiones Reorganizadoras, iniciada el 25 de mayo de 1995 con la Ley N° 26457 para el caso de la UNE y la UNMSM, desarrollada mediante las Leyes N° 26614 (1996), N° 26797 (1997), N° 26880 (1997), y finalizada con la Ley N° 27366 del 4 de noviembre de 2000 que cesa las seis comisiones interventoras.

La política de control y ajuste se agravó principalmente en el caso de las universidades emblemáticas y con movimientos universitarios más fuertes; por esta razón se aplicó la política de intervención mediante comisiones reorganizadoras para dichas universidades. Sin embargo, esta política no se limita a la década de los 90, sino que ya tuvo semejantes anteriormente. Al respecto, el TIP (2007) plantea que "la acción de las Comisiones Interventoras ha seguido una misma lógica, una misma ley: buscar someter al movimiento democrático desatando campañas negras para justificar su acción criminal, persiguiendo y encarcelando, expulsando a los sectores democráticos, proscribiendo y asesinando. Todo ello para controlar la universidad e imponer los planes estatales a sangre y fuego".

La UNFV (Lima) fue intervenida mediante la Ley 25798, dada el 28 de octubre de 1992. La UNHV (Huánuco) fue intervenida mediante la Ley N° 26493, dada el 30 de junio de 1995. La UNFSC (Huacho) fue intervenida mediante la Ley N° 26855, dada el 5 de setiembre de 1997. La UNSLG (Ica) fue intervenida mediante la Ley N° 27058, dada el 1 de febrero de 1999. Todas las Comisiones Reorganizadoras trabajaron en base a la política universitaria general y única dictada por el Estado; sin embargo, debido a que cada Universidad es una realidad distinta, la aplicación que cada CORE hizo de dicha política tiene inevitablemente características particulares. Cuestión que no niega que todas compartan rasgos principales y afines al régimen.

En el caso de las universidades San Marcos, La Cantuta y Hermilio Valdizán, esta intervención mediante comisiones reorganizadoras estuvo acompañada de la militarización de sus campus universitarios debido a que en ellos se habían instalado bases militares desde mayo de 1991; las cuales permanecieron hasta 1998. Es decir, la intervención militar

no se limitó al fin práctico de la subversión (1994) o al inicio de las Comisiones Reorganizadoras (1995) sino que continuó hasta casi el fin del régimen fujimorista.

Rodríguez (2007) sostiene que la política de controlar las universidades es parte de la política general de controlar las instituciones del Estado:

La dictadura civil militar impuesta a partir del 5 de abril de 1992 por el entonces presidente Fujimori intervino abiertamente las instituciones públicas, violando la autonomía que les otorga la Constitución Política del Estado. El gobierno central copó todo el aparato estatal al cual sometió bajo su control absoluto, es así que logró controlar y manejar el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Gobiernos Regionales, Municipios, etc.

Es dentro de dicho proceso de concentración absoluto del poder que el Gobierno promulga una serie de leyes de intervención de las universidades públicas que, a criterio del gobierno, eran "focos de subversión", con el propósito de reorganizarlas, de las 28 universidades públicas, 6 de ellas fueron intervenidas con "Comisiones Reorganizadoras". Dicha disposición tuvo un claro contenido antidemocrático, anticonstitucional y autoritario. (p. 12)

Relacionando la política de copamiento de las instituciones del Estado por parte del Ejecutivo y la política de intervención universitaria, la Comisión de la Verdad-SM señala lo siguiente: "Para intervenir la universidad tuvieron que desviar la naturaleza, fines y funciones de los poderes del Estado, se burló el sistema de competencias que sirve de sustento a la división de poderes, lo cual constituye la forma más antigua de corrupción; ésta consiste en la mediatización y manipulación de los Poderes del Estado, para la promulgación de normas sin las garantías de ley, y así una vez viciada la expedición de normas, exigir el cumplimiento de la ley solo porque es la ley, y peor aún, si el órgano jurisdiccional encargado del control de la constitucionalidad de las normas, en forma concentrada (Tribunal constitucional), y en forma difusa (Poder Judicial), manipulados o no pero prevaricadores, desatienden las violaciones a la Constitución Política" (CVSM, 2002, p. 22)

La CVR (2003) señala que la política de intervención total de varias universidades públicas mediante Comisiones Reorganizadoras se aplicó "cuando la subversión está totalmente controlada" (T.V., p. 657). Además en el subcapítulo 2.21 de su Informe Final (2003) la cataloga como una Intervención administrativa y como la cuarta etapa de lo que denomina la política universitaria contrasubversiva. Y concluye que ésta tuvo como objetivo el controlarlas y subordinarlas de acuerdo a los intereses del régimen fujimorista. Otras investigaciones (Vargas, 2002; Rodríguez, 2007; Yalle, 2008) también concluyen de manera categórica que esta política tuvo como principal objetivo el ajustar la universidad en función al modelo económico neoliberal tanto en lo económico como en lo teórico o académico. En base a ello, consideramos que esta política no apuntó a combatir la subversión sino a reprimir cualquier oposición al régimen y a moldear la universidad según

la política general del gobierno central, papel que debían ejecutar de manera efectiva las COREs. En este sentido, plantea Rodríguez (2007): "La política educativa universitaria modernizadora se orienta a adecuar y supeditar la estructura universitaria, en sus funciones y principios al actual proceso neoliberal, con lo que se persigue no sólo integrarse solidariamente con el régimen vigente, sino también dignificar de acuerdo a un nuevo sistema de valores, la práctica profesionista y de obsecuencia al sistema".

Ponce (2002b), ensayando una interpretación general de este proceso plantea lo siguiente:

Las Comisiones Reorganizadoras, instaladas arbitrariamente en las universidades estatales en el periodo 1992-2000 por el fujimorismo, vienen a ser la extensión coercitiva del Estado autoritario sobre la juventud universitaria, justificando su intervención sobre estas universidades con el pretexto de ser "focos de subversión" y de corrupción...Estas instituciones [las universidades bajo CORE] devienen en enclaves autoritarios y en entes donde se hace un disciplinamiento social para un mejor control social de los jóvenes universitarios y, de manera particular, de las organizaciones gremiales y políticas.

La revista Nueva Universidad N° 1 (1996) también contribuye en el análisis de las comisiones reorganizadoras; al respecto consideramos importante citar este párrafo ubicado en su editorial:

Hoy asistimos a una profunda reestructuración del anterior sistema universitario. El Fujimorismo busca readecuar la educación pública en función a la lógica del Libre Mercado; para ello necesita intervenir autoritariamente, no sólo violentando la autonomía del claustro, sino también interviniendo en los asuntos académicos y administrativos vía 'Comisiones Reorganizadoras'. Para esa tarea no faltan los Paredes Manrique, los Medina, los Fajardo y toda suerte de aventureros y apóstatas del neoliberalismo que apoyados por la fuerza de las botas quieren hacer de la Universidad un lugar donde la democracia interna, el pensamiento crítico, la gratuidad de la enseñanza, el cogobierno, el derecho a la organización, el derecho de la libertad de pensamiento no tienen lugar en el modelo de universidad que quieren implementar.

Vargas (2002a) señala que "La política intervencionista y privatista del fujimorismo buscó "modernizar y readecuar" la educación pública para alentar los intereses de libre mercado; y para ello urgió intervenir las principales universidades públicas del país, no solo violentando su autonomía, sino también interviniendo en los asuntos académicos y administrativos vía 'Comisiones Reorganizadoras' " (p.32).

El TIP (2007), para el caso de La Cantuta, sostiene que en los noventa el Estado concretó el neoliberalismo en la UNE. Su aplicación entre el 90 y 95 fue un proceso de privatización militarizado llegando a acciones genocidas como es el renombrado caso de 1992. En el quinquenio 95-2000 dirigió la UNE la Comisión Reorganizadora de la UNE (CORUNE); en estos años se realizaron despidos masivos (65 % de docentes estables) para reemplazarlos por docentes afines a la CORUNE, caracterizados por su mediocridad y putrición moral.

Complementariamente, el TIP señala que el nivel académico decayó en los años de la Intervención 95-2000. Se cambió el currículo integral por uno sin fundamento científico; se quiso reducir el número de facultades bajo el pretexto de una “reingeniería” lo cual se basa en criterios neoliberales que implicaba despidos masivos.

A modo de precedente teórico respecto a la relación entre el neoliberalismo, las COREs y sus consecuencias, sirve lo que el TIP (2007) plantea a continuación:

La aplicación del neoliberalismo en La Cantuta se ha expresado en el arrasamiento de todos los principios democráticos, el recorte sistemático de rentas y partidas, la privatización de los servicios y tasas educativas, los despidos masivos de docentes y la expulsión de estudiantes, la mediocridad académica, el desfalco y derroche de los escasos recursos, así como apuntando a su liquidación como universidad al aplicar un plan que buscaba la elitización de La Cantuta. Los responsables directos de este siniestro plan son, a más de las fuerzas armadas, los miembros de la Comisión Reorganizadora de la UNE (CORUNE), principalmente su presidenta Doraliza Tovar Torres (TIP, 2007, p. 70)

Complementando este planteamiento, señala que el plan contra La Cantuta tuvo tres aspectos: expulsar estudiantes mediante la elitización [que tiene como base a la privatización]; despedir masivamente a catedráticos democráticos y principalmente desmontar la UNE para conformar un Instituto Universitario de Altos Estudios Pedagógicos elitizado, pues muchos funcionarios del Estado e intelectuales consideran erradamente que la carrera magisterial a nivel universitario no es vigente.

2.3.3.2.4. La represión ejercida por la CORE-SM

En este periodo, “es claro que la intervención administrativa tenía la finalidad de entregar el control de San Marcos a docentes cercanos al fujimorismo y de esta manera implementar una reorganización que evite que desde la universidad se articulen movimientos opositores al régimen autoritario. En este sentido, debemos tener en cuenta que ya en 1993, durante el referéndum para aprobar la constitución fujimorista, un importante número de estudiantes se movilizaron a favor del NO” (CVR, T.V, p. 656)

En este sentido, señala un dirigente estudiantil de esos años: “La instalación de la comisión reorganizadora, significó la introducción de medidas más represivas contra cualquier expresión opositora: «Primero te vigilaban de manera encubierta, porque tu notabas miradas, notabas seguimientos. Pero después la vigilancia fue de manera descarada, con cámaras [...] En todos lados, a toda hora, permanentemente (Ex dirigente de Patria Roja en Derecho)” (CVR, T.V, p. 656)

A pesar de que las detenciones y desapariciones de estudiantes se redujeron a partir de 1995, llegando a ser casi nulos, la represión continuó mediante una censura asolapada

pero férrea. "La universidad pública se encontraba intervenida militar y administrativamente, los espacios de participación se hallaban bloqueados, los comedores y viviendas se hallaban bajo la férrea vigilancia de los soldados y el discurso clasista, que había identificado a los estudiantes radicalizados en años anteriores había sido censurado" (CVR, T. III., p. 636).

En este sentido, Ponce (2002) sostiene que las nuevas autoridades reorganizadoras prohíben hacer política, reprimen toda actividad política de los estudiantes. Emplean el argumento de que "los estudiantes vienen a la universidad a estudiar y no a hacer política" invocando el conservador discurso de la neutralidad de los estudiantes frente a la política. En este sentido, las autoridades afirmaban que ellos no hacen política, empleando un "discurso técnico-neutral", y que por lo tanto en la universidad tampoco se debe hacer política. Aquella frase de la CORE-SM de cambiar la "universidad política" por la "política universitaria" sintetiza este discurso.

Sin embargo, haciendo patente dicha demagogia, Vargas Osorio señala que "durante los 6 primeros meses de gobierno la Comisión Interventora implementó y ejecutó una *política de 'limpieza'* contra sus adversarios y potenciales opositores políticos" (Vargas, 2002a). Política que se concretó principalmente en la expulsión de docentes, estudiantes y trabajadores no docente y en el espionaje sistemático de dichos estamentos, producto de la coordinación entre el Servicio de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) y la Oficina de Seguridad y Vigilancia de la UNMSM.

En este sentido, la revista Nueva Universidad Nº 1 (1996) señala que se llevaron a cabo injustos procesos de separación; "inclusive separan a aquellos que no participen de sus ideas y métodos de reorganización, retrotrayéndonos hacia el oscurantismo en la universidad, en donde el común del profesor es sumiso, mediocre o tecnócrata o todo en una, respetando las excepciones".

Un aspecto, utilizado primero fue la represión mediante el encarcelamiento o amedrentamiento judicial. Otro aspecto, utilizado por la CORE-SM, fue la normativa para evacuar de la universidad a estudiantes con bastante experiencia política y, por lo tanto, con varios años en la universidad. Un tercer aspecto, transversal a los dos primeros, fue la estigmatización y el espionaje. El segundo aspecto significó una barrera eficaz entre generaciones de estudiantes pues los ingresantes ya no tenían dirigentes. Sumado a esto tenemos la poca afluencia de estudiantes de extracción popular; por estas razones se comprende la desmovilización de los estudiantes (Vargas, 2002b)

Esta represión generó temor en todas las posiciones críticas del régimen, como se interpreta de lo siguiente: "...lo que si obviamente comienzan a ocurrir, son detenciones de pronto, o sea en cualquier momento, de pronto cerraban la puerta, más de una vez cerraban la puerta y todo el que salía tenía que identificarse y se quedaban con alguna gente. Hay un temor generalizado en el sentido de que aún la gente de la Izquierda Legal ya no se anima a activar abiertamente por temor a ser confundido con el PCP-SL (Ex militante de los Cristianos de Izquierda)" (CVR. T.V, p. 655)

Bajo estas condiciones una de las consecuencias fue la desarticulación de los Centros Federados y Centros de Estudiantes; esta represión se agravó con la vigilancia y acciones de los militares acantonados en las bases militares que permanecieron dentro del campus hasta 1998. Así, para fines de los 90, de las decenas de gremios estudiantiles tan solo seguía en pie el Centro Federado de Derecho.

Debido a dichas condiciones, a partir de 1994 la organización estudiantil fue mermada tanto por la represión como por el decaimiento de las agrupaciones políticas, las cuales se disolvieron en relación al término práctico del conflicto armado interno (1994); por esta razón fue mínima la movilización de los estudiantes en el periodo 1995-2000.

Como hemos dicho, es casi nula la investigación sobre los cambios académicos o curriculares hechos por la CORE-SM. Una excepción es lo sostenido por Vargas (2002b), quien señala que con el inicio de la Comisión Reorganizadora se cambian los currículos de todas las Escuelas Académicas. Claro ejemplo de esta política es la eliminación de la especialidad de Psicología Comunitaria de la Facultad de Psicología. En este sentido, las autoridades tampoco apoyaban las iniciativas académicas, culturales o artísticas de los universitarios e incluso las reprimían. Así, al eliminar materias o espacios de discusión se consolidaba una universidad que solo servía para transmitir ideas más no para el debate o la crítica; es decir una universidad ajustada al interés del régimen.

En este sentido, pero de manera muy general, Rodríguez (2007) señala que "el objetivo fundamental de las comisiones interventoras es su ofensiva ideológica neoliberal, para lo cual optaron por desaparecer cursos de Ciencias Sociales y de formación humanista, mediante cambios curriculares, adecuando programas académicos de carácter tecnocrático" (p. 14).

2.4. MARCO CONCEPTUAL

-PRIVATIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.- Implica un proceso por el cual el sostén económico para la educación universitaria deja progresivamente de ser el tesoro público administrado por el Estado y pasa a ser sustentado por el tesoro privado de la familia y/o el estudiante. Son dos las tácticas principales de esta política: 1) Fomentar la creación de universidades privadas con fines de lucro y 2) Presionar a las universidades públicas a cubrir el vacío presupuestal, dejado por el Estado, con ingresos propios: Recursos Directamente Recaudados.

-AUTORITARIO.- “Sistemas políticos con un pluralismo político limitado no responsable; sin una ideología elaborada y directora (pero con una mentalidad peculiar); carentes de una movilización política intensa o extensa (excepto en algunos puntos de su evolución), y en los que un líder (o un grupo reducido) ejerce el poder dentro de límites formalmente mal definidos, pero en realidad bastante predecibles” (Linz, 1978).

-EDUCACIÓN.- En esta tesis, cuando nos referimos a Educación, nos referimos a la concepción predominante en la sociedad actual: la transmisión de conocimientos dado por un centro educativo, sea público o privado. No estamos utilizando la concepción que sostiene que la Educación no solo se da en un centro educativo sino también mediante los medios de comunicación, el arte, etc.; es decir, en todo lugar y a toda hora.

-ELITIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.- Proceso social en el que los sectores de ingresos económicos altos y medios desplazan progresivamente de la universidad pública a los sectores de ingresos económicos pobres. Este proceso implica la recomposición social de la universidad.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1. EL GOBIERNO AUTORITARIO DE LA CORE-SM

3.1.1. LA INTERVENCIÓN O LA RAÍZ AUTORITARIA DE LA CORE-SM

3.1.1.1. PREPARANDO LA INTERVENCIÓN DE SM: EL AGENTE PAREDES

A. LA TRAYECTORIA DEL “DR.” PAREDES

Consideramos importante conocer la trayectoria de Manuel Paredes Manrique antes de asumir la presidencia de la Comisión Reorganizadora de SM para así comprender mejor el autoritarismo de esta comisión. Para esto contamos con dos informes: el Informe Paredes¹⁸ (enero de 1995) y el Informe de la Comisión de la Verdad de San Marcos (diciembre de 2002).

A.1. LA CARRERA DOCENTE DE LA “ESTRELLA” PAREDES

El informe del Dr. Gustavo Bacacorzo, asesor legal de la dirección del personal de la UNMSM, al Dr. Javier Barúa Castañeda, director de personal académico y presidente del jurado calificador del concurso de docentes del departamento de Obstetricia y Pediatría, sobre si procede declarar apto a Paredes que concursa para profesor principal es importante pues nos permite conocer el proceso de Paredes como docente¹⁹:

“El Dr. Paredes es instructor de la Facultad de Medicina de la UNMSM durante un año, ingresa a la docencia el 1° de junio de 1962; se desempeña como profesor Auxiliar desde el 1° de abril de 1963 hasta el 31 de marzo de 1967, por sucesivos contratos; en la Universidad de Ica como profesor Principal desde el 11 de setiembre de 1967 al 2 de octubre de 1969. El Dr. Paredes, dentro de la carrera docente, tiene la categoría de Jefe Instructor (Jefe de Prácticas) no obstante ser Profesor Contratado a nivel de Auxiliar durante 4 años y 5 meses. El Estatuto de la Universidad en su Art. 60 establece las categorías docentes de carrera, entre las que naturalmente no está la de Profesor Contratado, que según el Art. 61, inc. K, no significa categoría universitaria. Según el Art. 91 de la Ley Universitaria se establece que los profesores que pasan a prestar servicios de una Universidad del Estado a otra, conservarán su jerarquía y derecho. El Dr. Paredes no estaba carente de categoría universitaria, la tenía, y por tanto estaba incurso en la carrera docente. Si el Dr. Paredes pudiera haber concursado para cualquier categoría, debería siempre acreditar servicios en la inmediata inferior, que para los Asociados es de tres años y para los Principales es de 5 años, según los Arts. 83, inc. B y 82 inc. B, del Estatuto. El Dr. Paredes es elegido Decano de la Facultad de Medicina de Ica y desempeña al mismo tiempo la Jefatura del Departamento de Pediatría del Hospital Regional Centro de Salud de Ica, violándose el Art. 51 del Estatuto Universitario que declara haber incompatibilidad. Conclusiones: I. Son nulos los empleos conferidos sin los requisitos que prescriben la Constitución y las leyes. II. El Dr. Paredes tiene para la Universidad de San Marcos, básicamente la categoría de Jefe de Instructor y eventualmente la condición de profesor contratado como Auxiliar, obtenida en ella y recientemente reconocida a petición y gestión de él mismo, según la Resolución Rectoral N° 29173, del 05-08-69. La duplicidad de status docente del Dr. Paredes afecta el concepto legal y sistemático de la Universidad Peruano. No habiendo demostrado carrera docente, tampoco puede ser declarado apto”. (Informe Paredes, p. 40)

¹⁸ Es como denominaremos al Informe (o Dictamen en Mayoría) que emitió la Comisión Investigadora creada por la Asamblea Universitaria el 2 de diciembre de 1994.

¹⁹ Miguel Angel Oliveros Donohue, entonces (2001) profesor principal de Pediatría, se remonta incluso a los inicios de la carrera médica de Paredes Manrique: “Recién iniciando mi residencia [médica] me toca rotar con el colega Paredes, estuve dos meses en su servicio, no lo vi un solo día y cuando le hice presente esto a quienes dirigían en ese momento Pediatría, sencillamente iniciaron las hostilizaciones contra mi persona...posteriormente he tenido cambios de palabra con él, volvimos a confluir [con Paredes] en Ica, donde el colega Paredes se dio un salto de profesor Auxiliar a Decano” A consecuencia de estas discrepancias de antaño, Oliveros da cuenta de la venganza de Paredes: “El doctor Huerta tenía el máximo cargo, presidía un grupo, él me aprobó razón por la cual el colega Paredes bajó al decanato y le ordenó que me sacara y así lo hicieron, entonces estuve cinco años fuera de la Universidad. Quería mencionarles esto y tengo los documentos y papeles y todo, es triste decirlo, pero así era como caminaba nuestra institución esa época, gracias” (CV-SM, Informe, 2002, p. 86)

Sin embargo, a pesar de la claridad de este informe, y como lo denuncia el Centro de Estudiantes de Medicina el 26 de enero de 1970, Paredes avanzó a la etapa de entrevista personal debido a “presiones políticas de los militares en el gobierno, del Rectorado y de personas ajenas a la Universidad” (Informe Paredes, p. 41). Este hecho causó la renuncia del Dr. Barúa y del Dr. Bacacorzo, los cuales fueron reemplazados inmediatamente por el Rector Juan de Dios Guevara, quien también, más adelante, rechazó el recurso de reconsideración a los otros docentes concursantes y quien presidió el Consejo Universitario en donde se declaró improcedente el consecuente recurso de apelación. Además, más tarde, Juan de Dios Guevara y Paredes (entonces Secretario General de la UNMSM) bloquearon toda denuncia ante el CONUP, consumándose así todo un escándalo y fraude delictivo en contra de San Fernando y la Universidad²⁰.

Su nombramiento fue de profesor a Tiempo Parcial (20 horas) y dos meses más tarde se convierte en profesor a 40 horas. Y siguiendo con su rápido ascenso, en dos meses, estando en ese mismo cargo, logra optar el grado de doctor en Medicina. Luego presenta una solicitud a la Secretaría General, o sea a él mismo, desistiéndose de su solicitud de subrogación de dos años atrás; y desde luego fue aceptada, acumulando así indebidamente más años de servicio. Lo mismo hizo en Ica, donde también pidió su subrogación, a cambio de ser declarado en “comisión ante el CONUP e instituciones culturales de Lima”, por lo cual percibió ilegalmente la cantidad de S/. 36,000 que le sigue reclamando el contador general de esa universidad.

Este recuento delictual finaliza dando cuenta de que “siendo Decano de la Facultad de Medicina, en su gestión pasada [1991-1994], también percibía doble sueldo, cometiendo incompatibilidad, así consta en el oficio de la Oficina de Personal del Hospital del Niño, habiendo recibido en el mes de octubre de 1994 el sueldo de médico N° 5”.

Sobre esta trayectoria delictiva y a modo de síntesis, citamos lo testimoniado por un docente miembro de la Comisión Investigadora:

El Dr. Paredes nunca fue profesor Auxiliar en la Universidad San Marcos en la Facultad de Medicina, concursó al cargo de Jefe de Prácticas, perdió, se fue a Ica, sacó de la manga para ser profesor Principal donde se volvió Decano, Director de Hospital y gozaba de viáticos que hasta ahora sigue debiendo el Dr. Paredes a la Universidad de Ica porque se venía a CONUP. Entonces qué pasó, al Dr. Paredes el Dr. Garayar de Ica le metió preso por delitos contra la fe pública, por usurpación de funciones, por falsificación de documentos. Este señor que no fue más que un contratado como Jefe de prácticas viene a Lima en tiempos de la

²⁰ Este nombramiento violó la ley y el Estatuto Universitario, puesto que previamente, si era de carrera, debía ascender o ser promovido a Profesor Auxiliar, luego a Asociado y finalmente a Principal. Nada de esto sucedió, saltó con garrocha todas las categorías. Cuando la Comisión Investigadora le preguntó a Paredes a qué se debía esto, respondió que solo le podía ocurrir a las “superestrellas”, es decir Paredes ya era toda una superestrella haciendo fraude y violando las normas legales del país (Informe Paredes, p. 44).

dictadura militar y se vuelve Secretario General de la Universidad de San Marcos, ¿cómo? Y luego hace un concurso que genera la queja de todos los médicos de Pediatría de Medicina que denuncian a este señor por hacer atropellos, como Secretario General logra un concurso para ser catedrático y salta a Principal, que sepamos en la Universidad Peruana la carrera de docentes empieza de Jefe de Prácticas, auxiliar, asociado y principal.

El Dr. Paredes llegó de Jefe de prácticas a Principal, pese a tener juicios penales en Ica, durante nuestra investigación fuimos nosotros a entrevistarle y le preguntamos cómo de Jefe de prácticas llega a ser Secretario General de la Universidad y ocupa el cargo de profesor principal en la cátedra de Pediatría sin tener carrera docente y su respuesta, está grabada y si quieren se les puede hacer llegar el casete, dijo 'es que eso nos pasa sólo a las estrellas'²¹.

A.2. EL DECANO PAREDES O EL “APRENDIZ DE DICTADOR”

El Informe Paredes también demuestra que el entonces decano prácticamente había abandonado el ámbito académico, motivo por el cual la coordinación y orientación académica cayó en desorganización, desactualización y se prestó a intereses personales (lucro) antes que al desarrollo de la ciencia.

En el ámbito administrativo, se da cuenta de que Paredes desplazó a empleados de carrera para poner a sus “amigotes”; una prueba de esto es la renuncia del Dr. Víctor Kikuchi, jefe de la OMRAGT (Oficina de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos) debido a que se constató que el entonces Decano y su secretario académico José Piscoya Arbañil, habían traficado con notas. En este sentido, Kikuchi los denunció “por expedir irregularmente certificados de estudios, eliminando de la computadora una de las notas y firmando el Dr. Piscoya en su lugar [de Kikuchi]”.

Otros hechos recogidos por este Informe muestran que Paredes por su actitud pragmática y soberbia se ganaba pleitos a menudo. Por ejemplo, “se tiene el caso de la Dra. Rosa María Esquerre que por solicitar ampliación de licencia, terminó en juicio con el ex decano, y éste, carente de escrúpulos, mandó confeccionar un boletín de 16 páginas haciendo escarnio de su dignidad y honor” (p. 30).

En este sentido, el 25 de octubre de 1993, el Sindicato Único de Trabajadores de San Marcos emitió un comunicado²² a consecuencia de lo acordado en su asamblea general de delegados:

Rechazar y repudiar al nefasto aprendiz de dictador, Manuel Paredes Manrique, decano de medicina, por su continuo amedrentamiento a los trabajadores de dicha base, acaba de sancionar al c. Elías Velásquez Cruz por cinco días consecutivos, con la complicidad de la Sra. Martha Martina Chávez, secretaria administrativa y del que funge de jefe de la oficina de biblioteca, el estudiante Oswaldo Salaverry García...La dirigencia pese a buscar el diálogo y encontrar soluciones solo recibimos rechazo...Existen muchas denuncias en contra de este señor que utiliza todos los medios para ocultarlas y arreglar entre gallos y

²¹ Informe de la Comisión de la Verdad-San Marcos. Diciembre de 2002. P. 74. Se extrajo de la intervención transcrita de un docente que no se identificó con motivo de la visita a la Facultad de Letras y CCHH por parte de la Comisión de la Verdad, el 4 de octubre de 2001.

²² Este documento es firmado, entre otros, por Manuel López, Jaime Lazo y José Zavaleta, dirigentes del SUTUSM.

medianoche, estamos convencidos que tarde o temprano tendrá que aclararse su negra trayectoria y así entender por qué se le califica de 'Poncho Negro'; es lamentable que pese a esto se encuentre en plena campaña, para tratar de asumir el rectorado de la Universidad. (Informe Paredes, 1995, p. 33)

Otro aspecto importante que se resalta en el Informe Paredes es el manejo irregular de la composición docente: “En esta facultad, de 1153 profesores, 132 son a dedicación exclusiva o tiempo completo, y 1021 en la categoría a tiempo parcial de 20 horas. Con esta realidad se corre el riesgo de minar por dentro los Institutos de Investigación, porque se requiere profesionales a tiempo completo. Con tanto profesor a tiempo parcial se estimula el ‘clientelaje’” (p. 33).

Finalmente, a modo de balance de su labor como decano, este Informe sostiene que “en estos tres años de su mandato como Decano, se ha dedicado a una sistemática demolición académica y moral de las ciencias de la salud que se imparten en la Facultad. Llegando a extremos, ahora promueve el desmembramiento de Medicina de la Universidad de San Marcos. Su labor es escisionista” (p. 34).

B. DIVIDE Y VENCERÁS: LA PUGNA ENTRE PAREDES Y REÁTEGUI²³

La elección de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria y la reelección de Paredes como decano de San Fernando fueron los dos nudos en donde pugnaron el entonces rector Wilson Reátegui Chávez y el candidato a la reelección, Manuel Paredes Manrique.

Estas dos contiendas electorales fueron tal porque eran un aspecto crucial del plan que cada uno de los dos sectores desplegaba con el objetivo de controlar la UNMSM. Por esta razón, esta pugna de poderes por hegemonizar la universidad, en su agudización, llegó a tener varios frentes de lucha.

El primer frente estuvo enmarcado al ámbito universitario, encausado por la normativa dada por la Ley 23733, Ley 26302, el Estatuto de SM y el Reglamento de Elecciones; y justificado por el principio de la autonomía universitaria. En este frente, Reátegui y su sector actuaron siguiendo los procedimientos que en estos casos se debe seguir según la normativa; es decir, actuaron legalmente. Además, se debe resaltar que Reátegui era el Rector²⁴.

²³ Para comprender mejor este acápite recomendamos revisar el Anexo I: Análisis mensual de la pugna.

²⁴ Lejos de amedrentarse ante el poder de Reátegui, Paredes respondió con aún mayor energía desde que fue cesado en agosto de 1994. Proclamó una “ardorosa” defensa de la Facultad utilizando el discurso de que la quieren agredir y destruir. Y, para tener mayor correlación política a nivel universitario, conformó, principalmente junto a los dos ex decanos, el “sindicato de decanos”. La labor de

Así, en el caso de las elecciones docentes, en base a la entrevista hecha a uno de los miembros: Dr. Simón Escamilo Cárdenas, podemos señalar que en las elecciones de julio no hubo fraude; cuestión que utilizó como excusa el sector de Reátegui para reconfigurar y convocar a una nueva elección. Seguidamente, tanto la anulación de los comicios del 8 de julio como la aprobación de una nueva fecha de elecciones: el 18 de noviembre, fueron legales pero no necesariamente justas. Sin embargo, este hecho de ninguna manera puede ser considerado como una justificación para la imposición de la CORE-SM.

Igualmente, en el caso de la reelección de Paredes como Decano de San Fernando, Reátegui, sencillamente utilizando la normativa vigente, pudo poner fuera de juego a Paredes. Sin embargo, esta segunda contienda dejó mal parado a Reátegui pues este había presidido, cumpliendo la normativa, la sesión del Consejo de Facultad de Medicina en la que se había reconocido tácitamente la reelección de Paredes como decano. Así, si bien Reátegui pudo sostener legalmente que Paredes no había logrado los dos tercios exigidos por Ley para ser Decano, ya había cometido un grave error político que la otra parte aprovechó en su desenfrenada campaña.

Asimismo, una vez instalada la Asamblea Universitaria, Reátegui, paso a paso, quebró el poder del grupo de ex decanos al aperturarles, mediante Resoluciones Rectorales, procesos administrativos, suspenderlos y mandar se realicen auditorias en sus respectivas facultades. En el caso de Paredes, debido a que este estaba logrando aferrarse con mayor fuerza, la correlación del rector en la AU conformó una Comisión Investigadora de Paredes y su gestión. Además, Reátegui ejerció presión también mediante la suspensión del presupuesto a la Facultad de Medicina y la no ratificación de las resoluciones decanales; cuestión que llegó a estancar la emisión de graduaciones, firma, entrega de diplomas, etc.²⁵

El segundo frente de lucha fue el inmediato superior al anterior: lo legal enmarcado en el Poder Judicial. En este frente, Paredes fue el que inició, sin haber agotado la vía administrativa universitaria (interna), al presentar acciones de amparo y denunciar penalmente a Reátegui, cercanos a la cúpula de este, miembros del CE y asambleístas.

esta organización es denunciada, por el Informe Paredes, por su obstruccionismo y paralelismo. Más tarde, este "sindicato" se convirtió en el MUSA (Movimiento Universitario Sanmarquino).

²⁵ Sobre esta presión Paredes señala lo siguiente: *a la Facultad de Medicina se le suspendieron las asignaciones del Tesoro que le correspondía y se le congelaron sus cuentas bancarias, producto de sus ingresos propios. A sus autoridades se les retuvo ilegalmente sus haberes así como a algunos profesores y administrativos, pero los docentes, alumnos y trabajadores, desarrollaron normalmente sus actividades académicas y administrativas, sin recibir un solo centavo del organismo central y sin rendirse ante un Rector elegido fraudulentamente.* "Mensaje del rector al estudiante sanmarquino. Informe del proceso de reorganización de la UNMSM". UNMSM. 5 de abril de 1999, p. 20.

Ante esto, Reátegui respondió como Rector, es decir a nombre de la Universidad de San Marcos. Por esto, podemos decir, que en este frente se enfrentaron Paredes y la UNMSM.

Finalmente, la UNMSM, mediante su oficina legal, logró frenar las acciones de amparo y, más adelante, ganar los juicios que pretendían apresar a los miembros de la cúpula dirigente de la UNMSM que, a su vez, eran parte activa del sector encabezado por Reátegui.

El tercer frente fue el mediático o el de la prensa a escala universitaria, aquí también Paredes inicio la ofensiva mediante frecuentes y efusivos textos a nombre del Decanato de San Fernando. El Informe Paredes al analizar el número, financiamiento y contenido concluye que fueron quince (15) los textos que se difundieron, entre comunicados, pronunciamientos, cartas públicas; llegando a gastar más de cien mil soles.

Pero el presupuesto de San Fernando no solo sostuvo la prensa. En efecto, según indica el Informe Paredes, la “lucha por la defensa de San Fernando” fue financiada con el presupuesto de la Facultad, específicamente con los recursos propios, y de manera onerosa: consumo de alimentos en la cafetería (de Paredes y sus socios), S/. 142,116; movilidad local, S/. 106,936; materiales de escritorio, S/. 88,508; haciendo un total de S/. 337,560. Contradictoriamente, señala el Informe, en materiales de enseñanza para toda la Facultad gastó solo S/. 10,200 en tres años²⁶.

Por su parte, el Rectorado dedicó todo un número de Gaceta Sanmarquina²⁷ – periódico oficial de la UNMSM- para exponer con amplitud su posición sobre la contienda. Y, para fortalecer su posición, en este número se da cuenta del respaldo que la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) brinda a Reátegui y del apoyo que este tiene por parte de un grupo de ex rectores²⁸ y del Consejo Universitario.

Finalmente, en esta contienda hubieron dos aspectos importantes más que coadyuvaron o manifiestan la agudización de la pugna: 1. El apoyo por parte del Ejército a Paredes y 2. El papel de la televisión y otros medios de comunicación. Sobre lo primero, se denuncia que contaba con “el apoyo íntegro de la Segunda Región Militar del Cuartel de Borbones y le pusieron un pelotón de cuidado personal, les dieron armas al Dr. Paredes y a cuatro miembros del Consejo de Facultad apócrifo, pusieron tanquetas y desde allí comenzó la militarización de la Universidad” (CV-SM, 2002, p. 74). Sobre lo segundo; el

²⁶ Informe Paredes, 1995, p. 35.

²⁷ Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25. Diciembre de 1994.

²⁸ Dr. Antonio Cornejo Polar, Dr. Aurelio Miro Quesada Sosa, Dr. Gaston Pons Muzzo, Dr. Jorge Campos Rey de Castro, Dr. Juan De Dios Guevara, entre otros.

apoyo a Paredes era parte del plan de desestabilizar el gobierno de la UNMSM, como lo denuncia el Consejo Universitario el 14 de diciembre de 1994 y según se interpreta de la exhortación que la ANR envía el 29 de octubre al Congreso Constituyente Democrático. Sobre este punto, la Comisión de profesores separados y cesados de la UNMSM sostiene que “la campaña psico-social del SIN, en el Parlamento y la prensa fue ‘exitosa’”²⁹

Por consiguiente, Reátegui a nivel de la UNMSM y a nivel de la representación universitaria oficial del país (ANR) tenía mayor control, además venía manejando la ofensiva opositora principalmente bajo el amparo de la autonomía universitaria; sin embargo, este poder fue mellado y, finalmente, rebasado por Paredes debido a que este y su grupo docente ya eran una pieza importante de la dictadura Fujimorista para el caso de San Marcos y como parte de su política universitaria. Esto se manifestó en el respaldo que tuvo Paredes por parte del Poder Judicial en cuanto al mandato que diera para suspender las elecciones de representantes docentes a la AU de fines de 1994, en el apoyo por parte de las Fuerzas Armadas en el control del decanato de la Facultad de Medicina y, crucial y claramente, cuando asume la presidencia de la Comisión Reorganizadora de San Marcos impuesta por el régimen.

Esta relación entre la dictadura fujimorista se plasmó también en que “desde el 25 de mayo, los Canales 4 y 5 de TV recibían a Paredes con los brazos abiertos porque era ‘el salvador de la crisis Sanmarquina’. Los iracundos rostros de Roxana Canedo, Nicolás Lucar, Federico Salazar, Sol Carreño y Mónica Delta hacían el bombo al nuevo dictador y encontraban ‘terroristas’ e ‘inmoralidades’ de toda clase en San Marcos, todos prometían colaborar, a fondo, para acabar con la camarilla de Wilson Reátegui”³⁰.

En consecuencia, la pugna en el seno de la UNMSM fue la brecha por la que Fujimori pudo aplicar el inicio de su política de control y ajuste mediante Comisiones Reorganizadoras en esta universidad. Al respecto el profesor Abraham Eugenio Llanos Marcos, señala que “se debe tomar en cuenta las declaraciones de Montesinos, publicadas en el diario La República [no especifica fecha], quien manifestó que se aprovechó de las contradicciones entre los políticos sanmarquinos para gobernar la universidad”³¹. En este sentido, la Comisión de profesores separados y cesados señala que “la dictadura,

²⁹ Introducción, firmada en abril de 2001 por “La comisión de profesores separados y cesados [UNMSM]”, al Informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea Universitaria, sobre la Facultad de Medicina y la conducta funcional de Manuel Paredes Manrique (RR-5131-R-94). Este Informe se aprobó en la sesión de la Asamblea Universitaria realizada el 10 de enero y fue publicado adjunto a la RR Nro. 0093-R-95 del 11 de enero de 1995. La edición que citamos fue difundida posteriormente a la caída de Fujimori y la CORE-SM.

³⁰ Citado de la Introducción al Informe Paredes, arriba detallado.

³¹ Informe de la Comisión de la Verdad-San Marcos. Diciembre de 2002. P. 152. Se extrajo de su intervención transcrita con motivo de la visita a la Facultad de Ciencias Económicas por parte de la Comisión de la Verdad, el 23 de agosto de 2001.

aprovechando la intensa represión nacional y el total control sobre los medios de comunicación, preparaba 'legalmente' a sus mastines y testaferros para controlar la Decana de América...Esta era su consigna y había que cumplirla, por las buenas o las malas, legal o ilegalmente”.

Un aspecto importante para comprender la ofensiva que el gobierno desarrolló, teniendo como pieza central a Paredes y su grupo, es el peligro que aquel representaba para el régimen ya que había devenido en un claro opositor político. El hecho más claro de esta oposición fue que Wilson Reátegui, en su condición de rector, encabezó a la comunidad universitaria de San Marcos en la movilización intensa que esta desarrolló, en el proceso del referéndum (Sí o No), contra la Constitución Política propuesta por el régimen fujimorista³².

Finalmente, analizando el papel determinante que cumplió Paredes Manrique en el proceso de desestabilización de San Marcos, se puede concluir que este fue un agente del

³² Al respecto Meza (Entrevista, marzo, 2020) señala:

Incluso el consejo universitario aprobó hacer una marcha institucional por el NO a la constitución de Fujimori. Es decir, toda la universidad se movilizó. Sobre todo en rechazo a este artículo que era abiertamente privatista. La cola de la marcha estaba por el rectorado de ahora y la cabeza estaba por Donofrio. Y cuando llega la policía, eran cientos, reprimió. Eran tantos sanmarquinos que la marcha llegó un grupo hasta El Callao, otra hasta San Martín; es decir, por todo Lima miles de sanmarquinos. Y Wilson Reátegui se comió esa iniciativa; pero no fue solo eso, volvimos a salir. Incluso la universidad puso a disposición sus ómnibus, los llamados burros. Y no respetaban ni al rector de San Marcos, recuerdo que en la casona nos cayó una lluvia de bombas lacrimógenas. Fueron varias marchas, pero dos institucionales. Y fue una de las pocas universidades que se pronunció así. Entonces Reátegui había generado una situación de confrontación contra el régimen. Allí San Marcos se ponía al frente de un régimen autoritario que se preparaba para su reelección.

Estamos hablando del año 1993 [finis], entonces ya esa situación ponía al rector de San Marcos como un rector rebelde al régimen. Era uno de los pocos rectores que le decía a Fujimori "oye sabes qué, no estoy de acuerdo con tu posición". Entonces hasta eso, ante autoridades así, le representaba a Fujimori un peligro, algo subversivo. Entonces, Fujimori pensó "mejor intervengo y pongo a las autoridades que yo quiero, puedo digitar y sacar a la hora que quiero" ¿Por qué? Porque la intervención fue tal que el presidente era el que ponía a los miembros de la Comisión Reorganizadora, ni siquiera el Congreso decía "que vamos a formar una terna", etc., nada.

En este mismo sentido, Colán (Entrevista, febrero 2020) sostiene que los estudiantes sanmarquinos se movilizaron fuertemente:

El resultado de las elecciones del 93, ese es un dato muy importante, cuando el Fujimorismo creía que tenía el control total del país, cierto, y se genera un empate prácticamente...algunos dicen que podría haber sido también parte del fraude, de los futuros fraudes; pero lo real es que esa Constitución se impuso. Pero el análisis político del gobierno era que si los estudiantes en un periodo tan corto habían logrado acumular, habían logrado cambiar la opinión pública frente a medios de comunicación que siempre habían expresado su apoyo al gobierno y demás y sostenían al gobierno y posteriormente sabríamos que habían comprado a los medios de comunicación. Entonces cómo los estudiantes, sin redes sociales como Facebook, WhatsApp, etc.; estamos hablando de gente que se movilizó directamente, subiendo a los micros, a los mercados, etc.

*Organizaciones vivas, gremiales y no gremiales y de los estudiantes. Incluso aquellos estudiantes que no estaban organizados se sumaron a la campaña contra el NO y lógicamente San Marcos jugó un papel trascendental en ese proceso. **Entonces el gobierno saca como conclusión que si quiere reelegirse el año 95, tenía que controlar las universidades y ya no solamente a nivel de mantenerlas vigiladas en función a rebrotes subversivos sino en función a organizaciones políticas, organizaciones gremiales porque estos estudiantes eran peligrosos; porque esos docentes eran peligrosos, porque esos universitarios eran peligrosos. Entonces la intervención de 1995 era una pieza fundamental para lograr la reelección que ellos buscaban, y lógicamente de una u otra manera lo lograron no porque Fujimori se reelige y nosotros somos expulsados de la universidad.***

gobierno que cumplió la tarea de controlar la UNMSM³³. Tarea que se había propuesto cumplir ya sea por la vía legal (ganando el Rectorado) o por la vía ilegal -mediante la desestabilización³⁴ de esta institución y la consecuente implantación de la Comisión Reorganizadora.

3.1.1.2. EL INICIO DE LA INTERVENCIÓN: LA INCONSTITUCIONAL LEY 26457

Durante el 24 de mayo por la noche y la madrugada del 25 se presentó y aprobó velozmente la Ley 26457: “Amplían el proceso de reorganización universitaria a las universidades estatales que lo requieran para regularizar o modernizar su organización”³⁵. Fue firmado por Jaime Yoshiyama, Presidente del Congreso Constituyente Democrático; Víctor Joy Way, Segundo vicepresidente del CCD; Alberto Fujimori y Efraín Goldenberg, presidente del Consejo de Ministros. Y estuvo compuesta por diez artículos que a continuación analizamos.

Esta Ley, como lo hace constar la revista Caretas (Nro. 1365. 1 de junio de 1995), se aprobó literalmente entre gallos y medianoche, no estando agendada, en medio de una sesión secreta del parlamento (cuando no correspondía) y, principalmente, aprovechando (para ligar así Terrorismo-Universidad-Solución: Ley Interventora) el atentado que el día anterior (24 de mayo) se había producido contra el casino del hotel María Angola en Lima, atribuido a Sendero Luminoso.

Fueron Oswaldo Sandoval y Martha Chávez de la bancada fujimorista los que cerca de la medianoche, el 24 de mayo de 1995, propusieron que se apruebe con "urgencia" la Ley 26457; su excusa principal fue la supuesta presencia de focos terroristas en las universidades, la cual se contradijo completamente con el discurso oficial del gobierno: que el terrorismo prácticamente había sido derrotado. Al respecto, Martín Colán, estudiante en dicho periodo señala:

El congreso de la república, en el año 95, era mayoritariamente fujimorista; este congreso salió a justificar con documentos en la mano, pero lógicamente documentos secretos, seudodocumentos, porque la inteligencia sacaba seudodocumentos, "informes de inteligencia", pero ¿de qué estamos hablando?; y con esos informes, que no eran documentos verificados de procesos ni nada, toman la decisión en el parlamento de intervenir la universidad. Supuestamente esos "informes" decían que se estaban planeando atentados terroristas en la universidad de San Marcos y La Cantuta; y nunca aparecieron los detenidos. Porque si

³³ En este sentido, la Comisión de docentes separados y cesados da cuenta de un hecho concreto: “Martha Chávez, Anastasio Vega, Manuel Paredes, Torres y Torres Lara y Martha Martina, el 23 de mayo en la noche, dos días antes de la intervención, se paseaban felices por el patio de San Fernando, inspeccionando su próximo trabajo sucio” (Informe Paredes, 2001, p.3)

³⁴ Frente a este método, la CVSM plantea que “los tres estamento debieron componer la universidad” de manera autónoma y en el marco del Estatuto y las leyes.

³⁵ El título de esta Ley no tiene lógica pues no se puede ampliar algo que aún no existe o que recién va a iniciar.

Inteligencia sabía de ello, ¿por qué no intervino y detuvo a los subversivos, terroristas que estaban vigilados? Nunca se presentó a detenidos.

La ley fue aprobada por 35 votos, por mayoría simple; lo cual es inconstitucional. Para aprobar una ley que modifica una ley orgánica, en este caso la Ley Universitaria, se requería entonces de mayoría calificada, es decir, 41 votos. Una vez aprobada la Ley, esa misma mañana, el 25 de mayo de 1995 la PNP prohibió el acceso de Wilson Reátegui al campus de la UNMSM; eso a pesar de que la ley aún no tenía vigencia.

Lo cierto es que la Ley 26457 había sido diseñada como parte de una política y su respectivo plan; como parte de este, por ejemplo, Martha Chávez se había reunido días antes con Paredes Manrique, Martha Martina y Torres y Torres Lara, según lo señala la Comisión de Profesores cesados y separados. Así, aquel atentado fue la oportunidad que no dejaron pasar para así aprobar la normativa necesaria para ejecutar la política universitaria del régimen. Esto explica la premura e irregularidades que fueron inherentes al proceso de aprobación de esta Ley.

Además, en el colmo de la incoherencia, la Ley 26457 no presenta en ningún artículo alguna alusión al peligro terrorista como su fundamento. En este sentido, la RS que nombró a los miembros de la CORE-SM no argumentó la supuesta presencia terrorista y más bien optó por utilizar como único fundamento a otra de sus excusas, la pugna entre Paredes y Reátegui: “Que, es necesario disponer el inmediato funcionamiento de la respectiva Comisión Reorganizadora, en la búsqueda de una solución adecuada a los conflictos internos que actualmente se ventilan ante el Poder Judicial”.

A) ANÁLISIS DE LA LEY 26457

El primer artículo de esta ley señala esencialmente lo mismo que su título. Aquí debemos resaltar que se delimita o se dirige a la universidad estatal o pública. Además, plantea sus dos objetivos: 1. Regularizar o modernizar su organización y 2. Promover la “más amplia” participación en la elaboración del proyecto de nueva Ley universitaria.

Lo primero a observar es que este artículo vulnera el artículo 92 de la Ley Universitaria 23733 que establece que es la Asamblea Nacional de Rectores el organismo encargado de la reorganización de las universidades que así lo requieran, según criterio de la ANR; para lo cual, además, designaban Comisiones de Gobierno Transitorias. De esto se infiere que el régimen no tenía el necesario control de la ANR para ejecutar esta política.

Según veremos en el análisis del Plan de Trabajo (1996-1997) de la CORE-SM el segundo objetivo simplemente fue obviado. Es decir, en el caso de SM, la Ley se ejecutó

solo en función del primer objetivo; que evidentemente encerraba el objetivo principal del gobierno: reorganizar en función de la política universitaria en marcha.

Como segundo aspecto, este artículo pone un requisito previo a la reorganización de una universidad (estatal): una “ley específica”; sin embargo, esto se contrapone con el artículo 10 pues allí ya se manda iniciar la reorganización de la UNE y la UNMSM, basándose solo en esta Ley.

El segundo artículo manda, en una oración, que “en cada caso la reorganización será conducida en el plazo de 12 meses por una Comisión integrada por cinco miembros designados por Resolución Suprema y se llevará a cabo sin afectar el normal desarrollo de las actividades académicas”. Son tres aspectos que se encuentran aquí: 1. Periodo de vigencia de la Ley, un año; 2. La Comisión, designada por el Ejecutivo, como organismo conductor y 3. No romper la regularidad de las actividades académicas. De los tres aspectos, el principal es el segundo pues implica que el gobierno central tendrá injerencia o una intervención directa en los asuntos universitarios, lo cual implica la violación de la autonomía universitaria.

El tercer artículo, especificando las funciones de conducción, establece que la “la Comisión asumirá las funciones plenas de gobierno, dirección, gestión y administración de la universidad y dictará las normas y ejecutará las acciones correctivas que requiera el proceso de administración para cumplir sus fines a plenitud”.

El cuarto artículo manda que “el Presidente de la Comisión de Reorganización, ejercerá las atribuciones y funciones que corresponde al Rector y a la Comisión en pleno³⁶, las que competen a la Asamblea y el Consejo Universitario. Para tal efecto, el Rector y los Vice Rectores cesan en sus cargos y los miembros integrantes del Consejo y de la Asamblea Universitaria, dejan de ejercer sus funciones. La Comisión podrá designar a Decanos y Jefes de Departamentos Académicos interinos, durante el tiempo que dure la reorganización”. De los tres aspectos presentes, el principal es el primero porque significó que las prerrogativas más altas del gobierno universitario, las de la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, se pasaban a concentrar en una persona; así pues, estamos ante una extrema concentración del poder. Al respecto, profundizaremos el análisis en el siguiente acápite.

³⁶ Estas atribuciones del presidente de la CORE “disminuyeron”, un año después, con el art. 3 de la Ley N° 26614: “El presidente de la Comisión de Reorganización ejercerá funciones y atribuciones que corresponden al Rector, la Comisión en pleno, las que competen a la Asamblea y Consejo Universitario...”.

Ligando el vínculo que establece el segundo aspecto del artículo segundo y el primer aspecto del artículo cuarto es clarísimo que esta Ley buscó que la Comisión Reorganizadora sea como un brazo fuerte y, por ende, eficaz del régimen fujimorista dentro de las universidades.

El artículo 5, blindando el accionar de las Comisiones Reorganizadoras, estableció que “las decisiones que adopte la Comisión de Reorganización en aplicación de la presente Ley tienen carácter de inapelables; la acción judicial que se interponga contra las Resoluciones de la Comisión tendrán el carácter de contencioso-administrativo y sólo podrán ser interpuestas dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de su notificación o publicación”. Criticando este artículo, la CV-SM (2002) sostiene que

Esta disposición absolutamente violatoria de la Constitución Política, pretendía impedir la iniciación de acciones de amparo en contra de los actos de los interventores, además de suprimir las instancias, que la ley había previsto para las decisiones administrativas de los órganos de Gobierno de la Universidad, afectando el debido proceso, suprimiendo la posibilidad de actuar en el Derecho Común, reduciendo los litigios a los de contenciosos administrativos, entorpeciendo el uso de vías de Derecho laboral y las vías alternas como las Acciones de Garantía, como las de Amparo y habeas corpus contempladas en la Ley 23506 (p. 21).

El artículo 6 establece que “la Comisión podrá aplicar un programa de incentivos al retiro voluntario del personal administrativo y docente así como de exámenes de evaluación y selección para efectos de adecuar los recursos humanos acorde a la nueva estructura orgánica de la Universidad. El personal que resulte excedente será cesado automáticamente, percibiendo sólo los beneficios sociales que le corresponda de acuerdo a ley. El programa de incentivos a que se contra este artículo, así como las demás disposiciones complementarias que se requieran, serán aprobadas por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”. Este artículo legalizaba el despido arbitrario y buscaba la reducción de docentes y trabajadores no docentes y obedece al criterio de racionalización que el gobierno fujimorista desarrolló como parte de la reducción del Estado, en el marco de la implementación del neoliberalismo. Asimismo, esta disminución se ligó con la motivación política de reprimir toda oposición al régimen, lo cual devino en la expulsión de cientos de docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de la UNMSM.

El artículo 7 señala que “al término de sus funciones la Comisión de Reorganización convocará a Asamblea Universitaria Estatutaria para la aprobación del Estatuto y luego convocará a la elección de las autoridades con sujeción a la normatividad aprobada en el nuevo Estatuto y comunicará sus resultados a la Asamblea Nacional de Rectores para los fines consiguientes”. Al respecto, la CV-SM (2002) denuncia que mediante este artículo ya

no solo se quebrantaría el Estatuto, que implica el quiebre de la Autonomía Universitaria, “sino que además se aprobaría un nuevo Estatuto bajo la conducción de un colectivo de gobierno anticonstitucional, corrupto y corruptor” (p. 22).

El artículo 8 manda que “si en el ejercicio de su mandato la Comisión descubre que se han cometido ilícitos penales por las autoridades cesadas o funcionarios de diferentes niveles jerárquicos, pondrá en conocimiento de la Fiscalía de la Nación para las acciones que corresponda”. Este artículo manifiesta el carácter persecutor que se le asignó la Comisión en contra de las autoridades y funcionarios universitarios anteriores a las CORES. En el caso de SM se concretizaría en las denuncias que Paredes desarrolló contra la Comisión que lo investigó y las ex autoridades.

El artículo 9 manda que se dejen “en suspenso la Ley No 23733 en tanto se oponga al cumplimiento de la presente Ley y deróguense las demás disposiciones legales que limiten o impidan el cumplimiento de la presente Ley que entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario El Peruano”. A esto, la CV-SM (2002), lo caracteriza como abuso del derecho.

Finalmente, el artículo 10, contraponiéndose con el artículo 1, manda que “el proceso de reorganización a que se refiere esta ley se iniciará con la Universidad Enrique Guzmán y Valle y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”. El hecho de que este artículo inicie con la intervención específica de la UNE y la UNMSM, incluso contraponiéndose al artículo 1, expresa la urgencia y la premura que el régimen tenía para reorganizar ambas universidades.

B) ANTECEDENTES DE LA LEY 26457

Los antecedentes legales inmediatos de la Ley 26457 es el Decreto Ley Nro. 25798 que declara en reorganización la UNFV y fue publicado el 28 de octubre de 1992³⁷ y la Ley Nro. 26313³⁸, dada el 27 de mayo de 1994.

El DL Nro. 25798 estuvo dirigida a la Universidad Nacional Federico Villareal (UNFV) y, al igual que la 26457, comprendió un proceso de reorganización conducida por una Comisión Reorganizadora³⁹, la cual disolvió y sustituyó en sus funciones a los órganos de gobierno colegiados establecidos por la Ley Universitaria 23733 y mandó se disminuya el

³⁷ A su vez, el antecedente inmediato de esta Ley es el Decreto Ley N° 25463 que, interviniendo y vulnerando la autonomía universitaria de la UNFV, mandó que una Comisión Investigadora Ad-Hoc investigue sobre el ámbito administrativo, los procesos de admisión, certificación y titulación de esta universidad.

³⁸ Esta ley declaró en reorganización a la universidad privada San Martín de Porres. Al comparar esta ley con la Ley 26457, es evidente que aquella también sirvió como molde para esta.

³⁹ Sus miembros se nombraron por Resolución Suprema Nro. 524-92-PCM del 30 de octubre de 1992.

personal docente y administrativo mediante programa de “incentivos” y de acuerdo a la nueva estructura orgánica de la universidad. Asimismo, debido a que el DL 25798 solo facultaba una vigencia de 180 días a la CORE-UNFV, el gobierno central emite la Ley N° 26180 el 7 de mayo de 1993 y la Ley N° 26402 del 23 de noviembre de 1994, las cuales amplían la intervención por medio año y por dos años, respectivamente.

Considerando la intervención de la UNFV, la USMP y las leyes respectivas, consideramos que el gobierno fujimorista ya tenía la experiencia política y legal en la intervención de universidades peruanas mediante comisiones reorganizadoras como para emitir la Ley 26457 del 25 de mayo de 1995, la cual tiene un carácter más ambicioso y profundo pues además de incorporar los mismos criterios que la Ley 26313 y el Decreto Ley 25798, normaliza, sistematiza y dota de una Ley base para futuras intervenciones a la política interventora mediante Comisiones Reorganizadoras.

En base a su experiencia en la UNFV, el gobierno fujimorista también prolongó reiteradamente los procesos de reorganización de las demás universidades utilizando leyes anuales (principalmente). Para el caso de la UNMSM y la UNE Ley 26457 fue ampliada por las Leyes N° 26614 (mayo de 1996), N° 26797 (mayo de 1997); posteriormente la Ley N° 26880, del 26 de noviembre de 1997, amplía “el plazo del proceso de reorganización de todas las universidades, sin excepción, que se encuentran bajo este régimen hasta la promulgación de la nueva Ley Universitaria”; y, finalmente, la Ley N° 27366 del 4 de noviembre de 2000 mandó que cesaran todas las Comisiones Reorganizadoras, que para entonces llegaron a ser seis⁴⁰.

C) EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LA LEY 26457 O SOBRE LA EXCUSA ESTATAL PARA INTERVENIR

El sustento político y jurídico de esta política interventora mediante Comisiones Reorganizadoras se puede encontrar en lo planteado por el Tribunal Constitucional en sus sentencias con expediente N° 012-96-I/TC⁴¹ y N° 323-97-AA/TC⁴² en las cuales declaran infundadas la acción de inconstitucionalidad y la acción de amparo que presentaron ante

⁴⁰ La UNFV (Lima) fue intervenida mediante la Ley 25798, dada el 28 de octubre de 1992. La UNHV (Huánuco) fue intervenida mediante la Ley N° 26493, dada el 30 de junio de 1995. La UNFSC (Huacho) fue intervenida mediante la Ley N° 26855, dada el 5 de setiembre de 1997. La UNSLG (Ica) fue intervenida mediante la Ley N° 27058, dada el 1 de febrero de 1999.

⁴¹ Cuya sentencia fue emitida el 24 de abril de 1997. Fue dada cuatro meses después de que se presentara la acción.

⁴² Cuya sentencia fue emitida el 14 de mayo de 1998. Fue dada un año y cuatro meses después de que se presentó la acción. Lo importante de esta sentencia, para los fines de nuestra investigación, es que prueba que Wilson Reátegui y un grupo de docentes de la UNMSM sí rechazaron y, en consecuencia, demandaron ante el Poder Judicial, llegando a presentar una Acción de Amparo ante el TC, a la Comisión Reorganizadora. Sin embargo, esta Acción fue declarada infundada debido a que no correspondía al trasfondo de su denuncia y que, en todo caso, ya se había resuelto con la sentencia N° 012-96-I/TC como infundada la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 26457, la cual dota de prerrogativas a la Comisión Reorganizadora.

esta instancia un grupo de 32 congresistas y un grupo de asambleístas de la UNMSM, respectivamente.

De ambas sentencias, es la primera (N° 012-96-I/TC) la que nos brinda el contenido más importante y suficiente para comprender tanto la posición legal a favor de la intervención pro reorganización como la posición en contra.

En efecto, los argumentos de la posición contraria a dicha intervención, representada por el grupo de congresistas argumenta que 1. La Ley 26457 viola la autonomía universitaria, reconocida por el artículo 18 de la Constitución: “Cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes”. En este sentido, apuntan principalmente la denuncia contra el artículo 2 de la Ley 26457, la cual nombra por Resolución Suprema a una Comisión Reorganizadora, porque viola la autonomía de gobierno: la cual confiere a la universidad la potestad de elegir a sus autoridades.

La posición contraria fue sustentada por el Congreso, mediante Jorge Campana Ríos. Lo esencial de esta postura señala que las universidades:

[N]o eran centro de formación de profesionales competentes, sino que difundían la cultura de la violencia, y en ellas no había creación intelectual o artística, ni se realizaba investigación científica ni técnica. Los estudiantes y los propios ciudadanos han sido testigos de la forma como fueron conducidas las universidades nacionales durante los años precedentes al inicio de la reforma. En este contexto, ¿de qué autonomía normativa de gobierno, académica, administrativa o económica podríamos hablar? ¿quién normaba la vida universitaria? ¿quién gobernaba las universidades? ¿quién enseñaba en las universidades?...el Estado tuvo que restablecer el orden y la confianza; para que libres de violencia puedan emprender el camino de retorno a la normalidad, y así enderezar sus esfuerzos hacia la construcción de organizaciones de formación profesional y cultural acorde con las exigencias de la vida contemporánea.

Vistas ambas posiciones, el TC plantea varios argumentos como fundamentos de su fallo, los cuales hemos ordenado de la siguiente manera:

El principal y primer argumento o el meollo de la argumentación que presenta el TC es el siguiente: las universidades públicas no estaban desarrollando la personalidad humana ni fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales como la dignidad humana, tampoco estaban cumpliendo con desarrollar la ciencia y tecnología. Plantean esto apelando a artículos de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Constitución Política del Perú⁴³.

Este meollo de su argumentación le sirve, lógicamente, como base para los otros argumentos y, en consecuencia, para su fallo.

El segundo argumento es que los centros de estudios estatales se encontraban en un “caos de orden administrativo, académico e institucional”⁴⁴. Así, en relación con el primer argumento se plantea que, en consecuencia, las universidades públicas actuaban de manera inconstitucional: en un “marco legal distinto a la Constitución y la propia Ley Universitaria”. Sobre esto, se debe dejar claro que no adjuntan ninguna prueba concreta de lo que señalan; se limitan a plantear generalidades, al igual que Campana.

El tercer argumento señala que existían precedentes legales que “no han sido cuestionadas no obstante tener objetivos similares a las leyes 26457 y 26614”. Se está refiriendo a los Decreto Ley N° 25463 y Nro. 25798 de 1992, con los que se intervino y reorganizó la UNFV. Refutando este argumento, la CV-SM (2002) señala que “para justificar la constitucionalidad de las normas demandadas, [el TC] se basa en otra norma inconstitucional” (p.27).

El cuarto argumento, basándose en su argumento principal, señala que “la mencionada autonomía universitaria será protegida, siempre y cuando, no desnaturalice ni desconozca los preceptos constitucionales y tratados internacionales que se han citado”. En consecuencia, señalan que:

*[E]ncontrándose las universidades nacionales Mayor de San Marcos y Enrique Guzmán y Valle, funcionando en un marco legal distinto a la Constitución Política del Estado y a la Ley Universitaria, resultaba necesario, en aplicación del artículo 103° de la Carta Magna y la propia ley universitaria dictar leyes especiales, **porque así lo exigía la naturaleza de violencia y de desgobierno institucional que imperaba en dichos centros de estudios**; como fue el caso de las Leyes 26457 y 26614 materia de la presente inconstitucionalidad; éstas normas no atacan ni violan **la autonomía universitaria, la misma que ya había sido vulnerada de hecho**; 10 que pretenden esas normas de carácter coyuntural y por consiguiente de naturaleza temporal, es restablecer el orden, para que la vida de la Universidad Peruana discurra por el cauce de la constitucionalidad.*

En este sentido, la CV-SM (2002) denuncia que el TC no fundamenta “con evidencias como se habría producido tal desnaturalización” (p.27).

⁴³ Sobre este argumento, la CV-SM sostiene que no se ha “establecido que en el caso de la UNMSM el problema fuese de esa naturaleza” (p. 26).

⁴⁴ Acá es necesario recordar el papel que desarrolló Paredes Manrique en la desestabilización de la UNMSM. Sin embargo, ese estado no se puede calificar como de “caos reinante”

El quinto argumento señala que se violó el inciso c) del artículo 3 de la Ley 23733: “rechazo de toda forma violencia, intolerancia, discriminación y dependencia”. Asimismo, señalan que este inciso “fue el más violado, ubicando a la autonomía fuera de la ley, razón que justificó en última instancia, la aprobación por el Congreso de las normas reorganizadoras”. A esto, la CV-SM (2002) responde irónicamente que se quiere así justificar “la Ley de intervención que con violencia, intolerancia, discriminación y dependencia de una comisión extraña al estatuto de la UNMSM, se apodera de ella” (p. 27).

El sexto argumento se centra en defender el artículo 6, que manda reducir el número de docentes y administrativos, aduciendo únicamente que este artículo tan solo forma parte del “proceso de la reorganización y modernización en que se encuentran inmersas todas las entidades públicas pertenecientes al Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, Instituciones Públicas Descentralizadas, Corporaciones de Desarrollo y Proyectos Especiales, iniciado por el Decreto Supremo N° 004-91-PCM de fecha nueve de enero de mil novecientos noventauno”. Es decir, se trata de sostener algo por el simple hecho de formar parte de algo más general; esta lógica no es fundamento para rechazar una acusación de inconstitucionalidad. En efecto, en el marco de la reestructuración del Estado al ajustarse a los criterios neoliberales se despidieron miles de trabajadores estatales lo cual vulneró derechos laborales reconocidos incluso por instancias internacionales.

El séptimo argumento parte por apelar al art. 5 de la Ley 23733 (“las universidades nacen o son suprimidas sólo por ley”) para plantear que así como la Ley puede suprimir universidades también puede reorganizarlas “bajo el principio legal de quien puede lo más puede lo menos”. Y, siguiendo esta lógica perversa⁴⁵, califica como una “medida más benigna” a la leyes que mandan reorganizar las universidades.

Criticando la primera parte del séptimo argumento, la CV-SM (2002) dice que “el TC, en su afán justificatorio, llegó a sostener en su sentencia, la reedición de la Ley del más fuerte, al fundamentar la sentencia en un llamado principio legal de quien puede lo más puede lo menos”. Nosotros, criticando la segunda parte del séptimo argumento, señalamos que el TC está valiéndose de una idea que está fuera de todo razonamiento jurídico y científico al invocar a la “benignidad”, lo cual, según la DRAE hace referencia a lo benévolo,

⁴⁵ Utilizando esta lógica se podría decir que así como el Estado tiene como fin la defensa de la persona humana (“lo más”), podría prescindir de esa defensa (“lo menos”).

piadoso o suave. ¿Acaso las leyes se dan de acuerdo a la benevolencia o malignidad de los gobernantes? Pues así parece funcionar la lógica utilizada por el TC en este argumento.

Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano, miembros del TC, añaden dos argumentos: había un “estado de caos reinante en ellas [las universidades]” y que “debe tenerse en cuenta, igualmente, que las autoridades universitarias en funciones al momento de declararse la reorganización, aceptaron tal situación jurídica, al no hacer uso del sistema de protección que la Constitución y las leyes conceden”⁴⁶; y, tratando de justificar su fallo, plantean un sinsentido: se debe “impedir [que la intervención] se convierta en permanente, lo cual resultaría inconstitucional en caso de producirse”. Es decir, si la intervención dura un año o dos no es inconstitucional, pero si dura más sí lo es. Siguiendo esta lógica podríamos razonar que retener por la fuerza a una persona por un día o dos no califica como delito de secuestro, pero al retenerlo por cuatro o cinco días sí califica como tal.

En base a estos argumentos el TC Falló “declarando INFUNDADA la acción de inconstitucionalidad interpuesta por treintidos señores Congresistas de la República...”⁴⁷.

Antes de dejar el análisis de esta pugna jurídica consideramos importante señalar que existen dos argumentos jurídicos más a favor de la posición contraria a la intervención. La primera, a la que no se hizo referencia en la argumentación de los congresistas, es que, más allá de la veracidad o no de que la naturaleza de las universidades públicas se había desviado del cauce constitucional, existía un inciso de la Ley Universitaria 23733 que se debía aplicar en tales situaciones pues justamente para ello se creó; nos referimos al inciso k)⁴⁸ del art. 92, que manda lo siguiente:

“[es una] atribución específica e indelegable de la Asamblea nacional de Rectores...k) conocer y resolver de oficio y en última instancia, los conflictos que se produzcan en las Universidades Públicas o Privadas⁴⁹ del país relativos a la legitimidad o reconocimiento de sus autoridades de gobierno como son: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario, Rector, Vicerrectores y Comisiones Organizadoras de las Universidades de reciente creación que afecten el normal funcionamiento institucional. Las resoluciones que expida son de observancia obligatoria por todas las Universidades y se ceñirán al siguiente procedimiento:...”

Seguidamente se establece que la ANR, mediante su Consejo de Asuntos Contenciosos, elabora un Informe en el que se proponen las medidas para resolver el

⁴⁶ Consideramos importante investigar por qué el entonces rector Wilson Reátegui Chávez hizo entrega inmediata del cargo. ¿Fue una actitud temerosa de la dictadura, un acto conciliatorio para así conservar algo de poder y no granjearse de mayores desventajas o ambas cosas?

⁴⁷ Firmaron: Núgent; Acosta Sánchez; Aguirre Roca; Díaz Valverde; Rey Terry; Revoredo Marsano; García Marcelo.

⁴⁸ Inciso agregado por la Ley N°24387 del 6 de diciembre de 1985.

⁴⁹ Como señalamos arriba, el gobierno central había intervenido la USMP en 1994 por lo que ya había vulnerado también este inciso. Además, en un intento del gobierno fujimorista por volver al cauce legal dado por la Ley 23733 y de manera redundante, emite la Ley 26490 el 28 de junio de 1995 por la cual faculta a la ANR a intervenir las universidades privadas que “presenten graves irregularidades académicas, administrativas, normativas o económicas”.

conflicto, las cuales pueden implicar el cese definitivo de las autoridades de gobierno, la designación de una Comisión de Gobierno Transitoria, la convocatoria a elecciones, entre otras medidas aplicables según el caso.

Visto este recurso legal, es evidente que el gobierno central lo quebró o simplemente lo obvió debido a que la ANR reconocía como único rector a Wilson Reátegui. Es decir, no se actuó de acuerdo a Ley.

El segundo argumento jurídico y lógico tiene como raíz lo que sostiene la CV-SM (2002)⁵⁰: “El TC, en el caso de la acción de amparo interpuesta contra la Ley Nro. 26313 que dispuso la intervención de la Universidad San Martín de Porres, tuvo diferentes criterios, allí sostuvo que no puede intervenir las universidades en resguardo de la Autonomía Universitaria, que dispone que las universidades se rijan por sus estatutos...EL TC se ha contradicho y la responsabilidad de sus miembros aún no ha sido procesada” (p.28). En efecto, el TC se ha contradicho por completo, cayendo incluso en un error lógico.

D) INTERPRETACIÓN

Para facilitar la interpretación de los resultados del análisis, a continuación presentamos la síntesis de la concepción de los interventores y su correspondiente razonamiento legal: ***la universidad tenía una naturaleza violenta (subversiva) debido a las asignaturas impartidas y la politización de los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes; esto implicaba un “estado de caos reinante”⁵¹, motivo por el cual las universidades públicas no estaban desarrollando la personalidad humana ni fortaleciendo el respeto a los derechos humanos, lo cual, a su vez, de manera inherente implicó la violación de la autonomía universitaria. Por estas razones, la universidad de este tipo***

⁵⁰ La Comisión de la Verdad de San Marcos (2002) culmina su análisis señalando que “la UNMSM no se ha preparado, eficientemente, para la eventualidad de lo que ha sido su constante histórica, ser intervenida y que la intervención quede impune”, frente a lo cual propone que **se “debe diseñar un sistema de emergencia interna reflejada normativamente en su Estatuto, por el cual ante cualquier intento de intervención que afecte su autonomía, los estamentos de la UNMSM deben entrar a un sistema de desobediencia absoluta, para lo cual debe contar con un sistema organizado de defensa en fueros internacionales**, debiendo elegirse para cada periodo de gobierno un comité de vigilancia de la autonomía institucional, encargado de organizar la resistencia a la intervención, coordinando con organismos de la sociedad civil nacional y organismos internacionales, así como la difusión mediática de los hechos que violentan la autonomía de la UNMSM”. Y, refiriéndose a la CORE-SM, “proponemos la creación de una Comisión encargada de la revisión de los actos administrativos que deben ser declarados ineficaces; debe asimismo determinar responsabilidades”; finalmente, con una convicción democrática sostiene que “Actuar corruptamente en agravio de la UNMSM debe tener un costo, la Universidad debe demostrar su decisión de que una interrupción, generada desde cualquier organización Pública o Privada, no se repetirá. Debe decir que nunca más será fácil e impune violar la Universidad, pues los derechos institucionales no reposan en las normas, sino en la convicción de los hombres y mujeres que la forman” (p. 29).

⁵¹ Para el caso específico de San Marcos, esta idea del “caos reinante” se concretizó en lo logrado por el grupo liderado por Paredes y fue utilizada como único argumento de la Resolución Suprema que designó a los miembros de la CORE-SM: “Que, es necesario disponer el inmediato funcionamiento de las respectiva Comisión Reorganizadora, en la búsqueda de una solución adecuada a los conflictos internos que actualmente se ventilan [sic] ante el Poder Judicial”. Este considerando expresa además que el Ejecutivo violó la independencia de poderes al asumir funciones que le correspondían al PJ, tal como lo denuncian los asambleístas de la UNMSM ante el TC; se puede revisar en la sentencia N° 323-97-AA/TC.

es inconstitucional y, en consecuencia, es necesaria su reorganización para así “restaurarla”, “enderezarla” o encauzarla constitucionalmente.

Esta concepción sobre la universidad pública fue generada y difundida por el Estado incluso antes de que llegara el gobierno fujimorista. Esta, lógicamente, se correspondía con la política contrasubversiva que desarrollaba el Estado y sus sucesivos gobiernos. En este sentido, como vimos en las bases teóricas, en los años finales de la lucha contrasubversiva el gobierno de Fujimori ya había emitido los Decretos Legislativos N° 700, N° 739 y N° 726, todos de noviembre de 1991, y la Ley N° 25416 del 12 de marzo de 1992. En conjunto esta normativa formaba parte de la política contrasubversiva en el ámbito universitario que buscaba reajustar la formación de los docentes, el contenido teórico-académico dado a los universitarios y reprimir toda participación política de estos al presionarlos mediante expulsiones a limitar férreamente su actividad al ámbito del salón de clases.

Una vez finalizado prácticamente el conflicto armado (1994), el Estado, que había concentrado más el poder en el Ejecutivo mediante el autogolpe de 1992, evolucionó su política represiva a una de baja intensidad, siguió privatizando la universidad peruana y profundizó el reajuste académico-teórico. Además, a estas tres políticas, las resguardaba, en algunas universidades, la presencia permanente del Ejército mediante Bases Militares (1991-1998). Este era el conjunto de políticas que el gobierno fujimorista venía aplicando en la UNMSM cuando emitió la Ley 26457, razón por la cual se profundizó el control y ajuste de esta universidad.

Este conjunto de políticas aplicadas a la UNMSM buscó justificarse en la supuesta presencia de elementos subversivos armados, lo cual correspondía a la táctica de “contrasubversión sin subversión” (CVR, 2003) que el gobierno venía desarrollando como parte de su estrategia para perpetuarse y lograr la hegemonía para así continuar con el ajuste de la sociedad peruana al sistema neoliberal.

Por estas razones, el Estado -del cual es parte el TC-, dirigido por el gobierno fujimorista, priorizó sus objetivos políticos y económicos y, en consecuencia, violó las leyes y los inherentes derechos humanos que decía defender.

Esta política de intervención a las universidades fue también aplicada por las dictaduras militares en Chile y Argentina. Asimismo, ambas tenían como base la concepción de que las universidades eran “centros de difusión marxista” (Errázuriz, 2017, p. 2) o de adoctrinamiento subversivo, por lo cual “‘el problema universitario’ quedó subsumido al problema político-ideológico de la lucha contra la ‘subversión’ en el ámbito de las Universidades Nacionales” (Seia, 2018, p. 199). En consecuencia, en el caso del Chile bajo

Pinochet, el 1° de octubre de 1973 se designaron a “rectores-delegados en cada una de ellas. Estos rectores eran representantes de la Junta Militar en las casas de estudio superiores, con lo cual se borraba de un plumazo la autonomía universitaria” (Errázuriz, 2017, p. 2). Y en el caso de la Argentina bajo la Junta Militar, “la UBA fue intervenida en marzo de 1976 quedando bajo el control del Capitán de Navío Edmundo Said. A los pocos meses, en agosto de ese año, se inició la etapa de gestiones a cargo de civiles pero con la designación y el control permanente del Ministerio de Cultura y Educación y el Poder Ejecutivo Nacional” (Seia, 2018, p. 199).

Estos autores, enfocando de manera histórica la intervención y sus consecuencias, sostienen además que la política que controló y ajustó la universidad buscó eliminar lo desarrollado por la Reforma Universitaria: autonomía, cogobierno, gratuidad, libertades políticas y académicas.

Finalmente, con el análisis realizado a la Ley 26457, su relación con la política general y universitaria desarrollada por Fujimori y la semejanza que esta tuvo con la política de las dictaduras militares de Chile y Argentina, podemos sostener que la Comisión Reorganizadora de San Marcos vulneró la autonomía universitaria por haber sido impuesta por el Estado; por ende, tuvo una raíz autoritaria.

3.1.2. LA CONCENTRACIÓN DEL PODER EN LA CORE-SM O SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL COGOBIERNO UNIVERSITARIO

3.1.2.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA CORE-SM

Con el advenimiento de la Reforma Universitaria, el gobierno de la universidad peruana en el S. XX, ha tenido un movimiento pendular entre el cogobierno (estudiantes y docentes) y el gobierno exclusivo de los docentes. Cuando el gobierno fujimorista emitió la Ley 26457 (1995) regía la Ley Universitaria 23733 (1983) y el Estatuto de San Marcos (1984), los cuales sí establecían claramente el gobierno conjunto de docentes y estudiantes: el cogobierno. Este cogobierno se concretizaba en tres organismos centrales: la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno; el Consejo Universitario y los Consejos de Facultad.

En este sentido, si el acápite anterior nos sirve para ver cómo se ha vulnerado la autonomía de la UNMSM, este acápite nos servirá para ver cómo se vulneró el cogobierno y se concentró el poder en la Comisión Reorganizadora de San Marcos.

En el caso de la UNMSM, la CORE fue constituida⁵² por el mismo grupo de personas que, además de haber desarrollado una campaña de desestabilización de la universidad, se había, en correspondencia con esta, coludido con el régimen en función de la intervención. Esta colusión implicó, para una parte, mucho poder para este grupo y su correlación y, para la otra parte, la capacidad del Ejecutivo de profundizar su política de control y ajuste de la UNMSM.

A continuación analicemos el papel que cada miembro cumplió en el periodo inmediatamente anterior a la intervención:

Dr. Manuel Paredes Manrique.- Fue el principal agente del régimen en la campaña de desestabilización del gobierno de la UNMSM. Había logrado mantener su control del decanato de San Fernando con el apoyo del Ejército para desde allí liderar la campaña. Sus acciones apuntaron, mediática y judicialmente, contra la autoridad legal del entonces rector Wilson Reátegui Chávez y la Asamblea Universitaria; posteriormente, cuando se hizo

⁵² Mediante Resolución Suprema N° 150-95-PCM del 26 de mayo de 1995. "Art. 1.- Nombrar como miembros de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM, con las atribuciones a que se refiere la Ley 26457, a los siguientes catedráticos de esta Universidad:
-Dr. Manuel Paredes Manrique, Decano de la Facultad de Medicina, quien la presidirá.
-Dr. Gabriel Huerta Díaz
-Dr. Aníbal Torres Vásquez
-Ing. Leoni Silva Rojas
-Dr. Jaime Descailleaux Dulanto"

del poder, también enjuició a la Comisión que lo investigó y a la Comisión de Gobierno de Emergencia de San Fernando.

Dr. Jaime Descailleaux Dulanto.- Presidió el Comité Electoral de San Marcos desde el 24 de marzo hasta el 10 de agosto, fecha en la que se le censuro por emitir resoluciones sin consulta al pleno del CE; posteriormente se retiró junto al grupo que, al ser la minoría (4 de 9) dentro del CE, sabía que los objetivos de su correlación estaban truncados de seguir por la vía legal. Por esto, pasaron a desconocer al CE y, junto a Paredes y su “sindicato de ex decanos”, representaron el grupo más activo en pro del quiebre de la estabilidad del gobierno en San Marcos.

Dr. Gabriel Huerta Díaz.- Era el decano encargado de la Facultad de Educación; teniendo ese cargo asistió a la supuesta “Asamblea Universitaria” organizada por Paredes y reconoció como rector al Dr. José Vásquez Rojas, quien había sido nombrado como tal en dicha reunión. Por esta falta de sujeción a la autoridad legal, el rector Wilson Reátegui lo ceso del cargo el 17 de octubre.

Ing. Leoni Silva Rojas.- Era ex decano de la Facultad de Ciencias Administrativas. Con el objetivo de seguir manteniendo su poder el 01 de diciembre de 1994 se posesionó “en forma violenta de los ambientes de la Facultad de Ciencias Administrativas, usando incluso armas de fuego; y en complicidad con un grupo de personas ajenas a la Universidad arrojaron dos petardos de dinamita al local donde venía sesionando el Consejo de Facultad...”⁵³ por lo que la AU en sesión del 2 de diciembre acordó suspenderlo de sus funciones. Fue parte del “sindicato de ex decanos”.

Dr. Aníbal Torres Vásquez.- Era ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política.

3.1.2.2. LAS PRERROGATIVAS DE LA CORE-SM

Para comprender el altísimo grado de concentración del poder en la CORE-SM, veamos el artículo 4 de la Ley 26457:

El Presidente de la Comisión de Reorganización, ejercerá las atribuciones y funciones que corresponde al Rector y a la Comisión en pleno, las que competen a la Asamblea y el Consejo Universitario. Para tal efecto, el Rector y los Vice Rectores cesan en sus cargos y los miembros integrantes del Consejo y de la Asamblea Universitaria, dejan de ejercer sus funciones. La Comisión podrá designar a Decanos y Jefes de Departamentos Académicos interinos, durante el tiempo que dure la reorganización.

⁵³ RR Nro. 5133-R-94 dado el 5 de diciembre de 1994.

Y, profundizando al máximo esta concentración, se llegó a investir al presidente de la CORE-SM con las prerrogativas del pleno de esta comisión. Esta última investidura fue amainada un año después, con el art. 3 de la Ley N° 26614 al delimitar que “el presidente de la Comisión de Reorganización ejercerá funciones y atribuciones que corresponden al Rector; la Comisión en pleno, las que competen a la Asamblea y Consejo Universitario...”.

La principal condición que implicó la concentración del poder en la CORE-SM fue la eliminación del cogobierno o del gobierno conjunto de docentes y estudiantes mediante los organismos colegiados: Asamblea Universitaria, Consejo Universitario. Solo así, la CORE-SM pudo asumir las prerrogativas de la AU, CU, Vicerrectorados y Rectorado. Pero, este proceso fue profundizado, como veremos, al eliminar también el cogobierno a nivel de las facultades al eliminar los Consejos de Facultad e instituir dos organismos que intentaron ocupar su lugar: el COGESAA y el CONAFA.

3.1.2.3. LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA EN LOS PLANES DE TRABAJO DE LA CORE-SM

A) Lineamientos de política (6 de julio, 1995)

En este documento, la CORE-SM se traza la “revisión de la estructura organizativa de la Universidad a nivel central y de las Facultades, así como de otras unidades orgánicas, con la finalidad de **su reestructuración integral y adecuación a las exigencias del momento**. En tal carácter, para el periodo de reorganización, **se adoptará a nivel central, una estructura de carácter gerencial**, la que hemos creído conveniente dividir en áreas” (p. 6).

Así, desde las semanas iniciales de la reorganización, la CORE-SM había definido una medida que implicaba una reestructuración general y de tipo gerencial; modelo cuya utilización se ampliaba debido a la expansión del neoliberalismo.

Respecto al cogobierno, estableció que debido al término del periodo de representación (un año), el Tercio Estudiantil quedaba disuelta y dicha representación solo se canalizaría “en forma de sugerencias y/o propuestas...a través de los Centros Federados y/o Delgados de Base que se acrediten ante los respectivos Decanos” (p.10). Esta fue uno de los elementos que utilizaron como excusa para eliminar de manera fáctica todos los Consejos de Facultad; cuestión que veremos más adelante.

B) Plan de Reorganización (1996-1997)⁵⁴

En este Plan, la reestructuración del gobierno es abordada en la “Tercera línea de modernización: Fortalecimiento de la gestión universitaria y reordenamiento administrativo”, en la cual se definen las siguientes metas el **1) Aprobar una nueva estructura administrativa del organismo central y 2) Aprobar una nueva estructura administrativa a nivel facultativo.**

En este sentido en el acápite “Nueva estructura administrativa”, que forma parte de dicha tercera línea, se plantea como objetivo la redefinición de **“la estructura administrativa central de la universidad bajo los principios de eficiencia y eficacia, concordante con el rol coordinador y normativo que le corresponde”** y, como metas, el 1) elaborar una nueva estructura administrativa central y 2) trasladar funciones de ejecución a los órganos respectivos (Facultades). Para esto, el mecanismo principal, según señalan, sería la designación de una Comisión de expertos en racionalización, la cual debía elaborar una propuesta.

En este plan, como en todos los elaborados por la CORE-SM, no se plantea la eliminación o reconfiguración de la Asamblea y Consejo Universitarios⁵⁵ (que en el hecho no existían); sin embargo, sí se plantea la eliminación del Consejo de Facultad⁵⁶ para “reemplazarlo” por dos organismos: el “Consejo Académico” y el “Consejo de Gestión”.

En el acápite “Redefinición de funciones del nivel central versus facultades” se observa que su objetivo central es la articulación de las funciones del nivel central con las del nivel facultativo; y el criterio central que utilizan es la centralización. **En este sentido, se asignan mayores prerrogativas al nivel central en detrimento de las facultades, escuelas y departamentos.**

En relación a la gestión financiera se señala que la administración central “centraliza recursos del tesoro y [un] porcentaje del total de recursos propios [y] su ejecución. Control presupuestal general (sic)” y que la Facultad debe controlar sus recursos propios “según normas centrales”.

⁵⁴ Este plan rigió desde junio de 1996 hasta mayo de 1997 y fue aprobado mediante RR Nro. 06469-CR-96 del 4 de octubre de 1996.

⁵⁵ Cuestión que sí es planteada por Paredes en marzo de 1998 –en el Conversatorio organizado por la Comisión de Educación y Cultura del Congreso, comisión cuya presidente era Martha Hildebrant- y en la Memoria 1995-1999 editada por la CORE-SM. En esta propuesta, respecto a la Asamblea Universitaria, desarrolla dos alternativas: 1) la eliminación permanente de la Asamblea Universitaria y 2) que la “Asamblea sea reconvertida en un foro de discusión de política universitaria y proyección de desarrollo, dejando en la práctica de ser un órgano de gobierno y eliminando así el carácter parlamentarista que caracteriza a la universidad peruana” (CORE-SM (Memoria), 2000, p. 150).

⁵⁶ El organigrama que propuso entonces la CORE-SM se puede ver en el Anexo.

Sobre la participación estudiantil a nivel central no plantean la existencia de un tercio estudiantil en el Consejo Universitario sino la de un “representante”; y, crean la figura de la “participación del tercio en el Vice-rectorado de asuntos estudiantiles”. En el mismo sentido, a nivel de Facultad plantean que debe haber un “representante en el Consejo Académico” y, a nivel de Escuela, “representantes en el Comité Directivo de Escuelas”.

En el caso de los convenios y la cooperación, se plantea que la administración central “centraliza y aprueba convenios y actividades de cooperación”.

C) Plan estratégico 1995-1997

Este plan también sintetiza el objetivo de reestructurar la universidad. Además, utilizando un criterio empresarial y no oficial –y hasta delictivo- plantean ligarse con el Congreso mediante un “lobby”. Ambos aspectos se expresan en dos metas:

Meta Nro. 2: “Elaborar, lograr financiamiento y ejecutar dos proyectos: Reforzamiento institucional con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y reestructuración académica y administrativa” (p.39)

Meta Nro. 3: “Identificar y contar con un lobbie (sic) de parlamentarios para la institución” (p. 40)

En relación a los “recursos humanos” se hace explícita la relación entre la nueva estructura y las personas idóneas que debían manejarla:

La UNMSM tiene que ir, poco a poco, implementando las acciones necesarias para incorporar personal altamente calificado como miembros del equipo de gestión-confianza, en las jefaturas generales y en las Comisiones de Gobierno y decanaturas que actualmente son conflictivas o que pueden serlo en el mediano plazo.

Reestructuración Permanente

Según señalaba la CORE-SM, todas las modificaciones de la estructura orgánica de la universidad tenían que ser incorporadas en el nuevo Estatuto de SM y ser elevados como propuesta en la configuración de la nueva Ley Universitaria. Esto implica que las propuestas desarrolladas en sus planes estaban diseñadas considerando su eventual aplicación en todas las universidades públicas.

3.1.2.4. EL PROCESO DE LA REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DEL GOBIERNO DE SAN MARCOS

A) PRIMER PASO

El primer paso de la reestructuración orgánica del gobierno en la UNMSM fue la eliminación de la AU, el CU y los vicerrectorados. Toda la estructura del vértice superior de gobierno quedó copada por la CORE-SM. Por ello, para poder gobernar las actividades universitarias, las dividió en áreas y las encargó a sus miembros. Al Dr. Huerta se le asignó

el área académica de Pregrado; al Dr. Aníbal Torres, el área de Coordinación y supervisión del área administrativa; al Mg. Descailleaux, se le encargó la jefatura de la Oficina General de Investigación y la Coordinación del área de investigación; al Mg. Vásquez Rojas, se le designó Director de la Escuela de Post Grado y la Coordinación del área académica de Post Grado⁵⁷.

B) SEGUNDO PASO

Ya tomado el poder de la administración central, la CORE-SM se lanzó a controlar todas las facultades mediante Comisiones de Gobierno, decanos puestos “a dedo” a cambio de decanos opositores o la ratificación de decanos afines a la CORE-SM. En este sentido, en solo un día, el 2 de junio de 1995⁵⁸, se emitieron catorce (14) Resoluciones Rectorales con las que se disolvieron tres (3) Consejos de Facultad y se designó en su reemplazo una Comisión de Gobierno⁵⁹; se designaron siete (7) nuevos Decanos a cambio de Decanos que o bien habían sido elegidos por su Consejo de Facultad o bien estaban como encargados en cumplimiento del Estatuto de SM; y se ratificaron, con la figura de designación, a cuatro (4) decanos que ya habían sido elegidos por sus respectivos CF.

Esta reconfiguración, lejos de ser una medida coyuntural, fue producto de una medida que por ese entonces fue sintetizada de la siguiente manera:

Los Decanos, en su carácter de autoridades designadas por la Comisión como sus representantes en cada Facultad constituyen en forma individual o colegiada, el elemento consultivo y ejecutivo de la Comisión (CORE-SM, 1995, p. 10).

En este sentido, en el mismo mes (junio) se designó al Dr. José Piscoya Arbañil para el decanato de San Fernando; al Dr. Pascual Chávez Ackerman para el decanato de Ciencias Contables, a cambio del decano que había sido elegido en el CF, el Dr. Óscar Salinas Zegarra; al Ing. Pablo Núñez Jara para el decanato de Geol. Min. Met. y Cc. Geog., a cambio de la decana encargada en cumplimiento del Estatuto, Dra. María Lau Luyo. Además, se ratificó, mediante la figura de designación, al entonces decano encargado de la Facultad de Educación: Dr. José Flores Barboza.

Así, considerando toda esta reconfiguración y que en ese periodo existían 19 facultades, la CORE-SM llegó a controlar las máximas instancias de poder de la mayoría de las facultades mediante designaciones “a dedo” de decanos, la instalación de tres Comisiones de Gobierno y la ratificación de decanos afines. En el segundo caso el autoritarismo se extremó porque se eliminaron los Consejos de Facultad tanto fáctica como

⁵⁷ RR Nro. 0677-CR-96 del 26 de enero.

⁵⁸ Resoluciones Rectorales desde el Nro. 1939-CR-95 hasta el Nro. 1952-CR-95 del 2 de junio de 1995.

⁵⁹ Conformada por tres docentes, uno de los cuales era el presidente y a quien se le atribuyeron las prerrogativas de Decano.

formalmente. Y fueron solo seis las facultades en donde el mismo Decano previo a la intervención continuó en el cargo, cinco de los cuales habían sido elegidos por su respectivo Consejo de Facultad. **Es decir, en el primer mes de su gobierno, la CORE-SM cambio a las máximas autoridades de casi el 70% del total de facultades de la UNMSM⁶⁰.** Siguiendo esta política y consolidando la reconfiguración, en octubre de 1995, como consta en la RR Nro. 3806-CR-95, el número de comisiones de gobierno se elevó a cinco (5) y los decanos eran catorce (14). Estos datos expresan el incremento de las CG y, con esto, del control de la CORE-SM.

Además, lo cual es sumamente grave, a estos cambios en el nivel más alto del gobierno de las facultades le sucedió la inmediata eliminación fáctica de todos los Consejos de Facultad⁶¹ y los Comités Asesores⁶². Esta eliminación fáctica se debió al gran poder represivo con el que inicia su gobierno la CORE-SM⁶³. Así, en el hecho, y replicando lo que sucedía a nivel universitario, en las facultades se concentró el poder en el decano. Él hacía y deshacía sin mayor oposición ya que el cogobierno, plasmado en el Consejo de Facultad, dejó de existir sin necesidad de norma alguna.

De manera paralela y en el marco de su instalación en el poder, la CORE-SM, designó docentes de su correlación en las jefaturas de todas las Oficinas Generales. Por ejemplo, el Ing. Leoni Silva Rojas, aliado de Paredes en el “Sindicato de decanos” fue designado como Director General del Centro Preuniversitario. Asimismo, Paredes colocó y rotó entorno a la CORE-SM a los docentes con los que habían trabajado sólidamente durante su estadía en San Fernando. Así, el secretario académico bajo el decanato de Paredes, Dr. José Piscoya Arbañil, pasó a ser el secretario general de la UNMSM; su secretaria administrativa, Dra. Martha Martina Chávez, pasó a ser la asesora de la CORE-SM; y el jefe de la oficina de biblioteca de SF, Oswaldo Salaverry García, pasó a ser el Secretario de la CORE-SM. Posteriormente, en un gesto que demuestra una sólida alianza, Piscoya Arbañil fue designado como Decano de San Fernando a partir del 1° de agosto de

⁶⁰ En un intento de justificar esta masiva reconfiguración decanal, la CORE-SM señala que “El desorden que se había producido en los últimos meses del anterior rectorado era particularmente grave en algunas Facultades; existían, como ya se señaló, incluso dos Decanos en algunas de ellas, por lo cual la primera medida académico-administrativa fue ratificar a quienes habían sido elegidos legalmente y designar Decanos a docentes de alta calificación en otras Facultades; asimismo, se nombró Comisiones de Gobierno en aquellas Facultades en las cuales el cargo de Decano era ocupado irregularmente. Los Decanos ratificados y los miembros de las Comisiones de Gobierno de esa primera etapa desempeñaron un rol fundamental para mantener en marcha las actividades de la Universidad” (UNMSM (CORE-SM), Memoria 1995-1999, 2000, p. 24). Como el lector puede concluir en base a la investigación presentada, este argumento es falso.

⁶¹ Denominamos eliminación fáctica porque se dio en los hechos a pesar de que ni la Ley 26457 ni alguna norma de la CORE-SM disponían la desactivación de los CF.

⁶² Los Comités Asesores son órganos integrados por docentes y estudiantes pertenecientes a una Escuela Académica Profesional y sus funciones son solamente académicas. Este órgano está reconocido en el Estatuto de 1984 de la UNMSM.

⁶³ Por ejemplo, en los primeros días de su gobierno, la CORE-SM anunció un proceso de evaluaciones.

1995 “y hasta tanto el Presidente de la Comisión ejerza el cargo de Rector”⁶⁴. Con esto, Paredes puso fin a la intensa pugna que había impulsado en dicha facultad y pasó a controlarla mediante la imposición de uno de sus más firmes allegados, que funcionaría como uno de sus brazos.

En el puesto de secretario general de la UNMSM al Dr. Piscoya Arbañil lo sucedió el Dr. Marco Antonio Cabrera Vásquez⁶⁵ quien, a su vez, acababa de dejar el cargo de Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal para darle pase al Dr. Roberto Rendón Vásquez⁶⁶, quien más adelante fue incorporado en la CORE-SM.

A esta instalación de las Comisiones de Gobierno la consideramos el segundo paso de la reestructuración orgánica del poder, el cual estuvo ligado a la designación de decanos y al copamiento de la administración central.

C) TERCER PASO

Trece meses después de la intervención y como parte de la reestructuración orgánica plasmada específicamente en el Plan de Trabajo (1996-1997), la CORE-SM, el 2 de julio de 1996, creó⁶⁷ el Comité de Gestión Académico-Administrativo (COGESAA) y el Consejo Académico de la Facultad (CONAFA). **Esta creación implicó la formalización de la eliminación fáctica de los Consejos de Facultad que se había dado desde prácticamente el inicio del gobierno de la CORE-SM.** Este hecho profundizó lo delimitado por la Ley 26457 pues la eliminación del cogobierno ya no se limitó al nivel universitario: Asamblea y Consejo Universitario, sino que abarco al nivel de las facultades de manera oficial. Así, la CORE-SM, quebraba por completo el cogobierno y consolidaba su autoritarismo.

La CORE-SM planteo como sostén de estos nuevos organismos que “la adopción de nuevas formas organizativas exige la puesta en vigencia, a modo de ensayo, de mecanismos que viabilicen una adecuada participación de autoridades desconcentradas para la toma de decisiones”; que “los Consejos de Facultad son instituciones que representan a los docentes pero excluyen la emisión formal de opinión colegiada de autoridades de primer nivel jerárquico”; que “es necesario redimensionar la figura de los Secretarios Académicos y Administrativos para otorgarles jerarquía y autoridad” y que “el

⁶⁴ Resolución Rectoral Nro. 2857-CR-95 del 1° de agosto de 1995.

⁶⁵ RR Nro. 2855-CR-95 del 31 de julio de 1995.

⁶⁶ RR Nro. 2856-CR-95.

⁶⁷ Mediante la RR Nro. 4034-CR-96 del 2 de julio de 1996.

nuevo Estatuto debe incorporar los cambios estructurales introducidos en el diseño de la nueva Universidad”⁶⁸.

Un aspecto central que se encuentra en el primer y segundo argumento es que se busca que las autoridades “desconcentradas” y de “primer nivel jerárquico” participen en la toma de decisiones a nivel de la Facultad; en este sentido, una parte de la concretización de este aspecto se ve ya en el tercer argumento. Sin embargo, en estos considerandos no se encuentra ningún sustento de la eliminación del Consejo de Facultad ni de la creación de dos organismos diferenciados.

Así, para comprender los criterios por los que se crearon ambos organismos los analizaremos en comparación con el único organismo de dirección y gobierno que regía en las Facultades antes de la intervención de la CORE-SM: el Consejo de Facultad. Desarrollaremos este análisis mediante dos aspectos: 1. El carácter de estos organismos y 2. Su composición.

D) CARÁCTER Y COMPOSICIÓN DEL COGESAA Y EL CONAFA

El carácter que se le asignó al CF es de ser el órgano encargado del gobierno de la Facultad, según la Ley Universitaria 23733 (1983) y de ser el “órgano de dirección y gobierno de la Facultad”, según el Estatuto UNMSM (1984). Al COGESAA se le asignó el carácter de ser el “órgano de gobierno, dirección y gestión de la Facultad”⁶⁹ y se le catalogó como “el máximo órgano colegiado de decisión a nivel de Facultad”⁷⁰ y al CONAFA la de ser el “órgano consultivo de la Facultad en tanto se defina el órgano de gobierno”⁷¹ y “teniendo carácter consultivo, sustituye experimentalmente al Consejo de Facultad...”⁷². Un mes después, consolidando su propuesta, la CORE-SM establece que “el COGESAA es el máximo órgano colegiado de dirección y gestión de la Facultad”⁷³ y que es “conveniente” que el CONAFA asuma “las funciones y atribuciones equivalentes a las de Consejo de Facultad”⁷⁴. Finalmente, ya en marzo de 1997 se le asignó al COGESAA y al CONAFA el carácter de “órganos colegiados de decisión y consulta, respectivamente”⁷⁵. Se debe subrayar que la creación de ambos organismos es calificada como “experimental” o “a modo de ensayo” por parte de la CORE-SM.

⁶⁸ Citas extraídas de los considerandos de la RR Nro. 4034-CR-96.

⁶⁹ Mediante la RR que lo creó: Nro. 4034-CR-96 (2-VII-96).

⁷⁰ RR Nro. 4685-CR-96 del 1 de agosto de 1996, la cual aprueba el Reglamento del COGESAA y del CONAFA.

⁷¹ Mediante la RR que lo creó: Nro. 4034-CR-96 (2-VII-96).

⁷² RR Nro. 4685-CR-96 del 1 de agosto de 1996, la cual aprueba el Reglamento del COGESAA y del CONAFA.

⁷³ RR Nro. 5500-CR-96 (5-IX-96), la cual aprueba el nuevo Reglamento del COGESAA y del CONAFA.

⁷⁴ En los considerandos de la RR Nro. 5500-CR-96 (5-IX-96).

⁷⁵ RR Nro. 01327-CR-97 del 12 de marzo de 1997.

Analizando las funciones específicas de ambos organismos nuevos, es evidente que el CONAFA asimiló las múltiples funciones del Consejo de Facultad pero bajo la dirección del Decano. En cambio, el COGESAA se encargó de velar porque la política de la CORE-SM se aplique a nivel de Facultad y de “ejecutar los acuerdos” del CONAFA.

Composición		
COGESAA	CONAFA	Consejo de Facultad
-Decano, preside. -Director de la Unidad de Post Grado -Director Académico -Director Administrativo	-Decano, preside. -Director de la Unidad de Post Grado -Director Académico -El Director Administrativo ⁷⁶ . -Directores de las Escuelas Académico Profesionales -Los Coordinadores de los Departamentos Académicos -Los Directores de Institutos de Investigación -El Director del Centro de Extensión y Proyección Social (CEUPS)	“a) el Decano, quien lo preside; b) Doce (12) representantes de los profesores c) Siete (7) representantes de los estudiantes, los que constituyen el tercio del total de los miembros del Consejo; d) Un representante de los graduados en calidad de supernumerario con voz y voto; e) Los Directores de las Escuelas Académico-Profesionales, Institutos de Investigación, Unidad de Post-Grado y Centros de Extensión Universitaria y Proyección Social, con voz pero sin voto; f) El Secretario General del Centro Federado de Estudiantes de la Facultad con voz pero sin voto; Representantes de los trabajadores no docentes de la Facultad, podrán ser invitados cuando se traten de su competencia, con voz pero sin voto” (Estatuto UNMSM, 1984).

La CORE-SM, creó el COGESAA, de cuatro miembros, para rodear al decano de tres docentes con los cargos administrativos más altos: director administrativo, académico y de posgrado con el objetivo de que estos, al coordinar constantemente, ejecuten ágilmente y con eficacia todas las acciones correspondientes a la reorganización académica, económica y administrativa que la CORE-SM dirigía a nivel general. Así, sintetizando, se crearon los COGESAA para fortalecer el aspecto ejecutivo o “gerencial”⁷⁷ de la política reorganizadora en las facultades; aspecto central en el plan de trabajo de la

⁷⁶ El Director Académico y el Director Administrativo fueron incorporados mediante el nuevo Reglamento del CONAFA, el cual fue aprobado, dos meses después del primer Reglamento, mediante RR Nro. 5500-CR-96 (5-IX-96).

⁷⁷ En efecto, Paredes Manrique señaló en abril de 1999, mediante editado por la UNMSM y titulado “Mensaje del rector al estudiante sanmarquino e Informe del proceso de reorganización mayo 1995-marzo 1999” que el COGESAA “es el equivalente a una ‘gerencia académica’” (p. 41).

CORE-SM debido a la premura basada en el límite que imponían las leyes⁷⁸ que garantizaban tal proceso.

Contrastando la composición el Consejo de Facultad y el CONAFA, la principal diferencia es que este organismo excluye a todos los representantes docentes (12) y estudiantiles (7), al representante de los graduados (1) y al secretario general del Centro Federado (1), los cuales eran miembros permanentes del CF y sumaban 21 representantes elegidos por sus estamentos y gremios; es decir, con el CONAFA, el cogobierno dejó de existir⁷⁹. La segunda diferencia es que este organismo, como contraparte de la eliminación de los representantes, incorporó a los directores administrativo y académico: ambos, miembros del novísimo COGESAA; y, además, incorporó a los coordinadores de los Departamentos Académicos. La tercera diferencia es que en esta nueva composición se elimina la posibilidad de convocar a los representantes de los trabajadores no docentes para tratar temas en las que estén relacionados.

Así, con el CONAFA se concentró el poder en el Decano⁸⁰ y, sus allegados, los directores administrativo y académico, miembros del COGESAA, en detrimento del poder o influencia estudiantil y docente: del cogobierno. Y, si bien se mantienen a todos los directores (de las Escuelas Académico-Profesionales, Institutos de Investigación, Unidad de Post-Grado y Centros de Extensión Universitaria y Proyección Social)⁸¹ e incluso se incorporan a los coordinadores de los departamentos académicos, esto no se hace con el objetivo de ampliar la deliberación y la aceptación de las decisiones sino, al igual que con el COGESAA, solo para mejorar la articulación y coordinación de las directivas en pro de la eficaz ejecución de las políticas reorganizadoras dirigidas por la CORE-SM⁸². En

⁷⁸ Leyes que terminaron teniendo un carácter repetitivo y extensor del proceso de reorganización.

⁷⁹ En el caso del Tercio estudiantil, su eliminación se había dado ya desde mediados de 1995 bajo la excusa del "vencimiento de su mandato". Ya entonces, como salida, al igual que tras la creación de estos dos organismos, se planteó que sea el representante del Centro Federado quien canalice las "sugerencia y/o propuestas" (CORE-SM, Lineamientos de Política, 1995).

⁸⁰ En el Reglamento de Sesiones del Consejo Académico (CONAFA), aprobado mediante RR Nro. 01327-CR-97 (12-III-97), es evidente el alto grado de prerrogativas asignadas a los decanos. Como ejemplo citamos tres artículos: "Art. 10.- Todo miembro de Consejo tiene derecho a tres (03) intervenciones como máximo sobre el mismo tema teniendo una duración de 3 minutos como máximo por cada intervención"; "Art. 11.- Las sesiones tendrán una duración máxima de 3 horas, las cuales podrán extenderse por petición expresa del señor Decano y aprobación de los miembros del Consejo Académico, hasta un máximo de cuatro horas"; Inciso f del Art. 9.- "Tiene prioridad la agenda del día presentada por el Decano".

⁸¹ El Consejo de Facultad ya consideraba como miembros a estos directores, lo cual refuta aquellos argumentos de la CORE-SM que, para sustentar la creación de ambos organismos, señalaba que "los Consejos de Facultad son instituciones que representan a los docentes pero excluyen la emisión formal de opinión colegiada de autoridades de primer nivel jerárquico" (RR Nro. 4034-CR-96); "ellos son los que conocen directamente los problemas y pueden plantear las soluciones y, si son aprobadas, las ejecutarán ellos mismos" (Paredes, 1998; UNMSM, "Memoria", 2000).

⁸² En función a este mismo objetivo es que se debe entender también el siguiente párrafo: "Las facultades eran dirigidas por los Consejos de Facultad integrados por docentes y un tercio de alumnos; por su composición, tanto la mayoría como la minoría, no tenían responsabilidad directa en la marcha académica y administrativa de la Facultad, ya que no los integraban con voz y voto los Jefes de Departamento, Directores de Escuela ni Director de Post Grado" (Mensaje del rector..., p. 41).

consecuencia, el CONAFA también se creó para mejorar el aspecto ejecutivo o “gerencial”⁸³ del proceso reorganizador en las facultades.

Un aspecto central es que los depositarios de esta concentración autoritaria del poder, plasmada en ambos organismos, no fueron elegidos por los Consejos de Facultad o algún órgano representativo, sino por la misma CORE-SM mediante la designación de decanos y todos los miembros de los COGESAA y los CONAFA. En efecto, al igual que el gobierno lo hizo en SM, la CORE concentró el poder de las facultades en los docentes que estaban dispuestos a aplicar su política. Docentes a los cuales, además, les hizo acreedores de “dietas”⁸⁴, denominación cambiada después por “asignaciones especiales”⁸⁵, que llegaban al monto de S/. 800 nuevos soles mensuales en el caso de los decanos y S/. 400 nuevos soles mensuales en el caso de los demás miembros.

Sobre dicha disposición o sujeción, la CORE-SM señala lo siguiente⁸⁶:

Se les ha expresado, en múltiples oportunidades, a las autoridades de cada Facultad, que son los representantes de la Comisión de Reorganización, y que por tanto deben guardar total coherencia con el proceso.

Conclusión.- La UNMSM, en el proceso de reorganización, trabaja en forma coordinada con las autoridades de cada Facultad y con un equipo de funcionarios, todos los cuales están identificados con el Proceso

En este sentido, a modo de balance, Paredes, en su exposición⁸⁷ sobre el tema del gobierno universitario (1998, p. 74) y en la Memoria 1995-1999 (p. 153), señala lo siguiente:

En San Marcos, ya contamos con una experiencia piloto que tiene la conformación que hemos mencionado para los Consejos de Facultad y que hemos llamado Consejos Académicos de Facultad (CONAFA); pero hemos añadido un órgano más ejecutivo al que hemos llamado Comité de Gestión Académico-Administrativo (COGESAA)...La experiencia es muy favorable y nos ha permitido, en gran medida, desarrollar una gestión más ágil

La creación de ambos organismos implicó el cambio de seis decanos; es decir, del 31% del total de decanos (6 de 19) y solo del 23% (3 de 13) de los decanos o presidentes de las Comisiones de Gobierno que la CORE-SM había designado tras una semana de iniciado su gobierno (2 de junio de 1995)⁸⁸. Esto nos indica que la gran mayoría de decanos puestos por la CORE-SM continuaron⁸⁹ y que se ligó esta reestructuración con la mayor expansión

⁸³ Paredes en “Mensaje del rector...” señala que los miembros del CONAFA son “los auténticos conductores de la vida universitaria a nivel de Facultad” y que, por esto, se tuvieron “óptimos resultados” (p. 41).

⁸⁴ RR Nro. 02897-CR-97 del 23 de mayo.

⁸⁵ RR Nro. 03604-CR-97 del 25 de junio.

⁸⁶ En la Sección I: “Revisión de lo actuado” (entre junio de 1995 a julio de 1996) del Plan de Reorganización 1996-1997, publicado en julio de 1996, p. 12.

⁸⁷ Organizado por el Congreso de la República entre marzo y junio de 1998.

⁸⁸ Análisis hecho en base a los Cuadros del Anexo II.

⁸⁹ Esta misma correlación prosiguió y se consolidó (si se toma como una “renovación”) con la designación de los mismos decanos mediante la RR Nro. 02945-CR-97 del 29 de mayo de 1997. Esta re designación se hizo aprovechando la ampliación del proceso reorganizador por dos años, que el gobierno mandó mediante la Ley Nro. 26797 del 24 de mayo de 1997.

de la correlación de la comisión interventora al designar “a dedo” a muchos de los miembros de ambos organismos.

E) INTERPRETACIÓN

Sintetizando, la concentración del poder de la CORE-SM se plasmó, en el ámbito orgánico formal, en una reestructuración orgánica del gobierno que se desarrolló en tres niveles y tres pasos. Con tres niveles nos referimos al nivel central, al nivel de las facultades y al nivel de las escuelas. El primer paso fue dado por el Poder Ejecutivo al crear la CORE-SM y eliminar la AU y el CU, lo cual reestructuró el nivel central. El segundo paso fue dado por la CORE-SM e implicó la eliminación fáctica e inmediata de todos los Consejos de Facultad y Comités Asesores; el “reemplazo” de algunos Consejos de Facultad por Comisiones de Gobierno; la designación “a dedo” de decanos afines; la colocación de docentes afines a la CORE-SM en las jefaturas de las oficinas centrales. Así, este segundo paso implica la instalación y consolidación del control del nivel central y el control fáctico del vértice superior del gobierno de todas las facultades. Finalmente, el tercer paso, dado por la CORE-SM al crear el COGESAA y el CONAFA, implicó la eliminación formal o “legal” (RR) de la totalidad de los Consejos de Facultad y estuvo acompañado de la designación de todos los miembros de ambos organismos en todas las facultades.

Los objetivos y criterios que guiaron todo este proceso se diferencian según los pasos. En el primer paso, dado por el Ejecutivo, el objetivo fue controlar el nivel central para así ajustar la UNMSM en función a la política educativa y universitaria neoliberal. Y los criterios que lo guiaron fueron la excepcionalidad, porque se le asignaba al proceso de reorganización un tiempo limitado; la eficacia, porque se buscó que no se obstruyan los cambios al blindar el proceso legal y militarmente; y la radicalidad, porque se pretendió ajustar todo ámbito y desde la raíz.

El segundo paso, dado por la CORE-SM, tuvo como objetivo la consolidación del poder en el nivel central y del vértice superior del nivel de las facultades. El primer criterio que lo guio fue la agilidad, porque al tener personas de la misma correlación en todos los cargos centrales las directivas se ejecutan rápidamente, lo cual, a su vez, se basa en la voluntad y la inexistencia de observaciones por parte de los funcionarios (debido a la correspondencia de posiciones y al carácter autoritario del régimen). El segundo criterio, ligado al primero, fue la eficacia porque la agilidad tenía que servir para alcanzar a cualquier costo los cambios propuestos.

El tercer paso tuvo como objetivo la consolidación del control total de las facultades en

función a una mayor eficacia y eficiencia. Los criterios que lo guiaron fueron los mismos que al segundo paso, más la eficiencia. La eficiencia porque se consideraba que el gobierno del COGESAA y el CONAFA debía servir para que la facultad y la Universidad logren (eficacia) su ajuste con el mínimo de recursos posible. Un aspecto a resaltar es que la reestructuración a nivel de facultad pretendió ser permanente ya que la CORE-SM planteó que, mediante la nueva Ley Universitaria, ambos organismos debían suplantarse definitivamente al Consejo de Facultad.

En síntesis, el Ejecutivo y la CORE-SM controlaron totalmente la UNMSM para que así su propuesta de universidad pueda implementarse rápidamente. Por esto, guiados por el mero pragmatismo, para el rápido logro de ese objetivo necesitaban la menor objeción u oposición posible, motivo por el cual rechazaban la discusión, debate o deliberación conjunta; las cuales son características de un régimen democrático, régimen que en la particularidad universitaria se concreta en el cogobierno. Por estas razones, la CORE-SM concentró de manera autoritaria el poder al eliminar el cogobierno encarnado en la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, los Consejos de Facultad y los Comités Asesores; además, reprimió a la oposición. Estas características se corresponden con aquel “pluralismo limitado” (la eliminación del cogobierno y la represión de la oposición) que genera aquel “grupo reducido” (CORE-SM), a las que se refiere Linz (1978). En base a estos elementos, sostenemos que el gobierno de la CORE-SM fue autoritario⁹⁰.

Los criterios de gobierno que guiaron esta reestructuración son los mismos con los que se manejan las empresas capitalistas; en este sentido la CORE-SM planteaba la necesidad de una “estructura de carácter gerencial”. Por ello, Germaná, en 1996 ya denunciaba la pretensión de querer “hacer de la universidad una empresa que funcione con los mismos criterios con los que se maneja una empresa capitalista”⁹¹. Contrariamente, **Paredes Manrique (1998) exaltaba dichos criterios al plantear que “la universidad pública debe ser dotada de un sistema de gobierno ágil y eficiente para que pueda competir en igualdad de condiciones con las universidades particulares [-privadas] que funcionan como empresas privadas”⁹².**

⁹⁰ Carácter reconocido incluso por Cabrera (2000), quien fue Jefe de la Oficina de Asesoría Legal y posterior Secretario General de la UNMSM en el periodo de gobierno de la CORE-SM: “No obstante que **la Comisión de Reorganización impuso un estilo autoritario**, teniendo en consideración el caos y desgobierno en que se encontraba la Universidad, aparentemente sólo con dicho estilo podía lograrse revertir la situación a niveles aceptables. Sin embargo, **como ocurre siempre con los gobiernos autoritarios**, la posibilidad de error se incrementa y creemos que se cometieron algunos excesos en la depuración de servidores docentes y administrativos, así como de alumnos” (Cabrera, 2000, p. 121)

⁹¹ Entrevista recogida en la revista Nueva Universidad, Nro. 1, agosto de 1996, p. 6.

⁹² Estos mismos criterios, lineamientos e, incluso, argumentos específicos en relación al tipo de gobierno se encuentran en la propuesta de política universitaria iniciada por la Comisión Nacional por la Segunda Reforma Universitaria (CNSRU) mediante el documento titulado “Diagnóstico de la Universidad Peruana: Razones para una nueva reforma universitaria” (2002) y por la Oficina

Este lineamiento asumido por Paredes y la CORE-SM se enmarca en lo que Brunner (2010) denomina el tipo de gobierno universitario “Emprendedor o de emprendimiento privado” que se caracteriza por:

El generalizado reforzamiento de las posiciones ejecutivas, el ensanchamiento de las funciones gerenciales, la sustitución parcial del poder colegial de los académicos por la autoridad investida en un estrato administrativo superior.

Asimismo, este lineamiento es identificado por Brunner (2010) como el de mayor desarrollo en contraposición, para el caso Latino Americano, al modelo colegial (cuyas características, en relación al gobierno, son la autonomía y el cogobierno). **En este sentido afirma que es evidente que “las formas colegiales de gobierno han sido puestas en cuestión” y que “se está provocando un progresivo traslado de la gobernanza de las universidades públicas hacia el Cuadrante III [emprendedor]”. Con esto y en base a la experiencia peruana se puede afirmar que existe una tendencia generalizada que enrumba la gobernanza universitaria hacia el modelo Emprendedor. Afirmación que se corresponde con Pérez (2011) al señalar que con las comisiones interventoras “existió una suspensión de los derechos democráticos de autogobierno”.**

Así, la concentración autoritaria del poder requirió de una nueva estructura orgánica y de la eliminación del cogobierno; aspectos que se basaron en criterios propios de la tendencia predominante en América Latina y que, a su vez, tienen su raíz en el pragmatismo. Asimismo, no debemos perder de vista que la implantación de este gobierno autoritario de la UNMSM tuvo como objetivo final el ajustar esta universidad al modelo económico neoliberal que entonces se aplicaba con fiereza en toda la región. Es decir, en el caso concreto de la CORE-SM se evidencia que el autoritarismo ha servido como base para la ejecución de criterios de gobierno empresarial neoliberales: agilidad, flexibilidad, máxima ganancia económica, etc.

En este sentido, en el caso del primer país que aplicó el neoliberalismo, Chile, Brunner (1986) señala lo siguiente:

Tres semanas después del golpe de Estado militar del 11 de setiembre [de 1973], el nuevo gobierno intervino las ocho universidades a través de rectores militares que asumieron la plenitud de las atribuciones de gobierno universitario previamente distribuidas entre las diversas autoridades y órganos colegiados...Las reformas estructurales y de gobierno de fines de los sesenta fueron abolidas, y la universidad fue puesta bajo vigilancia permanente.

Asimismo, en el caso de la Universidad de Chile (Errázuriz, 2017), la intervención está totalmente ligada al control de la universidad mediante la centralización de decisiones

de Coordinación Universitaria (OCU), organismo del MINEDU, mediante el Informe “La universidad en el Perú” (2006). Propuesta que finalmente concretó sus aspectos fundamentales mediante la Ley Universitaria 30220 (2014).

y concentración del poder en el "Rector-delegado" de la Junta Militar; este control tuvo como contraparte la disolución de los órganos colegiados, instancias que garantizaban la participación de los estudiantes (25%), funcionarios (10%) y docentes (65%): cogobierno. Además, una vez proscrita la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), las autoridades universitarias fueron generando organismos estudiantiles acordes a sus intereses para lo cual elegían a los estudiantes en base a criterios retrógrados semejantes a los dispuestos en nuestro país mediante el DL 739: estar entre los cinco con más alta calificación de su promoción y no tener sanciones por actividades políticas.

En el marco de las dictaduras militares en Argentina (1976-1983), Seia (2018) sostiene que el "reordenamiento universitario" apuntó principalmente contra la autonomía y el cogobierno e implicó una total concentración del poder en las autoridades nacionales y en sus agentes designados en cada universidad. Así se intervenía de manera directa para sanear y ordenar los claustros: aprobando contenidos, asignaturas, planes de estudio, seleccionando a las autoridades, definiendo la contratación o el despido de los docentes, así como también los criterios para ingresar en cada carrera.

Así, vemos que en Latino América, las dictaduras han sometido a la universidad aplicando primero un férreo control, sea militar o cívico, ligado a la reestructuración del gobierno universitario; y teniendo claro el objetivo de ajustar este centro educativo según los requerimientos del neoliberalismo. Asimismo, así como el Estado sometía la universidad violando la autonomía, las autoridades de esta sometieron a sus miembros negando siempre el cogobierno y reprimiendo toda oposición, aspecto que analizaremos en el acápite siguiente.

3.1.3. LA REPRESIÓN EJERCIDA POR LA CORE-SM

3.1.3.2. LA EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES, DOCENTES Y TRABAJADORES NO DOCENTES O SOBRE LA “DEPURACIÓN” DE LA UNIVERSIDAD

A) EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES

La normativa que permitió expulsar a los estudiantes se compone de tres documentos. La primera son las “Normas para la separación de alumnos con permanencia irregular en la universidad” y fue aprobada por RR Nro. 2701-CR-95 del 14 de julio de 1995. La segunda es la RR Nro. 3540-CR-95 del 19 de setiembre de 1995. Y la tercera es la RR Nro. 3674-CR-95 del 27 de setiembre de 1995.

La primera norma tuvo el mismo espíritu que se encuentra ya en el primer considerando del Decreto Legislativo 739⁹³ de 1991, que dice lo siguiente:

Es obligación del Gobierno cautelar que los alumnos de los Centros de Educación en todos los niveles, y especialmente en las universidades, se dediquen exclusivamente a la formación académica y profesional en armonía con las normas legales vigentes, y evitar que los estudiantes permanezcan indefinidamente en las universidades y se dediquen a actividades relacionadas al terrorismo.

Este espíritu se fundaba en la política contrasubversiva que el Estado desenvolvía entonces. Es decir, la CORE-SM aplicó una táctica contrasubversiva en un periodo en el que la subversión había sido prácticamente derrotada (CVR, 2003).

En este sentido, la CORE-SM, profundizando y endureciendo lo normado por este DL, llegó a establecer el número de años máximo que un estudiante podía permanecer en la universidad con el objetivo de expulsarlos:

2.Los decanos de cada Facultad deberán proceder a revisar la situación de los alumnos que registren matrícula en la Universidad por más de 20 semestres académicos o 10 años. En el caso de los alumnos de la EAP de Medicina Humana se considerará 24 semestres académicos o 12 años.

...

4.El proceso de separación de los alumnos se realizará en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la fecha y se formalizará por Resolución de Decanato, la que será ratificada por Resolución Rectoral⁹⁴

Enseguida, la responsabilidad del proceso basado en esta norma recayó en una Comisión Ad-Hoc⁹⁵ compuesta por el Dr. Silva, el Dr. Descailleaux, el Dr. Huerta, el Dr. Torres y el Dr. Juan Espinoza Blanco, todos miembros de la CORE-SM, a excepción de este último; y los decanos, los cuales, como hemos visto en el capítulo anterior, habían sido

⁹³ Tuvo como objetivo general la represión de toda participación política de los estudiantes al presionarlos mediante expulsiones a limitar férreamente su actividad universitaria al ámbito del salón de clases.

⁹⁴ “Normas para la separación de alumnos con permanencia irregular en la universidad”. Aprobado mediante RR Nro. 2701-CR-95 del 14 de julio de 1995.

⁹⁵ Creada mediante la RR Nro. 2422-CR-95 del 27 de junio de 1995. Fue compuesta por todos los miembros de

designados “a dedo” en su gran mayoría. Establecidas estas condiciones, la efectividad del proceso estaba garantizada.

Así, de manera “efectiva”, en las siguientes semanas cada facultad emitió una Resolución Decanal en las que se presentaban los listados de estudiantes expulsados; estas RD, a su vez, fueron ratificadas mediante Resoluciones Rectorales. Todos los estudiantes expulsados habían ingresado a la UNMSM antes de 1985.

Resolución Rectoral Nro.:	Fecha	Facultad	Cantidad de estudiantes expulsados
2783-CR-95	25 de julio	Educación	20
2858-CR-95; 3963-CR-95; 4690-CR-95	2 de agosto; 17 de octubre y 24 de nov.	Ciencias Biológicas	28
2970-CR-95; 3965-CR-95	8 de agosto; 17 de octubre	Derecho y Ciencia Política	84
2971-CR-95	8 de agosto	Química e Ingeniería Química	60
2972-CR-95	8 de agosto	Ciencias Matemáticas	53
2973-CR-95; 3086-CR-95	8 de agosto; 17 de agosto	Geol., Minas, Metalurgia y CC. Geog.	27
2974-CR-95	8 de agosto	Ingeniería Industrial	62
2975-CR-95	8 de agosto	Ciencias Económicas	188
2927-CR-95	4 de agosto	Ciencias Físicas e Ingeniería de Mecánica de Fluidos	107
2976-CR-95	8 de agosto	Ingeniería Electrónica	61
3045-CR-95	14 de agosto	Ciencias Administrativas	42
3084-CR-95	17 de agosto	Ciencias Sociales	21
3085-CR-95	17 de agosto	Medicina Veterinaria	31
3405-CR-95	11 de setiembre	Psicología	69

Otro aspecto que demuestra el carácter represor es que en todas estas R.R. se adjuntaba un artículo que mandaba “anular para todos sus efectos de los archivos académicos de la Universidad, el ingreso y las matrículas respectivas, así como documentos en trámite de los alumnos separados por permanencia irregular”, disposición que unos meses después fue anulada.

Contabilizando el total de estudiantes expulsados mediante esta política, concordamos con lo planteado por la misma CORE-SM en abril de 1999⁹⁶: **“se separó inicialmente a esos 900 alumnos; de ellos quedaron fuera de la Universidad 566 alumnos llamados “eternos”. Por causas justificadas se reincorporó la diferencia”** (p. 30).

⁹⁶ En el documento titulado “Mensaje del Rector al estudiante sanmarquino. Informe del Proceso de Reorganización de la UNMSM (Mayo de 1995 a Marzo de 1999)” del 5 de abril de 1999. UNMSM.

La segunda norma, la RR Nro. 3540-CR-95 del 19 de setiembre de 1995, prosiguiendo también con el carácter que asentó el DL 739 y llevándolo aún más lejos, estableció las siguientes reglas: 1. Que “se pierde el derecho a ser alumno de la UNMSM al desaprobado un curso en tercera matrícula, cualquiera sea el creditaje del curso o la condición del alumno”; 2. Establece que la primera regla se aplicará retroactivamente, “es decir, que si el alumno lleva repetido un curso dos veces, la matrícula 1996 será su última oportunidad”; 3. “En el caso que se tenga más de tres matrículas en algún curso, se autorizará excepcionalmente y por única vez, una última matrícula en el Año Académico 1996, debiendo aprobar obligatoriamente el curso”; 4. “Los alumnos que deban hacer matrícula en uno o más cursos en segunda matrícula abonarán un recargo del 100% en el monto total de la matrícula...En el caso de realizar tercera matrícula, el recargo será del 100% sobre el monto de segunda matrícula...”; 5. “Aquellos alumnos autorizados excepcionalmente a matricularse de acuerdo al punto 3 abonarán el equivalente a una tercera matrícula”.

La tercera norma, la RR Nro. 3674-CR-95 del 27 de setiembre de 1995, en el mismo sentido que las dos anteriores, estableció las siguientes reglas: 1. “Los alumnos que durante dos semestres o años académicos consecutivos o tres alternados no hayan aprobado por lo menos el 50% del total de créditos en que se matricularon perderán su condición de alumnos en la Universidad”; 2 y 3. Mandan que aquellos estudiantes que no hayan reservado su matrícula en 1995, tienen plazo para hacerlo hasta el 31 de diciembre de 1995; delimitan el tiempo de la reserva a un año o dos como máximo y establecen que aquellos que no reserven su matrícula bajo estas condiciones perderán su condición de estudiantes de la Universidad. 4. Establece que de manera excepcional podrán matricularse aquellos que hasta 1994 no hayan aprobado más del 50% de los créditos en que se matricularon durante dos semestres o años académicos consecutivos o alternados; pero con la condición de que aprueben más del 50% de los créditos en que se matriculen “en cada semestre o año académico hasta la culminación de su carrera. En caso contrario perderán su condición de estudiantes de la Universidad”.

La aplicación de estas normativas se concretizó en Resoluciones Rectorales como la Nro. 02696-CR-97 (89 expulsados de la F. de Medicina) o la Nro. 05860-CR-97 del 30 de setiembre de 1997 en la que se separan a 42 estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por su “permanencia irregular y bajo rendimiento académico”. R.R. en la que encontramos sintetizada la relación entre el porcentaje de créditos aprobados y el tiempo de permanencia en la Universidad de los estudiantes, la cual es considerada, según la normativa revisada, como merecedora de una expulsión. Por ejemplo:

BETETTA SANCHEZ ADOLFO ELIAS

-Ingresó en 1988 (9 años de permanencia en la Universidad), 37% de Créditos aprobados de la Carrera.

-Última matrícula 1993.

-Aprobó 100% (4 créditos) matriculados.

ORTIZ MOZOMBITE PASCUAL

-Ingresó en 1988 (9 años de permanencia en la Universidad), 41% Créditos aprobados de la Carrera.

-Última matrícula 1994.

-Aprobó 0% de créditos matriculados (25 créditos).

Así, estas tres normas configuraron una especie de balanza con la cual la CORE-SM “pesó” el estado académico universitario de todos los estudiantes de San Marcos para así determinar si eran merecedores de continuar o no en las aulas de esta institución. Esto se sistematizó en el Reglamento General de Matrícula de la UNMSM de 1999⁹⁷.

Consideramos que la expulsión basada en estos criterios fue unilateral porque responsabiliza únicamente al estudiante y no a todos los elementos que confluyen en la formación universitaria de este: Universidad, Estado y Sociedad; y, por ende, no apuntó a mejorar, con la participación de la comunidad universitaria, el Estado y la sociedad, la formación de los estudiantes sino, por el contrario, a truncar radicalmente su formación profesional universitaria. En este sentido, esta expulsión fue radical pero en el sentido negativo pues lejos de buscar mejorar desde la raíz la situación académica, cortó de raíz la relación entre estos estudiantes y la universidad. Finalmente, fue inconstitucional porque violó el derecho universal a la Educación.

Por el contrario, la CORE-SM presentó⁹⁸ estas expulsiones como un logro:

La UNMSM, ha eliminado a sus “estudiantes eternos” (sic) y ha dictado normas que progresivamente garantizaran el rendimiento académico de sus actuales estudiantes, preservando en toda circunstancia sus derechos, con causales fundamentadas.

Este método de expulsión tiene sus raíces en la política represiva generada por el Estado en el marco de la lucha contrasubversiva. Por esto se comprende su carácter “depurador” y proceder violador de derechos elementales. Proceder que se corresponde con el carácter autoritario del gobierno de la CORE-SM y con su aspiración mesiánica de

⁹⁷ “Art. 18: El alumno pierde el derecho de matrícula y por lo tanto su condición de alumno de la universidad por:

a) Desaprobar en 3 oportunidades un mismo curso.

b) Registrar 20 o más matrículas semestrales o 10 o más anuales en el caso de carreras de 05 años.

c) Registrar 24 o más matrículas semestrales; o 12 o más anuales en carreras de 6 o 7 años.

d) Los alumnos que durante dos semestres o años académicos consecutivos o tres alternados, no hayan aprobado por lo menos el 50% del total de créditos en que se matricularon en dicho semestre o año académico”

Este RGM fue aprobado mediante RR Nro. 05383-CR-99 del 19 de agosto de 1999.

⁹⁸ En la Sección I: “Revisión de lo actuado” (entre junio de 1995 a julio de 1996) del Plan de Reorganización 1996-1997, publicado en julio de 1996, p. 10.

“refundar” la UNMSM sobre nuevas bases; las cuales, para este organismo, implicaban el aherrojamiento del estudiantado al aula de clases y el consecuente socavamiento de toda su actividad u organización gremial y política. En síntesis, se utilizó lo académico con objetivos políticos.

Reprimiendo a la oposición mediante la expulsión y suspensión

Como parte de su política represiva, la CORE-SM recortó las condiciones en las que los gremios estudiantiles se sostenían; por ejemplo, en la Facultad de Derecho pretendió quitarle su local al Centro Federado de Derecho. Los estudiantes de esta facultad, organizados además en el Comité de lucha contra la intervención en la Facultad de Derecho, lograron impedir en dos ocasiones que la Comisión, en alianza con las FFAA apostadas en la UNMSM, se posesione de dicho local. Frente a esta resistencia, la CORE-SM respondió con un proceso administrativo completamente viciado (Nueva Universidad, 1996) que sancionó con la expulsión definitiva a uno de los dirigentes de la resistencia: Gilbert Violeta, quien entonces cursaba el tercer año de la especialidad.

A raíz de una ardua campaña que movilizó principalmente a las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Letras y que tuvo como su punto más alto a la huelga de hambre a la que se sometió Gilbert Violeta junto con otros 30 estudiantes de distintas facultades, la cual fue ferozmente reprimida mediante su arresto por parte de las FFAA (Nueva Universidad, 1996). Sin embargo, debido a este movimiento de oposición, las CORE-SM se vio obligada a retroceder y cambiar la sanción de expulsión por la de suspensión por un año.

Protesta contra el cobro excesivo

Debido a la protesta estudiantil contra el cobro excesivo por concepto de matrícula del año 1996, se apertura proceso disciplinario contra más de veintitrés estudiantes de las facultades de Letras, Educación, Contabilidad, Geología, Ciencias Sociales y Derecho.

El 5 de agosto la Comisión de Procesos Disciplinarios resolvió vía resolución rectoral Nro. 4808-CR-1996 la expulsión definitiva de 8 estudiantes, la suspensión por un año de 7 estudiantes⁹⁹ y la amonestación de otros 8, todos procesados bajo la acusación por “actos de vandalismo contra las personas y bienes de la Universidad, con motivo del proceso de matrícula de marzo de 1996”. En este documento aparece el siguiente listado de los nombres, matrícula y facultad:

⁹⁹ Mediante la RR Nro. 4809-CR-96 del 5 de agosto de 1996.

Expulsados		
Apellidos y nombres	Nro. Mat.	Facultad
Huarachi Zurita, Edgardo	950639	Derecho
Zeballos Patrón, Fernando	880939	Derecho
Quevedo Vera, Dennys	943383	Educación
Meza Velásquez, René	921219	Educación
Colán Torres, Martín	943629	Sociología
Miranda García, Jorge Javier	862352	Sociología
Obregón Sánchez, Max Alan	932371	Educación
Atauje Valverde, Julio	902112	Contabilidad
Suspendidos		
Apellidos y nombres	Nro. Mat.	Facultad
Domingo López, Elías Augusto	Egresado	Derecho
Huaco Palomino, Marco	900575	Derecho
Meléndez Rosas, Yomar	870632	Derecho
Acevedo Raymundo, Samuel	901450	Educación
Vera Torres, Doris del Rosario	954216	Letras
Sussoni Cáceres, Guillermo	910706	Ciencias Sociales
Gálvez Osorio, Meissie	931971	Letras

Frente a estos actos represivos, en la Facultad de Educación los estudiantes conformaron un Comité de Unidad y Lucha en Defensa de los Estudiantes Procesados; en Ciencias Sociales conformaron la Coordinadora Cultural, que agrupó a talleres, revistas, centros de estudiantes y delegados de base; y el Centro Federado de Derecho impulsó la reactivación de la Coordinadora de Gremios de San Marcos. Así, como parte de este rechazo de estas autoritarias sanciones, la revista Nueva Universidad (agosto de 1996) expuso lo siguiente:

No es la primera vez que la Comisión Interventora, desde que se instaló en nuestra alma máter, recorta los derechos de los estudiantes, se amenaza a estos con la fuerza de las botas y se les abre procesos administrativos por protestar. Primero fueron los llamados “alumnos eternos”, luego fue la frustrada expulsión del alumno Gilbert Violeta y ahora tenemos a 23 alumnos con dictámenes de expulsión, separación y amonestación por protestar por el cobro excesivo de 120 soles por concepto de matrícula.

Pero más allá de lo anecdótico de la medida implementada, Paredes Manrique busca descabezar todo intento de crítica, de organización de los estudiantes contra el modelo de educación privada que quiere imponer en San Marcos.

El caso “Miss señorita sanmarquina”

La CORE-SM, en el marco de las celebraciones del 445° aniversario de la Universidad, organizó el sábado 4 de mayo de 1996 un “concurso de belleza” denominado “Señorita amistad sanmarquina” en el que concursaron estudiantes mujeres de todas las facultades. Este evento provocó el rechazo de los estudiantes que conocían la política autoritaria de la CORE-SM y que eran conscientes de que este tipo de eventos respondía a un intento por ganarse la simpatía del estudiantado menos informado en función a conseguir su apoyo o neutralidad ante el régimen interventor.

Este rechazo se concretó en una numerosa protesta en medio de la realización del evento. Esto provocó la reacción represora de la CORE-SM al someter a “proceso disciplinario” a diez estudiantes acusándolos de “haber vejado y atentado contra la integridad física de autoridades, docentes, empleados y alumnos de la Universidad así como haber destruido bienes materiales de la Universidad el 04 de mayo de 1996”¹⁰⁰. En este sentido, la Comisión de Procesos Disciplinarios emitió su Informe Final en el que sancionó de la siguiente manera:

Nro.	Apellidos y nombres	Facultad	Sanción
1	Sada Carola Kusunoki Rodríguez	Ciencias Sociales	Separación definitiva
2	Meike Carmen Willems Delanoy	Ciencias Sociales	Separación definitiva
3	Carlos Ernesto Luna Wong	Ciencias Físicas	Separación definitiva
4	Víctor Manuel Salazar Arquíñego	Psicología	Separación definitiva
5	Santiago Rafael Morales Erroch	Ciencias Sociales	Suspensión por 02 semestres (año 1997)
6	Elías J. Falla Villegas	Ciencias Físicas	Suspensión por 02 semestres (año 1997)
7	Marco Huaco Palomino	Derecho y CC. Política	Suspensión por 01 semestre
8	David Álamo García	Derecho y CC. Política	Absuelto
9	Rene Meza Velásquez	Educación	Ya separado por otro proceso
10	Martín Colán Torres	Ciencias Sociales	Ya separado por otro proceso

Como vemos, las expulsiones de estudiantes fue una medida represora utilizada de manera ordinaria y masiva. Y fueron dos sus formas de aplicación. La primera es la que utilizó lo académico con objetivos políticos y la segunda la que, de manera más directa, reprimió toda oposición. Ambas, a su vez, se valieron de la estigmatización que tanto los medios de comunicación masivos como las autoridades de San Marcos desarrollaron.

Los procesos de expulsión directa fueron desarrollados por un organismo dependiente de la CORE-SM, la Comisión de Procesos Disciplinarios para Alumnos¹⁰¹ que, para tal efecto, contó con un instrumento legal: el Reglamento de Procesos Disciplinarios¹⁰². Al respecto Vargas (2002a) plantea lo siguiente:

Sobre ellos pendía una tenebrosa “Comisión de Procesos Disciplinarios para Alumnos”, presidida por el Dr. Miguel Ángel Vilca y se encargaba de expectorar a los estudiantes “eternos”, “revoltosos” y de “permanencia irregular” en la universidad. La separación era una sanción administrativa que se imponía al alumno como medida “disciplinaria” en tres casos específicos: por “bajo rendimiento académico”, “permanencia irregular” y “actos de vandalismo”. Y se montaba sumarios procesos administrativos sin derecho a defensa.

¹⁰⁰ RR Nro. 3699-CR-96 del 12 de junio de 1996.

¹⁰¹ Constituida mediante la RR Nro. 2025-CR-96 del 26 de marzo de 1996.

¹⁰² Aprobado mediante la RR Nro. 2305-CR-96 del 16 de abril de 1996.

B) EXPULSIÓN DE DOCENTES

La evaluación y no ratificación como método

El método que la CORE-SM utilizó para expulsar docentes fue la Evaluación. Se utilizó este método porque, convenientemente, este proceso puede determinar de manera legal la no ratificación o separación del docente evaluado. En efecto, solo son dos los resultados generales posibles de la evaluación: la ratificación o la no ratificación. Como guía de este proceso servían el artículo 137, 138 y 139 del entonces vigente Estatuto de la UNMSM:

El artículo 137 señalaba lo siguiente:

La evaluación docente, para la ratificación y promoción, es un proceso permanente e integral que empieza con el informe de los Departamentos académicos u otros órganos de las Facultades y es ejecutada por la Comisión de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de cada Facultad, con citación y audiencia del profesor. En el informe deberá incluirse la opinión de los alumnos que han llevado el o los cursos a cargo del profesor.

La evaluación permanente debe ser integral y abarcará el cumplimiento de las funciones inherentes al docente: enseñanza, investigación, proyección social, capacitación y la labor académico-administrativa, de acuerdo a los coeficientes que el Reglamento precise.

El artículo 138:

Cumplidos los requisitos que especifica el Reglamento respectivo, la Comisión de evaluación y perfeccionamiento docente, propone la ratificación y promoción al Consejo de Facultad para su aprobación, la que debe ser ratificada por el Consejo Universitario.

Y el artículo 139:

La ratificación es el resultado de la evaluación permanente y se realiza cada siete (7) años para el Profesor Principal, cinco (5) años para el Profesor Asociado y tres (3) años para el Profesor Auxiliar. Al finalizar estos plazos se ratifica al profesor en función de los requerimientos establecidos para cada categoría en el Reglamento respectivo.

La no ratificación determina el fin de la carrera docente en la Universidad y debe ser confirmada por el voto aprobatorio de los dos tercios de los miembros del Consejo de Facultad y del Consejo Universitario, respectivamente. Todo ello estará sujeto al proceso administrativo respectivo, con citación y audiencia del profesor.

Sin embargo, la CORE-SM suspendió de un plumazo estos tres artículos. La razón de esta “suspensión” se comprende al analizar las “Normas para la evaluación y ratificación extraordinaria de los profesores de la UNMSM”¹⁰³.

En efecto, la primera diferencia se encuentra en el título ya que con esta se limita el resultado de la evaluación a la ratificación o no y ya no se considera la posible promoción señalada en el art. 137. En los artículos 3 y 4 de las “Normas...” se señala que los docentes deben entregar sus expedientes directamente a la Comisión de Evaluación y Ratificación Extraordinaria, lo cual también se diferencia del art. 137 que señala que la evaluación inicia

¹⁰³ Aprobada mediante la RR Nro. 3505-CR-95, del 18 de setiembre.

con el Informe realizado por el Departamento académico al cual pertenece el docente. El art. 7 de las “Normas...” establece que “la Comisión convocará *si fuera necesario* la presencia del profesor para el esclarecimiento correspondiente”, lo cual se contradice con el art. 137 ya que este establece el carácter *ordinario* de la “citación y audiencia del profesor”. Finalmente, para el caso del art. 137, un aspecto más que fue obviado en las “Normas...” es el de considerarse la *opinión de los alumnos*.

Respecto a las instancias encargadas de evaluar, las “Normas...” establecen en su modificado¹⁰⁴ artículo 11 que en el nivel de Facultades es el Decano quien resuelve a partir del informe elevado por la Comisión de Evaluación y Ratificación Extraordinaria de los Profesores de cada facultad. Esto se diferencia del art. 138 del Estatuto, que establece que es el Consejo de Facultad quien resuelve. De esta manera se concentra el poder en el Decano.

El art. 139 del Estatuto disponía que la evaluación para la ratificación, promoción o no ratificación se realice cada cierto periodo, que variaba según la categoría. Es decir, cada año se evaluaba a un grupo diferente y diverso de docentes; el cual estaba lejos de ser la totalidad. En consecuencia, este artículo fue también “suspendido” para así “Disponer un proceso general y extraordinario de evaluación de todos los docentes ordinarios de la Universidad, para su consiguiente ratificación”¹⁰⁵, que sería ampliado para abarcar no solo a los ordinarios sino también a los contratados al “Disponer un Proceso General de Evaluación y Ratificación Extraordinaria de los Profesores”¹⁰⁶.

Dos más son los aspectos a resaltar de las “Normas...”. El primero es que se establece, en su modificado art. 11¹⁰⁷, que el recurso de *reconsideración* por parte de los profesores no ratificados debe ser resuelto también por el mismo Decano. Y el segundo aspecto es que se establece que el recurso, final, de apelación sería resuelto por la CORE-SM, contra cuya decisión “no procede recurso alguno”. Así, ambos aspectos afirman el carácter autoritario del régimen dirigido por la CORE-SM.

En esencia, las “Normas...” tienen un carácter sancionador; lo cual es coherente con el objetivo de la CORE-SM: reprimir y/o condicionar a la oposición docente con la expulsión. Es decir, se utilizó un mecanismo académico con objetivos políticos.

¹⁰⁴ Mediante RR Nro. 4038-CR-95 del 19 de octubre de 1995.

¹⁰⁵ RR Nro. 3428-CR-95 del 11 de setiembre de 1995.

¹⁰⁶ RR Nro. 3505-CR-95

¹⁰⁷ Antes de ser modificado se establecía en el art. 9 (después derogado) que el recurso de reconsideración se debía presentar ante la Comisión de Evaluación.

Para garantizar la efectividad del proceso de expulsión docente, la CORE-SM designó, en base a lo remitido por los decanos, a los miembros de la Comisión de Evaluación y Ratificación Extraordinaria de Docentes de todas las facultades. Además, la CORE-SM, tras auto ratificar a sus miembros, ratificó a todos los miembros de dichas Comisiones de Evaluación¹⁰⁸.

DOCENTES EXPULSADOS			
RR Nro.	Fecha	Facultad	Cantidad de docentes
5122-CR-95	21 de dic.	Ciencias Físicas	11
5114-CR-95	21 de dic.	Psicología	9
5113-CR-95	21 de dic.	Química e Ing. Química	4
5106-CR-95	20 de dic.	Ingeniería Industrial	2 ord. y 1 cont. ¹⁰⁹
5094-CR-95	19 de dic.	Medicina	125 ord. y 22 cont.
5093-CR-95	19 de dic.	Odontología	8 ord.
5091-CR-95	19 de dic.	Ciencias Contables	9 ord. y 1 cont.
5084-CR-95	19 de dic.	Medicina Veterinaria	8 ord.
5081-CR-95	19 de dic.	Ciencias Biológicas	1 ord.
5080-CR-95	19 de dic.	Ciencias Administrativas	7 ord.
5079-CR-95	19 de dic.	Ciencias Sociales	19 ord. y 3 cont.
5078-CR-95	19 de dic.	Ciencias Económicas	15 ord. y 6 cont.
5077-CR-95	19 de dic.	Letras y CCHH	8 ord. y 3 cont.
5073-CR-95	19 de dic.	Ing. Electrónica	4 ord. y 2 cont.
5066-CR-95	18 de dic.	Derecho y CCPP	20 dcts
5147-CR-95	22 de dic.	Ciencias Matemáticas	13 ord. y 5 cont.
5146-CR-95	22 de dic.	Geol., Min., Met., Cc. Geog.	11 ord. y 2 cont.
5145-CR-95	22 de dic.	Educación	7 ord. y 12 cont.

En 1995 había 3246 docentes (entre ordinarios y contratados). Así, los 338 docentes (ord. y cont.) expulsados, a fines de 1995, representaron el 10,4 % de la población docente.

¹⁰⁸ Mediante la RR Nro. 3806-CR-95 del 5 de octubre de 1995.

¹⁰⁹ Ord.: Ordinarios. Cont.: Contratados

Interpretación:

El carácter autoritario y vertical de esta “Norma...” se corresponde con el método o política de la cual es parte: la expulsión de los docentes no afines u opositores a la CORE-SM. En este sentido, la Comisión de profesores separados y cesados, señala:

Las primeras víctimas...fueron los doctores Luis Solano Mendoza, director del Instituto de Medicina tropical y presidente de la Comisión de la Asamblea Universitaria que investigó fechorías; también fueron separados y enjuiciados los profesores principales, doctores Carlos Mendoza, presidente de la Comisión de Emergencia de la Facultad de Medicina, y sus miembros, José Tamayo, Guillermo Guardia, Manuel Acosta, César Barrio, Pedro Chacón, Marcos Yallicuna, así como José Luis Janampa, miembro de la Comisión del proceso administrativo que sancionó la separación de San Fernando de Manuel Paredes, Alejandro Fernández, José Piscoya Arbañil y Martha Martina Chávez. (Informe Paredes, 2001, p. 6).

Por el contrario, así como habían perseguidos, la CORE-SM tuvo un considerable sector docente afín, el cual se dio aglomerando en el proceso y se dio a conocer mediante el Pronunciamiento de respaldo a la CORE-SM, el cual anexamos.

Sobre la repercusión moral de estas expulsiones, Vargas señala que:

Sin duda un gran sector docente se mantuvo de capa caída. Mientras que otros se pasaron al lado del fujimorismo encarnado en la figura del nefasto Paredes Manrique o se sirvieron y convivieron con él. Realmente fueron pocos los profesores sanmarquinos dignos y valientes que supieron enfrentar en todo momento al autoritarismo desde diferentes perspectivas (Vargas, 2002a, p.37)

Así, la expulsión arbitraria de docentes cumplió el objetivo de reprimir a la oposición de la CORE-SM y, por ende, del régimen fujimorista; acallar o neutralizar a los docentes vacilantes y consolidar entorno a la CORE-SM a la correlación de docentes afines a este gobierno.

C) EXPULSIÓN DE TRABAJADORES NO DOCENTES

En el caso de los trabajadores no docentes la represión mediante expulsiones se concretó mediante dos métodos: 1. Evaluación y 2. Procesos administrativos.

Si bien ambos métodos fueron injustos, en este apartado centraremos en el primer método por responder directamente a la política estatal de reducir el número de trabajadores de las instituciones estatales y, por ende, por ser masivo.

Según sostiene un trabajador de dicho periodo, fueron excusas fabricadas las que utilizaron las autoridades para someter a procesos administrativos a los trabajadores no docentes, y este se aplicó solo a los que desenvolvían actividad sindical-política.

Aproximadamente fueron 100 los trabajadores no docentes expulsados bajo este método.

Estos procesos fraudulentos fueron conducidos por la Comisión de Procesos Administrativos de los Servidores Administrativos creada con RR Nro. 2818-CR-95 del 27 de julio de 1995 y conformada por el Prof. Luis Arias Mercado, el Dr. José Raul Mayorca Palomino, jefe de la Oficina General de Personal y el Sr. Francisco Sánchez Gálvez, representante de los Servidores administrativos.

El segundo método tiene su raíz en la política de reducción del Estado desarrollado por Fujimori. Y su base legal es el Decreto Ley N°26093 "Disponen que los titulares de los Ministerios y de las Instituciones Públicas Descentralizadas deberán cumplir con efectuar semestralmente programas de evaluación de personal" del 24 de diciembre de 1992, que en su artículo 2 señala que el personal que no apruebe la evaluación, "podrá ser cesado por causal de excedencia".

La segunda normativa base de este segundo método, ubicada en el ámbito universitario, es el artículo 6 de la interventora Ley 26457 (1995): "En el marco del proceso de reorganización, la Comisión podrá aplicar un programa de incentivos al retiro voluntario del personal administrativo y docente así como de **exámenes de evaluación y selección para efectos de adecuar los recursos humanos acorde a la nueva estructura orgánica de la Universidad. El personal que resulte excedente será cesado automáticamente**, percibiendo sólo los beneficios sociales que le corresponde de acuerdo a ley".

Siguiendo esta línea, la Comisión Reorganizadora de San Marcos, en el apartado denominado "Racionalización de personal administrativo" de su Plan de Reorganización (1996-1997) se planteó como objetivo general el "reducir el personal administrativo de la universidad, tanto a nivel de Facultades como especialmente en la Administración Central a través de un proceso que no sólo no disminuye los servicios actualmente brindados, sino que aumente la eficiencia de los mismos". En este sentido se planificó "someter a todos los trabajadores" a una evaluación; "la evaluación, con criterios objetivos de capacidades y habilidades no considerará opiniones de los jefes inmediatos o de la hoja de servicios, pues la racionalización tiene un carácter de capacidad para nuevas funciones y no de cumplimiento de las antiguas funciones" y **"evaluando a cada trabajador de acuerdo a los perfiles necesarios se realizará la racionalización trasladando al personal innecesario de un área a otra si cumple los requisitos, declarando excedente a aquellos que no los cumplieran"** (p. 52).

Por consiguiente se nombró la Comisión Central de Supervisión de la Evaluación de Personal no docente mediante la RR Nro. 07286-CR-96 del 7 de noviembre de 1996, la cual dependía directamente de la CORE-SM; además se aprobó el Reglamento de

Evaluación del Personal no docente (empleados y obreros) mediante RR Nro. 07393-CR-96 del 15 de noviembre de 1996.

En este reglamento se señala que son cuatro los ámbitos de evaluación: 1. Conocimientos; 2. Psicotécnico; 3. Calificación personal y 4. Apreciación Institucional; valiendo 25, 25, 20 y 30 puntos, respectivamente.

El primer aspecto buscó "establecer el saber general e institucional que tiene un trabajador sobre aspectos vinculados a la Universidad. Comprende: Aspectos de Cultura General; Realidad del País y del Sistema Universitario; Nociones sobre Administración del Estado; Normatividad y Organización Universitaria; Aspectos de Organización y Funcionamiento de la UNMSM" (Art. 12).

El segundo aspecto "tiende a obtener información general sobre la capacidad de adaptación, y aprendizaje; busca identificar al personal con mejores calificaciones en cuanto al aspecto cognoscitivo, intelectual y de adaptabilidad en el centro laboral" (Art. 13).

El tercer aspecto "considerará la formación, capacitación y experiencia del trabajador; así como sus méritos y deméritos" (Art. 14).

El cuarto aspecto "está determinado por la identificación, actitudes y comportamiento laboral del trabajador en el desarrollo de la Universidad" (Art. 15).

Los dos primeros ámbitos se evaluaron mediante una prueba escrita el 24 de noviembre de 1996. El tercer aspecto implicó la revisión del Legajo Personal y de una Hoja de Vida que debían realizar los trabajadores. El cuarto aspecto fue "evaluado" íntegramente por "la Comisión de Supervisión del Proceso, en coordinación con las autoridades y jefaturas respectivas" (Art. 15).

Los trabajadores que no obtuvieran 53 puntos y aquellos que no se sometieran a la evaluación serían considerados como personal excedente (Art. 16).

Como resultado de esta política y proceso, el 31 de diciembre de 1996 se emitió la RR Nro. 08397-CR-96 "Cesan por causal de excedencia a trabajadores no docentes de la universidad", en el cual se adjuntó un listado con los nombres de los 162 que fueron expulsados. Esta RR, además, fue publicada el 7 de enero en "El Peruano".

Frente a esta RR, 92 trabajadores presentaron recurso de reconsideración, de los cuales la CORE-SM consideró fundado a 23 (RR Nro. 00802-CR-97-14/02/97). Asimismo se dio cuenta de que varios trabajadores ya no tenían relación laboral con la universidad al momento de la evaluación. Finalmente fueron expulsados 131 trabajadores no docentes

bajo el criterio de "excedencia" y mediante una sola evaluación. Previamente, la CORE-SM había negociado, con los dirigentes de las organizaciones de trabajadores, la configuración de los listados de trabajadores a expulsar por Oficina o Área.

Así, estas expulsiones, al igual que en el caso de los estudiantes y docentes, respondieron a una política represiva. Dos ejemplos de esto es que se expulsaron a cuatro miembros de la Junta Directiva (1994-1996) del Sindicato Único de Trabajadores de San Marcos (SUTUSM)¹¹⁰ y a tres miembros de la Junta Directiva (1995) del Sindicato de Trabajadores del Comedor de Estudiantes (Cangallo)¹¹¹, que era base del SUTUSM.

Será recién en el periodo de la Comisión Transitoria de Gobierno, y en medio del proceso de reincorporaciones de decenas de estos trabajadores, que la misma UNMSM reconoce formalmente que esta evaluación fue injusta y que en la calificación se utilizaron *dos tablas con puntajes diferentes*¹¹² para así expulsar a los trabajadores cuya actividad sindical era contraria a los fines de la CORE-SM y, por otro lado, mantener a los trabajadores que explícita o implícitamente habían agachado la cabeza ante el grupo de Paredes. Irónicamente, en la RR que expone a la opinión pública nacional los nombres de los expulsados, la CORE-SM dijo que se contó con la participación, "en la administración de las pruebas escritas, del Representante del Ministerio Público".

Al igual que el Ministerio Público, el Poder Judicial apoyó esta política ya que nunca juzgó irregularidades en esta evaluación a pesar de las investigaciones que hizo por presión de múltiples denuncias y Acciones de Amparo presentadas por los trabajadores expulsados.

La consecuencia de esta medida fue el socavamiento económico del ya mellado ingreso familiar de decenas de trabajadores no docentes sanmarquinos. Este quiebre económico masivo los condenó a tal punto que uno de ellos se suicidó a unas semanas de ser expulsado; es el caso del señor Barrionuevo, quien trabajó durante 15 años como cocinero en el comedor universitario de San Fernando (Cangallo) y estaba sindicalizado en

¹¹⁰ Carmen Leyva Serrano, Secretaria general; José Miguel Arias Azabache, Sub-Secretario de Organización; Jaime Díaz Araujo, Secretario de Prensa y Propaganda.

¹¹¹ César Barrionuevo Gamarra, Secretario de Asistencia Social; Óscar Anampa Flores, Secretario de Deportes; Alfredo Chumbeli Najarro, Delegado al SUTUSM.

¹¹² RR Nro. 01598-CTG-01, del 11 de abril de 2001. RR mediante la cual se aprueba la reincorporación de la trabajadora Sabina Rivas Huamán. En el expediente de esta trabajadora se lee lo siguiente:

...fui afectada en todos mis derechos por los actos arbitrarios, ilegales e inconstitucionales del gobierno autoritario de Fujimori y Montesinos en alianza política, académica y administrativa con la ex Comisión Interventora presidida por Manuel Paredes Manrique, siendo víctima de tan nefasta asociación entre Estado y la Universidad, en contra de mi persona y de los demás trabajadores, docentes, estudiantes afectados por la quiebra del Estado de Derecho...Mi separación fue procesada por criterios eminentemente políticos y no administrativos. La autoridad interventora prefabricó seudos procesos administrativos y evaluativos, para desarraigarnos de nuestra casa de estudios.

el SUTUSM.

Frente a esta violación de derechos, el Sindicato Único de Trabajadores de San Marcos (SUTUSM) no reaccionó debido a que los agremiados habían sido ya neutralizados o inmovilizados por la pesada represión que a diario imponían los militares acantonados en su Base Militar, la política y normativa represiva del gobierno de Fujimori, la densa presencia de espías de la DINCOTE y del SIN, la vigilancia de los guardias de la Oficina de Seguridad y Vigilancia y el férreo control ejercido por la Comisión Reorganizadora. La junta directiva de este sindicato, en específico el secretario general Fredy Manrique, adoptando una actitud mercenaria, a mediados de 1996, se robó el dinero y vendió los bienes del sindicato para luego desaparecer. Además, profundizando el quiebre de este gremio de trabajadores, la CORE-SM le quitó el local sindical ubicado en la sede del denominado Colegio Real, al costado del actual Congreso. Por todas estas razones, el SUTUSM se desactivó completamente entre 1996 y el 2000; lo cual implicó la menor capacidad de defensa de los derechos de los trabajadores.

Esta evaluación es pragmática y unilateral porque comete el error de considerar que basta un examen para medir el grado de capacidad de un trabajador; no considera soluciones como la capacitación; responsabiliza de la incapacidad solo al trabajador y obvia el papel de la universidad y el Estado. Y es así porque su objetivo no fue mejorar la eficiencia universitaria sino reducir la inversión universitaria que hace el Estado y depurar o expulsar a elementos no afines al régimen fujimorista. En el caso de San Marcos, estos objetivos fueron concretados en pleno proceso de reorganización y según los intereses políticos específicos de la CORE-SM.

En este sentido, Miguel Rodríguez, actual secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de San Marcos (SUTUSM) sostiene que esta evaluación fue prácticamente política y que fue en el hecho un pretexto para sacar trabajadores sindicalizados.

Pero el análisis de esta política es incompleta si no señalamos que las vacantes creadas fueron copadas masivamente por un personal totalmente afín al régimen fujimorista y a la CORE-SM; esto se debió a la política gubernamental de copar los aparatos del Estado y las instituciones públicas con elementos de su partido y simpatizantes de este. Así, elementos fujimoristas ingresaron, con diversidad de niveles, en todas las oficinas de San Marcos; y, desde allí, como lo denuncia un trabajador de ese periodo, funcionaron también como una red que informaba a la CORE-SM los movimientos de la oposición.

Se han podido recoger testimonios desgarradores sobre el impacto sufrido por los trabajadores declarados “excedentes”. Por ejemplo, es conocido el caso del Sr. Cesar

Barrionuevo, un servidor del comedor de Estudiantes de Cangallo y dirigente sindical afiliado al SUTUSM, quien se suicida las semanas siguientes de ser declarado "excedente" y por tanto despedido de la universidad (Vargas, 2002a, p. 37)

Sobre la política de expulsión de una parte de la comunidad universitaria

Esta política represiva es una constante en la historia reciente de la universidad Latino Americana. Por ejemplo, Errázuriz (2017) señala que se expulsaron a 3382 miembros de la comunidad universitaria (entre docentes y trabajadores no docentes) de la Universidad de Chile. Morente (2005) señala que en la Italia fascista se llegó a expulsar a 300 docentes universitarios aludiendo motivaciones raciales, cantidad que representa el 10% de docentes expulsados de la universidad italiana. Para el caso de la España fascista, señala que un tercio (150) de los catedráticos (equivalente a nuestros docentes principales) universitarios de todas las universidades españolas fueron *depurados*; los cuales fueron reemplazados por profesores "adictos al fascismo". Y respecto a la Alemania nazi, señala que hasta 1938, aproximadamente un tercio del profesorado universitario fue separado del servicio y entre ellos estaban 20 premios nobel e intelectuales renombrados: Einstein, Buber, Adorno, Horkheimer, Mannheim, entre otros.

Asimismo, Monsálvez (2015) señala que, en la Universidad de Concepción -Chile- como consecuencia de las políticas represivas, de los 18 mil estudiantes solo 10 mil pudieron continuar sus estudios; es decir, el 44% no pudo permanecer.

Así, observamos que la expulsión de una parte de la comunidad universitaria es una política represiva utilizada por regímenes autoritarios.

Finalmente debemos resaltar que esta "depuración" represiva de la comunidad universitaria se ha correspondido con la política de reducción del tamaño y la capacidad del Estado, aspectos que devienen de la reorientación que el neoliberalismo hace de este ente. Una prueba de que esta reducción estatal se ha correspondido con el menor presupuesto destinado a la UNMSM y, consecuentemente, con la reducción de la comunidad universitaria, es el siguiente cuadro extraído del Compendio estadístico 2000:

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ESTADÍSTICAS UNIVERSITARIAS AÑOS : 1990 - 2000											
VARIABLES	A ñ o s										
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1. Vacantes	4319	3940	3613	3584	4472	4397	5143	4702	5500	7146	6445
2. Postulantes	36509	27886	31781	40287	45194	50214	53487	47829	51488	55586	66392
3. Ingresantes	4141	3951	3626	3604	4035	4078	4071	4241	4725	6032	5672
4. Alumnos Matriculados	29421	28434	28174	26807	25530	24305	24177	22525	22312	23844	25363
5. Docentes	2902	3772	3835	3729	3660	3246	3242	2950	2929	2921	2849
6. No Docentes	2259	2223	2180	1878	1707	1523	1407	1074	1081	1044	1005
7. Egresados	2493	1830	2797	2945	2952	3022	2913	2571	2609	1726	2404
8. Graduados de Bachiller	2647	1641	3036	3208	3378	2881	3371	3462	2890	3209	3256
9. Titulados	1979	1583	1995	2042	2277	2152	2143	2460	2661	2500	2838
10. Magíster	6	5	7	6	12	14	34	30	134	117	125
11. Graduados de Doctor	31	18	5	0	0	4	62	12	17	12	12

Nota : 5. Permanentes y Contratados - No incluye Ayudantía.
6. Permanentes y Contratados.

Fuente : 1. al 3. Comisión Ejecutiva de Admisión.
4. y 7. Oficinas de Informática y de Matrícula, Registro Académico, Grados y Títulos de las Facultades y Sistema Único de Matrícula.
5. y 6. Oficina General de Personal.
8. al 10. Resoluciones Rectorales.

Fuente: Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM

Con esto queda claro que la “depuración” persiguió no solo un objetivo político sino también económico.

3.1.3.3. La reincorporación

El proceso de reincorporación fue posible debido a dos factores. El primero es la lucha constante de los expulsados de las universidades intervenidas. Esta presión la ejerció principalmente el SUTUSM, la AUDUSM (Asociación Única de Docentes de la Universidad de San Marcos) y el FENDUP-Costa (Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú) mediante plantones continuos en las afueras del Congreso de la República. Esta última organización logró enviar el 18 de julio del 2000 una carta, firmada por la AUDUSM, ADUNFV, ADUNAC, ADUNI y ADUNE, a la entonces presidenta del Congreso de la República, la fujimorista Martha Hildebrandt, en la que se le solicita:

1° El cese de la intervención ilegal en las universidades: UNMSM, UNFV, Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta, Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión de Huacho, Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

2° La inmediata elección democrática de sus autoridades como señala la Ley Universitaria vigente.

3° La reposición de todos los docentes, trabajadores y estudiantes injustamente despedidos y/o expulsados de la universidad.

El segundo factor es la pérdida abrupta de poder del gobierno de Fujimori en sus últimos meses. En este sentido, para tratar de alargar su agonía, cede ante las exigencias de la comunidad universitaria en general y de la comunidad universitaria expulsada, en específico.

Son dos las leyes que normaron la posibilidad de reincorporación de los expulsados por la Comisión Reorganizadora: la Ley N°27366 y la Ley N°27437.

La Ley 27366, emitida por el gobierno el 4 de noviembre del 2000, dos semanas antes de la fuga y renuncia de Fujimori, además de mandar el cese de las Comisiones Reorganizadoras mandó también, en su segunda disposición transitoria, que:

Elegidas las nuevas autoridades de cada universidad, procederán a revisar y resolver, a expresa solicitud de los profesores, alumnos y trabajadores, los casos de quienes se consideren injustamente separados de la misma, sin perjuicio de las acciones judiciales en giro.

A su vez, la Ley N°27437, emitida el 16 de marzo de 2001, por el gobierno de Valentín Paniagua, modificó el artículo precitado mandando que antes del proceso electoral de nuevas autoridades se reincorpore, previa revisión, a los docentes y administrativos separados o cesados “como consecuencia de los procesos de evaluación ejecutados durante la gestión de las Comisiones Reorganizadoras”. A esto se añade que “Los docentes, administrativos y estudiantes que consideren haber sido injustamente separados por motivos distintos a la referida evaluación, tienen derecho a presentar sus solicitudes para la revisión de sus casos, sin perjuicio de las acciones judiciales en curso”.

Los trabajadores no docentes que no habían podido acogerse por vencimiento de plazo a estas dos leyes recurrieron a la Ley N°27803, “Ley que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las Empresas del Estado sujetas a Procesos de Promoción de la Inversión Privada y en las entidades del Sector Público y Gobiernos Locales” dada el 29 de julio de 2002.

En base a esta normativa fueron, según señala la Junta Directiva del SUTUSM 2020, 77 los trabajadores no docentes que se reincorporaron; todos ellos habían sido declarados “excedentes”. En el caso de los docentes, fueron 178 los docentes reincorporados. En el caso de los estudiantes, no se tiene una cifra aproximada; sin embargo, varios dirigentes estudiantiles pudieron regresar a la universidad. **En síntesis, un porcentaje significativo de los expulsados regresaron a la UNMSM; sin embargo la CORE-SM ya había garantizado orientar el rumbo de la universidad en función al neoliberalismo.**

Finalmente, debemos resalta que la política de reincorporación parte del reconocimiento de que la expulsión de parte de la comunidad universitaria tuvo objetivos políticos y fue ejecutada en el marco de la vulneración de la autonomía universitaria. **Por eso se comprende que sea el propio congreso fujimorista quien mande mediante el Art. 4 de la Ley 27366 que se “recupere la autonomía”:**

Art. 4.- Recuperación de la autonomía

Al término del proceso señalado, las autoridades citadas en el Artículo 1° de esta Ley recuperan la autonomía en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18° de la Constitución Política, la Ley N°23733, Ley Universitaria y sus modificatorias.

3.1.3.4. ESPIONAJE

En el Informe N° 003-OSGOM-OSV-96, del 9 de agosto de 1996 emitido por la Srta. Clara Quispe Miranda, jefe de la Oficina de Seguridad y Vigilancia (OSV) UNMSM y dirigido al Dr. Manuel Paredes Manrique se evidencia cómo esta Oficina de la universidad informaba de cualquier acto político contrario al régimen; en este caso, se informa de un paquete de volantes encontrado en la Facultad de CCSS y que ya se entregó parte de ellas, para su investigación, a la Base Militar instalada en la UNMSM y a la DINCOTE.

Señor Rector, cabe mencionar que un grupo de los volantes han sido entregados al grupo de la DINCOTE, que realiza sus investigaciones dentro de la Ciudad Universitaria.

Además, en este mismo Informe, se ve cómo la OSV trabaja de manera coordinada con la DINCOTE para identificar a algún miembro de la comunidad universitaria que es requerido por este organismo del Estado:

Asimismo se logró ubicar al Sr. Jaime Cubillas Caycho, quien es buscado por la DINCOTE...El Sr. Jaime Cubillas Caycho se encuentra matriculado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sigue el 4° año de estudios en el Turno Noche, aula 250.

El inicio de la instalación de bases militares, 1991, estuvo enmarcada en el objetivo de vencer a la subversión; pero su permanencia, más allá de 1994, respondió ya no a la lucha contrasubversiva sino a la concentración del poder en el presidente y a la perpetuación del régimen fujimorista, lo cual supuso el accionar militar contra toda oposición democrática desde los estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Y en el caso de las universidades intervenidas esta presencia militar acompañó y se integró a los gobiernos de las Comisiones Reorganizadoras.

Sobre las prerrogativas de los militares en San Marcos, su función represiva de intimidación y espionaje se encubría con una supuesta función de resguardar la seguridad del campus. Al respecto Vargas (2002a) señala que:

Con la designación de la Comisión Reorganizadora, el Ejército acuartelado desde 1991 en San Fernando, la Casona del Parque Universitario, la vivienda universitaria y el segundo piso del Comedor de Estudiantes de la Ciudad Universitaria, recibe el encargo de la seguridad y vigilancia interna.(Vargas, 2002^a, p.35).

La represión ejercida por la CORE-SM tenía como coro de fondo la política de estigmatización contra toda oposición que desarrolló eficazmente el gobierno de Fujimori.

Esta política tenía a la televisión y los diarios "chicha" como principales medios de prensa. En estos de manera sistemática se tildaba a las universidades nacionales como nidos o focos del terrorismo. Asimismo, esta estigmatización general era empalmada con la estigmatización que la propia CORE-SM desarrolló mediante, por ejemplo, los discursos irreales y dicotómicos dados por Paredes Manrique; en estos la lógica era que el pasado o la correlación de Reátegui representaba el caos y los intereses de Patria Roja y Sendero Luminoso y que el presente o la CORE-SM representaba el orden y los intereses reales de los sanmarquinos¹¹³

Los infiltrados del SIN vigilaban día y noche a los profesores, estudiantes y administrativos opositores, a quienes graban, tomaban fotos y filmaban día y noche para elaborar informes de inteligencia sobre todas sus actividades en la universidad, las mismas que eran remitidas exclusivamente y en forma confidencial al Presidente de la Comisión Reorganizadora, Manuel Paredes Manrique... Se instala en el Rectorado del edificio Kennedy, un centro de operaciones de espionaje e infiltración. Al respecto, se montó sendos contratos de servicios de seguridad con empresas fantasmas, como la Cooperativa de Trabajo y Fomento al Empleo "Continental Ltda.", la Compañía de Servicio "Topoliz" y FT Technology & Services S.R.L. a quienes la universidad pagaba alrededor de 4,720.00 soles mensuales durante el periodo de 1997-2000.

Se ha comprobado que la infiltración del SIN llegó al extremo de reclutar al propio personal administrativo de la universidad para sus fines, específicamente la Jefatura de la Oficina de Seguridad y Vigilancia a cargo entonces de la servidora administrativa, Clara Quispe Miranda... quien informaba y coordinaba con el Ejército y la propia DINCOTE acciones de seguimiento, investigación y detención de alumnos y civiles en el campus universitario.

También es conocida la figura del Mayor (r) Leonidas Flores Bellido, CIP N°019419, quien trabajaba bajo las órdenes del Dr. Pascual Chávez Ackermann, ex decano de la Facultad de Ciencias Contables. Éste mediante informes confidenciales, "novedades de servicio", orienta a su jefe sobre cómo se debe gobernar una universidad militarizada. Al respecto mediante informe confidencial del 24 de mayo de 1996, el referido militar en retiro dice: "se aprecia claramente que los señores profesores y empleados administrativos de las Facultades de Letras y Educación son pasibles de convencimiento y débiles de carácter para imponer la disciplina en sus respectivas Facultades, permitiendo que en los claustros sagrados de la UNMSM, se cree una fuente de caldo de cutio de ideas subversivas ya que atacar al Sr. Rector y a los señores miembros de la Comisión Reorganizadora, por supuestas irregularidades, con la ayuda de estos señores profesores, no es más que pretexto para unir y concienciar en sus principios sediciosos de estos elementos negativos infiltrados en la UNMSM..." (Vargas, 2002a, p. 36)

...

Se ha comprobado una estrecha y fluida colaboración del Dr. Manuel Paredes Manrique, con la Dirección Nacional contra el Terrorismo-DINCOTE. Éste en su afán de "limpiar San Marcos de terroristas" entregaba información selectiva sobre las actividades académicas, laborales, gremiales y políticas que realizaban los docentes, administrativos y estudiantes en el interior y fuera del campus universitario. Por ejemplo, con el Oficio N°794-CR-96, del 16 de julio de 1996 –en respuesta al Oficio N° 698-D4-DINCOTE- el Dr. Manuel Paredes informa y devela la situación, ubicación y actividades laborales, gremiales y personales de tres empleados administrativos y de un profesor universitario: el Dr. Virgilio Roel. La información ofrecida a la policía sobre el servidor Freddy Esteban Huaraz Riquez, es reveladora y confirma la comisión de abusos y tropelías contra la comunidad universitaria...: "El señor Huaraz Riquez, Freddy Esteban es servidor administrativo que labora en el comedor de la ciudad universitario. Tiene título profesional de abogado UNMSM,

¹¹³ "Mensaje al estudiante sanmarquino..." 1999.

año 1992...en la actualidad he ordenado [dice Paredes] se le cambie a otra dependencia fuera de la ciudad universitaria para que cumpla tareas muy específicas y concretas, que es muy probable no acate y que nos permitirá proceder a su destitución” (Vargas, 2002a, p. 38)

Tras la finalización del gobierno de la CORE-SM y en medio de la Comisión Transitoria de Gobierno encabezada por el Dr. Lama, se encontraron pruebas materiales del espionaje desarrollado en el periodo anterior. Al respecto, Ponce (2002), señala:

En la oficina del Decanato de la Facultad de Contabilidad se descubre una gran cantidad de información confidencial y partes de seguimiento semanales a los estudiantes y sus agrupaciones respectivas (p. 33)

En este sentido, Ponce concluye que:

La presencia de servicios de inteligencia del Estado en las diversas instituciones de la sociedad civil y del Estado no es nada nuevo. El fujimorismo instauró en la universidad una especie de Gestapo, o mejor dicho un Estado policiaco, que tenía su centro de operaciones en las distintas universidades, contando con la anuencia y participación de las Comisiones Reorganizadoras.

La siniestra labor del SIN en la universidad no era para combatir La siniestra labor del SIN en la universidad no era para combatir a los grupos subversivos, ya que habían desaparecido de la escena universitaria desde el año 1994, sino para perseguir, amedrentar y socavar todo tipo de oposición democrática al régimen dictatorial. Esta labor habría sido iniciada pensando identificar y detener a los grupos subversivos que operaban en las universidades públicas, esta tarea la habrían iniciado desde el año 1991. Pero en el curso de los años y de manera especial en el año 1997 se redefiniría esa labor de inteligencia para el seguimiento de los grupos democráticos opositores a la dictadura. Ningún grupo organizado de San Marcos se salvó de la labor de seguimiento, infiltración y soplónaje. Todos estuvimos en la mira del SIN (Ponce, 2002, p. 34).

Así como sucedió a nivel nacional con la UNCP, La Cantuta, San Marcos, UNI y Hermilio Valdizán, la incursión militar en las universidades es un fenómeno recurrente en la historia reciente de América Latina; asimismo, las labores de espionaje dentro de las universidades, desarrolladas por organismos estatales, también son un hecho común. Por ejemplo, Seia (2018) señala cómo el Ejército argentino había elaborado un manual contrasubversivo destinado al ámbito universitario. Asimismo, Monsálvez (2015) en el caso de la Universidad de Concepción (Chile) da cuenta de cómo el ejército ocupó por completo el campus universitario y procedió a "la suspensión de las clases, el allanamiento de los hogares estudiantiles y el posterior arresto por parte del personal militar y del cuerpo de Carabineros de un número indeterminado de académicos, funcionarios administrativos y estudiantes, los cuales fueron encarcelados, interrogados y torturados"; incluso los militares llegaron a utilizar la Radio Universitaria para los fines del régimen de Pinochet. Asimismo, a esta universidad, como parte de la estigmatización, se le denominaba "Universidad roja".

Asimismo, el espionaje desarrollado dentro de la UNMSM entre 1995 y el 2000 tiene como marco general a la política de espionaje desarrollada por el gobierno de Fujimori que,

por ser una política vital para el mantenimiento de su régimen dictatorial, implicó el crecimiento exorbitante del SIN-dirigido por Montesinos.

Así, la represión ejercida por la CORE-SM se concretó en una política de espionaje en alianza con organismos de inteligencia del Estado, la estigmatización y la expulsión de parte de la comunidad universitaria. Esta represión consolidó el pluralismo limitado propio de los regímenes autoritarios, como señala Linz (1978).

La CV-SM (2002), respecto a las consecuencias de esta intervención reorganizadora y en relación a las expulsiones plantea que "Nos quedó como lección una vez más que la llamada reorganización consistió en la implantación de un régimen de antiestatutario, abusivo, violatorio de los Derechos Humanos, organizado con el propósito de separar de la Universidad a las personas que no fueran del agrado del interventor" (p. 22). Solo agregamos que esta represión permitió a la CORE-SM aplicar sus planes y, por ende, sentar las bases de la reorientación de la UNMSM en función al neoliberalismo.

3.2. EL GOBIERNO PRIVATISTA DE LA CORE-SM

3.2.1. LA PRIVATIZACIÓN EN LOS PLANES DE LA CORE-SM

Lineamientos de Política:

Este documento, de julio de 1995, establece criterios claros en pro de la privatización. Por ejemplo, respecto a las remuneraciones, señala que se debe trabajar por un **“incremento significativo de las prestación de servicios o producción de bienes para captar recursos adicionales** y otorgar bonificaciones al personal con carácter de incentivos al rendimiento o producción” (p. 9); y, en este sentido, orienta el objetivo de los denominados Centros de Producción, como es el caso del Centro Preuniversitario: “los Centros de Producción, en tanto son fundamentales entes generadores de recursos” (p. 7).

Plan Estratégico 1995-1997:

En este plan la CORE-SM realiza un diagnóstico general, pero bastante abstracto, de la situación nacional para aterrizar luego en dotar a la UNMSM de una visión, misión y detallados lineamientos de trabajo. En lo que respecta al análisis de los cambios sociales en relación al ámbito económico, la CORE-SM era consciente del proceso de reducción de la capacidad económica del Estado y de su política de privatización:

El mayor peligro consiste en que el proceso de reestructuración del aparato del poder ejecutivo fusione la UNMSM con la UNFV. Varios analistas vienen sosteniendo que la reforma del aparato estatal debe continuar, reduciéndose más aún la actividad y tamaño del Estado. En los próximos cinco años es posible que se reagrupen instituciones, ministerios y otros, privatizándose empresas y bancos, dejando como estricta labora del Estado el aspecto de promoción.

Este análisis es tomado en el plan como un “peligro para la institución”; sin embargo, adoptando una postura pragmática y de mera adaptación y acomodamiento a los cambios estructurales, la CORE-SM opta por la vía impuesta por el Estado: la privatización. Por esto se comprende que en estos documentos de planificación no se encuentren medidas específicas destinadas a lograr el incremento del presupuesto estatal destinado a la UNMSM o relacionadas a la defensa de la gratuidad de la Educación, sino más bien medidas destinadas a obtener financiamiento principalmente privado (pagos por parte de los estudiantes o clientes, apoyo internacional) y bajo criterios que priman en dicho ámbito (“lobby”). En efecto, esto se comprueba en dos de sus metas:

Meta Nro. 2: “Elaborar, lograr financiamiento y ejecutar dos proyectos: Reforzamiento institucional con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y reestructuración académica y administrativa” (p.39)

Meta Nro. 3: “Identificar y contar con un lobbie (sic) de parlamentarios para la institución” (p. 40)

En este sentido, como parte de sus Programas Estratégicos, “frente a las limitaciones de Recursos Presupuestales” sostienen que **“la ejecución de la mayor parte de los programas y actividades se realizarán por convenio y en colaboración con entidades públicas y privadas que ya cuentan con una adecuada infraestructura y experiencia probada en las específicas áreas de actividad.** De esta manera, los escasos recursos [ininteligible por error de impresión]” (p. 45) Además, se define que **“se utilizará la política de concesiones para el manejo de recursos de infraestructura y cobranzas”** y que “se otorgará incentivos económicos a los gestores de la institución para garantizar resultados y permanencia” (p. 46). Finalmente, en el acápite de las opciones estratégicas se presenta como opción E a los “Proyectos con la cooperación técnica internacional” para así “ejecutar activamente los proyectos para que se logre financiar el desarrollo de planes y actividades que permitan presencia permanente de la UNMSM en la sociedad civil”.

Evaluación del Plan de Trabajo Institucional 1995:

En la parte de recomendaciones de este documento, la CORE-SM, propone **“generar una política agresiva de captación de ingresos propios a nivel de la universidad”** y “ampliar las fuentes generadoras de ingresos tanto de tesoro como de particulares” (p. 46); y en el área de investigación plantean “intensificar la búsqueda de financiamiento de proyectos de investigación, en el sector privado y cooperación técnica internacional” (p. 45).

Plan de Reorganización 1996-1997:

Lo concerniente a la privatización lo desarrollan en el apartado denominado “Cuarta línea de modernización: Fortalecimiento de la gestión financiera”. **Aquí sostienen que el financiamiento para las universidades públicas “no aumentará y cualquier posible desarrollo deberá ser con recursos del sector privado y parcialmente con autofinanciamiento por las propias universidades”** y, en relación a esto, afirman que **“es irreal considerar que el aporte del Estado se incrementará en un futuro previsible”**; así, en base a este análisis, y siguiendo la misma lógica o posición ya plasmada en sus planes previos, proponen que **“es imprescindible desarrollar una política realista a mediano y largo plazo que permita independizar las necesidades del desarrollo universitario de los presupuestos del tesoro”** que finalmente se concreta en el objetivo de esta “cuarta línea de modernización”: ***“Establecer un plan a mediano y largo plazo de financiamiento del desarrollo universitario, que contempla recursos predecibles e independientes de los aportes del tesoro...”***

Más adelante se trazan redefinir los Centros de Producción (CP) con el objetivo principal de generar recursos propios (“ganancias”) en base a una **“óptica empresarial”**; en este sentido, señalan, su administración debe realizarse mediante una estructura en la que las actividades de los CP sean coordinadas de manera centralizada por el rectorado. De esta manera vemos que la “óptica empresarial” se concreta aquí tanto en la generación de mayores ganancias como en el modo de organización.

En el apartado titulado **“Fomento del auto sostenimiento de los servicios vía tasas universitarias”**, se parte por identificar que debido a la crisis económica, los sectores más pobres ya no pueden ingresar a la universidad pública y que, por el contrario, la clase media empobrecida ha optado por ingresar a la universidad pública ya que no puede costearse una universidad privada. Seguidamente, afirman que **“recientes estadísticas (ingresantes 1996) indican que cerca de 40% de los ingresantes provienen del sector educativo privado; aunque no existen datos precisos es notorio el cambio de extracción social entre estudiantes”** y, añaden en este sentido que **“casi un 40% de nuestros estudiantes al ingresar a la universidad dejan de pagar pensiones aun cuando su formación es ahora más costosa”**. Hasta aquí han dado un argumento para su propuesta posterior.

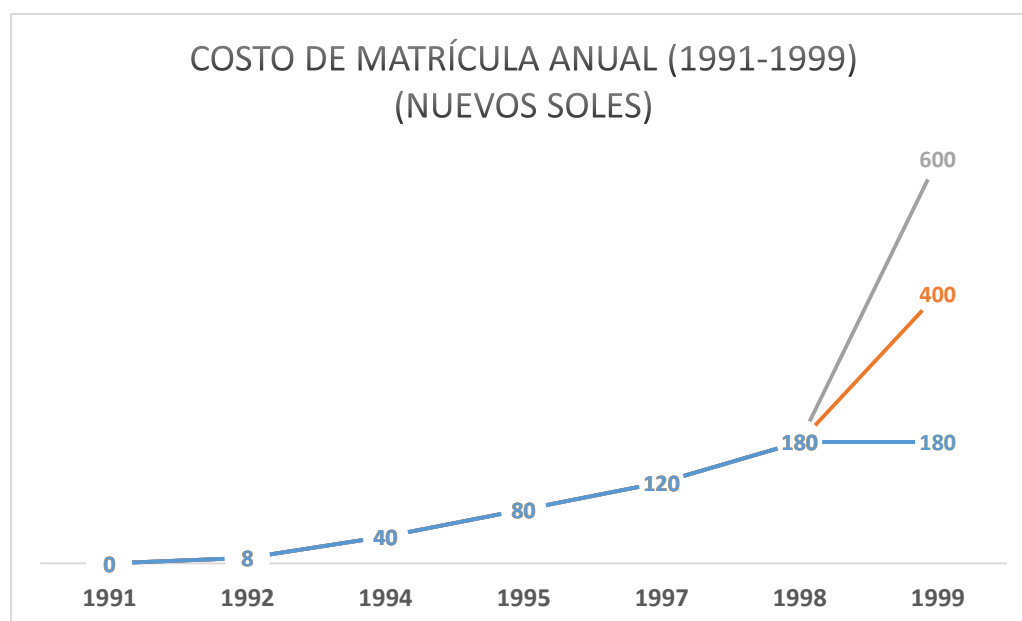
El segundo argumento que esgrimen es que la gratuidad de la educación universitaria ha causado su mala calidad: “Los servicios que brinda la universidad a sus estudiantes son pocos y de mala calidad, debido en gran parte a que se mantiene la gratuidad de los mismos indiscriminadamente”. En base a ambos argumentos proponen que **“bajo el principio de equidad y solidaridad” se debe “establecer un sistema de tasas universitarias diferenciado según la capacidad socioeconómica de cada estudiante”**. Para esto se trazan las siguientes metas: clasificar a los estudiantes según criterios socioeconómicos; relacionar condición socioeconómica con tasas; definir tasas escalonadas y, finalmente, incrementar recursos. Y, a modo de Procedimiento, “aprobar las líneas y porcentajes de financiamiento de la universidad vía tasas universitarias”, “designar un grupo de trabajo que realice la evaluación socioeconómica de todos los estudiantes de la Universidad clasificándolos según categoría socioeconómica”, “establecer un sistema permanente de clasificación socioeconómica de los ingresantes de cada año” y “proponer un esquema temporal de incremento anual de las tasas universitarias”. Esta planificación sí se concretó, como veremos en el análisis de la evolución de costos.

Revisados todos estos documentos, podemos sostener que la privatización desarrollada por la CORE-SM fue planificada y ejecutada de manera sistemática.

3.2.2. EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS¹¹⁴

A) MATRÍCULA

La matrícula, por ser un procedimiento indispensable para poder iniciar y desarrollar los estudios universitarios, es obligatoria y, por ende, general y masiva. Así, aprovechando estas características, la CORE-SM aplicó constantes y enormes incrementos al monto monetario cobrado a los estudiantes como condición previa de su matrícula.



Como observamos en el gráfico, en 1997, la CORE-SM incrementó en un 300% (de 40 a 120 nuevos soles) el costo por matrícula anual. En 1998 el incremento fue de un 150% (de 120 a 180 nuevos soles) y en 1999 se efectuó un incremento diferenciado se basó en el criterio de *equidad* y que fue sustentado así:

En el presente año 1999 se mantiene la tarifa de 180 nuevos soles para los alumnos ingresantes que provienen de Colegios Estatales o que hayan estado becados en Colegios Particulares y, por un principio de solidaridad, para apoyar a los que no tienen recursos económicos se ha fijado la matrícula en 400 nuevos soles para los que provienen de Colegios Pagantes, los cuales pagaban de 200 a 400 nuevos soles mensuales (2000 a 4000 nuevos soles al año) y 600 nuevos soles para los que pagaban de 401 a 1000 nuevos soles mensuales (4000 a 10 000 nuevos soles al año) (UNMSM, Mensaje del rector..., 1999, p. 29).

¹¹⁴ Todos los gráficos estadísticos mostrados en este apartado son de elaboración propia sobre la base de los datos sistematizados en los Compendios estadísticos anualmente elaborados por la Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM. Como paso previo a la elaboración estadística hemos elaborado un cuadro, el cual adjuntamos como Anexo IV.

Así, los costos en 1999 significaron un incremento del 222% (de 180 a 400 nuevos soles) y 333% (de 180 a 600 nuevos soles) respecto al costo en 1998; y del 1000% (de 40 a 400 nuevos soles) y 1500% (de 40 a 600 nuevos soles) respecto al costo en 1994, el año anterior al inicio del proceso reorganizador.

Este costo diferenciado se basa en el criterio de equidad y su aplicación es coherente con lo planificado en el Plan de Reorganización 1996. Como veremos más adelante, estos incrementos estaban ligados de manera determinante al financiamiento de proyectos considerados centrales por la CORE-SM.

LOS COBROS POR REPITENCIA DE CURSO Y AÑO Y EL SISTEMA DE ENDEUDAMIENTO E INTERESES.

Desde que inició su gobierno, la CORE-SM estableció un mecanismo de recaudación de RDR a partir de la repitencia de los cursos. Así, en 1995¹¹⁵ estableció que:

Los alumnos que deban hacer matrícula en uno o más cursos en segunda matrícula abonarán un recargo del 100% en el monto total de la matrícula, es decir S/.40.00 nuevos soles por semestre o S/.80.00 por año, según sea su régimen de estudios. En el caso de realizar tercera matrícula, el recargo será del 100% sobre el monto de segunda matrícula, es decir, S/.80.00 nuevos soles por semestre o S/.160.00 por año.

El costo por la primera repitencia bajó a S/. 30 en 1997, pero se incrementó a S/: 50 a partir de 1998; sin dejar la misma lógica proporcional de acuerdo al número de repitencias.

Otro mecanismo de recaudación de RDR, implementado en 1997, fue el cobro por repitencia de año. Un estudiante reprobaba de año al desaprobado el 50% del total de créditos en que se matriculaba. Así, en este año, el costo por primera repitencia era de S/.240 y, por segunda repitencia, de S/. 480. Para 1998 este monto se elevó a S/. 360 y S/. 500, respectivamente.

Con todos estos mecanismos, el costo de la matrícula se elevó a niveles exorbitantes. Por ejemplo, considerando los costos del año 1999, un universitario que tenía que repetir un año y dos cursos (ambos por primera vez) en su matrícula anual y, además, provenía de un colegio privado en donde pagaba entre 200 y 400 nuevos soles mensualmente, tenía que pagar S/. 360 más S/. 100 más S/. 400, respectivamente; lo que sumaba un total de S/.860 nuevos soles.

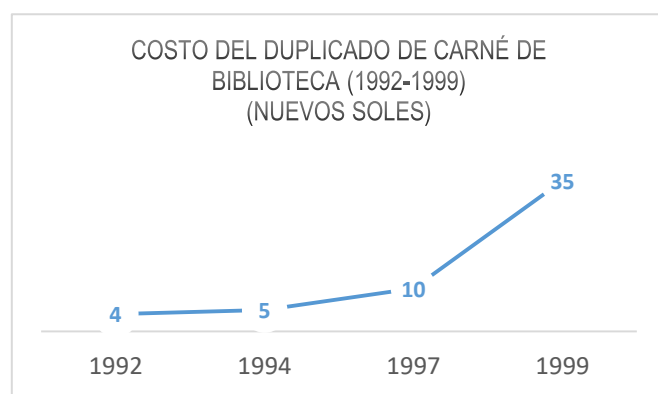
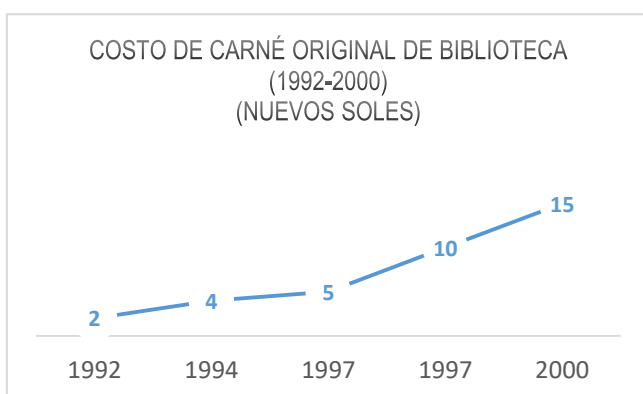
Como estos montos excedían la capacidad económica de miles de estudiantes, varias facultades implementaron sistemas de endeudamiento e intereses. Es decir,

¹¹⁵ RR Nro. 3540-CR-95 del 19 de setiembre.

los estudiantes que no podían pagar el total de su matrícula podían firmar “cartas de compromiso” en los que se comprometían a pagar el restante; monto sobre el cual recaían intereses de 10 y 20%, dependiendo de las Facultades. Lógicamente, estos intereses a las deudas fueron avalados por los COGESAA y CONAFA de cada Facultad y la CORE-SM. Al respecto, Moisés Vargas Osorio, estudiante de Psicología en este periodo, señala lo siguiente en la entrevista que se le realizó:

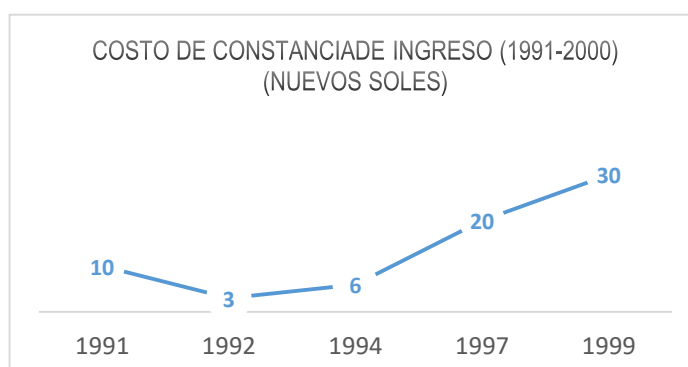
Sí estaba permitido endeudarse; firmabas cartas de compromiso reiteradamente. [Las autoridades] no podían dar la imagen de que se expulsaba a un alumno por motivación económica, entonces sí se permitía que el alumno se endeude. A tal punto que yo tengo un compañero que habrá terminado su carrera más o menos en 10 años y en ese tiempo llegó a tener una deuda acumulada de alrededor de S/. 5000 nuevos soles debido a los múltiples montos, intereses, repitencias, etc.; y como no tenía dinero, lo único que le quedó fue trabajar en la facultad, fue a hablar con el Decano...tuvo que hacer un contrato con la Facultad, tuvo que pintar paredes, rejas, todo y así pudo graduarse.

B) CARNÉ DE BIBLIOTECA, ORIGINAL Y DUPLICADO



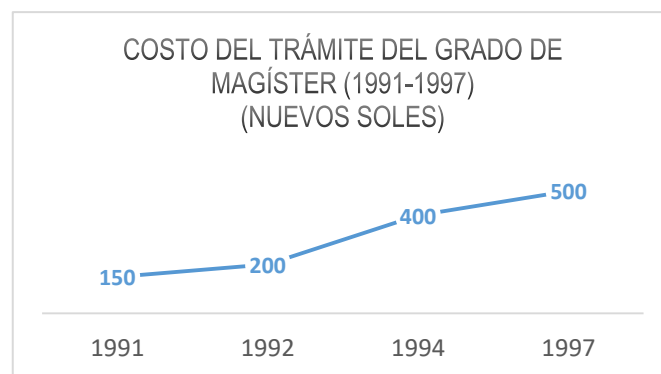
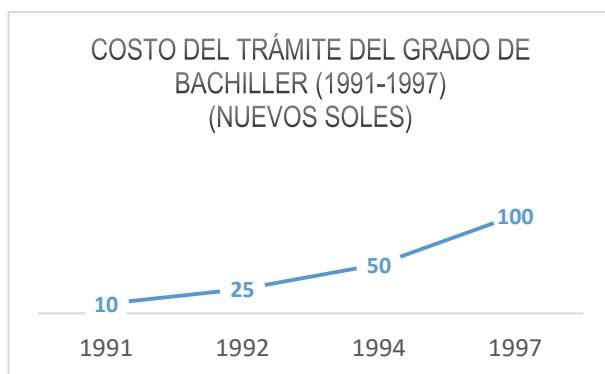
El costo del carné original, entre 1994 y el 2000, se elevó en casi un 400% (de 4 a 15 nuevos soles). Y el costo del carné duplicado se elevó, entre 1994 y 1999, en un 700% (de 5 a 35 nuevos soles). Así, estos incrementos, si bien no iniciaron con la reorganización, como se ve en los gráficos, sí se consolidaron en el periodo 1995-2000.

C) CONSTANCIA DE INGRESO

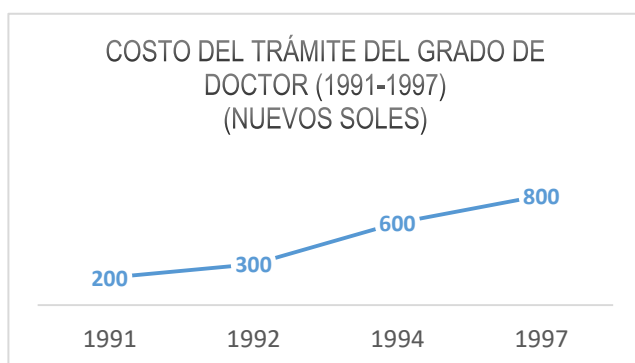


El costo de la constancia de ingreso, entre 1994 y 1999, se elevó en un 500% (de 6 a 30 nuevos soles).

D) GRADO DE BACHILLER, MAGÍSTER Y DOCTOR; TÍTULO PROFESIONAL



El costo del trámite del grado de Bachiller, entre 1994 y 1997, se duplicó; el costo del trámite del grado de magíster, entre 1994 y 1997, se elevó en S/. 100 nuevos soles; el costo del trámite del grado de doctor, entre 1994 y 1997, se elevó en S/.200 nuevos soles; y el costo del trámite para obtener el título profesional, entre 1994 y 1997, se duplicó.



Además, vemos que la tendencia positiva al incremento, al igual que en los conceptos anteriores, se inicia antes del régimen reorganizador; lo cual concuerda con lo que sostenemos arriba: el incremento de costos o la mayor recaudación de RDR no inicia con la CORE-SM pero sí se consolida debido a los criterios, políticas y planes que guían las acciones de esta comisión.

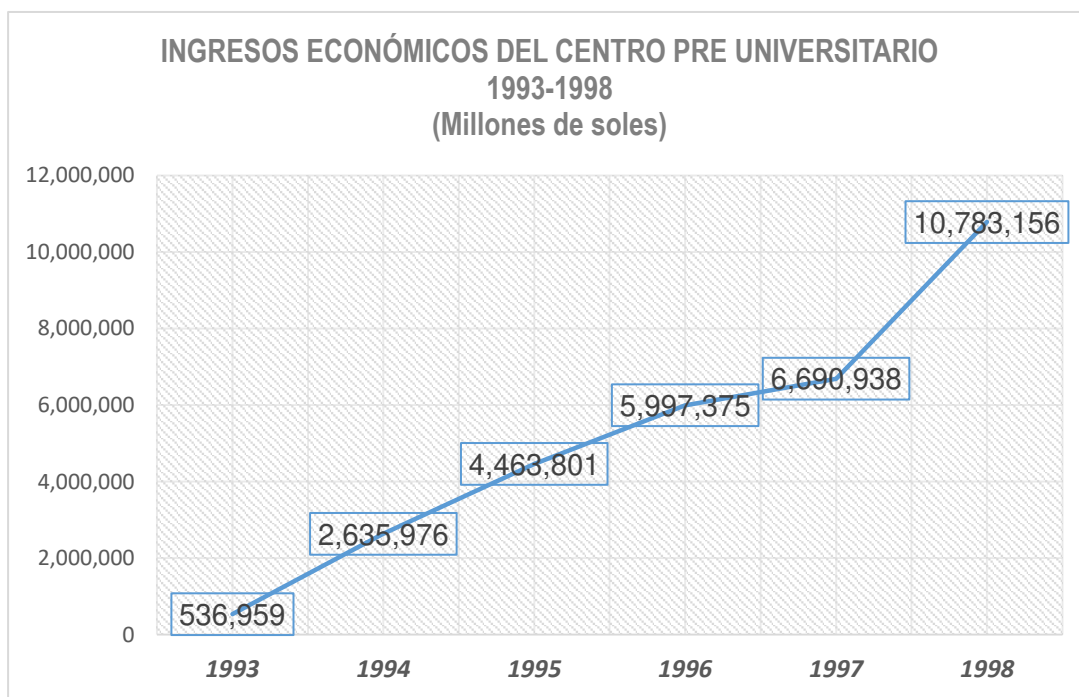
Así, la evolución de las tarifas de estos servicios en el periodo del gobierno de la CORE-SM continua con la tendencia positiva al incremento de los costos y la llega a consolidar. Es decir, el gobierno de la CORE-SM consolidó la política privatista de

mayor recaudación de Recursos Directamente Recaudados a partir de los cobros por los servicios administrativos revisados.

Todos estos exorbitantes cobros relacionados al constante peligro de “perder el derecho a ser alumno” debido a las repitencias repercutieron gravemente en la continuidad universitaria de muchísimos estudiantes. Así, la CORE-SM había configurado una universidad que negaba la gratuidad, la democracia y la autonomía; era, pues, una universidad restringida, adversa a la Educación integral.

3.2.3. LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL CENTRO PREUNIVERSITARIO

A) EVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO



Fuente: Cabrera, 2000

Los RDR o ingresos recaudados por el Centro Preuniversitario de San Marcos (CEPUSM) -creada en 1993¹¹⁶- de la UNMSM se elevaron, entre 1994 y 1998, en aproximadamente un 410%; es decir, se cuadruplicaron. Para 1999, según Cabrera (2000) la proyección de ingresos era de casi 12 millones de nuevos soles. Un factor determinante, y hasta crucial, del éxito del CEPUSM es la posibilidad que brinda a sus estudiantes de ingresar a la UNMSM mediante la “modalidad de ingreso directo”. En este sentido, la CORE-SM, le asignó en 1995 el 20% anual del número total de vacantes que ofrecía la UNMSM cada año¹¹⁷; lo cual significó la duplicación del número de vacantes asignados desde su creación: 10%¹¹⁸.

Este incremento notable es consecuencia lógica de la aplicación de los planes que la CORE-SM definió para los centros de producción, como es el caso del CEPUSM. Esta consolidación fue la contraparte o la salida adoptada frente a la constante disminución del presupuesto asignado por el Estado (Recursos

¹¹⁶ RR Nro. 113064 del 19 de Agosto de 1993.

¹¹⁷ RR Nro. 3539-CR-95 del 19 de setiembre de 1995.

¹¹⁸ RR Nro. 113722 del 1 de octubre de 1993.

Ordinarios). En consecuencia, y en base a lo analizado en el acápite “Reconfiguración del sostenimiento económico de la universidad pública” del marco teórico, es claro que la política privatista desarrollada por el régimen fujimorista y por la CORE-SM (1995-2000) implicó la consolidación de la recaudación de Recursos Directamente Recaudados por el Centro Preuniversitario. Consolidación que se exaltó por ser, al igual que en el caso de las tarifas, determinante para alcanzar los objetivos primordiales establecidos en el plan de la CORE-SM.

Esto se tradujo en un incremento sostenido del porcentaje de estudiantes en el CEPUSM y sus ingresantes, los cuales podían cubrir los altos montos demandados. Esto, a su vez, contribuyó enormemente en la elitización de la UNMSM (Garfias, 2015).

Año	Total postulantes	Pre de San Marcos	%	Total ingresantes	Pre de San Marcos	%
1994	45.194	448	0,99	4035	143	3,54
1995	50.214	4445	8,85	4058	540	13,30
1996	45.952	6031	13,12	4071	949	23,31
1998	51.488	7767	15,08	4725	1088	23,02
1999	55.586	5710	10,27	6032	1060	17,57

Fuente: Garfias, 2015

Por ejemplo, en 1998, el 26% del total de vacantes de la UNMSM fue asignado al CEPUSM (y cubrió casi la totalidad, 23%); la matrícula costó S/. 200, el pago por el ciclo a S/. 900. Es decir, cada estudiante tenía que pagar S/.1100. En ese año fueron 7767 los postulantes -estudiantes en el CEPUSM- y representó el 15% del total de postulantes en 1998.

En este sentido, añadiremos dos consideraciones en relación al CEPUSM. 1) Este organismo, además de contribuir en la privatización de la UNMSM, contribuye, consecuentemente, en su elitización. Al respecto, Garfias (2015) señala que:

*Si bien la desaceleración del ingreso de los sectores pobres a la universidad se hizo evidente con el establecimiento de la Pre de San Marcos a partir de mediados de la década del noventa, sus primeros síntomas comenzaron a manifestarse una década antes, cuando la proliferación de academias preuniversitarias llevó a institucionalizar su presencia como un ámbito imprescindible en los procesos de selección de estudiantes para las universidades. **Se entiende entonces que la implementación de la Pre de San Marcos y sus similares en otras universidades públicas, significó simplemente intervenir en un inmenso mercado de jóvenes que***

demandaban un entrenamiento adicional para enfrentarse con éxito a las pruebas de admisión; entrenamiento que no encontraban en el marco de su educación formal y que, como dice Zenón de Paz, por un lado acentuaba “un esquema de formación memorístico y acrítico” y, por otro, “redujo sensiblemente la posibilidad de ingreso de quienes por razones económicas no pueden acceder a dichos espacios” (De Paz 2005: 74). En efecto, más del 70% de estudiantes que ingresaron a la Universidad de San Marcos al iniciarse la primera década de este siglo pasaron por una academia preuniversitaria (45,43%) o por la Pre de San Marcos (27,46%). (p. 145).

La segunda consideración, cuya esencia ya se encuentra en el párrafo citado, es que el origen de este organismo encuentra su raíz en la crisis de la estructura educativa y, en última instancia, en la crisis de la Educación en general.

3.2.4. LA SISTEMATIZACIÓN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La CORE-SM aprobó en 1997 la “Directiva de Manejo y Control de los Recursos Propios de las Facultades y Administración Central”¹¹⁹, mediante el cual mejoró el sistema relacionado a los RDR. Una medida central de esta Directiva fue el establecimiento de la Caja Única¹²⁰, la cual implicó centralización de los RDR en la Administración Central¹²¹.

Ligado a esta medida también se concentraron los RDR en la Administración Central mediante la disposición dada por la RR Nro. 5127-CR-1996 que mandó que las Facultades transfieran el 20% de todos los RDR recaudados por sus dependencias, Centros de Investigación y Escuela de Post Grado; que luego se detallaría como el “cumplimiento en las transferencias mensuales a la Administración Central del 20% de los ingresos Totales de Programas, Proyectos o Actividades Autofinanciadas”.

Lógicamente, los RDR fueron utilizados mayoritariamente en el financiamiento de los proyectos priorizados por la CORE-SM. En dicho periodo fueron tres las principales fuentes de RDR: el CEPUSM, procesos de Exámenes de admisión y las Tarifas. Los RDR recaudados por el CEPUSM fueron destinados principalmente a la construcción de la nueva Biblioteca Central, como detallaremos más adelante. Los RDR recaudados de los Exámenes de admisión eran centralizados y luego distribuidos, desde antes de 1995. Y los RDR recaudados a partir de las tarifas se dividían, incluso antes de 1995, entre la Administración Central y las Facultades.

¹¹⁹ Aprobada mediante la RR Nro. 00562-CR-97 del 4 de febrero y actualizada mediante la RR Nro. 04933-CR-2000 del 31 de mayo.

¹²⁰ “Todos los ingresos propios que se generan en la Universidad, su captación (sic) se realizará a través del Banco Financiero, la Oficina de Tesorería General y excepcionalmente por la Oficina de Economía de la Facultad, con el compromiso de depositar al día siguiente en forma íntegra el dinero recaudado...”.

¹²¹ Sin embargo, solo el 20% () de los RDR recaudados por las Facultades y sus diferentes dependencias eran transferidos para su uso de la Administración Central. Es decir, si bien el Rectorado tenía conocimiento, en base a la caja única, de los montos recaudados por cada Facultad esto no implicaba que se les “expropiaba” del 100% de sus RDR.

Antes del 2003 la UNMSM solo desarrollaba un proceso de admisión mediante examen general¹²². Los cobros hechos por este concepto a las decenas de miles de postulantes representaron un millonario ingreso a las arcas de la universidad. Tomando también como ejemplo el año 1998, fueron 41 829 estudiantes los que pudieron pagar S/. 125 (egresados de colegios públicos) y S/. 250 (egresados de colegios privados) y tomaron el examen general de admisión. Considerando al CEPUSM, fueron en total 51 488 postulantes en 1998. De ellos, ya 15 162 provenían de colegios privados y 36 326 de colegios públicos; es decir el 29% y 71%, respectivamente.

Los primeros “beneficiados” de estos procesos eran los vinculados al desarrollo de estos: las autoridades universitarias, los funcionarios de la Oficina General de Admisión (OGA) y los docentes que apoyaron en la elaboración y vigilancia de su desarrollo. Por ejemplo, en 1996, S/. 1 364 500 se destinó como ingresos líquidos y bajo el rótulo de “Bonificaciones especiales” a todos los funcionarios de alto rango de la OGA, las autoridades universitarias (miembros de la CORE-SM y su secretario, decanos, miembros de comisiones de gobierno de las facultades, etc.) y sus allegados. Por ejemplo, cada miembro de la CORE-SM recibió, solo considerando el año 1996, S/. 22 500 nuevos soles; cada decano S/. 8 400 nuevos soles.

INTEGRANTES	NUMERO PERSONAL	BONIFICACION UNITARIA	MESES	TOTAL
Jefe *	7	4500,00	5	157500,00
Miembros OGA **	4	4000,00	5	80000,00
Asesores OGA ***	20	2800,00	3	168000,00
Asesores de área	20	2200,00	4	176000,00
Adjuntos	50	1800,00	3	270000,00
Asistentes ****	114	1500,00	3	513000,00
SUB TOTAL				1364500,00

¹²² Medida impulsada por la CORE-SM mediante la RR Nro. 05900-CR-99, del 10 de setiembre, que creo la “Comisión Especial encargada de dictaminar sobre la posibilidad de realizar un Segundo Examen de Admisión Anual...”.

Así, de los S/. 5 431 500 consignados como “excedente” del examen general de admisión de 1996, las “Bonificaciones especiales” representaron el 25%, nada menos que la cuarta parte; un monto superior a lo destinado a todas las facultades y superior a cualquier otro gasto que se hizo de aquel “excedente”. Estamos pues ante un mecanismo corrupto y corruptor que, además, funcionó como excelente acicate para todas las autoridades de este periodo, como cohesionador empalagoso de la estructura de gobierno y como efectiva prebenda administrada por la CORE-SM.

Este sistema de distribución de los “excedentes” o “ganancias” producto de los exámenes de admisión se sistematizó. Así, varios organismos, como las facultades, la OGA, e incluso la reserva financiera, dependían ya de esos ingresos. Como prueba de ello tenemos a las siguientes distribuciones:

En 1996 se distribuyó de la siguiente manera¹²³:

<i>Bienestar Universitario</i>	<i>S/. 100,000</i>
<i>Operación de la fibra óptica</i>	<i>S/. 1 098,640</i>
<i>Subvención al personal docente y administrativo</i> ¹²⁴	<i>S/. 1 094,296</i>
<i>Presupuesto OGA May/Nov 96</i>	<i>S/. 300,000</i>
<i>Reparación Comedor Universitario</i>	<i>S/. 100.000</i>
<i>Reserva Financiera</i>	<i>S/. 892,592</i>
<i>Asignación a Facultades</i>	<i>S/. 481,472</i>
TOTAL	<i>S/. 4 067,000</i>

En 1998 se distribuyó de la siguiente manera¹²⁵:

<i>Bienestar Universitario</i>	<i>S/. 100,000</i>
<i>Red Telemática</i>	<i>S/. 900,000</i>
<i>Subvención al personal docente y administrativo</i>	<i>S/. 1 242,780</i>
<i>Presupuesto OGA 1998</i>	<i>S/. 300,000</i>
<i>Implementación Centro de Inform.</i>	<i>S/. 990.000</i>
<i>Reserva Financiera</i>	<i>S/. 1 068,871</i>
<i>Asignación a Facultades</i>	<i>S/. 481,472</i>
TOTAL	<i>S/. 4 094,113</i>

En 2000 se distribuyó de la siguiente manera¹²⁶:

<i>Red Telemática</i>	<i>S/. 600,000</i>
<i>Subvención al personal docente y administrativo</i>	<i>S/. 1 242,791</i>
<i>Presupuesto OGA 2000</i>	<i>S/. 300,000</i>
<i>Reserva Financiera</i>	<i>S/. 1 131,794</i>
<i>Asignación a Facultades</i>	<i>S/. 481,472</i>
TOTAL	<i>S/. 3 756,057</i>

¹²³ RR Nro. 5060-CR-96 del 13 de agosto de 1996.

¹²⁴ El cual se asignaba además de lo asignado en un primer momento.

¹²⁵ RR Nro. 01967-CR-98 del 6 de abril.

¹²⁶ RR Nro. 03409-CR-00 del 24 de abril.

La segunda forma de distribución de los RDR se hacía a partir del total recaudado por el costo de la matrícula y las beneficiadas eran las facultades. Esta forma se denominó “Otorgamiento de anticipos”¹²⁷ y se ejecutaba anualmente. Esta distribución establecía como condición previa que las Facultades hayan cumplido en transferir el 20% del total de sus RDR a la Administración Central; establecía, además, que el recurso transferido a las Facultades debía utilizarse exclusivamente en el financiamiento de actividades de enseñanza e investigación.

Sin embargo, el monto de los “Recursos de Matrícula” a distribuir solo era el *saldo* de un conjunto de deducciones hechas según criterio de la CORE-SM, cuestión que abordaremos en el siguiente apartado.

En conclusión, como parte de la consolidación de los RDR se sistematizó su recaudación, uso y distribución; lo cual no estuvo ajena al gran enriquecimiento económico personal de las autoridades universitarias, principalmente de la CORE-SM, y su consecuente uso como prebenda.

3.2.5. LA POLÍTICA DE INFORMATIZACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO MEDIANTE LOS RDR

A) LA RED TELEMÁTICA Y EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS (SISBIB)

La CORE-SM, en base al diagnóstico, tuvo como un eje central de sus planes de trabajo el desarrollo tecnológico para que sea un soporte del trabajo académico; específicamente se trabajó en la conexión a internet, la interconexión entre todas las facultades y el consecuente intercambio y sistematización de la información académica, principalmente. En este sentido se inauguró el 12 de mayo de 1996 la Red Telemática, la cual consistió, en su inicio, en una red de fibra óptica de 8 km que supuso la vinculación digital de todas las facultades y la consecuente sistematización. En base a esta Red se pudo desarrollar el Sistema de Bibliotecas (Sisbib), inaugurada el 11 de abril de 1996. De esta manera, “todas las bases que constituían ya una Biblioteca Virtual se consultaban desde cualquier punto de la Red. Se fortaleció el criterio de Sistema al establecer un carné único de Biblioteca”; además, con el SISBIB se pudo acceder al Correo Electrónico (Internet). Esta interrelación efectiva fue resaltada de la siguiente manera: “Vincular la

¹²⁷ Algunas RR que ejecutaron esta distribución: RR Nro. 02998-CR-1997; RR Nro. 03312-CR-1998; RR Nro. 02793-CR-1999 y la RR Nro. 04170-CR-2000.

implantación de la red con los servicios que por su intermedio ofrecía el Sisbib fue la clave del éxito” (UNMSM, 2000, p. 57).

La CORE-SM, para el financiamiento de este proyecto se basó principalmente en la deducción de S/. 28.00 nuevos soles que hizo del monto que se cobraba anualmente a cada estudiante por concepto de matrícula. El concepto se denominó: “Uso de sistemas automatizados de Información de la Red Telemática”¹²⁸.

B) EL CENTRO DE INFORMÁTICA (INFO SAN MARCOS)

Relacionado al eje tecnológico, otro aspecto principal desarrollado por la CORE-SM fue la informática. Al respecto señalaron que “Era claro, y se incluyó en el plan de reorganización de 1997, que la Universidad debería desarrollar una política centralizada de informatización de sus alumnos y docentes; para ello se decidió la creación del Centro de Informática (Info San Marcos), el cual constituye un importante avance en la informatización académica de San Marcos”. Esta política, a su vez, tenía como objetivo la creación de una “cultura informática generalizada”. Con estos objetivos y planes interrelacionados se procedió a buscar un local para el Centro de Informática: “los estudios realizados indicaban que deberíamos contar con un local equivalente a un pabellón de Facultad, para lo cual la inversión necesaria no estaba al alcance de los recursos económicos de la Universidad. *Como en otras ocasiones, fue necesario encontrar soluciones creativas*” (UNMSM, 2000, p. 59). En este sentido, exponen así su solución creativa:

Los dos pabellones de la Vivienda Universitaria, que encontramos en condiciones deplorables y casi inhabitables, fueron objeto de reconstrucción y remodelación impulsada por la Comisión Simultáneamente, se realizó un censo de estudiantes de la vivienda y, recuperando el control de los edificios, descubrimos que la capacidad de uno solo de los pabellones remodelados era suficiente para cubrir las reales necesidades de los alumnos, por lo que, con una adecuada reconversión, el segundo pabellón podría convertirse en el local del Centro de Informática...Finalmente, el Centro de Informática se terminó al remodelar uno de los pabellones de la Vivienda, y comenzó a funcionar en 1998.

Hecho esto y en base a una política de obligatoriedad, las bases ingresantes asistieron masivamente al Centro de Informática. “los alumnos ingresantes en ese año [1998] se matricularon en un 80% en el Curso Básico de informática (CBI)...En 1999, luego del Examen de Admisión, se matriculó a más de 5000 ingresantes en el CBI, logrando una cobertura de más del 95% de los nuevos alumnos”.

¹²⁸ Lo cual se comprueba con la RR Nro. 03312-CR-98 del 4 de junio de 1998: “Que, el Sistema de Bibliotecas viene permitiendo el acceso a INTERNET, a base de datos, bibliotecas virtuales y sistemas automatizados de información; por lo que, es necesario compensar dichos servicios mediante el aporte de S/. 28.00 (Veintiocho y 00/100 Nuevos Soles) por cada alumno matriculado para cubrir sus gastos de funcionamiento”. En 1997 el monto deducido fue de \$10.00 dólares americanos (RR Nro. 02998-CR-97); y en 1999 el monto también fue de S/. 28.00 nuevos soles, cuyo concepto se denominó “Uso de sistemas automatizados de información del Sistema de Biblioteca” (RR Nro. 02793-CR-99).

Para financiar el inicio de este proyecto, la CORE-SM, también se basó en la deducción del monto por concepto de matrícula que era obligatorio para todos los estudiantes. En este caso fue de S/. 32.00 nuevos soles; y el concepto fue “Equipamiento e Innovación Tecnológica del Centro de Informática”¹²⁹. Posteriormente, una vez iniciado su funcionamiento (1998), se implementó un nuevo concepto y monto; se pasó a obligar a los ingresantes, “como condición para su matrícula”¹³⁰ a cursar el Curso Básico de Informática (CBI) cuyo monto fue de S/. 25.00 nuevos soles por estudiante. Monto que, según la CORE-SM, era subsidiado¹³¹ en más del 50% por la Administración Central para el caso de estudiantes y docentes; aspecto que implicaba su potencial incremento. Además, para el caso del público en general se estableció el monto de S/. 80.00 nuevos soles para poder estudiar el mismo curso¹³².

En efecto, el incremento para el caso estudiantil se dio mediante la RR Nro. 01115-CR-99 del 1 de marzo de 1999; allí la CORE-SM dispone que los ingresantes en dicho año paguen S/.50.00 nuevos soles por cursar el CBI. Este incremento estuvo acompañado de medidas que buscaron sistematizar de mejor manera el “Programa de Capacitación en Informática Básica” al mandar que INFO SM coordine directamente con la Oficina General de Admisión para así lograr que la totalidad de ingresantes se matricule en el CBI¹³³. Este sistema se reiteró y amplió en el 2000¹³⁴ al disponer que los ingresantes al post grado también estaban obligados a cursar el CBI.

C) LA NUEVA BIBLIOTECA CENTRAL

La nueva Biblioteca Central, inaugurada en diciembre de 1999, es, según la CORE-SM, “la culminación de varios proyectos y la integración de varias líneas de desarrollo”. Esta obra, en efecto, articuló y consolidó la política de informatización. Por esta razón, y siendo esta política una de las priorizadas por la CORE-SM, la Biblioteca Central es considerada por la misma Comisión Reorganizadora el “símbolo de la reorganización, de su carácter

¹²⁹ Lo cual se comprueba con la RR Nro. 03312-CR-98 del 4 de junio de 1998: “Que el funcionamiento del Centro de Informática ubicará a la UNMSM en situación de liderazgo en materia de informatización académica para sus alumnos y docentes; por lo que, es necesario asegurar la continuidad del proceso de innovación tecnológica, dado el carácter multipropósito del Centro mediante el aporte de S/. 32.00 por cada alumno matriculado...”.

¹³⁰ Según RR Nro. 04177-CR-98 del 9 de julio de 1998. “Disponer que los ingresantes 1998 quedan obligados a presentar el certificado de haber aprobado el Curso Básico de Informática dictado por INFO SAN MARCOS como condición para su matrícula en el Año Académico 1999”.

¹³¹ Irónicamente, este “subsidio”, aplicado en 1998, fue financiado por los propios estudiantes ya que la Administración Central deducía, del monto cobrado a cada estudiante por su matrícula, S/. 32.00 nuevos soles. En 1999 habiéndose dejado de deducir algún monto y, por ende, ya no aplicándose el “subsidio”, se cobró S/. 50.00 nuevos soles.

¹³² Según RR Nro. 5712-CR-98 de 18 de setiembre de 1998.

¹³³ “Que la Oficina General de Admisión es el órgano encargado de otorgar las Constancias de Ingreso a todos los ingresantes 1999; y durante dicho proceso es posible efectuar la matrícula en el Curso Básico de Informática” (RR Nro. 01115-CR-99).

¹³⁴ RR Nro. 02445-CR-00 del 15 de marzo de 2000.

fundamentalmente académico, de su orientación hacia el estudiante y el profesor, de sus objetivos de la calidad académica” (UNMSM, 2000, p. 66).

El financiamiento de la infraestructura de la nueva Biblioteca Central se basó principalmente en los Recursos Directamente Recaudados (RDR) por el principal “Centro de Producción” de la Universidad: el Centro Pre Universitario. Así, “esta construcción se inició con fondos propios provenientes de los excedentes del Centro Preuniversitario” (UNMSM, 1999, p. 54). Esto es detallado por Paredes Manrique en su Mensaje de 1999:

En junio de 1995, al entrar en funciones la Comisión de Reorganización encontró en el Centro Pre Universitario, en dos años y medio de funcionamiento un saldo de S/. 675,500.00 nuevos soles. En lapso similar, pero con la Reorganización y con una mejor administración, se ha generado cerca de S/8 000 000.00 de nuevos soles; con lo cual, con un total superior a los S/. 8 600,00.00 nuevos soles iniciamos la construcción de la primera etapa de la Biblioteca Central. El costo de la obra civil es de S/. 16 902,341.81, de los cuales corresponden S/. 5 595,389.22 a recursos del Tesoro y S/. 11 306,952.59 a recursos directamente recaudados (propios) (UNMSM, 1999, p. 54).

Con estos datos podemos señalar que el 67% del financiamiento de este local fue cubierto por los RDR, los cuales provinieron de los bolsillos de los estudiantes y las familias que aspiraban a ingresar a la Universidad mediante la modalidad de “ingreso directo”. Posteriormente, mediante la RR Nro. 02793 del 11 de mayo de 1999, se mandó que S/. 32.00 nuevos soles, del monto total abonado por cada estudiante para su matrícula, serían destinados para el “Equipamiento de la Biblioteca Central”.

Así, la principal obra de infraestructura de este periodo fue financiada por medios privados, lo cual, sumado a que es considerada el “símbolo de la reorganización” por la CORE-SM, evidencia que la política de privatización fue determinante en el periodo de gobierno de la CORE-SM.

Sintetizando, la Red Telemática, el Sistema de Bibliotecas, el Centro de Informática y la nueva Biblioteca Central formaron parte de una política de informatización que fue priorizada por la CORE-SM. Estos avances infraestructurales y organizacionales desarrollados como parte de esta política fueron positivos; sin embargo, debe comprenderse que esto se concretó siguiendo el camino privatista ya que se financió con los Recursos Directamente Recaudados (RDR). Este camino seguido es coherente con los planes establecidos previamente por la CORE-SM, en los cuales ya explicita el abandono de la opción que implica la exigencia de mayor presupuesto por parte del Estado. En esta misma vía, la CORE-SM lejos de expandir la capacidad de la Vivienda Universitaria de Ciudad Universitaria, la recortó en un 50% para así materializar el Centro de Informática, lo cual significa la vulneración del Bienestar Universitario, condición coadyuvante de la gratuidad de la Educación.

D) EJEMPLO DE OTROS NUEVOS COBROS

A partir de la implementación de un nuevo servicio: el “Autoseguro de Accidentes Personales para Estudiantes de Pre-Grado” se creó un nuevo cobro. Así, en 1998 se dedujo, del monto de la matrícula de cada estudiante, S/. 25.00 nuevos soles¹³⁵. Posteriormente, en 1999, se implementó el cobro obligatorio de S/. 50.00 nuevos soles¹³⁶ por estudiante por dicho concepto.

Es en este periodo que el Centro de Salud universitario cambia su nombre al de Clínica universitaria y se entronca en el proceso de privatización. Esto mismo sucedió con el Centro de Idiomas.

En agosto de 1998 también se aprueba el tarifario propuesto por el Centro Cultural de la UNMSM¹³⁷:

DERECHO DE INGRESO DE VISITANTES: Adultos: S/. 4.00; Estudiantes Universitarios: S/. 2.00; Escolares: S/. 1.00.

ALQUILER DE SALAS (Tiempo máximo 02 horas):

COMUNIDAD SANMARQUINA: Salón General: S/. 300.00; Salón de recepciones: S/. 200.00

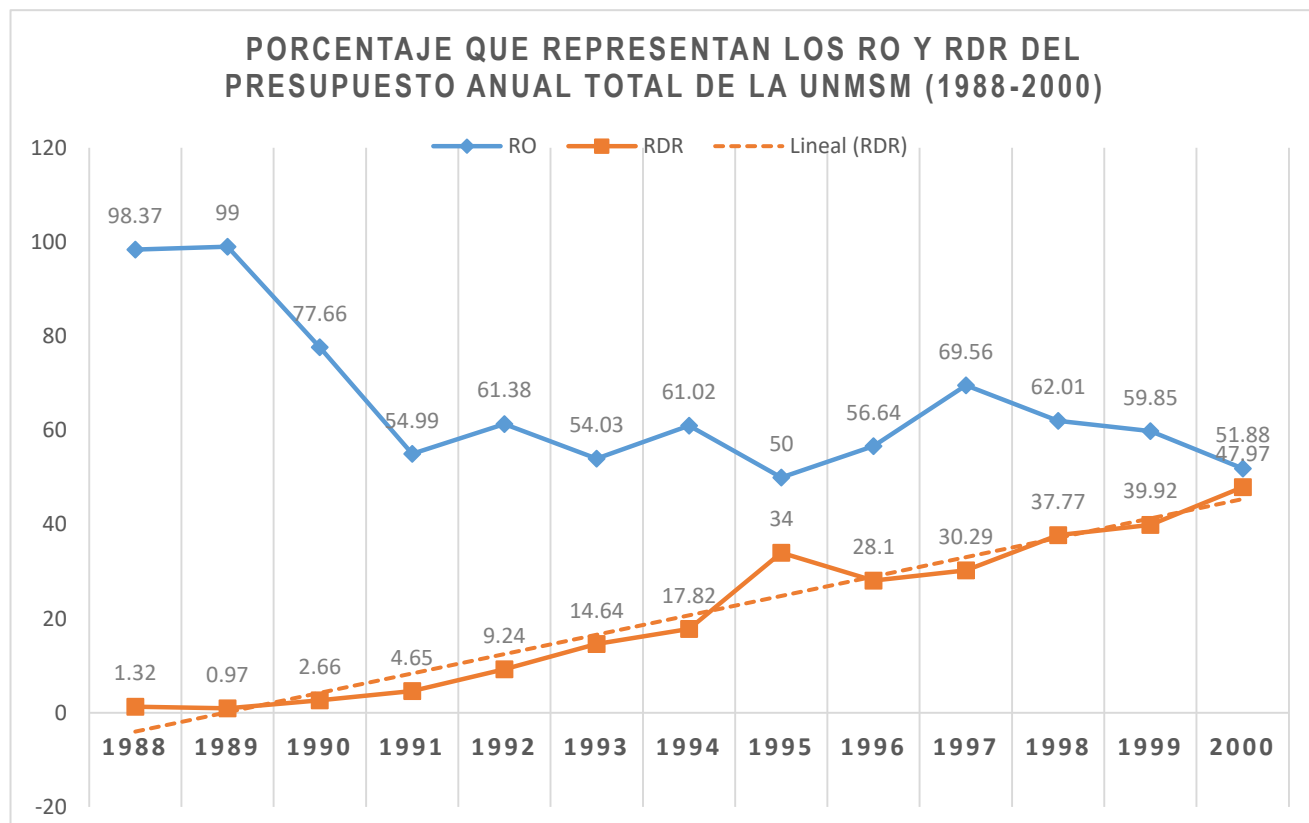
PÚBLICO EN GENERAL: Salón General: S/. 700.00; Salón de recepciones: S/. 300.00

¹³⁵ Lo cual se comprueba con la RR Nro. 03312-CR-98 del 4 de junio de 1998: “Que al haberse implementado el Autoseguro de Accidentes Personales para Estudiantes de Pre-Grado es necesario deducir el importe de S/. 25.00 por cada alumno matriculado para cubrir sus gastos de funcionamiento”.

¹³⁶ Mediante RR Nro. 01479-CR-99 del 17 de marzo de 1999.

¹³⁷ Mediante RR Nro. 04944-CR-98 del 17 de agosto de 1998.

3.2.6. EVOLUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RO Y RDR RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL (1990-2000)



Como se observa, la tendencia al alza de los RDR es notable. Entre 1990 y el 2000 el porcentaje de los RDR subió hasta alcanzar prácticamente la mitad del presupuesto total de la UNMSM. Esta tendencia tiene su inicio en los años finales de la década del 80, su desarrollo¹³⁸ en los años iniciales de la década del 90 y su consolidación en el periodo 1995-2000 ya que en este lustro los RDR comienzan representando más de un tercio del presupuesto total y terminan representando casi la mitad del presupuesto total.

Como se ha demostrado en el acápite sobre la privatización del sostenimiento económico de la universidad pública, la tendencia al alza de los RDR también se da en el caso de las universidades nacionales. Es decir, este es un fenómeno generalizado. Esto prueba que dicha tendencia se corresponde con la evolución de la política privatista desarrollada por el gobierno de Fujimori, en general, y por la CORE-SM, en específico (UNMSM).

¹³⁸ Rene Meza, estudiante que ingresó en el año 1992, señala que en el gobierno de Wilson Reátegui (1990-1995) sí se desarrollaba ya la política de privatización: *Wilson Reátegui no fue ajeno a eso, frente al fujishock dado por Fujimori, el gobierno de Reátegui también hace su fujishock en San Marcos y el rectorado lanza un comunicado diciendo "así como el país se ha ajustado, San Marcos también tiene que ajustarse". Así, por ejemplo, la matrícula que estaba un sol pasó a costar 20 soles. Y se crearon muchos nuevos cobros. Entonces ya había una política de generación de recursos propios, eso como respuesta al recorte que el Estado estaba haciendo, la universidad estaba arrinconada* (Meza, entrevista marzo 2020).

Además, lejos de lo que podría pensarse, este incremento abrupto de la participación privada no representa un incremento significativo del presupuesto total de la UNMSM en este periodo. Esto se comprueba al ver la magra evolución del presupuesto en soles *constantes* (Anexo V).

3.2.7. INTERPRETACIÓN

En función a la concreción de este modelo económico en el ámbito universitario de América Latina, la UNESCO y la CEPAL elaboraron documentos como “Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad” (1992), el cual sistematizó los criterios y las medidas que la ONU proponía a los Estados de esta región. Así, en este documento, como hemos revisado en el Marco Teórico, se recomienda que frente al decremento de los Recursos Ordinarios se impulse el **“aumento de la contribución del sector privado, ya sea de los hogares o de las empresas”** mediante el pago de pensiones, la venta de servicios “a precios de mercado” y la mayor vinculación con las empresas privadas. Transversalmente, plantean que la implementación de estos cobros deber ser *equitativo*; es decir, cobrar un mayor monto a los sectores con mayores ingresos. Y, en el otro extremo, otorgar becas a los sectores más empobrecidos. Complementan esto dejando claro que la concreción de la equidad debe estar condicionada a la *calidad, eficiencia y pertinencia* de la educación brindada.

Brunner (1994), analizando la aplicación de estos criterios -que también eran propuestos por el Banco Mundial- en A.L. señala que “la pauta latinoamericana emergente de cambios de la educación superior es convergente, en lo esencial, con las políticas recomendadas por diversas agencias internacionales”. En este sentido, el gobierno de Fujimori fue coherente en desarrollar una política universitaria privatista.

Además, esta política pudo implementarse efectivamente porque dentro de la comunidad universitaria nacional existieron docentes y autoridades que impulsaron la aplicación de aquellos criterios en la década del 90; propuesta que posteriormente fue sistematizada en los documentos “Diagnostico de la Universidad Peruana: Razones para una nueva reforma universitaria” (2002) y “La universidad en el Perú” (2006).

En base a esta política y sus respectivos criterios, la CORE-SM, como fiel ejecutora, diagnosticó que era **“irreal considerar que el aporte del Estado se incrementará en un futuro previsible”**; y, en base a ello, planteó que **“es imprescindible desarrollar una política realista a mediano y largo plazo que permita independizar las necesidades del desarrollo universitario de los presupuestos del tesoro”** mediante la generación de **“una política agresiva de captación de ingresos propios a nivel de la universidad”** con

“óptica empresarial”. Planteamiento que se debía sistematizar mediante **“un plan a mediano y largo plazo de financiamiento del desarrollo universitario, que contempla recursos predecibles e independientes de los aportes del tesoro...”**.

En efecto, como un ejemplo de la concreción conjunta de estos criterios tenemos el caso de los costos diferenciados de la matrícula (S/. 180, S/. 400 y S/. 600 nuevos soles), el cual fue justificado por la CORE-SM señalando que esto se hacía **“bajo el principio de equidad y solidaridad”** y en aplicación de **“un sistema de tasas universitarias diferenciado según la capacidad socioeconómica de cada estudiante”**. Todo lo cual fue presentado por la CORE-SM como un logro: “La Universidad, en la actualidad, en forma creativa y a través de una optimización administrativa, genera más recursos propios, los cuales ya se encuentran cercanos al 40% del total de nuestro presupuesto” (UNMSM, 1999, p. 60).

Así, el proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000) implicó la consolidación del proceso de privatización de esta universidad. Procesos que devinieron de la política universitaria desarrollada por el gobierno fujimorista en base a los criterios y medidas establecidas por la ONU y el Banco Mundial.

Esta interpretación no estaría completa si no explicitamos que la consolidación de la privatización de la UNMSM se garantizó mediante la represión ejercida por la CORE-SM y, en el caso estatal, mediante la Base Militar instalada en San Marcos entre 1991 y 1998. Por esta razón, tal como lo plantea el TIP (2007) para el caso de la UNE, este fue también un proceso de “privatización militarizado”. Al respecto, Rene Meza, dirigente estudiantil en el periodo de la CORE-SM, tras relatar un hecho en el que los militares trataban de desalojar por la fuerza a un grupo de estudiantes que rechazaban el cobro excesivo por matrícula, concluye que:

Eran los militares imponiendo los decanos que no podía imponer; eran los militares cuidando las instalaciones de las facultades para protegerlas de las tomas; eran los militares desalojando a los estudiantes contra el alza de las matrículas; eran los militares en diversas facetas; eran los militares cerrando el Centro Federado de Derecho, el Centro Federado de Educación. Osea, los militares eran la fuerza de choque, ¡insólito en una universidad! ¿Mejor muestra de una dictadura? y de la intencionalidad, porque no solo era un tema de dictadura sino de qué cosa buscaban finalmente, que cosa han logrado y que cosa queda de todo eso hoy.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

1. En cuanto al tipo de gobierno y a su política económica, el régimen de la Comisión de Gobierno de San Marcos (CORE-SM) se caracteriza por haber sido autoritario y privatista, respectivamente. Esto significa que la hipótesis general está confirmada.
2. El gobierno de la CORE-SM fue autoritaria porque fue impuesta por el Estado; porque concentró el poder mediante la eliminación del cogobierno y porque reprimió toda oposición mediante la militarización, el espionaje y la expulsión de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Esto significa que la primera hipótesis específica está confirmada.
3. El proceso de privatización de la UNMSM inició en los años finales de la década del 80 y se consolida en el periodo del proceso de reorganización (1995-2000) dirigida por la CORE-SM. Es decir, la CORE-SM consolidó el proceso de privatización de la UNMSM. Esto significa que la segunda hipótesis específica está confirmada.
4. La pugna en el seno de la UNMSM, entre el sector encabezado por Wilson Reátegui Chávez y el sector encabezado por Manuel Paredes Manrique; y la alianza entre este y el gobierno fujimorista fue la brecha y la correlación, respectivamente, mediante las cuales Fujimori pudo iniciar rigurosamente la aplicación de su política de reorganización mediante Comisiones Reorganizadoras en esta universidad.
5. La CORE-SM fue un organismo impuesto por el Estado peruano mediante la Ley N°26457 y la RS Nro. 150-95-PCM, implicó la intervención o vulneración de la autonomía universitaria de la UNMSM y ejecutó, cual brazo dentro de esta universidad, la política universitaria del régimen fujimorista.
6. La concentración del poder de la CORE-SM se plasmó, en el ámbito orgánico formal, en una reestructuración orgánica del gobierno que se desarrolló en tres niveles y tres pasos. Con tres niveles nos referimos al nivel central, al nivel de las facultades y al nivel de las escuelas. El primer paso fue dado por el Poder Ejecutivo al crear la CORE-SM y eliminar la AU y el CU, lo cual reestructuró el nivel central. El segundo paso fue dado por la CORE-SM e implicó la eliminación fáctica e inmediata de todos

los Consejos de Facultad y Comités Asesores; el “reemplazo” de algunos Consejos de Facultad por Comisiones de Gobierno; la designación “a dedo” de decanos afines; la colocación de docentes afines a la CORE-SM en las jefaturas de las oficinas centrales. Así, este segundo paso implica la instalación y consolidación del control del nivel central y el control fáctico del vértice superior del gobierno de todas las facultades. Finalmente, el tercer paso, dado por la CORE-SM al crear el COGESAA y el CONAFA, implicó la eliminación formal o “legal” (RR) de la totalidad de los Consejos de Facultad y estuvo acompañado de la designación de todos los miembros de ambos organismos en todas las facultades.

7. La represión ejercida por la CORE-SM fue sustentada por el Estado y se concretó en las políticas de militarización mediante una base militar, de espionaje, de estigmatización y la expulsión de una parte de la comunidad universitaria.
8. La mayor participación proporcional de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) en el presupuesto de la UNMSM, es decir su privatización, no inició en 1995 sino en los años finales de la década del 80. Sin embargo, el proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000) sí implicó la consolidación del proceso de privatización de esta universidad debido a una planificación rigurosa -“con óptica empresarial”- de recaudación de RDR; al incremento sostenido y notable de las tarifas, principalmente de la matrícula; las grandes ganancias proveniente del CEPUSM y los exámenes de admisión; y la sistematización del flujo de los RDR mediante una normativa clara y controlada por la CORE-SM.
9. En base a la consolidación de la recaudación de los RDR -privatización- se pudieron financiar los proyectos (Red Telemática, Sistema de Bibliotecas, Centro de Informática y la nueva Biblioteca Central) que conformaron la política de informatización, política bandera de la CORE-SM. Es decir, el principal “logro” de la CORE-SM fue financiado de manera directa (cobros) por los estudiantes y sus familias y no por algún fondo generado por alguna empresa productiva de la U. ni por el Estado.
10. La tendencia al alza y la consolidación de los RDR en relación al presupuesto de la UNMSM fue un fenómeno que también se dio en las universidades públicas entre 1995-2000. Es decir, esta tendencia se corresponde con la consolidación de la política educativa privatista desarrollada por el Estado dirigido por el gobierno

fujimorista. Política que, a su vez, devino de la aplicación rigurosa del modelo económico neoliberal y, en el ámbito educativo, de los criterios y medidas diseñados por organismos internacionales como la CEPAL, UNESCO y el Banco Mundial en los primeros años de la década del 90.

11. La intervención de la UNMSM mediante la CORE-SM vulneró la autonomía universitaria; la concentración del poder vulneró el cogobierno; la consolidación de la privatización vulneró la gratuidad y la represión vulneró las libertades políticas (opinión, organización y protesta). En síntesis, el proceso de reorganización (1995-2000) de la UNMSM implicó la vulneración de los principios democráticos de la universidad peruana, desarrollados por el movimiento universitario nacional a partir de la Reforma Universitaria iniciada en Córdoba. Es decir, este proceso de reorganización fue un proceso de contrarreforma universitaria.
12. De manera análoga a la situación nacional, en donde el precedente de la aplicación del neoliberalismo y la privatización fue un Estado dictatorial, en la UNMSM la consolidación de su privatización tuvo como precedente la instauración de un gobierno autoritario (CORE-SM) impuesto por dicho Estado y por la presencia represiva de éste en la universidad mediante sus organismos y métodos de guerra: Base militar (1991-1998), inteligencia (DINCOTE), estigmatización sistemática desarrollada por los medios de comunicación (diarios, TV). Fue, pues, un proceso militarizado de privatización.
13. El gobierno autoritario de la CORE-SM se amalgamó con los criterios neoliberales de gobierno empresarial: agilidad, flexibilidad, máxima ganancia económica, privatización, etc. Criterios que constituyen el gobierno universitario emprendedor o de emprendimiento privado (Brunner, 2010) promovido por los OFIS y aplicado por el gobierno de Fujimori.
14. La política nacional contrasubversiva evolucionó –en función a los objetivos del régimen- a una política represiva pero de menor intensidad que tuvo como objetivo la represión a toda manifestación organizada de oposición al régimen fujimorista y como táctica el uso de un supuesto grave peligro subversivo. En este mismo sentido la política contrasubversiva en la universidad evolucionó o cambió a una política represiva (1994 en adelante) pero de menor intensidad que tenía como objetivo ya no la eliminación (encarcelamiento o desaparición) de la guerrilla sino la represión

(estigmatización, espionaje, expulsión, amedrentamiento, encarcelamiento) de organizaciones no guerrilleras opositoras al régimen; todo esto en función a perpetuar y hegemonizar el régimen fujimorista para así implementar el neoliberalismo.

Por consiguiente, y en base al marco teórico y los resultados de esta investigación, consideramos que esta política represiva aunada con la política de privatización y el ajuste académico constituyen una única política que denominamos política de control y ajuste de la universidad peruana, principalmente pública. Política que inició en 1995 y se agudizó en el caso de las universidades intervenidas mediante Comisiones Reorganizadoras.

15. El objetivo de la CORE-SM fue el mismo que el del Estado pues respondía a éste: controlar y ajustar la UNMSM. El control se garantizó mediante la mantención de la Base Militar (1991-1998); la intervención y la concentración del poder mediante la disolución del cogobierno: la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario, los Consejos de Facultad y los Comités Asesores de las Escuelas; y la represión concretada en las expulsiones y el espionaje. Es decir, el control se garantizó principalmente a través del gobierno autoritario de la CORE-SM.

Una vez controlada la UNMSM, fue posible ajustar su orientación, objetivos y estructura administrativa y académica en función a los objetivos de la política universitaria y educativa del Estado dirigido entonces por el gobierno fujimorista. En el caso de la estructura administrativa, la CORE-SM pretendió que la reestructuración orgánica que hizo fuera permanente e, incluso, se aplique a toda universidad pública mediante el recojo de su propuesta en una nueva Ley Universitaria. Es decir, planteo que el gobierno universitario en el Perú sea autoritario. Y en el caso de la estructura académica, la CORE-SM ajustó los currículos de todas las Escuelas en base a los criterios y medidas establecidas por la política educativa del régimen fujimorista, la cual respondió a los requerimientos del neoliberalismo. Así, el Estado, mediante la CORE-SM, sí logró controlar y ajustar la UNMSM; control que en el 2000 se resquebrajó debido a la caída de su creador: el gobierno fujimorista. Sin embargo, el ajuste ya estaba hecho y pasó a formar parte de la nueva configuración de nuestra universidad. El ajuste fue interdependiente del control; no hubiera sido posible ajustar sin tener el control autoritario y este no tendría sentido sin tener como objetivo el ajuste.

16. La CORE-SM, como parte de su política de control y ajuste, utilizó los objetivos y criterios esenciales de los Decretos Legislativos N° 700, N° 739 y N° 726, todos de noviembre de 1991, y la Ley N° 25416 del 12 de marzo de 1992. Normativa que, a pesar de tener su raíz en la política contrasubversiva en el ámbito universitario, se utilizaron en este periodo. Esta normativa buscaba reajustar la formación de los docentes, el contenido teórico-académico dado a los universitarios y reprimir toda participación política de éstos al presionarlos, mediante posibles expulsiones, a limitar férreamente su actividad universitaria al ámbito del salón de clases.
17. El método que los Estados de América Latina –en la segunda mitad del S.XX- han seguido en la aplicación de la política de control y ajuste de la universidad ha sido la misma. Primero se define a una universidad como caótica y peligrosa para el orden social; segundo, se interviene; tercero, se controla; cuarto, se ajusta a la universidad y, por ende, a los universitarios en función al orden social defendido y desarrollado por dichos Estados.
18. Una limitación de la investigación con respecto a la privatización es no haber podido conseguir los datos sobre la evolución de la tarifa cobrada, a cada postulante, por examen de admisión y por la matrícula en los ciclos del Centro Preuniversitario. Tanto el CEPUSM como la OCA han señalado que no cuentan con dicha información. Sin embargo, consideramos bastante probable que dicha información la tenga el Banco Pichincha –ex Banco Financiero- y la Oficina de Tesorería de la UNMSM.

CAPÍTULO V

RECOMENDACIONES

1. Centramos en la cuestión política para consolidar, teniendo como base los antecedentes, el análisis del tipo de gobierno de la CORE SM y centramos en la cuestión económica dada la casi nula investigación y porque es necesario iniciar su análisis concreto. Dejamos de lado la cuestión teórica-académica (cambio integral de mallas curriculares, p.e.) por limitaciones materiales y teóricas. Sin embargo, consideramos que la investigación de este ámbito es necesaria pues con esto se podrá completar el análisis de los tres ámbitos centrales del proceso de reorganización de la UNMSM (1995-2000). Y, sobre esta base integral, se podrá ir mejorando en la interpretación y teorización respecto a lo que implicó este crucial periodo.
2. Otro ámbito que no analizamos por limitaciones materiales y teóricas es la relación entre el proceso de privatización y el proceso de elitización de la UNMSM en este periodo. Estudios recientes como el de Garfias (2015) apuntalan la confirmación de que dicha relación es positiva.
3. La elitización universitaria no es más que la reconfiguración de la composición social en la que los jóvenes provenientes de las capas medias y altas van desplazando a los jóvenes provenientes de las capas más empobrecidas de la sociedad (Ponce, 2002). En este sentido, lo principal a analizar en la elitización es dicha reconfiguración. Como sabemos, la elitización es contraria a la democratización de la sociedad y la universidad. Por esta razón es importante que investigaciones sobre la universidad profundicen en dicha relación.
4. La investigación sobre la política educativa y universitaria desarrollada por el régimen fujimorista es incipiente y se caracteriza por priorizar la generalidad. Esto nos impide comprender la historia y actuar como corresponde. Son necesarias las investigaciones específicas, concretas y delimitadas a una universidad o/y a un ámbito (económico, académico, político) en específico pues solo así las abstracciones serán objetivas y se podrá generar una teoría general. Por esta razón, consideramos necesario que la comunidad universitaria nacional (estudiantes,

docentes, trabajadores no docentes) investigue de manera concreta y objetiva dicho periodo y su relación con el periodo correspondiente a los últimos veinte años. En este sentido, consideramos que los ámbitos centrales a investigar es la relación entre la política educativa estatal y los procesos de privatización y elitización; reconfiguración de currículos; y los regímenes autoritarios-represivos. Consideramos que el aporte teórico que contribuirá a guiar de mejor manera estas investigaciones es haber concluido en que el Estado desarrolló/a una política de control y ajuste.

5. En relación al punto anterior, es necesario relacionar en nuestra investigación la política gubernamental con los criterios (eficiencia, calidad, equidad, pertinencia) y las medidas diseñadas por organismos internacionales como la CEPAL, UNESCO y el Banco Mundial. Un elemento importante es preguntarnos ¿por qué el Estado peruano aplica fielmente estos criterios y medidas?
6. Consideramos necesario que el movimiento universitario, principalmente el estudiantil, siga defendiendo los principios democráticos de la universidad peruana: autonomía universitaria, cogobierno, gratuidad, libertades políticas y académicas. Pues estos principios son garantía de una universidad democrática.

CAPÍTULO VI

BIBLIOGRAFÍA

MARCO TEÓRICO

BRUNNER, José Joaquín

2011 “Gobernanza universitaria: tipología, dinámica y tendencias”. En *Revista de Educación*, N°355. España, Mayo-Agosto 2011, pp. 137-159. Consulta: 25 de febrero de 2019.

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re355_06.html

1994 *Educación superior en américa latina: una agenda de problemas, políticas y debates en el umbral del año 2000* [Informe]. Trabajo final del Proyecto de Políticas comparadas de Educación superior. Buenos Aires: CEDES.

BURGA, Manuel

2002 “San marcos abierto al futuro”. En *La universidad en el Perú*. Lima: UNMSM, pp. 197-203.

BURT, Jo-Marie

2011 *Violencia y autoritarismo en el Perú*. Lima: IEP.

2006 “Jugando a la política con el terror: el caso del Perú de Fujimori”. En *Revista Debates en Sociología*. Lima, N°31, pp.27-54. Consulta: 10 de setiembre de 2019.

<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/2702>

BUTRÓN, Isaac

2018 *El neoliberalismo en América Latina, el Perú y su relación con el proceso de privatización en Arequipa 1980-2002*. Tesis de licenciatura en Historia. Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de Ciencias Histórico Sociales.

CABRERA, Marco

2000 *Estilos de dirección y eficacia de la gestión durante el proceso de reorganización de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos* [Informe de Investigación]. Lima.

CASTRO, Jesús

2018 *La institucionalidad político constitucional peruana. Un diagnóstico a veinticinco años del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori Fujimori*. Tesis de licenciatura en abogacía. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Facultad de Derecho.

CEPAL y UNESCO

1992 *Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad*. Santiago de Chile: ONU. Consulta: 20 de febrero de 2019.

COMISIÓN DE LA VERDAD DE SAN MARCOS

2002 Informe. Lima, UNMSM.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN

2003 Informe final. Lima.

COMISIÓN NACIONAL POR LA SEGUNDA REFORMA UNIVERSITARIA-MINEDU

2002 *Diagnóstico de la Universidad Peruana: Razones para una nueva reforma universitaria.* Lima.

DEGREGORI, Carlos

2001 *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.* Lima: IEP.

ERRÁZURIZ, Javiera

2017 "Intervención y depuración en la universidad de Chile, 1973-1976. Un cambio radical en el concepto de universidad". En *Revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos* [en línea]. Chile, 2017. Consulta: 10 de febrero de 2019.
Disponible en <https://journals.openedition.org/nuevomundo/70688>

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

2008 *El juicio a Fujimori: ¿El fin de la impunidad?* [Informe]. Lima. Consulta: 15 de junio de 2019.
<https://www.fidh.org/IMG/pdf/fujimori509e2008-1.pdf>

FLORES, José

2001 "El decreto legislativo 882 y la desnaturalización de la universidad". En *Revista de investigación*, N° 8, Instituto de investigaciones educativas, UNMSM, pp. 8-15.

FUNDACIÓN EU-LAC

2017 *Bases institucionales y normativas para la construcción del Espacio Europeo, Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación* [Informe]. Hamburgo. Consulta: 10 de junio de 2019.
https://eulacfoundation.org/es/system/files/educsuperior_basesinstitu_es.pdf

GARCÍA, Mercedes

2001 "La década de Fujimori: Ascenso, mantenimiento y caída de un líder antipolítico". En *Revista América Latina Hoy*. España, N°28, pp. 49-86. Consulta: 16 de setiembre de 2019.
<http://revistas.usal.es/index.php/1130-2887/article/view/2767/2804>

GARCÍA, Roberto y SALVADOR, Amelton

1997 *El primer gobierno de Fujimori y la Política Educativa 90-95.* Tesis de licenciatura en Pedagogía y humanidades; especialidad Ciencias Sociales e Historia. Huancayo: UNCP, Facultad de Pedagogía y humanidades.

GARFIAS, Marcos

2015 "La persistencia de las desigualdades en el ámbito de la educación universitaria. El caso de la UNMSM, 1940-2000". En *La educación universitaria en el Perú*. Lima: IEP

GERMANÁ, César

2002 "La universidad en los inicios del siglo XXI". En *La universidad en el Perú*. Lima: UNMSM, pp. 69-78

GRADE

- 1993** "Financiamiento de las universidades públicas en el Perú: respuestas a la crisis y al ajuste económico". En *Notas para el debate*, N° 8. Patricio McLauchlan y Ernesto Melgar, pp. 13-35.

HERMOZA, Daniel

- 2018** *La proyección del poder blando como respuesta frente a los desafíos a nivel internacional durante la segunda fase del gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000)*. Tesis de licenciatura en Ciencia Política y Gobierno. Lima: PUCP, Facultad de Ciencias Sociales.

HINOSTROZA, Moisés y TASTA, César

- 2001** *La política educativa peruana y los resultados de los objetivos del bachillerato durante el gobierno de Alberto Fujimori*. Tesis de licenciatura en Pedagogía y humanidades; especialidad Ciencias Sociales e Historia. Huancayo: UNCP, Facultad de Pedagogía y humanidades.

HONORIO, José

- 2009** "Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista". En *Revista Historia Actual Online*. México, N° 19, pp. 65-75. Consulta: 16 de setiembre de 2019.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3066001>

JIMENEZ, Félix

- 2000** *El modelo neoliberal peruano: límites, consecuencias sociales y perspectivas*. Documento presentado en el Seminario Internacional: "Ajuste Estructural en América Latina. Costos Sociales y Alternativas" Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Porto Alegre, Brasil, 1 al 3 de diciembre de 1999.

JULIÁN GIL, Gastón

- 2016** "De 'Subversivas' a 'inviabiles'. Ciencias Sociales y dictadura en la universidad de Mar del Plata (1976-1980)". En *Revista Historia de la Educación*. Chile, Vol. 17, N°1, CONICET-UNMdP, pp. 72-93. Consulta: 22 de febrero de 2019.
<http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/anuario/article/view/8698/pdf>

LINZ, Juan

- 1978** "Una interpretación de los regímenes autoritarios". En *Papers: Revista de Sociología*. Barcelona, N° 8, pp. 11-26.

MANCO, Jorge

- 1994** "Privatización en el Perú. Aproximación a un balance crítico". En *Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM*. Lima, N°1, marzo, pp. 136-172. Consulta: 5 de noviembre de 2019.
<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/libros/CSociales/privatizacion/cap1.pdf>

MARIÁTEGUI, José Carlos

- 1928** *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Lima: Amauta.

MEJÍA, Julio

- 2017** "El proceso de la educación superior en el Perú. La descolonialidad del saber universitario". *Revista Cinta Moebio*. Lima, N°61, pp. 56-71.
<file:///C:/Users/User%20PC/Downloads/Dialnet->

MIRO QUESADA RADA, Francisco

2002 "San Marcos tres periodos en una década". En Grupo de estudios Conciencia Colectiva-UNMSM. *Ensayos breves. La violencia política en la escena sanmarquina*. Lima: pp. 3-7.

MONSÁLVEZ, D. y VALDÉS, M.

2015 "El golpe de Estado de 1973 y la intervención militar en la Universidad de Concepción (Chile)". En *Revista Latinoamericana Polis*. Chile, pp. 363-384. Consulta: 20 de febrero de 2019.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682016000300018

MORENTE, Francisco

2005 "La universidad en los regímenes fascistas: la depuración del profesorado en Alemania, España e Italia". En *Revista Historia Social*. España, N° 54, pp. 51-72.

MORRILLO, Emilio

2005 *Reformas educativas en el Perú del siglo XX*. Lima, s/e.

MOVIMIENTO DEMOCRACIA ESTUDIANTIL

1996 *Revista Nueva Universidad*, N° 1, agosto de 1996. Lima.

OFICINA DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA-MINEDU

2006 *La universidad en el Perú. Razones para una reforma universitaria. Informe 2006*. Lima: Dirección de Coordinación Universitaria.

PEDRAGLIO, Santiago

2014 *Cómo se llegó a la dictadura consentida. El gobierno de Alberto Fujimori: 1990-1992*. Tesis de magíster en Sociología con mención en Sociología Política. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Sociales.
<https://www.cepal.org/es/publicaciones/2130-educacion-conocimiento-eje-la-transformacion-productiva-equidad>

PÉREZ, Aníbal

2011 "Universidad en tiempos neoliberales. Perú, Argentina y Chile". En www.uchile.cl. Consulta: 25 de febrero de 2019.
<file:///C:/Users/User%20PC/Downloads/universidad%20en%20tiempos%20neoliberales.pdf>

PONCE MARIÑOS, Grover

2002 *El discreto encanto del desencanto. Jóvenes, política y régimen fujimorista en San Marcos de los noventa*. Lima. Consulta: 10 de febrero de 2019.
<https://www.yumpu.com/es/document/read/13338096/el-discreto-encanto-del-desencanto-jovenes-politica-cholonautas>

PUCP

2015 *Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes*. Lima. Consulta: 13 de enero de 2020.

http://revistas.pucp.edu.pe/public/imagenes/contabilidad/guia_pucp_2015.pdf

RODRÍGUEZ, Juan

2007 "La política universitaria en el Perú". Artículo presentado en el XXVI Congreso de la ALAS-Guadalajara. 2007. Consulta: 20 de febrero de 2019.
<http://cdsa.aacademica.org/000-066/556.pdf>

ROSPIGLIOSI, Fernando

2001 *Montesinos y las Fuerzas Armadas*. Lima: IEP.

SANZ, Florentino

2006 "La mercantilización de la educación como escenario mundial del espacio de Educación Superior". En *Revista Educación*. España. UNED, N°20, pp. 57-76. Consulta: 6 de marzo de 2019.
<http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/319>

SÁEZ, Hugo

2014 "¿Por qué la privatización de la educación en América Latina?". En *Revista Pacarina del Sur*. Año 5, N°19, abril-junio.

SEIA, Guadalupe

2018 "La dictadura contra la Reforma Universitaria. Orientación de la política universitaria en la Universidad de Buenos Aires (1976-1983)". En *Revista historia de Educación latinoamericana*-Vol.20, N° 30, enero-junio 2018. Consulta: 21 de febrero de 2019.
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinoamericana/issue/view/510

STIGLITZ, Joseph

2002 *El malestar en la globalización*. Madrid: Taurus

TALLER DE INVESTIGACIÓN POPULAR

2007 *La Universidad Nacional de Educación 'Enrique Guzmán y Valle' y la educación en la sociedad peruana contemporánea*. Lima, s/e.

VARGAS, Moisés

2002a "El oscurantismo intelectual en San Marcos: Intervención militar y corrupción política 1995-2000". En Grupo de estudios Conciencia Colectiva-UNMSM. *Ensayos breves. La violencia política en la escena sanmarquina*. Lima: pp. 32-41.

2002b *La violencia política en la escena sanmarquina 1990-2000*. Lima: s/e.

YALLE QUINCHO, Omar Valeriano

2008 *La cultura política en el discurso de los dirigentes universitarios de la Izquierda Sanmarquina: 1995-2000*. Tesis de licenciatura en Antropología. Lima: UNMSM, Facultad de Ciencias Sociales. Consulta: 14 de febrero de 2019.
<http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/2896>

FUENTES PRIMARIAS

UNMSM-COMISIÓN REORGANIZADORA DE SAN MARCOS (CORE-SM)

- 1995a** *Lineamientos de política.* Serie “Documentos de gestión”. 6 de julio.
1995b *Plan estratégico 1995-1997.* Serie “Documentos de gestión”.
1996a *Evaluación del plan de trabajo institucional 1995.* Serie “Documentos de gestión”.
1996b *Plan de reorganización 1996-1997.*
1999 *Mensaje del rector al estudiante sanmarquino. Informe del proceso de reorganización de la UNMSM. Mayo 1995 a marzo 1999. Resumen Ejecutivo.* 5 de abril.
2000 *Memoria 1995-1999.* Mayo del 2000.

UNMSM

- 1984** *Estatuto de la UNMSM.* Lima, 22 de setiembre de 1984.
1993 *Boletín estadístico 1988-1992.* Oficina de Estadística e Informática de la Oficina General de Planificación.
1994 *Gaceta Sanmarquina.* Órgano oficial de la UNMSM. Año 5, N°25. Lima, diciembre de 1994. Edición extraordinaria.
1995 *Informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea Universitaria, sobre la Facultad de Medicina y la conducta funcional de Manuel Paredes Manrique (RR-5131-R-94).* Lima. 6 de enero de 1995.
1994-2001 *Compendios estadísticos anuales 1993-2000.* Oficina de Estadística e Informática de la Oficina General de Planificación.
1999 *Reglamento General de Matrícula.* Aprobado mediante RR Nro. 05383-CR-99 del 19 de agosto de 1999.
2016 *Estatuto de la UNMSM.* Lima, 6 de junio de 2016.

COMISIÓN DE PROFESORES SEPARADOS Y CESADOS (UNMSM)

- 2001** *Introducción a la edición 2001 del Informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea Universitaria, sobre la Facultad de Medicina y la conducta funcional de Manuel Paredes Manrique (RR-5131-R-94).*

COMISIÓN DE LA VERDAD DE SAN MARCOS (CV-SM)-UNMSM

- 2002a** Informe [final]. Lima, UNMSM.
2002b *Informe de la Sub comisión de violencia política y derechos humanos sobre el caso de estudiantes sanmarquinos detenidos y recluidos en el penal de régimen especial Miguel Castro Castro.* Lima.

ESTADO PERUANO

- 1983** *Ley Universitaria N°23733*. Lima, 9 de diciembre de 1983.
- 1991** *Decreto Legislativo N° 700*. Disponen la evaluación de programas curriculares de todos los niveles y modalidades a fin de afianzar la formación del educando. Lima, 5 de noviembre de 1991
- 1991** *Decreto Legislativo N° 726*. Autoriza el ingreso de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en caso de presencia o refugio de grupos terroristas en las universidades. Lima, 11 de diciembre de 1991.
- 1991** *Decreto Legislativo N° 739*. Establecen normas mínimas de exigencia académica a fin de facilitar a estudiantes universitarios la obtención de sus grados académicos que les permita acceder a puestos de trabajo. Lima, 8 de noviembre de 1991.
- 1991** *Ley Nro. 25327*. Delegan en el Poder Ejecutivo facultades legislativas en materia de pacificación nacional, fomento del empleo y crecimiento de la inversión privada. Lima, 14 de junio de 1991.
- 1992** *Decreto Ley N° 25798*. Declaran en reorganización la Universidad Nacional "Federico Villarreal". Lima, 28 de octubre de 1992.
- 1992** *Decreto Ley N° 26093*. Disponen que los titulares de los Ministerios y de las Instituciones Públicas Descentralizadas deberán cumplir con efectuar semestralmente programas de evaluación de personal. Lima, 28 de diciembre de 1992.
- 1993** *Constitución Política del Perú*. Lima, 29 de diciembre de 1993 (promulgada) 1 de enero de 1994 (inicio de vigencia). CCD.
- 1994** *Ley N° 26302*. Modifican la Ley Universitaria en lo referido a la elección de Rectores, Vicerrectores y al Gobierno de las Facultades Universitarias. Lima, 3 de mayo de 1994.
- 1994** *Ley N° 26313*. Declaran en reorganización a la Universidad Particular de San Martín de Porres. Lima, 27 de mayo de 1994.
- 1995** *Ley N° 26439*. Crean el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades-CONAFU. Lima, 20 de enero de 1995.
- 1995** *Incorporan norma transitoria al texto de la Ley Universitaria*. Lima, 28 de junio de 1995.
- 1995** *Resolución Suprema N°150-95-PCM*. Que nombra a los miembros de la Comisión Reorganizadora de la UNMSM. Lima, 26 de mayo de 1995.
- 1995** *Ley N° 26554*. Modifican artículo de la Ley Universitaria, referido a la elección del Decano de facultad. Lima, 1 de diciembre de 1995.
- 1995** *Ley N° 26457*. Amplían el proceso de reorganización universitaria a las universidades estatales que lo requieran para regularizar o modernizar su organización. Lima, 25 de mayo de 1995.
- 1995** *Ley N° 26493*. Incorporan al proceso de reorganización universitaria a universidad nacional [Universidad Nacional Hermilio Valdizán]. Lima, 30 de junio de 1995.
- 1996** *Ley N° 26614*. Amplían plazo de proceso de reorganización de diversas universidades nacionales. Lima, 24 de mayo de 1996.

- 1996** *Decreto Legislativo N° 882.* Ley de promoción de la inversión en la Educación. Lima, 8 de noviembre de 1996.
- 1997** *Ley N° 26797.* Amplían plazo del proceso de reorganización de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos y Enrique Guzmán y Valle Lima, 14 de mayo de 1997.
- 1997** *Ley N° 26797.* Incorporan al proceso de reorganización universitaria a la Universidad Nacional "José Faustino Sánchez Carrión" de Huacho. Lima, 5 de setiembre de 1997.
- 1997** *Ley N° 26880.* Ley sobre ampliación del plazo del proceso de reorganización de las universidades hasta la aprobación de la Ley Universitaria. Lima, 26 de noviembre de 1997.
- 1997** *Sentencia del Tribunal Constitucional-Exp. Nro. 012-96-I/TC. Congresistas de la República.* Lima, 24 de abril de 1997.
- 1998** *Sentencia del Tribunal Constitucional-Exp. Nro. 323-97-AA/TC. Asambleístas de la UNMSM.* Lima, 14 de mayo de 1998.
- 1999** *Ley N° 27058.* Ley que declara en reorganización la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica. Lima, 1 de febrero de 1999.
- 2000** *Ley N° 27366.* Ley que norma el cese de las comisiones reorganizadoras de las universidades públicas. Lima, 4 de noviembre de 2000.
- 2001** *Ley N° 27437.* Ley que modifica la segunda disposición transitoria de la Ley N° 27366. Lima, 16 de marzo de 2001.
- 2005** *Ley N° 28637.* Ley que deroga las leyes núms. 26302 y 26554 y restituye los artículos 35°, 36° y 37° de la Ley N°23733, Ley Universitaria. Lima, 2 de diciembre de 2005.
- 2014** *Ley Universitaria N° 30220.* Lima, 8 de julio de 2014.

RESOLUCIONES RECTORALES UNMSM

1991

RR Nro. 102928. 1 de julio

1992

RR Nro.105099. 3 de febrero

1993

RR Nro. 113064. 19 de agosto.

RR Nro. 113722. 1 de octubre.

1994

RR Nro.1313-R-94. 17 de marzo.

RR Nro. 1488-R-94. 24 de marzo.

RR Nro. 2348-R-94. 23 de mayo.

RR Nro. 3582-R-94. 5 de agosto.

RR Nro. 3521-R-94. 12 de agosto.

RR Nro. 3585-R-94. 15 de agosto.

RR Nro. 3670-R-94. 19 de agosto.

RR Nro. 4011-R-94. 14 de setiembre.

RR Nro. 4409-R-94.16 de setiembre.

RR Nro. 4409-R-94. 12 de octubre.

RR Nro. 4424-R-94. 13 de octubre.

RR Nro. 4474-R-94. 17 de octubre.

RR Nro. 4997-R-94. 23 de noviembre.

RR Nro. 5131-R-94. 5 de diciembre.

RR Nro. 5133-R-94. 5 de diciembre.

RR Nro. 5223-R-94. 12 de diciembre.

1995

RR Nro. 0093-R-95.11 de enero.

RR Nro. 0094-R-95. 11 de enero.

Desde la RR Nro. 1939-CR-95 hasta la RR Nro. 1952-CR-95. Todas del 2 de junio.

RR Nro. 2422-CR-95. 27 de junio.

RR Nro. 2701-CR-95. 14 de julio.

RR Nro. 2818-CR-95. 27 de julio.

RR Nro. 2855-CR-95. 31 de julio.

RR Nro. 2856-CR-95. 31 de julio.

RR Nro. 2857-CR-95. 1 de agosto.

RR Nro. 2858-CR-95. 2 de agosto.

RR Nro. 2970-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 2971-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 2972-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 2973-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 2974-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 2975-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 2976-CR-95. 8 de agosto.

RR Nro. 3084-CR-95. 17 de agosto.

RR Nro. 3085-CR-95. 17 de agosto.

RR Nro. 3086-CR-95. 17 de agosto.

RR Nro. 3405-CR-95. 11 de septiembre.

RR Nro. 3428-CR-95. 11 de setiembre.

RR Nro. 3505-CR-95. 18 de setiembre.
RR Nro. 3539-CR-95. 19 de setiembre.
RR Nro. 3540-CR-95. 19 de setiembre.
RR Nro. 3674-CR-95. 27 de setiembre.
RR Nro. 3806-CR-95. 5 de octubre.
RR Nro. 3838-CR-95. 9 de octubre.
RR Nro. 4038-CR-95. 19 de octubre.

1996

RR Nro. 2025-CR-96. 26 de marzo.
RR Nro. 2305-CR-96. 16 de abril.
RR Nro. 3699-CR-96. 12 de junio.
RR Nro. 4034-CR-96. 2 de julio.
RR Nro. 4685-CR-96. 1 de agosto.
RR Nro. 4809-CR-96. 5 de agosto.
RR Nro. 5060-CR-96. 13 de agosto.
RR Nro. 5127-CR-96. 16 de agosto.
RR Nro. 5374-CR-96. 26 de agosto.
RR Nro. 5500-CR-96. 5 de setiembre.
RR Nro. 06469-CR-96. 4 de octubre.
RR Nro. 08397-CR-96. 31 de diciembre.

1997

RR Nro. 00562-CR-97. 4 de febrero.
RR Nro. 01327-CR-97. 12 de marzo.
RR Nro. 01330-CR-97. 12 de marzo.
RR Nro. 02897-CR-97. 23 de mayo.
RR Nro. 02945-CR-97. 29 de mayo.
RR Nro. 02998-CR-97. 2 de junio.
RR Nro. 03545-CR-97. 23 de junio.
RR Nro. 03604-CR-97. 25 de junio.
RR Nro. 04268-CR-97. 23 de julio.
RR Nro. 05860-CR-97. 30 de setiembre.

1998

RR Nro. 1083-CR-98. 26 de febrero.
RR Nro. 01967-CR-98. 6 de abril.
RR Nro. 03312-CR-98. 4 de junio.
RR Nro. 04177-CR-98. 9 de julio.
RR Nro. 04944-CR-98. 17 de agosto.
RR Nro. 5712-CR-98. 18 de setiembre.

1999

RR Nro. 00599-CR-99. 2 de febrero.
RR Nro. 01115-CR-99. 1 de marzo.
RR Nro. 01479-CR-99. 17 de marzo.
RR Nro. 02793-CR-99. 11 de mayo.
RR Nro. 05383-CR-99. 19 de agosto.
RR Nro. 05900-CR-99. 10 de setiembre.

2000

RR Nro. 02445-CR-00. 15 de marzo.
RR Nro. 03409-CR-00. 24 de abril.

RR Nro. 04110-CR-00. 15 de mayo.
RR Nro. 04170-CR-00. 17 de mayo.
RR Nro. 04436-CR-00. 23 de mayo.
RR Nro. 04933-CR-00. 31 de mayo.

DIARIOS. Entre el 25 y el 30 de mayo de 1995.

LA REPÚBLICA

EL COMERCIO

EXPRESO

AJÁ

REVISTA

CARETAS. Junio de 1995.

CAPÍTULO VII

ANEXOS

ANEXO I

ANÁLISIS MENSUAL DE LA PUGNA

A continuación presentamos los sucesos centrales que ocurrieron en medio de la pugna entre Paredes y Reátegui: pugna que se concretó en dos procesos interrelacionados: la reelección de Paredes como Decano de San Fernando y las elecciones de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria¹³⁹. Esto nos servirá para comprender cómo la UNMSM logró ser conducida a un periodo de inestabilidad.

1994

Mayo

12 de mayo.- Se emite un pronunciamiento en el diario La República en la que 18 decanos¹⁴⁰ deslindan con el gobierno de Wilson Reátegui y su correlación docente¹⁴¹.

Junio

10 de junio.- Se realizaron las elecciones estudiantiles para elegir al Tercio ante la Asamblea Universitaria. Este órgano, como lo señala la Ley Universitaria 23733, entonces vigente¹⁴², es el máximo órgano de gobierno de la Universidad.

Julio

08 de julio.- Se efectuaron las elecciones de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria de la UNMSM. Culminado el acto electoral del 8 de julio, cinco de las seis listas docentes postulantes: N° 1, 2, 5, 6 y 8, solicitaron al Comité Electoral (en adelante CE) la nulidad de las elecciones aludiendo vicios¹⁴³ recurrentes antes y durante el acto electoral. Sin embargo, en reunión del 19 de julio, en la que solamente tres miembros del CE se congregaron (Presidente: Jaime Descailleaux; Luis Márquez Guevara; Elard León) deciden rechazar dicha solicitud y, por el contrario, declararon en receso al CE hasta el 8 de agosto¹⁴⁴.

20 de julio.- Primera elección en donde Paredes Manrique postula a la reelección como decano de San Fernando pero no obtiene los dos tercios necesarios exigidos por Ley. Alcanzó 12 votos, razón por la cual, ciñéndose al Art. 22 del Reglamento de Elecciones de la Universidad de San Marcos (1994), “solo podrá participar en una votación más como candidato”.

¹³⁹ Como parte del proceso general: “Elecciones generales y complementarias de docentes y generales de graduados, estudiantes de pre y post grado”. En estas elecciones, tanto docentes como estudiantes elegían en un solo acto a sus representantes ante la AU, CU y sus respectivos CF. Según el cronograma final, el 8 de julio se eligieron a los representantes docentes y el 10 de junio a los representantes estudiantiles. Al respecto, RR Nro. 2348-R-94 del 23 de mayo de 1994.

¹⁴⁰ Solo faltó el Decano de la Facultad de Letras. Entonces existían 19 facultades.

¹⁴¹ Es importante señalar que en dicho pronunciamiento ya se exigía que el Consejo Universitario realice una Reestructuración Administrativa y elija a los Jefes de las Oficinas Generales; y se evalúe la “marcha académica-administrativa del Centro Preuniversitario”. Subrayamos esto porque con la CORE-SM, la reestructuración se aplicó de manera general y radical y el CEPUSM fue consolidado como una empresa generadora de RDR.

¹⁴² La Ley Universitaria fue promulgada el 9 de diciembre de 1983. Rigió hasta el 8 de julio de 2014, fecha en la que se promulgó la Ley Universitaria 30220.

¹⁴³ Esto se señala (sin detalles) en Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p. 8. Diciembre de 1994. En la entrevista hecha al prof. Simón Escamilo, entonces miembro del Comité Electoral, ha señalado que no hubieron actos durante los comicios que pueden catalogar el proceso como fraudulento, a excepción del irregular manejo –por parte del pdte. Descailleaux- del cuaderno de actas de dicho CE.

¹⁴⁴ Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p. 9. Diciembre de 1994. Gaceta S. era entonces el nombre del periódico institucional de la UNMSM.

Agosto

6 de agosto.- Finalizó el periodo legal del entonces decano de la Facultad de Medicina: Manuel Paredes Manrique. Motivo por el cual se emite la RR Nro. 3582-R-94 del 15 de agosto del 94 que da por concluido el mandato de Paredes.

10 de agosto.- Frente a lo acordado el 8 de julio, en reunión del CE, realizada el 10 de agosto, se acordó censurar al presidente Jaime Descailleaux por haber violado el Art. 12 del Reglamento General de Elecciones, recesando arbitrariamente el CE; por haber usurpado funciones del pleno del CE o violado la naturaleza de cuerpo colegiado al haber aprobado y adoptado decisiones emitiendo Resoluciones (N° 029, 030 y 031) unilaterales el 20 y 21 de julio, sin la citación, participación y conocimiento de los miembros del CE; entre otros motivos. En consecuencia se resuelve designar (Resolución Electoral Nro. 043-CE-94 – 11 agosto) como nuevo presidente al vicepresidente Charles Uculmana Suárez¹⁴⁵ y desconocer las decisiones unilaterales arriba señaladas. Firmaron esta resolución cinco miembros; es decir, la mayoría¹⁴⁶: Charles Uculmana Suárez, Ángel Limay Herrera, Jaime Valdez Rodríguez, Simón Escamilo Cárdenas y Eduardo Huamaní Anampa.

15 de agosto.- Mediante RR Nro. 3585-R-94 se encargó el decanato de San Fernando al Dr. Fausto Garmendia a partir del 7 de agosto.

16 de agosto.- Los cuatro miembros que conforman la minoría del CE, emiten la “Resolución Nro. 043-E-94” por la cual declaran nulas las RR Nro. 3582-R-94 y 3585-R-94; las que habían dado fin legal al mandato de Paredes en San Fernando.

16 de agosto.- Se emite un comunicado de Paredes que “denuncia maniobras partidistas del Rector, su asesor Oliverio Llanos (Patria Roja), Mercedes Gonzáles, José Tamayo (Movimiento Académico), Pedro Mascaro (conocido militante de Patria Roja) y José Somocurcio (asesor directo del Rector), para anular las elecciones a la Asamblea Universitaria y desconocer al Comité Electoral, tomando por asalto su local, colocando cadenas y avalando un espurio e ilegal CE” (Informe Paredes, p. 24).

19 de agosto.- Mediante RR Nro. 3670-R-94, Reátegui manda se inicien acciones legales contra Jaime Descailleaux, Luis Márquez, Elard León y Francisco Vásquez argumentando usurpación de funciones, desconocimiento de la autoridad del Rector y por estar fuera del estado de derecho.

Setiembre

14 de setiembre.- A punto de cumplirse 30 días de que se encargase al Dr. Garmendia el decanato de San Fernando no se había elegido a un Decano. Esto, según el Reglamento General de Elecciones era motivo para que el Rector convoque en un plazo de 15 días a una sesión extraordinaria del CF de Medicina. Así, este día, mediante la RR Nro. 4011-R-94, se resolvió convocar a dicha sesión para el 16 de setiembre, en la sala de sesiones del Consejo Universitario.

¹⁴⁵ Esto será ratificado por Reátegui con la RR Nro. 3521-R-94 del 12 de agosto de 1994.

¹⁴⁶ Nueve miembros fueron los que conformaban dicho CE, designados desde el 24 de marzo de 1994, según RR Nro. 1488-R-94. Además de los cinco nombrados arriba, Jaime Descailleaux Dulanto, Elard León Delgado, Francisco Vásquez Palomino y Luis Márquez Guevara, conformaban el grupo opositor.

16 de setiembre.- Segunda votación del CF de Medicina; Paredes Manrique obtuvo 13 votos¹⁴⁷. Al respecto, el Dr. Fausto Garmendia señala:

*[E]l Dr. Paredes hizo una sola citación al Consejo de Facultad y no obtuvo los dos tercios y si en una segunda elección no hubiera sacado los dos tercios quedaba eliminado de la contienda electoral, ciertamente que se vieron una serie de procedimientos que no permitieron que se hiciera una nueva sesión, relativamente un tiempo corto hasta que a través de la persuasión y todo lo demás convencieron a algunos miembros de la representación estudiantil que inicialmente no votaron por él, logró convencerlos y llegó a sacar, si no recuerdo mal, trece votos y **en la sesión en la cual solicité al Rector para que presidiera la sesión, porque así lo establecía el dispositivo, sacó ese número de votos, pero para nuestra sorpresa, el Rector de entonces, el Dr. Reátegui y el Secretario General de la Universidad, que vino a esa sesión, tácitamente lo reconocieron como Decano electo; sin embargo al día siguiente hubo todo un movimiento para señalar que los trece votos no eran los dos tercios que significaban***” (CV-SM, 2002, p. 86).

Este mismo día el Comité Electoral legal acordó aceptar el pedido de nulidad de las elecciones de representantes docentes ante la AU, para lo cual emiten la Resolución Nro. 062-CE-94 y la elevan al CU mediante el Oficio Nro. 255-CE-94 el 19 de set., en la cual también adjuntan el nuevo cronograma.

Octubre

02 de octubre.- Paredes “protesta enérgicamente por las agresiones del Rectorado contra la Facultad de Medicina, que intenta afectar su marcha académico-administrativa, por las maniobras para desestabilizar al Consejo Ejecutivo y su negativa para convocar la Asamblea Universitaria” (Informe Paredes, p. 22). Aquí Paredes se está refiriendo a la Asamblea Universitaria que hubiese resultado de no haberse anulado las elecciones del 08 de julio.

¹⁴⁷ En dicho periodo, San Marcos contaba con 19 facultades, de las cuales 16 conformaban sus Consejos de Facultad con 19 miembros y solo 3 (Medicina, Contabilidad y Educación) con 20 miembros. Se deduce que el Art. 22 del Reglamento de Elecciones al señalar que al no alcanzar 13 votos solo se podrá candidatear una vez más, implícitamente está sosteniendo que alcanzar 13 votos es alcanzar los dos tercios –como lo exigía la Ley 26302–, como efectivamente ocurría en casi todas las facultades de la UNMSM. De esto se concluye que, si dicho Reglamento no especificó alguna excepción para el caso de las tres facultades con 20 miembros, 13 votos también significaban dos tercios en estas facultades. Es decir, era una regla general. Seguramente de esta manera razonó también Reátegui y por ello aceptó la reelección de Paredes en la sesión del CFM; sin embargo, al darse cuenta del resquicio legal (del Reglamento) y de relacionarla (al punto de contraponer ambas normas) con lo que mandaba la Ley 26302: dos tercios del CF para elegir decano, exclusivamente, aprovechó esta situación y, en consecuencia, cambio de posición y no ratificó la segunda votación del 16 de setiembre mediante la RR Nro. 4409-R-94.

Si nos ceñimos a lo legal, Reátegui tenía el respaldo de la Ley y el Estatuto; sin embargo no hay duda de que el trasfondo de su decisión era político. En este sentido, Reátegui y su correlación acababan de cometer un craso error: haber reconocido tácitamente como ganador a Paredes en la sesión que el mismo Reátegui presidió.

Posteriormente, Reátegui, valiéndose del Comité Electoral favorable a su correlación –de manera legal–, consolidó la interpretación legal del asunto de los dos tercios: “El prof. Charles Uculmana, presidente del CE, mediante Of. N° 370-CE-94, informó que en sesión del 19-12-94 elaboraron la tabla de votos necesarios para la elección de Decano, según el número de miembros hábiles y que el redondeo al número inmediato superior se basa en la afirmación de que la persona humano no es susceptible de división:

20 – 13,33 – 14

19 – 12,66 – 13

18 – 12 – 12

17 – 11,33 – 12

16 – 10,6 – 11

15 – 10 – 10

...” (Informe Paredes, 1995, p. 16)

Sin embargo, pese a tener la legalidad de su parte, Reátegui ya había brindado un segundo resquicio (el primero era el problema radicado en la anulación de las elecciones de representantes docentes del 8 de julio) para la furibunda campaña que Paredes Manrique ya llevaba adelante.

12 de octubre.- Se emite la RR Nro. 4409-R-94 del 12 de octubre, la cual no ratificó el último acto electoral (del 16 de setiembre), en donde Paredes había alcanzado 13 votos de 20 miembros del CF¹⁴⁸, por lo cual se siguió encargando el decanato al doctor Fausto Garmendia Lorena.

13 de octubre.- Mediante RR Nro. 4424-R-94, el Consejo Universitario ratificó el nuevo Cronograma de Elecciones para los representantes docentes ante la AU que señala el 18 de noviembre como día de las elecciones.

14 de octubre de 1994.- El grupo de Paredes logra llevar adelante una supuesta sesión de Asamblea Universitaria conformada por aquellos docentes que no fueron reconocidos como ganadores de las elecciones del 08 de julio, por la oposición a Paredes y por Leoni Silva, Gabriel Huerta¹⁴⁹, Martha Martina y Jaime Descailleaux. Esta AU decidió destituir a Reátegui “porque [según Paredes] San Marcos se encuentra peligrosamente amenazado de ser convertida en el último refugio de Patria Roja y en botín de un conjunto de inescrupulosos aventureros” (Informe Paredes, p. 23). En este sentido esta “AU” nombró como rector al Dr. José Vásquez Rojas.

En este día también un grupo de ex rectores de la UNMM emiten un comunicado en el que respaldan a Wilson Reátegui¹⁵⁰.

16 de octubre.- Paredes emite un comunicado en el que “rechaza la afrenta del Rector por sus acciones dolosas y carentes de racionalidad al desconocer la elección del Decano. Inician acción legal contra el Rector, el Vicerrector Académico y el pseudo Comité Electoral ‘nombrado’ por el Rector”.

20 de octubre de 1994.- En conferencia de prensa, los voceros de cinco agrupaciones docentes llamaron a la participación en las elecciones del 18 de noviembre y exigieron la denuncia penal contra los ex-decanos Manuel Paredes Manrique, Gabriel Huertas Díaz y Leoni Silva Rojas a quienes responsabilizaron de la inestable situación de la UNMSM.

21 de octubre de 1994.- Paredes difunde el siguiente comunicado: “expresa su repudio al Rector Dr. Wilson Reátegui que intenta mantener a su grupo político Patria Roja en la administración de San Marcos, pretende anular las elecciones a la Asamblea Universitaria, ha desarticulado al Comité Electoral y formado otro Comité espurio, ha desnaturalizado el Consejo Universitario” (Informe Paredes, 1995, p. 24).

29 de octubre.- La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) emite un pronunciamiento en el que por unanimidad respaldan y reconocen como rector a Wilson Reátegui Chávez. Además, se dirigen a la Comisión de Educación del Congreso “para expresar que los asuntos internos de la UNMSM deben ser tratados en el seno de la misma institución bajo el principio de agotar la vía administrativa y que cualquier interferencia en lugar de contribuir a la solución puede generar mayores conflictos”¹⁵¹.

¹⁴⁸ En el último considerando de la RR Nro. 4409-R-94, el rectorado utiliza el criterio de los dos tercios para ser elegido como decano basándose en la Ley N° 26302 -dada por el gobierno de Fujimori el 4 de mayo de 1994. Este criterio, más todavía, se ve reforzado por el Art. 98 del Estatuto UNMSM (1984), en donde se lee que el Decano “Ejerce el cargo por tres (3) años, pudiendo ser reelegido por un periodo inmediato siguiente por una sola vez, mediante el voto de los dos tercios del Consejo de Facultad”; esto tenía como base la Ley Universitaria 23733 (1983) que señalaba que “el Decano es elegido por un periodo de tres años y puede ser reelegido por una sola vez para el periodo inmediato, mediante el voto de los dos tercios del Consejo de Facultad”.

¹⁴⁹ Motivo por el cual, según RR Nro. 4474-R-94 del 17 de octubre, se da por finalizado su mandato como Decano encargado de la Facultad de Educación.

¹⁵⁰ Como consta en Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p. 10. Diciembre de 1994.

¹⁵¹ Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p.10. Diciembre de 1994.

Noviembre

14 de noviembre.- Jaime Descailleaux, “brazo derecho del Dr. Paredes”, solicita garantías al Prefecto de Lima “contra el rector, Dr. Wilson Reátegui, e impida se lleven a efecto las elecciones ilegales convocadas por el Comité Electoral espurio, politizados con ideologías extrañas al país, trayendo consigo la desorientación, el enfrentamiento y el caos, toda vez que son militantes convictos y confesos del Partido UNIR-Patria Roja y tienen como método y modo de vida, el desorden, el amedrentamiento, la brutalidad y el rompimiento del orden establecido. Pedimos que nos brinden el apoyo de la fuerza pública” (Informe Paredes, 1995, p. 24).

15 de noviembre.- Paredes “denuncia que el Rector trata de desprestigiar a la Facultad de Medicina, a su Decano y al Consejo de Facultad y acuerda denunciar al Rector ante el Poder Judicial” (Informe Paredes, p. 22).

Además, Jaime Descailleaux presenta una denuncia penal ante el Juzgado Penal de turno cuyo texto dice: “denuncia penal contra Wilson Reátegui Chávez, Francisco Piscoya Hermoza, Enrique Gómez Peralta, Charles Uculmana, Simón Escamilo Cárdenas, Jaime Valdez Rodríguez, Eduardo Huamaní Hananpa, Ángel Limay Herrera y los postulantes a cargos apócrifos (Asamblea Universitaria)” Asimismo arguye que estos habrían actuado en “banda” y exige una “indemnización de cien mil dólares, la que será pagada en forma mancomunada por todos los inculpados”.

17 de noviembre.- Darío Chavez de Paz “solicita al General P.N. Jefe de la VII Región, al Jefe de la 5ta. Comisaría de Cotabambas, se preste el apoyo de la Policía Nacional para que se suspendan las elecciones programadas por el Comité Electoral”. También “solicita al Fiscal Provincial en lo Penal de turno, se constate el delito de violencia y resistencia a la autoridad cometidos por los miembros del Comité Electoral”.

18 de noviembre.- Día de las elecciones docentes, el resultado dio como ganadora a la Lista 4¹⁵², que obtuvo 31 representantes ante la AU; la Lista 2¹⁵³ solo obtuvo 15 representantes. Garantizado este proceso, la composición de la AU era favorable al entonces rector Wilson Reátegui. Aquel día, según informa Gaceta Sanmarquina¹⁵⁴, el 60% de docentes votó a pesar del intento de boicot por parte de los miembros del MUSA (Movimiento Universitario Sanmarquino), agrupación docente a la que entonces pertenecía Paredes Manrique.

21 de noviembre.- “Denuncian al Rector, al Dr. Fausto Garmendia (decano interino) y al Vicerrector Académico por acciones dolosas para desestabilizar la Facultad. Dice que no aceptará nuevas elecciones de docentes para la Asamblea Universitaria por carecer de base legal la convocatoria del ilegal Comité Electoral” (Informe Paredes, p. 22)

Además, Paredes, mediante un Boletín s/n difunde su “Informe del Decano” en el que “polariza en extremo la división de la comunidad universitaria. O están con él o contra él, no hay alternativa. Quien está con él está con San Fernando y San Marcos, lo contrario es volverse ‘enemigo’”.

23 de noviembre.- Se ratifica mediante la RR Nro. 4997-R-94 la Resolución Nro. 082-CE-94 del Comité Electoral por la que se proclaman como ganadores por mayoría a la

¹⁵² Conformada por los siguientes grupos docentes: “Presencia y Proyección Sanmarquina”, “Movimiento Académico”, “Nueva Universidad” y “Movimiento Institucional San Marcos”.

¹⁵³ Conformada por “San Marcos siglo XXI” y un sector del MUSA.

¹⁵⁴ Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p. 9. Diciembre de 1994. Este era entonces el nombre del periódico institucional de la UNMSM.

representación docente a la AU en la categoría de principales y asociados, y por minoría a la representación de docentes auxiliares a los integrantes de la Lista Nro. 4. Y ganadores en mayoría en la categoría de profesores auxiliares y en minoría de los representantes de los profesores principales y asociados a la Lista Nro. 2.

Diciembre

02 de diciembre.- Primera sesión de la AU. Su primer acuerdo apuntó a golpear a los ex decanos que no contaban con mayoría en los Consejos de Facultad respectivos: el Dr. Raúl Izaguirre Maguiña de Ciencias Matemáticas y el Ing. Leoni Silva Rojas de Ciencias Administrativas. Así, a ambos se le apertura procesos administrativos y se les suspende de la función docente hasta que finalice dicho proceso¹⁵⁵.

Respecto a Paredes, en esta sesión de la AU se optó por una ofensiva más metódica; por eso acordó crear una Comisión Investigadora¹⁵⁶ a la que se le encargó elevar un Informe “sobre la conducta funcional y la situación legal del doctor MANUEL PAREDES MANRIQUE, así como de todas las denuncias y sucesos que viene afrontando la Facultad de Medicina a partir del mes de agosto de 1994”¹⁵⁷; cuestión que serviría como base para “determinar las medidas que se deberían tomar para la normalización de la histórica Facultad de San Fernando”¹⁵⁸. Además, se acordó seguir encargando la decanatura al Dr. Fausto Garmendia¹⁵⁹ mientras la AU no dictamine en base al Informe.

06 de diciembre.- En el periódico “El Día” se publica que el “Rector Wilson Reátegui chantajea a profes, no quiere firmar resoluciones ni diplomas si no son de su Partido Comunista. Extorsiona a profes con su asesor Oliverio Llanos” (Informe Paredes, p. 24)

07 de diciembre.- El periódico “El Día” publica: “Rector terruco Reátegui usa policía contra profes...Rector comunista Reátegui desata persecución, el colmo, su partido Patria Roja quiere tomar el gobierno por medio de la lucha armada y la policía nacional lo ayuda” (Informe Paredes, p. 25).

09 de diciembre.- Paredes “expresa su rechazo a una pretendida Comisión Investigadora para la Facultad de Medicina, porque la Asamblea Universitaria que la nombró es irregular, pues sus actuales ‘representantes docentes’ son producto de un acto ilegal” (Informe Paredes, p. 22).

12 de diciembre.- El periódico “Confidencial” emite el siguiente texto: “Sexo en el Rectorado, todas las secretarías chantajeadas por el camarada Wilson, el terror de San Marcos...Camarada Wilson Reátegui cambió la lucha armada por el sexo rico” (Informe Paredes, p. 25).

¹⁵⁵ Estos acuerdos se materializaron mediante la RR Nro. 5133-R-94 del 5 de diciembre de 1994 para el caso de Silva; y la RR Nro. 5223-R-94 del 12 de diciembre para el caso de Izaguirre.

¹⁵⁶ Conformada por el Dr. Luis Solano Mendoza, profesor principal de la Facultad de Medicina, quien presidió esta comisión; Dr. Julián Ángeles Carrasco, profesor principal de la Facultad de Odontología; Dr. Manuel Góngora Prado, profesor principal de la Facultad de Letras y CCHH; Dr. Pedro Mascaro Sánchez, profesor asociado de la Facultad de Medicina; Sr. Juan Nájera Cáceres y el Sr. Guillermo De La Vega Mejía, ambos representantes del Tercio Estudiantil de la Facultad de Medicina.

¹⁵⁷ Primer artículo de la Resolución Rectoral Nro 5131-R-94 del 5 de diciembre de 1994.

¹⁵⁸ Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p. 9. Diciembre de 1994.

¹⁵⁹ “Profesor principal más antiguo en la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Medicina y miembro del Consejo de Facultad” según la Resolución Rectoral Nro. 5131-R-94. Finalmente, en los artículos 4 y 5 de la RR citada, se manda, bajo responsabilidad, a que el Dr. Paredes haga entrega del local del decanato al decano interino Dr. Garmendia y que los miembros del Consejo de Facultad de Medicina y funcionarios brinden la información y apoyo que la Comisión Investigadora solicite.

14 de diciembre.- El Consejo Universitario resuelve respaldar al rector Wilson Reátegui Chávez considerando que “ciertos sectores de la Universidad, en complicidad con algunos medios de comunicación vienen alentando una campaña de desestabilización de nuestra Casa de Estudios, tratando de mostrarla en crisis y desgobierno, no escatimando esfuerzo alguno para difamar y atacar la honra de las personas”¹⁶⁰.

18 de diciembre.- El periódico “Confidencial”: “Wilson Reátegui con el cuento de la revolución y la lucha armada ha convertido el Rectorado de San Marcos en un bulín [burdel]” (Informe Paredes, p. 25).

1995

Enero

10 de enero.- Se eleva el Informe de dicha Comisión Investigadora a la sesión extraordinaria de la AU, en donde se aprobó el Dictamen en Mayoría¹⁶¹ (al cual denominamos Informe Paredes). Y, en consecuencia, se resolvió disolver el Consejo de Facultad de Medicina¹⁶²; crear una Comisión de Gobierno de Emergencia; procesar administrativamente y suspender a Paredes Manrique; gestionar una auditoria externa a la Facultad y “reaperturar el concurso público de nombramiento docente en base a las normas establecidas por el Consejo Universitario”¹⁶³.

Mayo 1995

25 de mayo.- Se aprueba la Ley 26457 por la que se interviene la UNMSM mediante la Comisión Reorganizadora, la cual fue presidida por Manuel Paredes Manrique y estuvo conformada, además, por Jaime Descailleaux, Gabriel Huerta, Leoni Silva, Aníbal Torres.

Otra frente de la pugna fue el Poder Judicial, a donde acudió Paredes Manrique y su grupo presentando acciones de amparo para que se frenen las elecciones del 18 de noviembre de 1994 y, al no poder cumplir esto, inician juicios penales por desacato a la autoridad contra el Rector, Vicerrector Académico, Presidente del Comité Electoral y sus miembros, Secretario General de la universidad y miembros de la AU.

¹⁶⁰ Gaceta Sanmarquina. Año 5, N°25, p. 11. Diciembre de 1994.

¹⁶¹ Según consta en la RR Nro. 0093-R-95 del 11 de enero de 1995. Los estudiantes miembros de la Comisión Paredes presentaron un Informe como Dictamen en Minoría, la cual no fue aprobada.

¹⁶² Esto debido a la correlación favorable que mantenía allí Paredes.

¹⁶³ Todos estos acuerdos se encuentra en la RR Nro. 0094-R-95 del 11 de enero de 1995.

ANEXO II

A inicio de 1995 existían 19 facultades en la UNMSM. El 30 de diciembre de 1996 se crean tres escuelas más: Ing. Sistemas; Turismo y Negocios internacionales; de las cuales la primera pasa a constituirse en Facultad, por lo que desde esta fecha las facultades se incrementaron a 20.

PROCESO DE CAMBIOS DE DECANOS ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN (SOBRE LA CORRELACIÓN A NIVEL DECANAL)				
FACULTAD	Mayo de 1994 ¹⁶⁴ . Antes de las elecciones generales. Decanos:	Tras las elecciones generales y las elecciones de Decanos en cada CF. Antes de la intervención del 26 de mayo de 1995.	Designación por parte de la CORE-SM. RRs del 2 de junio 1995.	Designación por parte de la CORE-SM RR Nro. 5374-CR-96 del 26 de agosto de 1996.
1.Medicina	Dr. Paredes Manrique	Comisión de Gobierno de Emergencia	Designa al Dr. Jose Piscoya Arbañil como decano.	Sigue como Decano Piscoya
2.Derecho y Cc. Política	Dr. Aníbal Torres Vásquez	Decano encargado: Washington Duran Abarca	Disuelve Consejo de Facultad. Nombra Comisión de gobierno: Dr. Martín Fajardo Caballero, preside. Dr. Ricardo La Hoz Tirado Dr. German Small Arana	Decano Dr. José Antonio Silva Vallejo
3.Letras y Cc. Humanas		Decano elegido: Dr. Gilberto Bustamante Guerrero	Siguió	Siguió
4.Farmacia y bioquímica	Dr. Pedro Cotillo Zegarra	Decano elegido: Dr. Pedro Cotillo Zegarra	Designa Decano: Dr. Ruben Arredondo Zegarra	

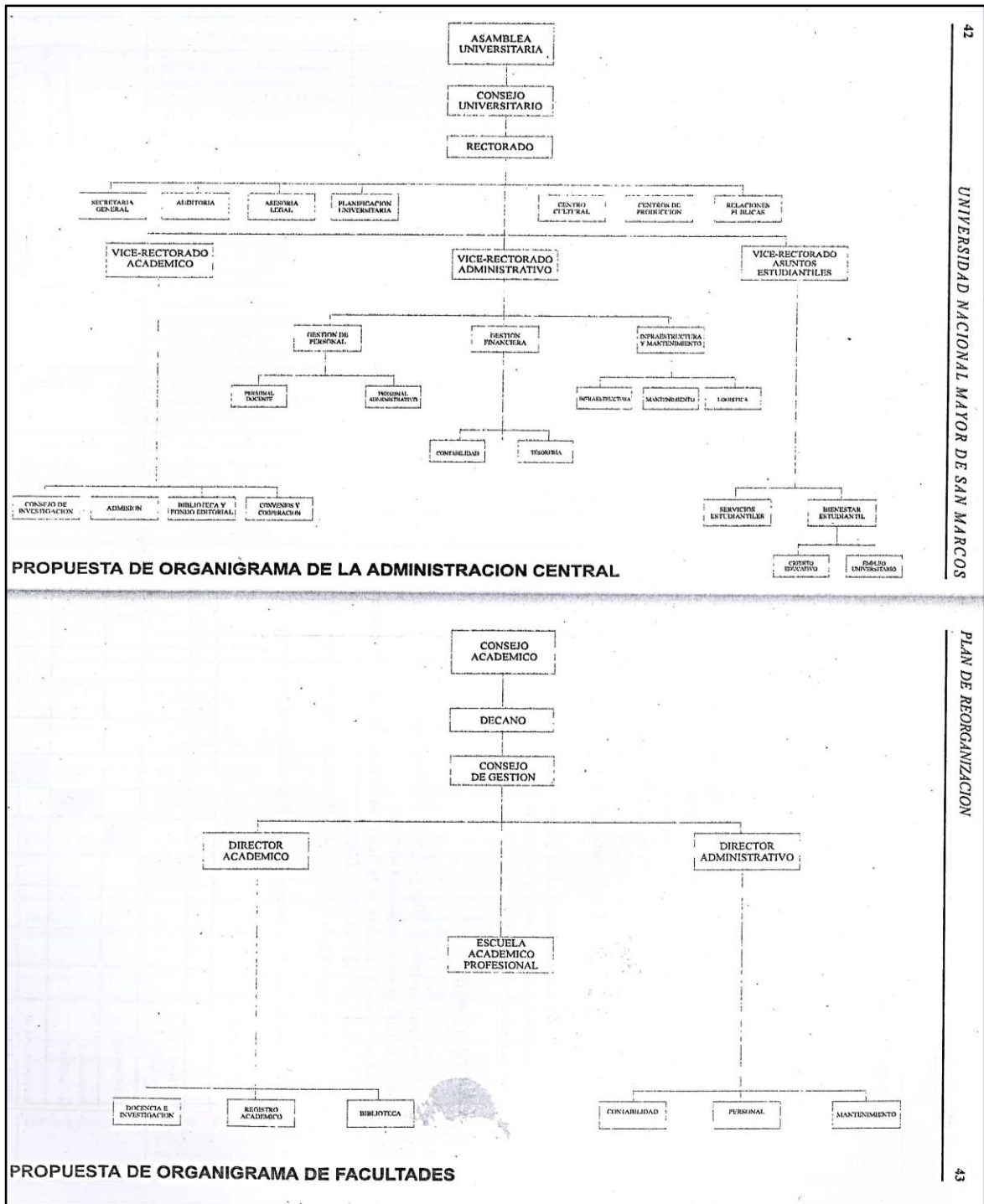
¹⁶⁴ Fuente: Firmaron como decanos en el Pronunciamiento emitido el 12 de mayo de 1994 en el Diario La República.

5.Odontología	Dr. Juvenal González León de Peralta	Decano elegido: Dr. Edgard Fernández Chirinos	Designa Decano: Dr. Edgard Fernández Chirinos.	Decano: Dr. César Neves Zegarra
6.Educación	Dr. Gabriel Huerta Díaz	Decano encargado: José Flores Barboza	Decano designado: José Flores Barboza	Decano: Dra. Natalia Rodríguez del Solar
7.Química e Ing. Química	Ing. Mario Bautista Castro	Decano elegido: Ing. Wilber Gil Benitez	Designa Decano: Ing. Wilber Gil Benitez	Siguió
8.Medicina Veterinaria	Dr. Juan Espinoza Blanco	Decano elegido: Dr. Juan Espinoza Blanco	Designa Decano: Dr. Juan Espinoza Blanco	Siguió
9.Cc. Administrativas+	Ing. Leoni Silva Rojas	Decano elegido: Dr.Guillermo Aznarán Castillo	Disuelve Consejo de Facultad. Nombra Comisión de Gobierno (asume funciones de Consejo de Facultad): -Lic. Percy Catacora Santisteban, preside (asume funciones de decano). -Lic. Elena Bautista Flores -Ing. Grover Mejía Osorio	Siguió Decano el Dr. Percy Catacora Santisteban
10.Cc. Biológicas+	Dr. Misael Guevara Paredes	Decana encargada: Dra. Eleucy Pérez Tuesta	Disuelve Consejo de Facultad Nombra Comisión de gobierno: Dr. Teodoro Amorotto Calderón, preside. Biol. Rolando Estrada Jimenes Biol. Doris Melo Horna	Decano: Blgo. Carlos Paredes Quiroz

11.Cc. Contables	Dr. Óscar Salinas Zegarra	Elegido: Dr. Óscar Salinas Zegarra	Designa como Decano al Dr. Pascual Chávez Ackerman	Siguió como decano: Dr. Chávez Ackerman
12.Cc.Económicas+	Dr. Virgilio Roel Pineda	Decano elegido: Dr. Ronald Figueroa Ávila	Designa como Decano al Dr. Ronald Figueroa Ávila.	Decano: Dr. Hugo Lezama Coca
13.Cc. Físicas+	Dr. José Vásquez Rojas		Designa como Decano al Dr. Jorge Bravo Cabrejos.	Siguió como decano el Dr. Bravo.
14.Cc. Matemáticas+	Dr. Raúl Izaguirre Maguiña	Decano elegido: Dr. Carlos Chavez Vega	Designa como Decano al Dr. Raul Izaguirre Maguiña	Decano: Dr. Hugo Lazaro Manrique
15.Cc. Sociales+	Dr. Víctor Medina Flores	Decano elegido: Dr. Roger Iziga Núñez	Designa como Decano al Dr. Víctor Medina Flores	Siguió como decano el Dr. Medina.
16.Geol. Min. Met y Cc. Geog.	Ing. Luis Cánepa Purizaga	Decana encargada: Dra. Maria Lau Luyo	Designa como decano al Ing. Pablo Antonio Núñez Jara	Siguió como decano el Dr. Núñez.
17.Ing. Industrial+	Dr. Carlos Quispe Atúncar		Designa como Decano al Ing. Carlos Quispe Atuncar.	Siguió como decano el Ing. Quispe.
18.Psicología+	Dr. Carlos Ponce Díaz		Designa como Decano al Dr. Carlos Ponce Díaz.	Siguió como decano el Dr. Ponce.
19.Ingeniería Electrónica+	Ing. Jaime Luyo Kuong		Designa como Decano al Ing. Jaime Luyo Kuong	Siguió como decano el Dr. Luyo.

COPAMIENTO DE LAS OFICINAS GENERALES-ADMINISTRACIÓN CENTRAL POR PARTE DE LA CORE-SM (En las primeras semanas de gobierno)	
CARGOS	DESIGNADO
Director de la Escuela de Post-grado	Dr. José Vásquez Rojas
Comité Directivo del CEPUSM	Dr. Dario Chavez de Paz como Director Ejecutivo y al Dr. Raul Rodriguez Torres como Director Académico.
Director General del CEPUSM	Ing. Leoni Silva Rojas
Jefe de la Oficina General de Investigación	Dr. Jaime Descailleaux Dulanto
Editor de la Revista Alma Mater	Dr. Oswaldo Salaverry García
Editor de la Revista Theorema	Dr. Jaime Descailleaux
Jefe de la Oficina General de Personal	Dr. José Mayorca Palomino
Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario	Prof. Violeta Nolberto Sifuentes
Jefe de la Oficina Técnica de Admisión	Dr. Oswaldo Ramos Chumpitaz
Jefe de la Oficina General de Economía	CPC German Orlando Carranza Izaga
Secretario General de la UNMSM	Designa primero a José Piscoya Arbañil y luego Marco Antonio Cabrera Vásquez
Jefe de la Oficina General de Asesoría Legal	Designa primero a Marco Antonio Cabrera Vásquez y luego al Dr. Roberto Rendón Vásquez (quien luego también formó parte de la CORE-SM)

ANEXO III



ANEXO IV

Cuadro de evolución de tarifas

Algunos Conceptos		Tarifario del 1 de julio de 1991 (RR Nro. 102928)	Tarifario del 3 de febrero de 1992 (RR Nro. 105099)	Tarifario del 17 de marzo de 1994 (RR Nro. 1313-R-94)	RR Nro. 3540-CR-95 del 19 de setiembre de 1995.	Tarifario del 12 de marzo de 1997 (RR Nro. 01330-CR-97)	Tarifario del 23 de junio de 1997 (RR Nro. 03545-CR-97)	Tarifario del 26 de febrero de 1998 (RR Nro. 1083-CR-98)		
Matrícula Pre-Grado	Por semestre	-	4	20	40	60	60	90		
	Por año	-	8	40	80	120	120	180	180/400/600 (año 1999) ¹⁶⁵	
	Repitentes por año académico: Primera vez/segunda vez	-	-	-		240/480	240/480	360/500		
	Repitentes por curso: Primera Repitencia (cada curso)/Segunda Rep. (cada curso)	-	-	-		30/60	30/60	50/100		
Carné de biblioteca	Original	5	2	5		5	5	-	10 ¹⁶⁶	15 ¹⁶⁷
	Duplicado	-	4	5		10	10	-	35 ¹⁶⁸	
Constancias	De ingreso	10	3	6		-	20	-	30 ¹⁶⁹	
	De matrícula	10	2	4		10	10	-		
	De estudios	5	1	2		10	10	-		
	De egresado	5	5	10		20	20	-		
Grados y títulos	De Bachiller	10	25	50		100	100	-		
	De Magíster	150	200	400		500	500	-		
	De Doctor	200	300	600		800	800	-		
	Título Profesional	20	50	100		200	200	-		
Duplicados de diploma	De Bachiller	-	-	800		1000	1000	-		
	De Título Profesional	-	-	1200		1400	1400	-		
	De Segunda especialización	-	-	1600		2000	2000	-		
	De Maestría o Doctorado	-	-	2000		2400	2400	-		

¹⁶⁵ UNMSM, "Mensaje del rector..", 1999, p. 29

¹⁶⁶ Mediante RR Nro. 04268-CR-97 del 23 de julio de 1997.

¹⁶⁷ Mediante RR Nro. 04436-CR-00 del 23 de mayo del 2000.

¹⁶⁸ Mediante RR Nro. 00599-CR-99 del 2 de febrero de 1999.

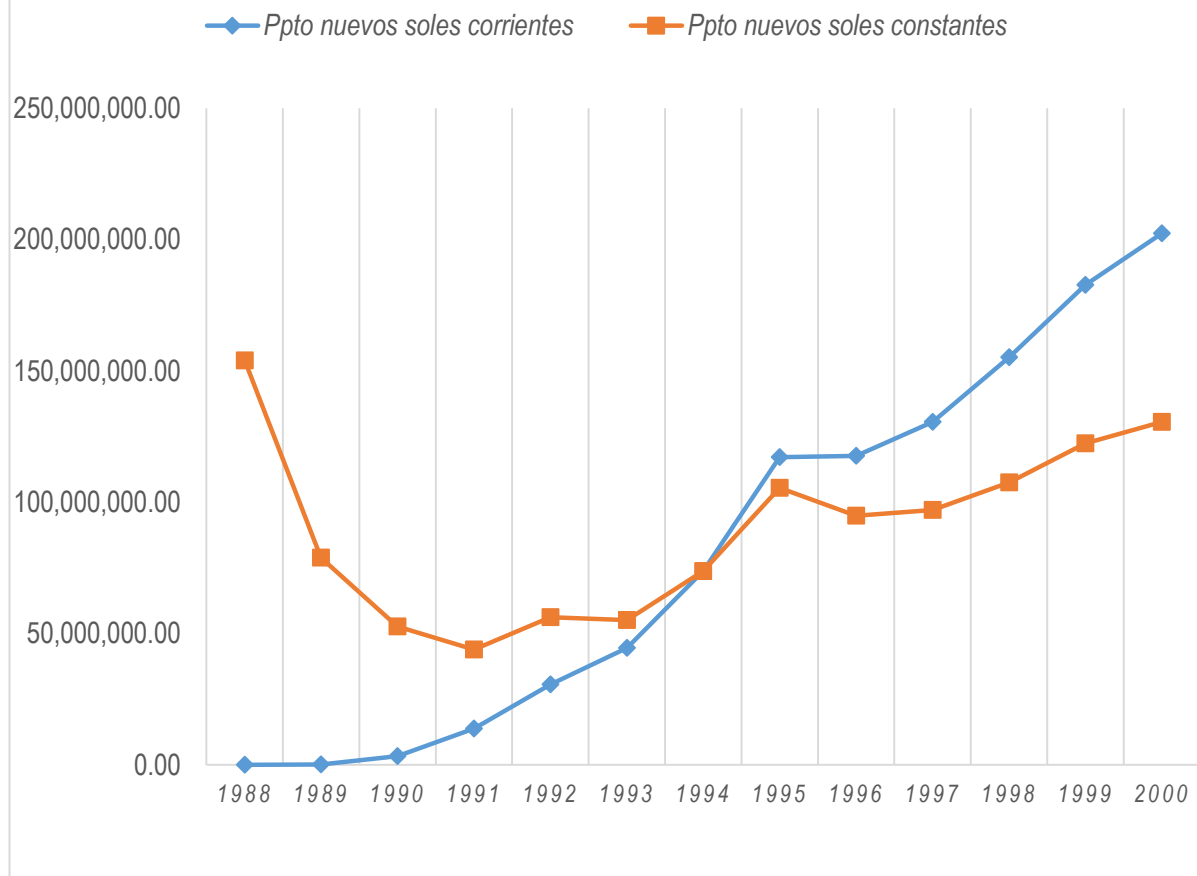
¹⁶⁹ Para el caso de la Facultad de Educación. Mediante RR Nro. 04110-CR-00 del 15 de mayo del 2000.

ANEXO V

Cuadros estadísticos

Presupuesto anual de la UNMSM 1988-2000. En nuevos soles corrientes y constantes.		
Año	Presupuesto en nuevos soles corrientes	Presupuesto en nuevos soles constantes
1988	3,572.06	154,034,670.12
1989	64,033.15	78,914,930.25
1990	3,241,220.58	52,686,385.25
1991	13,761,837	43,903,407.53
1992	30,572,265.00	56,205,434.71
1993	44,542,669.00	55,114,660.70
1994	73,741,943.00	73,741,943.00
1995	117,160,502.00	105,431,272.89
1996	117,621,692.00	94,882,984.71
1997	130,589,873.00	97,048,827.67
1998	155,218,626.00	107,551,708.70
1999	182,803,519.00	122,415,803.25
2000	202,378,137	130,617,101.45
Respecto al presupuesto constante, el año base de los años 1988 a 1994 es 1990; y el año base de los años 1995 a 2000 es 1994.		
Fuente: Compendios estadísticos de la Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM. Elaboración propia.		

**PRESUPUESTO ANUAL DE LA UNMSM 1988-2000. EN SOLES
CORRIENTES Y CONSTANTES. AÑOS BASE DE CONSTANTES:
1990 (1988-1994) Y 1994 (1995-2000)**



PRESUPUESTO ANUAL UNMSM SEGÚN FUENTE. EN NUEVOS SOLES CORRIENTES					
AÑO	RECURSOS ORDINARIOS (RO)	REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)	FEDU	DONACIONES	TOTAL
1990	2,517,222.00	86,146.00	637,587.00	265.58	3,241,220.58
1991	7,568,200.00	639,962.00	5,552,486.00	1,189.00	13,761,837.00
1992	18,765,163	2,824,006.00	8,957,550.00	25,546.00	30,572,265
1993	24,066,873.00	6,520,674.00	13,933,967.00	21,155.00	44,542,669.00
1994	44,995,404.00	13,140,614.00	15,592,773.00	13,152.00	73,741,943.00
1995	59,166,382.00	40,067,000	17,915,000	12,120	117,160,502.00
1996	66,624,000	33,047,833	17,915,000	34,859	117,621,692
1997	90,834,659	39,559,384	--	195,830	130,589,873
1998	96,251,101.00	58,620,156.00	--	347,369.00	155,218,626.00
1999	109,412,793.00	72,968,329.00	--	422,397.00	182,803,519.00
2000	105,001,800.00	97,072,516.00	--	303,821.00	202,378,137.00

Fuente: Compendios estadísticos de la Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM. Elaboración propia.
FEDU: Fondo Especial de Desarrollo Universitario. Creado por Ley Nro. 25203 el 24 de febrero de 1990. En 1992, mediante el Decreto Ley Nro. 25702 se redujo sustancialmente la capacidad de este fondo. A partir de 1997 se considera al FEDU dentro de los Recursos Ordinarios.

PRESUPUESTO ANUAL UNMSM SEGÚN FUENTE. EN NUEVOS SOLES CONSTANTES. AÑO BASE (1995-2000): 1994. AÑO BASE (1990-1994):1990					
AÑO	RO	RDR	FEDU	DONACIONES	TOTAL
1990	2,517,222.00	86,146.00	637,587.00	265.58	3,241,220.58
1991	1,485,335.45	125,598.99	1,089,731.28	233.35	2,700,899.07
1992	2,122,331.29	319,393.78	1,013,094.78	2,889.24	3,457,709.09
1993	1,831,898.59	496,334.26	1,060,612.01	1,610.26	3,390,455.12
1994	2,768,082.03	808,400.29	959,255.19	809.10	4,536,546.61
1995	53,243,088.41	36,055,793.03	16,121,484.81	10,906.64	105,431,272.89
1996	53,744,202	26,659,003	14,451,660	28,120	94,882,985
1997	67,504,447.05	29,398,848.11	--	145,532.51	97,048,827.67
1998	66,692,836.06	40,618,179.04	--	240,693.60	107,551,708.70
1999	73,269,130.78	48,863,811.02	--	282,861.45	122,415,803.25
2000	67,769,330.06	62,651,681.94	--	196,089.45	130,617,101.45

Fuente: Compendios estadísticos de la Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM. Elaboración propia.
FEDU: Fondo Especial de Desarrollo Universitario. Creado por Ley Nro. 25203 el 24 de febrero de 1990. En 1992, mediante el Decreto Ley Nro. 25702 se redujo sustancialmente la capacidad de este fondo. A partir de 1997 se considera al FEDU dentro de los Recursos Ordinarios.

PRESUPUESTO ANUAL UNMSM. PORCENTAJES SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
AÑO	RO	RDR	FEDU	DONACIONES	TOTAL
1988	98.37	1.32	--	0.31	100
1989	99	0.97	--	0.03	100
1990	77.66	2.66	19.67	0.01	100
1991	54.99	4.65	40.35	0.01	100
1992	61.38	9.24	29.3	0.08	100
1993	54.03	14.64	31.28	0.05	100
1994	61.02	17.82	21.14	0.02	100
1995	50	34	15	1	100
1996	56.64	28.1	15.23	0.03	100
1997	69.56	30.29	--	0.15	100
1998	62.01	37.77	--	0.22	100
1999	59.85	39.92	--	0.23	100
2000	51.88	47.97	--	0.15	100
<p>Fuente: Compendios estadísticos de la Oficina de Estadística e Informática de la UNMSM. Elaboración propia.</p> <p>FEDU: Fondo Especial de Desarrollo Universitario. Creado por Ley Nro. 25203 el 24 de febrero de 1990. En 1992, mediante el Decreto Ley Nro. 25702 se redujo sustancialmente la capacidad de este fondo. A partir de 1997 se considera al FEDU dentro de los Recursos Ordinarios.</p>					

ANEXO VI

Listado de trabajadores no docentes expulsados:

Pág. 145798

El Peruano **NORMAS LEGALES**

Lima, martes 7 de enero de 1997

"3° Sancionar a la firma INVERSIONES, PROYECTOS Y OBRAS S.A. - INPROSA - con una suspensión temporal de un (1) año en el ejercicio de su derecho a presentarse a licitaciones públicas y/o concursos de precios y a contratar la ejecución de obras con el Estado, entendiéndose que la sanción debe computarse a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SS. PIN TORRES; ASTETE WILLIS;
FIGUEROA TACKOEN; ELIAS PODESTA;
VARGAS GONZALES.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

**Cesan por causal de excedencia a
trabajadores no docentes de la univer-
sidad**

RESOLUCION RECTORAL N° 08397-CR-96

Lima, 31 de diciembre de 1996

Visto el Informe N° 176-VP/CR de la fecha, del Presidente de la Comisión Central de Supervisión de la Evaluación de Personal no docente de la Universidad elevando para aprobación los resultados obtenidos en el proceso desarrollado;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Ley N° 26093 se establece la obligatoriedad de aplicación de Programas de Evaluación Semestral del personal, facultándose a los titulares de las entidades a dictar las normas necesarias para su desarrollo, pudiendo declarar excedente al personal que no obtenga puntaje aprobatorio;

Que mediante Resolución Rectoral N° 07393-CR-96 del 15.11.96 la Universidad aprobó el Reglamento de Evaluación del Personal no docente, estableciendo las directivas de ejecución del proceso, conforme a Ley;

Que, mediante R.R. N° 08391-CR-96 del 30.12.96 se aprobó la modificación del Art. 16° del Reglamento de Evaluación, rebajando a 53 puntos el puntaje mínimo aprobatorio;

Que el proceso de Evaluación de Personal no docente, ha sido desarrollado en los plazos y términos previstos en el Reglamento aprobado, con la participación, en la administración de las pruebas escritas, del Representante del Ministerio Público;

Que, la Comisión Central de Supervisión de la Evaluación de Personal no docente, designada mediante R.R. N° 07286-CR-96 del 7.11.96 ha elevado los resultados finales del proceso aplicado, siendo necesario aprobar sus resultados;

Estando a lo aprobado en la Sesión de la fecha de la Comisión de Reorganización; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 4° de la Ley N° 26457, prorrogada en su vigencia por Ley N° 26614;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar los resultados obtenidos en el proceso de Evaluación de Personal no docente de la Universidad, correspondiente al Segundo Semestre de 1996.

Artículo 2°.- Cesar, por causal de excedencia a partir del 1 de enero de 1997, a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que no han obtenido el puntaje mínimo aprobatorio consignado en el Reglamento de Evaluación y su modificatoria y, cuya relación se detalla en el anexo adjunto y que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Autorizar a la Oficina General de Personal, efectuar las liquidaciones de beneficios sociales que por ley les corresponda a los trabajadores incurso en la presente resolución.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

MANUEL PAREDES MANRIQUE
Rector

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CODIGO
1	ABARO AGUISE, Narciso	000051
2	AGUIRRE YANEZ, Claudio	000973
3	ALEJOS MATOS, Bertha	00160E
4	ALEJOS QUISPE, Emiglio	001627
5	ALIAGA GALVAN, Victoriano Edgardo	001805
6	ALLAUCA POZO, Héctor	001888
7	ALMEIDA ARROYO, Clara	00207E
8	ALTAMIRANO CARDENAS, José Luis	002224
9	ALVARADO CHACON, Eudomila	002437
10	ALVARADO FLORES, Felicitia	00250A
11	AMADO CHAVEZ, Teodocia	002925
12	ANAMPA FLORES, Oscar	003182
13	ANGULO VALDEIGLESIAS, Roberto	003689
14	ANTAY GAVILAN, Teófilo	003786
15	AQUIJE LOPEZ, Genaro	00403E
16	ARCE JARA, Leyla	004502
17	ARCOS SOTO, Epifania	00460A
18	ARIAS AZABACHE, José	004839
19	ASTO MONTES, Zózimo	005487
20	ATOCOSA LLANTO, Marcial	005584
21	ATOCOSA HARCIA, Carlos	005614
22	BARRIONUEVO GAMARRA, César	006963
23	BEJARANO ZEVALLOS, Miguel	007714
24	CASANOVA ZANELLI, Gloria E.	013195
25	CASTELLANO QUISPE, Carlos	013552
26	CAYCAY LANDA, Walter John	01453E
27	CCANTO LULO, Casilda	014577
28	CCONISLLA TRUEVAS, Lucio	014523
29	CHACON SOTO, Lucila	015547
30	CHAGUA JUIPA, Felicia	015571
31	CHAUPIN RAMOS, Máximo	015806
32	CHOQUE TANTAHUILCA, Félix	016721
33	CHUMBILLE NAJARRO, Alfredo	01681E
34	CONTRERAS CUEVA, Margarita	017752
35	CORZO ISIDRO, Alfredo	018732
36	CUADROS ALATA, Guillermo Heracleo	019267
37	CUADROS ATUNCAR, Moisés	019275
38	CURO LLANCE, Elisa	019734
39	CURO LLANCE, Olinda	019712
40	CUSI MAMANI, Valentín	019763
41	DE LA CRUZ CUBAS, Rubén	020249
42	DE LA CRUZ RAMIREZ, Pedro	020389
43	DELGADO ANDRADE, Gonzalo	021156
44	DELGADO ANDRADE, Juan R.	021164
45	DELGADO ANDRADE, Beatriz	021148
46	DELGADO LLAMO, Pedro	02130A
47	DIAZ ARAUJO, Jaime	021679
48	DIAZ BRAVO, José Angel	021717
49	DIAZ MEDINA, Gaspar	021881
50	ELESCANO ARTEAGA, Norma	02261E
51	ESCOBAR QUISPE, Valentín	023191
52	ESPINAL RAMIREZ, Mauro	023159
53	ESPINO APARCANA, Miguel Andrés	023133
54	ESTEBAN CAMACAUARI, Jeremías	024230
55	FRETTEL MARTINEZ, Carlos	025534
56	FRETTEL MEJIA, Víctor Rolando	027006
57	FUENTES CAJO, Ricardo	027111
58	GALINDO MACHACA, Cesáreo	027324
59	GARCIA DELFONSO, Juan	028444
60	GARRO MEJIA, Visitation	028975
61	GIRALDO HUAMAN, Carlos	029343
62	GOMEZ QUISPE, María Angélica	029629
63	GONZALES ALVA, Javier	02975E
64	GONZALES MUNANTE, Eduardo	030066
65	GRANADOS MONGE, Rubén	030503
66	GUERRA APAO, Lindolfo	030724
67	GUERRERO LOPEZ, Manuel	030929
68	HUAMAN ANDRES, Benjamín A.	033154
69	HUAMANI MEJIA, Santos	033596
70	HUANUCO HILARIO, Mavito	033707
71	HUARAZ RIQUEZ, Freddy Esteban	033847
72	HUAYLLASCO HERRERA, Alfredo	03407A
73	HURTADO GARATE, Juan	034363
74	INFANTAS TARAZONA, Juan	034762
75	ISLAS JIMENEZ, Eliseo	035033
76	SABENITA LEO, Luis	035463
77	LARA HERNANDEZ, Zósimo	036749
78	LASTRES RAMIREZ, Teófilo	036889
79	LEYVA SERRANO, Carmen	038016
80	LOPEZ SANTILLAN, Carlos	039314
81	LUNA CORDOVA, María Nieves	039942
82	MACEO FIGUEROA, Haydee Dolores	040207
83	MANYARI CABALLERO, Raymundo	041009
84	MARTINEZ GARAMENDI, Silvia	041726
85	MEDINA LARA, Nolberto Fabián	042609
86	MELGAREJO MONTESINOS, Isidoro	043133
87	MENDIVIL LINARES, Julia	043346
88	MENDOZA BORDA, Lid Mercedes	043451
89	MENDOZA BRAVO, Carlos	04346A
90	MERCADO ESQUIVIAS, Martha	043907
91	MEZA COBOS, Anastasia	044172

92	MONTES CALDERON, Máximo
93	MORALES RAMOS, María
94	MORENO LUNA, Teodoro
95	MORI PALERO, Jaime Federico
96	MURO ORTIZ, Fanny Madelit
97	NAHUIS LISBONA, Monja Jacoba
98	NAZARIO AQUINO, María del Rosario
99	NÚÑEZ ARGÜMEDO, Julio César
100	OCHOA-FRETEL, Amador
101	OCHOA VALDEZ, Alejandro
102	PACHECO MUÑOZ, Germán
103	PACHECO TENORIO, Macedonio Cristoba
104	PANTOJA CUCAPUSA, Modesto
105	PARRAGA ZARATE, Félix
106	PECHO RODRIGUEZ, Rufino
107	PILLACA DE LA CRUZ, Mariapo
108	PONCE MUSAYON, Lila del Carmen
109	PONTE DE LA CRUZ, Valerio
110	PONTE MATOS, Alejandro
111	PRADO ORE, William Ernesto
112	QUISPE QUISPE, Luis Pastor
113	RAMOS PARRA, Doris
114	RAYME ROMAN, Luis
115	REJAS HUAMAN, Luis A.
116	RIOS APAO, Miro
117	RIVAS HUAMAN, Ciro
118	RIVAS HUAMAN, Isaac
119	RIVAS HUAMAN, Sabina
120	RIVERA AQUÍ, Zenaida
121	ROBINSON HONORES, Roberto
122	ROJAS CAHUAS, Ricardo
123	ROJAS CONDORI, María Modesta
124	ROJAS CORDOVA, Víctor Raúl
125	ROJAS LUNA, Manuel
126	ROMERO ALLENDE, Alejandro
127	ROMERO BRAVO, Abraham
128	ROMERO VALENTIN, Roberto
129	ROQUE DE LA CRUZ, Simón
130	RUIZ TRIGOSO, Custodio
131	SALAS SEGOVIA, Félix
132	SALAZAR LINDO, Rolando
133	SALDAÑA PORTAL, Víctor
134	SANCHEZ ARIAS, Anderson Angel
135	SANCHEZ CHOCAS, Manuel
136	SANCHEZ SANCHEZ, María Isabel
137	SANTOYO MAZA, Reynaldo
138	SEGURA MACIEL, Wilma
139	SEMINARIO ATENCIO, Francisco
140	TATAJE VALCARCEL, Abelardo
141	TENORIO DE LA CRUZ, César
142	TORRES NAZARIO, Carmela
143	TRIGOSO GUADALUPE, Mery
144	TUME FERNANDEZ, José
145	VALLADARES BARRIGA, Teresa
146	VALLEJOS CORA, Flora
147	VALQUI VILCARROMERO, César
148	VALVERDE SOTEL, Alejandro Sixto
149	VARGAS ORTIZ, Waller
150	VASQUEZ AREVALO, Roger
151	VEGAS POZO, Rolando
152	VENTURA MENDIVIL, Jorge
153	VERA GOMEZ, Nancy
154	VICTORIO LOPEZ, Egenio
155	VICTORIO LOPEZ, Fermín
156	VILCAPOMA ROMAN, Ponciano
157	VILLAGARAY GUTIERREZ, Nicolás
158	VILLANUEVA RETUERTO, Félix
159	VILLANUEVA VALDERRAMA, Celso
160	VILLAVICENCIO ROBLES, Víctor E.
161	VITANZO HUARANCA, Janet
162	ZACARIAS TOVAR, Evert Romero

O45535
O46124
O46353
O46469
O4726E
O48623
O47856
O48259
O48828
O48909
O5061A
O50695
O51594
O52043
O52523
O53473
O54534
O5464A
O54666
O54992
O56421
O57312
O57495
O57738
O58548
O58955
O58963
O58971
O59129
O59536
O60623
O60704
O6072E
O60941
O61247
O61263
O61646
O61751
O62596
O73229
O6332E
O63746
O64319
O64467
O64947
O65609
O66028
O6606E
O6825A
O68551
O69264
O6976E
O70025
O71293
O84239
O71544
O71641
O7190E
O72117
O72931
O73512
O73598
O73946
O73954
O74314
O7456A
O74837
O74853
O75159
O7537A
O76228

CONSIDERANDO:

Que, mediante Edicto N° 225 del 16 de abril de 1996, publicado el 17 de mayo de 1996, se creó el Servicio de Administración Tributaria-SAT como un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía económica, presupuestaria y financiera;

Que, conforme al Artículo 2° del mencionado Edicto al SAT le corresponde organizar y ejecutar la administración, fiscalización y recaudación de todos los ingresos tributarios de la Municipalidad;

Que, mediante Edicto N° 227 se ha aprobado el Estatuto del SAT publicado con fecha 4 de octubre en el Diario Oficial y mediante Resolución de Alcaldía N° 3386 se ha designado al Jefe de la entidad;

Que, es necesario dictar normas que regulen el proceso de implementación del SAT;

Que, la segunda disposición final del Edicto N° 225 otorga facultades al Alcalde de Lima para que mediante Decreto modifique las funciones específicas de cada dirección, oficina o división de la estructura orgánica de la Municipalidad que deba ser modificada o suprimida por la creación del nuevo organismo, así como para disponer lo conveniente en orden a la transferencia progresiva de los recursos económicos, presupuestales, bienes patrimoniales y acervo documental de las oficinas que cumplen las funciones que conforme al citado Edicto serán asumidos por el SAT;

DECRETA:

Artículo 1°.- Corresponde al Jefe del SAT asumir la conducción del proceso de transición de la nueva entidad. Con tal fin, durante el proceso de transición, está facultado para:

a) Supervisar el funcionamiento de la Oficina General de Administración Tributaria;

b) Destacar a solicitud del Alcalde, personal del SAT para que ejerza temporalmente cargos de dirección o jefatura en dicha Oficina hasta la conclusión del proceso de transición, así como; contratar y nombrar a los auxiliares coactivos que en la Oficina General de Administración Tributaria estarán a cargo de la ejecución coactiva para el cobro de las deudas tributarias municipales, multas y otros ingresos de derecho público;

c) Solicitar y coordinar la transferencia progresiva al SAT de los recursos económicos, presupuestales, bienes patrimoniales y acervo documental de la Oficina General de Administración Tributaria.

Artículo 2°.- Facultar al Jefe del SAT, para que durante el proceso de transición, proponga al Alcalde:

a) La modificación, supresión o adecuación de los cargos y la estructura organizacional vigente de la Oficina General de Administración Tributaria;

b) Las acciones de desplazamiento del personal de la Oficina General de Administración Tributaria, cualquiera sea su cargo o jerarquía y la resolución de los contratos de prestación de servicios;

c) La designación y remoción de los ejecutores coactivos.

Artículo 3°.- El SAT iniciará sus funciones operativas a partir del 1 de marzo de 1997, sin perjuicio de aquellas actividades y funciones que por excepción y a propuesta del Jefe del SAT permanezcan temporalmente en el ámbito funcional de la Oficina General de Administración Tributaria para no afectar la recaudación.

El proceso de transición concluirá definitivamente el 31 de agosto de 1997.

Artículo 4°.- Hasta que concluya el proceso de transición del SAT, la Oficina General de Administración Tributaria se financiará en base al presupuesto asignado por la Municipalidad.

Artículo 5°.- Autorízase una transferencia presupuestal en favor del SAT por un importe de S/. 1'000,000. (UN MILLON DE NUEVOS SOLES) para financiar los gastos de inversión inicial de la nueva entidad durante el proceso de transición.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ALBERTO ANDRADE CARMONA
Alcalde de Lima

F2-130597 1v. 7 enero

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Regulan proceso de implementación del Servicio de Administración Tributaria

DECRETO DE ALCALDIA N° 140

Lima, 30 de diciembre de 1996

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA;

ANEXO VII

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS

Entrevista realizada a Martín Colán.
Dirigente estudiantil en el periodo de la CORE-SM.
Febrero de 2020

Coméntenos sobre el contexto político previo a la intervención de la Comisión Reorganizadora de San Marcos

El fujimorismo tenía claro que el último bastión de resistencia en el país, luego de haber aplicado las políticas neoliberales no eran los trabajadores, que se supone eran los que podían salir a las calles; no eran los pueblos organizados. El último bastión de resistencia en el país iban a ser los estudiantes. Ese bastión de resistencia estaba fundamentalmente en las universidades nacionales, porque la Católica no marchaba, la Ricardo Palma menos y otras universidades no marchaban, cierto.

Entonces para el año 95, cierto, habiendo tenido como correlato la lucha de los estudiantes en el año 93 para evitar la reforma de la Constitución; recuerda que en el año 93 era el año del referéndum y era el Si contra el No...

Habían sido los estudiantes los que habían salido no solo a marchar sino a explicarle a la gente lo importante que era mantener la Constitución de 1979. Entonces los estudiantes que habían salido a los micros, se habían ido a los pueblos, parecían brigadas de gente que no era la izquierda tradicional la que los movilizaba porque los partidos estaban también con dificultades, no representaban a la población; pero los estudiantes habían logrado salir y reconquistar a la gente y demostrarle con conocimientos y con emoción, cierto, la necesidad de no hacer una Constitución como la que nos dejó Fujimori.

El resultado de las elecciones del 93, ese es un dato muy importante, cuando el Fujimorismo creía que tenía el control total del país, cierto, y se genera un empate prácticamente... algunos dicen que podría haber sido también parte del fraude, de los futuros fraudes; pero lo real es que esa Constitución se impuso. Pero el análisis político del gobierno era que si los estudiantes en un periodo tan corto habían logrado acumular, habían logrado cambiar la opinión pública frente a medios de comunicación que siempre habían expresado su apoyo al gobierno y demás y sostenían al gobierno y posteriormente sabríamos que habían comprado a los medios de comunicación. Entonces cómo los estudiantes, sin redes sociales como Facebook, WhatsApp, etc.; estamos hablando de gente que se movilizó directamente, subiendo a los micros, a los mercados, etc.

¿Fue a nivel gremial dicha movilización?

Organizaciones vivas, gremiales y no gremiales y de los estudiantes. Incluso aquellos estudiantes que no estaban organizados se sumaron a la campaña contra el NO y lógicamente San Marcos jugó un papel trascendental en ese proceso. Entonces el gobierno saca como conclusión que si quiere reelegirse el año 95, tenía que controlar las universidades y ya no solamente a nivel de mantenerlas vigiladas en función a rebotes subversivos sino en función a organizaciones políticas, organizaciones gremiales porque estos estudiantes eran peligrosos; porque esos docentes eran peligrosos, porque esos universitarios eran peligrosos. Entonces la intervención de 1995 era una pieza fundamental para lograr la reelección que ellos buscaban, y lógicamente de una u otra manera lo lograron no porque Fujimori se reelige y nosotros somos expulsados de la universidad.

En mayo del 95 intervienen la universidad y la respuesta lógicamente fue frontal. Yo no militaba en ninguna organización política en ese momento, no me interesaba; pero la indignación que provoca en mi la intervención y la búsqueda de que la comunidad universitaria acepte sin ningún miramiento que vengan y hagan con la universidad rajatablas y todo lo demás hizo que gente como yo se incorporara al movimiento estudiantil y con un vocación mucho más grande. Yo recuerdo que cuando llega un grupo de docentes que habían sido nombrados a dedo por la Comisión Reorganizadora, yo era delegado de aula; estaba encabezado por Víctor Medina Flores. Llegaron de manera matonezca y prepotente a decir que todos tenían que someterse. Los estudiantes tenían que someterse porque los militares inspiraban miedo.

¿Estaban los militares acompañando a dicha comisión?

Por supuesto, a su lado, resguardándolos. Entonces los alumnos habían dicho que si llegaban los reorganizadores no los iban a dejar pasar, pero ¿cómo impedías que pasaran si venían con un pelotón de militares armados? Entonces el Dr. Víctor Medina se sentía pues imparable, se sentía soportado por la fuerza militar. Los alumnos guardaban silencio, estábamos en el segundo piso. Y, no sé. Por ejemplo en mi caso yo sentí que si me quedaba callado todo iba a pasar

como si nada no? Que nada de lo que habíamos dicho, de que no íbamos a permitirlo, iba a suceder; que se iban a imponer bajo la idea de que con el miedo podían acallar cualquier cosa y no sé cómo empecé a decir todo lo que sentía en voz alta, a decirlo con fuerza, a expresar lo que ellos representaban y empezaron a respaldarme el resto de los estudiantes y se sumaron todos y a pesar de que estaban resguardados con los militares los botamos.

¿Estaban en asamblea ustedes?

Sí, estábamos en asamblea y ellos llegaron y dijeron acá se acabó todo y, lógicamente, todos guardaron silencio, se callaron y no hubo otra cosa que salir al frente no. Y en ese momento, curiosamente, es que yo me hago dirigente ya de toda la facultad porque la gente me pide que asuma la dirigencia; y luego el año siguiente, el año 96, me eligen secretario general del Centro de Estudiantes de Sociología. Sucesor del anterior, que había sido Sinesio López. Demasiados años habían pasado. La organización era incipiente, había solo coordinaciones de base. No había Centro Federado, había solo los centros y no tenían secretarios generales; solamente era la reunión de los delegados de base. Las juntas de los centros estaban compuestas por delegados de base.

¿Cuántos militares acompañaron a la delegación presidida por Medina?

Estamos hablando de un promedio de 50 a 80 militares. Es que la base de San Marcos tenía un promedio de 150 a 200 militares, que se movilizaban ahí donde tenían que ir.

Arriba ha aludido a documentos de inteligencia que sirvieron como base para la intervención. Son una excusa o ¿Realmente existen?

El congreso de la república, en el año 95, era mayoritariamente fujimorista; este congreso salió a justificar con documentos en la mano, pero lógicamente documentos secretos, seudodocumentos, porque la inteligencia sacaba seudodocumentos, "informes de inteligencia", pero de qué estamos hablando?; y con esos informes, que no eran documentos verificados de procesos ni nada, toman la decisión en el parlamento de intervenir la universidad. Supuestamente esos "informes" decían que se estaban planeando atentados terroristas en la universidad de San Marcos y La Cantuta; y nunca aparecieron los detenidos. Porque si Inteligencia sabía de ello, ¿por qué no intervino y detuvo a los subversivos, terroristas que estaban vigilados? Nunca se presentó a detenidos.

Hubo un atentado al hotel María Angola en días previos. ¿También fue utilizada como excusa?

Bueno, todo lo previo a eso fue utilizado como excusa.

¿Notaban los universitarios la pugna entre Reátegui y Paredes de fines de 1994?

No. En realidad no. Porque, como te repito ya la mayoría de los estudiantes no militaba en alguna organización política. Por supuesto que había militantes de Patria Roja y todo lo demás pero en el caso de Paredes no tenía militantes...él no tenía organización política-partidaria dentro de la universidad sino una organización docente y tenía fuerza también, pero de eso yo conocía poco. Lo real es que quien tenía el control de la universidad era Patria Roja...tenía pues sus artimañas para permanecer. Por eso digo, ese el pretexto interno por el cual curiosamente es el gobierno de Fujimori, a través del parlamento que coloca a Paredes Manrique como presidente de la Comisión Reorganizadora.

¿Cuándo eliminan los Consejos de Facultad?

De inmediato. La Comisión Reorganizadora en el momento de promulgarse la ley declara la disolución de la asamblea universitaria, el consejo universitario y los consejos de facultad. Es decir, no hubo consejos de facultad más.

¿Está seguro de ello? Porque en la Ley 26457 solo dice literalmente la disolución de la AU y CU

Por supuesto. Todo, absolutamente todo. Porque si no Víctor Medina que se viene a instalar hubiera funcionado con el consejo de facultad y eso no ocurrió. Es decir, todo, desde arriba el rector, cierto, y los decanos eran puestos en una comisión. Osea, fueron cinco los comisionados de la Comisión Reorganizadora y esa misma Comisión Reorganizadora nombró bajo la misma forma, de manera arbitraria y directa, a los veinte decanos que iban a tomar posesión; y en el caso de ellos, no en comisión sino como decanos.

Todos los consejos de facultad se disuelven desde el primer momento, a la semana de iniciar la intervención.

¿Tampoco funcionaban los comités asesores?

No había nada, todo fue intervenido; la universidad en su totalidad. Los comités asesores existieron en cada Escuela

hasta que se dio la intervención del 95.

Se le dio máxima autoridad y poder a la Comisión Reorganizadora. Esto se expresó incluso en la estructura; todas las facultades, que eran abiertas en el campus, empezaron a ser enrejadas. Por ejemplo, el cerco de la facultad de Ciencias Sociales no existía antes de la Comisión Reorganizadora.

Podría explicar el proceso de las expulsiones de estudiantes

El objetivo de las expulsiones, en su gran mayoría, era un objetivo político. Porque también es cierto que la gente que llevaban muchos años en la universidad se dedicaba a hacer política, pero no la mayoría porque la mayoría éramos gente joven; y no era un criterio académico porque la mayoría éramos buenos estudiantes. Justamente una de las cosas que nosotros peleábamos en mi generación era el no permitirse uno mismo ser un mal estudiante porque significaba de que ellos tenían un argumento más para expulsarnos o decir "esos no vinieron a estudiar, esos vinieron a hacer política"; y lógicamente nosotros teníamos la obligación moral, ética de demostrar de que eso no era así.

Hubo un incidente en el año 96, la Comisión Reorganizadora para darse brillos de que las cosas estaban cambiando organizó algo pues inaudito para ese momento...Organizó un Miss San Marcos. Yo diría que fue una indignación más de las mujeres porque las mujeres en San Marcos tenían una percepción de que ellas no estaban por sus atributos físicos sino por sus capacidades. Entonces, yo recuerdo mucho haber estado en el centro de estudiantes y de que ellas vinieron indignadísimas, indignadas a más no poder y como yo era uno de los tres dirigentes de toda la universidad en ese momento; éramos de tres facultades, los que teníamos mayor representatividad: Educación, Derecho, Sociales. Derecho la encabezaba Marco Huaco; Educación, su secretario general era René Meza; en Sociales, quien habla dirigía la Coordinadora de gremios de Sociales. Y se armó una Coordinadora de gremios de toda la universidad para hacer frente a la intervención. Entonces las compañeras de Sociales vinieron dispuestas a ir y desbaratar eso a golpes no...entonces nosotros no queríamos entrar a una confrontación de golpes, salvo que fuera necesario, queríamos mostrar que éramos diferentes, que no éramos violentos; entonces que vayamos a un concurso de belleza y confrontarnos significaba que la imagen que íbamos a dar era que nosotros que nosotros que decíamos que no éramos violentos podíamos ser grabados, filmados de esa manera. Entonces a mí se me ocurre hacer una protesta cultural y disfrazarnos de monstruos e ir y presentarnos en el concurso de belleza. Lo que yo no me había percatado es que las compañeras habían comprado huevos y los agarraron a huevazos a todos.

¿Qué cantidad había de protestantes?

Primero fue en la plaza cívica o muro de la vergüenza. Había un estrado, las chicas se estaban presentando y nosotros seríamos, para ser honestos, un promedio de 200 a 250 y la mayoría eran mujeres en este caso.

¿Qué porcentaje representaban las mujeres?

Las mujeres eran tres cuartos o el 75%. Y dicho sea de paso, porque eso fue bien curioso...los agarraron a huevazos y se acabó todo. Entonces, los que estaban a favor...porque había gente que sí estaba a favor porque creían que había que cambiar la imagen de la universidad versus los que nos estábamos porque considerábamos que la Comisión lo utilizaba para tratar de tapar lo que estaba haciendo, dar una imagen que no era cierta, porque había pasado un año ya y la Comisión Reorganizadora lo único que había hecho fue expulsar gente, cierto, no había generado mejores condiciones para la universidad, había empezado el proceso de privatización porque las matrículas habían subido de cuarenta soles, que nunca lo pagábamos porque en las facultades los alumnos protestaban y terminaba en el caso de Sociales en 20, en Derecho en 10 y en Educación por ejemplo, de los cuarenta soles el consejo facultad aprobaba que con los recursos propios de la facultad ellos iban a pagar la matrícula y que el estudiante de Educación simbólicamente iba a pagar un sol. Entonces, pasar de esa condición a pagar de frente 180 soles, para nosotros expresaba más que el dinero expresaba el proceso de privatización.

En un artículo de Grover Ponce Mariños, se señala que la Comisión Reorganizadora habría expulsado a los estudiantes antiguos para que no se garantice una sucesión generacional del movimiento estudiantil. ¿Los estudiantes antiguos hacían política?

Algunos sí, la mayoría no eran activistas políticos. Para ser claro, de todos los dirigentes de la universidad en ese entonces, ninguno era de estos alumnos eternos. Porque tu podías hablar de un estudiante eterno cuando uno tenía más de 10 años en la universidad, ninguno de nosotros tenía más de 10 años. Ellos no asistían, se matriculaban esporádicamente o habían abandonado la carrera.

...

Jugó un papel muy malo la gente de Patria. La FUSM se desactivó justamente porque ellos la tenían a cargo. Su último presidente era Lucho Osces que había sido elegido 10 años antes más o menos. La FUSM estaba prácticamente abandonada; lo utilizaban más para hacer una academia preuniversitaria, la academia de la FUSM. La FEP tenía casi el mismo problema, no representaba a nadie.

¿Cómo se reincorporó?

Los expulsados no pudieron regresar hasta que la Comisión se fue. Cuando cae el gobierno de Fujimori se instaura la Comisión de tránsito de gobierno y ella abre un plazo para presentar los casos y reincorporarse; pero a los reincorporados nos quisieron firmar un acta en la que se especificaba claramente que no volviésemos a hacer política en la universidad, cosa que nunca firme. Porque yo dije que en primer lugar el hecho de que me reincorporen significa que la universidad está reconociendo que mi expulsión no se debió a casos académicos, que el criterio de mi expulsión fue un criterio político.

Entrevista al profesor René Meza. Marzo de 2020

Dirigente estudiantil en el periodo de gobierno de la CORE-SM

¿Cuál era el contexto político nacional de la intervención iniciada en 1995?

Ciertamente la intervención a la universidad obedeció a un plan político. Un plan político en el marco de una serie de objetivos del régimen de Fujimori en relación a la política educativa, en particular el tema universitario. Estamos en el que contexto en el que Fujimori lanza una política agresiva de privatización y la universidad no podía estar exenta de eso porque de alguna forma se capta ello; porque, como se dice, San Marcos es el país en pequeño. Todas las contradicciones, todos los aspectos que se dan en el conjunto de la sociedad peruana, de alguna forma se expresan dentro de la universidad. En este caso concreto, en relación a las políticas de privatización, que en ese momento inclusive no se entendían muy bien; osea, cuando se da la intervención el 25 de mayo de 1995, en horas de la madrugada dicho sea de paso por el CCD pues en ese tiempo así se llamaba el congreso, la mayoría del movimiento estudiantil y docente lo entendía más como una cuestión política, de pugna de los grupos o de una intromisión del régimen de Fujimori, pero no veía con claridad el sustrato de eso, que era generar una transformación de la base económica de la universidad San Marcos, de la universidad La Cantuta y ponerse obviamente como una especie de modelo a cómo debía gestionarse la universidad. Y cuando se discutía en el movimiento estudiantil en relación a cómo caracterizar a esa Comisión -en ese tiempo nos tocó a nosotros tener un nivel alto de intervención- y nosotros teníamos la caracterización que era una Comisión Reorganizadora privatista. Habían sectores estudiantiles que no asumían eso y nosotros partíamos por el hecho iba a empezar a dar una serie de medidas que tenía que ver con el hecho de incrementar de manera vertiginosa el concepto este de los Recursos Directamente Recaudados, los RDR. Allí se expresó esa política de privatización. Y hubieron varias medidas de Paredes, entre ellas por ejemplo se estableció el pago diferenciado que aun entiendo se mantiene como parte de esa herencia porque hay muchas cosas del tiempo de la intervención que aún se mantienen no? Es una cosa polémica no? **Esa es la tragedia, osea se regresó a la democracia en el país y luego en San Marcos también pero se mantiene en esencia la lógica política y económica de ese sistema que se impuso de manera dictatorial en la universidad.**

Pero voy al tema de la cuestión de los RDR porque por ejemplo en el caso de los exámenes de admisión se implantó esta diferenciación entre el pago de los que provenían de un colegio público y los que provenían de un colegio privado; pero no solamente eso, Paredes, para el caso de la matrícula, también establece un pago diferenciado... Esto lo implementó, además en concordancia con uno de los artículos de la Constitución vigente que señala que la gratuidad es restrictiva, ya no es irrestricta, porque la gratuidad solo es para quienes no tienen ingresos y garanticen un buen nivel académico. Eso significa que el que es buen estudiante pero no tiene necesidad económica tiene que pagar y/o con mayor razón aquel que no tiene ingresos y se jala está condenado a pagar. Entonces eso generó pues un malestar generalizado en el movimiento estudiantil y una mayor comprensión de esta consigna que nosotros la desarrollamos: no a la comisión reorganizadora privatista. Inicialmente no se entendía, pero en el proceso se llegó a entender, producto de una serie de medidas que Paredes Manrique en el plano económico desarrolló.

De tal forma que, aproximadamente, en el primer año de gestión de Wilson Reátegui, los Recursos Directamente Recaudados en 1991 no representaban más del 5%; eso significa que el 95% restante era lo que el Estado daba bajo las formas que estaban establecidas en la ley anterior, la 23733. Entonces, ¿qué pasa, cuando termina la intervención, producto de la situación política del país, de un Fujimori que renunciaba desde el Japón y todo eso, si tú vas a ver cómo estaba el presupuesto, tú tienes que casi el 50% eran RDR. Osea, en los cinco años y algunos meses más de intervención, la estructura económica de la universidad cambió radicalmente, al punto que casi la mitad de su presupuesto era autosostenido bajo la forma de RDR; situación que era una especie de laboratorio, porque si tú vas y haces un acercamiento a las estadísticas comparativas de cómo era la torta presupuestaria de las universidades públicas en 1990 en relación a la torta presupuestaria con la que terminan bajo el gobierno de Fujimori, tú vas a ver que en todas las universidades hubo una política agresiva por el autosostenimiento, por la generación de RDR, al punto que la UNI llegó en algún momento a autogenerar el 60% de su presupuesto porque tenía empresas, alquiló una parte de su territorio a Metro, etc. Entonces tenemos que la intervención generó un cambio sustancial en la lógica de la estructura económica de la Universidad; que iba acompañada de una serie de medidas. Por eso le decía que la intervención fue parte de un plan, un plan para socavar los cimientos de la conquista de la universidad pública como tal, como estaba concebida, porque la universidad pública es una conquista, ojo. Y voy hacer un poco de historia acá, porque hace poco hemos celebrado los cien años de la reforma universitaria, el centenario de la reforma; que para el caso continental es el Grito de Córdoba de 1918. Y la extensión en el Perú fue el 19. Justamente San Marcos fue una de las universidades protagonistas, tres facultades en particular, las facultades de Derecho, Medicina y Letras. Hicieron posible una batalla por democratizar la universidad porque antes de la reforma solo estudiaba la elite limeña, del país; eso terminó siendo quebrado. Y como producto de eso, las futuras generaciones del movimiento estudiantil fueron democratizando más la universidad y allí aparecen la vivienda universitaria, como parte de toda una consigna a nivel nacional, los comedores universitarios, los fondos de investigación, en fin, varias cosas donde obviamente el Estado asume un protagonismo financiero para sostener los quehaceres de la vida universitaria, de su investigación, la academia, el sostenimiento de los alumnos, los servicios sociales. Y luego se comienza a hacer una situación de regresión, de dismantelar eso. Y entonces la intervención cumplió un papel en ese sentido, un papel de socavar esa concepción...que yo pienso que no la terminaron de socavar completamente por eso han tenido que recurrir hoy a la aprobación de una nueva ley universitaria, pero en fin eso es materia de otra cosa.

Otro dato es respecto a las vacantes de la Pre. Las vacantes estaban establecidas en 5% y Paredes lo transforma y comienza a incrementar las vacantes, como una forma no solo de generar recursos propios sino como una forma de cambiar también el componente social de los sanmarquinos, porque obviamente no es igual el sanmarquino que se prepara para el examen general de admisión que aquel sanmarquino que es de una clase media o media baja tiene otras condiciones económicas de tal forma que nosotros encontramos la contradicción que cuando luchábamos por el no pago de la matrícula, habían sectores estudiantiles que nos decían "ustedes están equivocados, hay que pagar algo". Y esos chicos justamente eran los que provenían de la Pre y, obviamente, si toda su vida estuvieron pagando algo de dinero, porque la mayoría de la Pre provenía de colegios privados desde la primaria hasta la secundaria no era extraño para ellos que sigan pagando en la Pre y luego en la universidad. Obviamente mentalmente, ellos y sus familias, estaban conceptualizados en que se debe pagar algo ¿no es cierto? Es más, hasta que de repente se pague una mensualidad, porque para ellos no es extraño eso.

Como una anécdota, en un mitin en Letras, pareciera algo demagógico, pero decíamos: "compañeros, esto ha llegado tanto al extremo que en Medicina se tiene que pagar para ingresar a los baños" y eso era real en la facultad de Medicina. Y acá en la Ciudad eso era algo inconcebible.

Dentro del concepto de privatización, de que la universidad no gaste en servicios sociales sino que optimice sus servicios o que se genere recursos propios. Por eso también modificó el nombre de Centro de Salud a Clínica universitaria porque a partir de allí se le consideró "centro de producción", osea la salud como centro de producción y entonces comenzaron a ver pagos por una cosa, por otra. Antes era completamente gratuito. Es más, teníamos nuestro Centro de idiomas, este centro era casi gratuito, había el concepto de que los que iban a estudiar maestrías, doctorados o los de pregrado tenían que acceder al dominio del idioma. Ojo, Wilson Reátegui no fue ajeno a eso, frente al fujishock dado por Fujimori, el gobierno de Reátegui también hace su fujishock en San Marcos y el rectorado lanza un comunicado diciendo "así como el país se ha ajustado, San Marcos también tiene que ajustarse". Así, por ejemplo, la matrícula que estaba un sol pasó a

costar 20 soles. Y se crearon muchos nuevos cobros. Entonces ya había una política de generación de recursos propios, eso como respuesta al recorte que el Estado estaba haciendo, la universidad estaba arrinconada.

Tras la aprobación de la Constitución de Fujimori vía referéndum, este referéndum cuestionable porque muchos dicen que fue una trampa, se tenían que hacer nuevas leyes. Y Fujimori orienta a que se hagan nuevas leyes y la bancada fujimorista de ese tiempo -Anastasio Vega, Huamán Chumo, Rafael Rey- comenzó a organizar varios proyectos de ley. Proyectos de ley que expresaban toda una concepción privatista, donde ya se tenía estructurada una mentalidad en relación a cómo generar recursos propios en la Universidad. Para empezar tenían la aplicación de lo que la Constitución manda, ellos decían "bueno, nosotros no estamos haciendo nada ilegal, la Constitución dice que la gratuidad no ser para todos". **Toda esa concepción es recogida por Paredes Manrique y la implementa ipso facto porque la intervención fue la expresión de la dictadura del país en San Marcos.** Porque cuando entra la Comisión Reorganizadora, se pone como un estado de excepción, ella es la Asamblea Universitaria, es el Consejo Universitario, es todo el poder. Pero no solamente eso, el presidente asumía la condición de rector, pero en los hechos la de un dictador porque tenía poderes absolutos. Tanto así que inclusive la resolución que da nacimiento a la comisión reorganizadora dice que todas las acciones de la comisión que por alguna razón contravengan la ley universitaria 23733 y el Estatuto de San Marcos de 1984 podían ser aceptadas. Osea, ya estaban por encima de la ley universitaria y del Estatuto. Se generó una situación de excepción, una dictadura porque prácticamente tú no podías recurrir ni a la Ley ni al Estatuto si la Comisión decía A y tú decías B. La Comisión decía "pero bueno, el nacimiento de mi poder deriva de mi poder político, del poder ejecutivo y según ese poder me dice que yo estoy encima de la Ley y del Estatuto, así que no apeles ni al Estatuto ni a la Ley, yo soy una situación de excepción".

¿Se disolvieron también los Consejos de Facultad y los Comités Asesores con el inicio de la CORE-SM?

Todo eso se disuelve. En los hechos se disolvió todo.

Yo tengo un testimonio de alguien muy cercano a la Comisión, la noche en la que se define la intervención los miembros de la Comisión -Paredes, Huerta, Descailleaux, Leoni Silva y me olvido de otro nombre- se estaban reuniendo en Palacio de gobierno con Fujimori. Hay una vinculación. Luego Paredes se instala en el rectorado, pone él al decano de San Fernando. Y allí comienza la situación de que los Consejos de Facultad en los hechos ya no tenían ningún sentido porque por más que se reúnen no tuvieron el valor de enfrentarse a la autoridad política que de facto ejercía Paredes Manrique con el apoyo del Ejército, de la Policía, de los Servicios de inteligencia y del poder político que emanaba del congreso y del poder ejecutivo; es decir, tenías cinco cosas que articuladas le daban el respaldo total para que Paredes Manrique haga lo que quiera en San Marcos, lo que quiera. Entonces allí tú tienes un elemento para sostener porque la intervención fue un gobierno dictatorial, allanado a un plan político pero también económico.

Entonces cuando Paredes se quiere instalar acá en Ciudad Universitaria, acá el movimiento universitario era abiertamente opuesto a Paredes y todos los grupos estudiantiles o la mayoría se opusieron. Entonces Paredes Manrique, por ejemplo, quería instalar al ya finado Víctor Medina como decano de Sociales frente al otro decano, Iziga, y el movimiento estudiantil no les dejó. En Derecho, igual; tanto así que el incidente tiene que ver con el primer expulsado del movimiento estudiantil, como dirigente, por motivos políticos, fue Gilbert Violeta, que ha sido congresista con PPK. Él tiene una famosa foto que El Comercio le sacó en primera plana en donde él aparece metiéndoles una patada a la puerta del decanato de Derecho porque el decano que había puesto Paredes se metió y el movimiento estudiantil iba en masa a sacarlo, a empujones. **Entonces Paredes no podía poner decanos. Y como no podía poner decanos, y esta es una expresión concreta de una acción dictatorial, no le quedó de otra que usar a las fuerzas armadas. Las FFAA, con fals, como si estuvieran yendo a la guerra, se desplegaron por todo el campus universitario para instalar a cada uno de los decanos. Este es un hecho revelador, real y verificable. Sucedió en el caso de la mayoría de facultades, en algunas se comenzaron a allanar por diversas razones.**

¿Cómo fue la intervención militar del 91?

Esa fue la intervención militar, la de 1991, entraron y se instalaron como si estuvieran en guerra; había en la puerta 3 un muro de sacos con una metralleta allí. En La República deben estar las fotos. Recuerdo que en una portada de este diario está la tanqueta dentro de San Marcos, al costado la especie de trinchera. Y así estaban varios puntos de la universidad.

Entonces eso fue la intervención militar.

Entonces, cuál es la cuestión aquí, ¿qué decían los congresistas para aprobar la Ley 26457? que "es insuficiente la presencia militar" en la lucha contrasubversiva. Es decir estaban diciendo que los militares, a pesar de los años que estaban allí, no habían podido derrotar a los subversivos. Es algo ilógico. Aproximadamente había entre 200 a 250 militares en la Base Militar de Ciudad Universitaria.

¿Cuál fue la excusa principal para intervenir (1995)?

Que existen focos subversivos y que "necesitamos un control de esa universidad para terminar con la subversión, porque hay autoridades que se prestan a apoyar las ideas subversivas".

Nosotros en ese tiempo éramos opuestos a Reátegui pero tenemos que reconocerle que, con él a la cabeza y en un contexto nada fácil, aprobó una marcha institucional, la más grande que he visto hasta ahora. Que en mi caso, de mi promoción, pues habíamos aprobado marchar por el NO en el referéndum de 1993, asistimos a la marcha la gran mayoría. Esto lo sé porque hicimos una lista por seguridad y de doscientos y tantos salimos ciento noventa y tantos. Incluso el consejo universitario aprobó hacer una marcha institucional por el NO a la constitución de Fujimori. Es decir, toda la universidad se movilizó. Sobre todo en rechazo a este artículo que era abiertamente privatista. La cola de la marcha estaba por el rectorado de ahora y la cabeza estaba por Donofrio. Y cuando llega la policía, eran cientos, reprimió. Eran tantos sanmarquinos que la marcha llegó un grupo hasta El Callao, otra hasta San Martín; es decir, por todo Lima miles de sanmarquinos. Y Wilson Reátegui se comió esa iniciativa; pero no fue solo eso, volvimos a salir. Incluso la universidad puso a disposición sus ómnibus, los llamados burros. Y no respetaban ni al rector de San Marcos, recuerdo que en la casona nos cayó una lluvia de bombas lacrimógenas. **Fueron varias marchas, pero dos institucionales. Y fue una de las pocas universidades que se pronunció así. Entonces Reátegui había generado una situación de confrontación contra el régimen. Allí San Marcos se ponía al frente de un régimen autoritario que se preparaba para su reelección.**

Estamos hablando del año 1993, entonces ya esa situación ponía al rector de San Marcos como un rector rebelde al régimen. Era uno de los pocos rectores que le decía a Fujimori "oye sabes qué, no estoy de acuerdo con tu posición". Entonces hasta eso, ante autoridades así, le representaba a Fujimori un peligro, algo subversivo. **Entonces, Fujimori pensó "mejor intervengo y pongo a las autoridades que yo quiero, puedo digitar y sacar a la hora que quiero"** ¿Por qué? Porque la intervención fue tal que el presidente era el que ponía a los miembros de la Comisión Reorganizadora, ni siquiera el Congreso "que vamos a formar una terna", etc., nada.

¿Fue sistemática la agitación estudiantil por el No?

Claro, subíamos a los buses, etc. Pero, en ese tiempo estábamos estigmatizados por el tema de la subversión. A veces no teníamos toda la acogida que queríamos y en algunos buses nos decían "ustedes son terroristas", "está bien lo que hace con San Marcos". Entonces no era fácil, pero ahí dábamos la batalla y subíamos cientos de sanmarquinos a todos los micros que podíamos, con nuestro volante, etc.

¿Cómo se organizó eso?

A nivel de la Coordinadora de gremios. Esta coordinadora se reunía en el auditorio de la facultad de Economía. Ellos dirigieron, fueron los artífices.

Antes todo se daba en el marco de la autonomía. Para que entre un policía a la universidad tenía que haber acuerdo del Consejo Universitario. Hoy en día entra como Pedro en su casa. Ya se ha perdido ese concepto. **Es más, están ahí los testimonios, cuando había conflictos el rector nunca se atrevía a pedir a la guardia que lo socorra, no como los rectores últimos. Eso era la vergüenza más grande que podía tener un rector porque ¿cuál era el concepto? "Yo, defendiendo la autonomía, soy heredero de la defensa de la autonomía como rector de San Marcos y la protejo. Y ¿cómo la protejo?, pues mis problemas con los estudiantes son mis problemas y veo como las arreglo pero nadie se mete".** Tanto así que cuando los militares, en el tiempo de Alan García, quisieron entrar, el mismo rector, si no me equivoco Pons Muzzo, estamos hablando de fines de los 80, se pone en la puerta 3 con los vicerrectores y dijo "sobre mi

cadáver pasan ustedes". Y Pons Muzzo era pues una institución, una academia, un hombre que ni siquiera venía de la izquierda, creo militaba en el PPC. Era algo sagrado la autonomía ¿me entiendes? "Nadie se lleva a mis estudiantes" y se pone en la puerta 3. Una foto memorable de ese hecho está en La República. Entonces eso da cuenta de que había un concepto de la autonomía. Y bajo ese concepto los militares no podían entrar. Entonces, los grupos alzados en armas, actuaban pues no, hasta el 91. Por eso es que cuando las fuerzas armadas, entran en una situación en la que realmente había una presencia de los grupos alzados en armas, pero ya después eso cambia...

¿Con la captura de los dirigentes estas dos organizaciones, merma su presencia en San Marcos?

No solamente con la captura, sino con la cuestión represiva. Estamos hablando del 91, osea ya entraban a la residencia, se llevaban a la gente; te encontraban volante, igual te llevaban. Es decir, una política pues, como ellos dicen, se cometieron excesos, osea ellos tenían que barrer con todo lo que sonaba a marxismo, a izquierda, todo era igual.

¿Es verdad que revisaban tus libros en la puerta?

Revisaban libros, mochilas. Pero estamos hablando de un periodo en el que había autoridades elegidas democráticamente pero los militares se afincaron ipso facto ¿no es cierto? Es decir, el gobierno entró. Wilson Reátegui no hizo mayor oposición a eso y ese ya era un anticipo de lo que venía. Nosotros analizábamos en ese tiempo, yo ingreso el 92 y era delegado y hablábamos con otros dirigentes y decíamos "algo se viene contra la universidad". Pero no sabíamos qué forma iba a tomar, porque si tú tienes a los militares adentro que hacen lo que quieren, solo te faltaba tomar el control político ¿no es cierto?

¿Cuál era el nivel de movilización de los gremios?

Habían tres facultades que movilizaban masivamente a los estudiantes: Derecho, Sociales y Educación. Letras también se movilizaba pero en menor cantidad. Y en las demás facultades también había componentes que se movilizaban. Medicina tenía sus propias características, el hecho de que tuviesen a un médico como presidente de la Comisión Reorganizadora y a cientos de docentes que respaldaban eso, médicos, no les hizo tomar una posición muy firme. Pero sí hubo estudiantes de Medicina comprometidos con la lucha, democráticos, en defensa de la autonomía.

Comparando el 92 con el 95 ¿el movimiento estudiantil crece o decrece?

La intervención del 95 generó un levantamiento generalizado de los estudiantes. Para mí el año 95 fue como un pico porque después de empezaron a expulsar y todo, el movimiento comenzó a decrecer. Es decir, en los años previos sí había subido. Se formó la Coordinadora de gremios, hubo marchas por el tema de La Cantuta, la marcha por el No a la constitución. Hubo varias acciones muy importantes, todavía se mantenía un movimiento politizado, había grupos políticos.

¿En qué año se formó la Coordinadora de gremios?

La Coordinadora de gremios de San Marcos se creó, si no me equivoco, en el año 1993. Fue justo en razón a la marcha por el No. Ahí nace la famosa Coordinadora de gremios que existió por décadas, hasta que se refunda la FUSM.

A nosotros nos tocó dirigir toda una batalla política en ese periodo, por eso terminamos expulsados de por vida del sistema universitario. A nosotros no nos expulsaron por un año o dos años. Del sistema universitario nos expulsaron de por vida porque enfrentamos nosotros una situación bien dura con la intervención y estudiamos, obviamente, todo el carácter de ese proceso.

A mí me correspondió ser uno de los dirigentes que nos enfrentamos a muerte a la Comisión Reorganizadora, por eso tuvimos que estudiarla.

En la Ley 26457 se manda proponer una nueva Ley Universitaria. ¿La Comisión Reorganizadora hizo algo?

Paredes hizo una propuesta de Ley. Y sabes qué es lo curioso, las propuesta de Ley de Anastasio Vega, de Huamán Chumo, de Rafael Rey y, de años posteriores la que presenta Paredes Manrique a nombre de la universidad, tiene casi

el mismo espíritu que la actual Ley Universitaria 30220. Sin que esto signifique que sean iguales o sea copia y pega. Existe un proyecto de ley que presentó Paredes Manrique. Y, si tu revisas ese proyecto, hay una serie de cosas que son similares, yo recuerdo porque llegué a estudiarlo; la reducción de los órganos de gobierno, la supresión de las facultades y crear cuatro megafacultades, que es una intención del actual y otros rectores. **Porque debes saber que tenemos una tragedia; cuando se va la intervención, se reestablece entre comillas el imperio de la autonomía y del Estatuto de 1984, las reformas de Paredes quedan en pie.**

Al reincorporarme a la universidad, me toca miembro del Consejo Universitario, que después de años se restablece y comenzamos a tener una pugna con el rector Manuel Burga y yo le decía: "Dr., ¿usted con quién está gobernando, con el imperio del Estatuto de 1984, que es nuestra constitución y que es la máxima autoridad para San Marcos, o gobierna defendiendo todas las reformas de la intervención". Y él respondió algo así como "bueno, está bien el Estatuto, pero tenemos que ya la intervención ha generado una serie de resoluciones rectorales, una serie de reformas en la gestión que no es fácil revisar, que no es fácil volver al Estatuto del 84". Y yo le decía, "pero ¿cómo no es fácil? si acá se trata simplemente de regresar a como debe ser". Y bueno, ahí nosotros le decíamos a Burga que de alguna manera él era el continuador de la herencia del Paredismo, nosotros le decíamos el "Paredismo fujimontesinista" y él se molestaba mucho, pero nosotros le reclamábamos siempre eso. Por ejemplo, una herencia de eso son las famosas resoluciones con cargo a dar cuenta; el Estatuto del 84 no permitía eso, las resoluciones eran unas cuantas, tanto así que se publicaban en una gaceta. Antes en San Marcos, por ejemplo Wilson Reátegui, no podían emitir cualquier RR, estas, según el Estatuto del 84, son expresión de acuerdos del Consejo Universitario. O sea, si no hay un acuerdo de consejo no hay RR. El rector con el secretario general solo daban fe de ese hecho, o sea el rector por cuenta propia no puede sacar una RR. ¿Dónde empezó el imperio de las RR a diestra y siniestra para hacer cualquier cosa? Con Paredes Manrique. Todo era RR. O sea, como el rey que tiene su edicto real. Esa concepción de gobierno continuo, entre otras cosas perversas. El poder centralizado fue una concepción del paredismo, como toda dictadura. "Yo soy el amo y señor de la universidad, todo lo controlo, todo lo someto, todas las direcciones, todos los jefes". Antes, el jefe de la Pre era elegido por Consejo Universitario; los directivos de la Oficina Central de Admisión, que antes era Comité Ejecutivo de Admisión, también los elegían el CU y así los altos cargos. Porque había un concepto, la lealtad de los funcionarios no era al rector, era al órgano de gobierno en representación de la universidad. Pero eso se subvirtió para hacer que los funcionarios sean subordinados a la voluntad política de un solo hombre. Entonces resulta que, teniendo el Estatuto del 84, los rectores continuaron no gobernaron como estaba establecido; esa es la gran tragedia de San Marcos. Porque si se hubiese gobernado tal como mandaba el Estatuto del 84, la convivencia democrática, el desarrollo institucional, sería otro, la cultura democrática. Para mí los rectores en el país se han convertido en pequeños dictadores con esta Ley universitaria.

¿Cuál era la situación interna previa a la intervención?

Wilson Reátegui aspiró al rectorado, donde se impuso. Para ser objetivo, hasta donde yo tengo la información, fue una reelección cuestionada, porque el grupo de Paredes, el MUSA, Movimiento Universitario Sanmarquino, había ganado. Reátegui desconoció eso y en la crisis había hasta dos Comités Electorales. El MUSA agrupaba a una buena cantidad de decanos que aspiraban a tener el poder y su candidato a rector era Paredes. Allí Paredes apeló a figuras nada democráticas.

El poder de Manrique entonces ya era tanto, era previsible, porque se jactaba de sus vinculaciones con el gobierno y además estaba protegido por los militares, que Wilson Reátegui no pudo imponer su decano encargado ahí, que en ese momento era el Dr. Garmendia Lorena. Los militares eran el sostén, su protección y obviamente tenía un sector de estudiantes y docentes que lo apoyaban. Pero el aparato represivo, coercitivo era la misma base militar que existía en San Fernando, tanto así que el mismo rector no podía entrar. Entonces ya ahí se anticipaba la instrumentalización que había de parte de Paredes en relación a su juego de poder. Claro, también hay que decir que Reátegui desarrolló una tendencia dentro de los docentes y estudiantes contraria a él. Esto porque algunos sectores sabían que Reátegui se reelegía, era apostar por el control de la universidad por parte de Patria Roja. Entonces hubo una situación en la que algunos sectores, no necesariamente fujimoristas, sino por deshacerse de Reátegui, apelaron a asociarse a Paredes en esta empresa de intervención, luego se arrepentirán porque varios de ellos son separados de la universidad. Ellos se comieron el "chocolate" de que la intervención iba a ser transitoria. Es más, es posible que la Comisión a sus aliados le hayan dicho que "es transitoria, no se preocupen, después de un año volvemos a convocar elecciones, pero ya

neutralizamos a Reátegui y nos sacamos de encima a Patria Roja". Y, aparentemente, siguiendo eso de "el fin justifica los medios", optaron por eso pero mira la tragedia en la que terminó la universidad. Estamos en una situación de la cual hasta ahora no salimos, ojo.

¿Se podría decir que Paredes era un agente de Fujimori en ese entonces?

Sí, era un hombre de Fujimori en San Marcos.

Como nos habían expulsado, yo tuve una conversación con él, personal, a la cual él nos llamaba uno a uno, y me dijo "mira, te hemos expulsado pero mañana te podemos reponer, yo decido eso. Pero eso sí, eso significa, que tú ya no hagas nada contra nosotros". Y entre las cosas que él decía, decía "yo también he sido estudiante, es más, yo he sido militante del PCP" de Jorge del Prado, y había tenido problemas también. En Ica él era miembro de la Izquierda Unida y, si no me equivoco, hasta responsable político. Pero la situación está en que en la intervención hubo mucha gente que vino de la izquierda y se comprometió a esa situación de excepción de la universidad.

¿Los Comités Asesores existían antes de la intervención (1995)?

Mira, todo lo que está en el Estatuto del 84 existía y todo lo que está allí desaparece, así de simple. Lo que luego Paredes creó, el COGESA y el CONAFA y estructuras así, pero él hacía y deshacía finalmente. Porque debes entender que todo en la universidad tenía que tener una RR, sin eso no valía. Esa concepción es la que heredamos hasta ahora, esa concepción en donde el rector es el "amo y señor" de la universidad y eso es contrarreformista; la reforma no se hizo para imponer a un rector con formas de tiranías. El rector le hace caso a los órganos colegiados, el poder está en esos órganos no en una persona. Así se establece en el Estatuto del 84.

¿Había espionaje contra la comunidad universitaria?

Está claro que existía espionaje sistemático contra los dirigentes principales estudiantiles, docentes y trabajadores. Grababan nuestros movimientos, yo he sido N veces grabado. Es más, hay un informe de espionaje en donde está mi nombre.

Coméntenos un hecho importante, que sirva para comprender este periodo

Fue el año 1996. Estábamos en la lucha por el no pago. Y en Educación había una tradición; bueno, siempre nos funcionó ese método. Las bases se reunían y acordaban no pagar matrícula y no matricularse. Y disciplinadamente eso se cumplía. Entonces la facultad sacaba un cronograma y no había matrícula, sacaba otro cronograma y lo mismo. Entonces no había necesidad de hacer mayor cosa. Pero ya en la medida que avanzaba y la autoridad se ponía dura nosotros presionábamos. Resulta que siempre lográbamos el no pago. Éramos una de las pocas facultades que lograba eso. Pero con la intervención (95) eso se volvió más duro y como había más presión, obviamente también se tuvo que hacer también presión de parte del movimiento estudiantil de la Facultad de Educación y de otras facultades que también luchaban.

Y, no recuerdo bien la fecha, pero era la temporada de matrícula, marzo, abril y estábamos en una toma de las instalaciones administrativas de la Facultad. Recuerdo que le tocaba a un piquete compuesto mayoritariamente de mujeres cuidar la puerta y llega un contingente de aprox 30 soldados a donde estaban las chicas. Entonces nosotros nos agarramos de los codos para resistirnos a desalojar y los soldados empezaron a golpearnos con la culata, en el estómago, las piernas. Y en vez de doblegar a la gente, en especial a las mujeres, ellas se arrebataron y les metieron unos arañoses, se armó una trifulca, luego vienen más chicos de la facultad de Letras, porque antes Educación funcionaba en el segundo piso de Letras, y se comienza un forcejeo...en eso llega otro pelotón, osea, mira militares interviniendo en la lucha de la matrícula, ¿está clarito no? tenían que pasar la privatización a sangre y fuego, a bayoneta y a fal.

Pero para esto, de Derecho venía una marcha bastante grande de estudiantes y les avisan que los militares están golpeando estudiantes en Educación. Y los chicos suben por las escaleras y no por la rampa y se aparecen por cientos y se forma un contingente humano tal que sobrepasan a los soldados. Teníamos un amigo de la Facultad de Economía que le llamábamos hulk porque era de un metro ochenta y era una cosa inmensa y en medio de la trifulca este hulk le tira una patada y tumba al capitán y cae a la rampa de bruces y como que pierde el conocimiento unos segundos. Eso provoco

que los soldados, que ya estaban sobrepasados en el forcejeo, disparen, y estas balas impactan por decenas y genera una polvareda enorme; tú vas a encontrar hasta ahora varias señales como quien ha hecho huecos en los techos. Fue horrible, la gente se tiró al suelo. Eso fue cosa de segundos, hasta eso el capitán se para y da un grito de horror contra los soldados, así como diciendo "¡¡qué han hecho carajo!!" porque él asumió que con los disparos podían haber muertos.

Entonces al ver eso, los dirigentes y todos los demás nos levantamos y comenzamos a rodearlos y agitar ¡aquí, allá, el miedo se acabó! y los sacamos a empellones; y como el oficial ya no quería más problemas, se los llevó a todos. Tomamos la facultad de Letras; llegaron más soldados, casi todos los que estaban en la base instalada en el Comedor. Y ahí en el balance nosotros dijimos al movimiento estudiantil, "esta es la prueba de que la presencia militar, si bien es cierto al inicio tuvo como objetivo acabar con la subversión, su mayor objetivo era ser la represión para imponer la política de privatización de la Comisión Reorganizadora en nombre de Fujimori, pero finalmente en nombre de los que imponían estos planes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, porque son ellos los que globalmente estructuran estos planes y si es necesario hacen dictaduras como en Chile". Y fue para nosotros una escuela grande eso, **porque los estudiantes por un hecho así entendieron que los militares ya no estaban por los subversivos sino por nosotros que luchábamos contra la privatización.** Y eso permitió que adelante los estudiantes tomo el valor de sobrepasarlos y botarlos para salir a protestar afuera de la universidad, antes no nos dejaban salir de la puerta. Ya sabíamos que ellos no iban a usar sus armas directamente. Para gran alarde ellos, en cada marcha y presión, siempre disparaban al aire con su fal, asumiendo que luego nos iban a disparar. Los estudiantes le perdieron el miedo a los militares.

Pero más allá del hecho, es ver el lugar de los militares para imponer las políticas de privatización. Porque ¿qué hacen los militares desalojando estudiantes de una oficina administrativa?, en una lucha concreta que es la matrícula y no tiene nada que ver con la subversión.

¿Este tipo de acciones, en donde los militares ya se involucran con las políticas del gobierno universitario, se había dado en el gobierno de Reátegui?

No, no. Se da con la Comisión Reorganizadora. Eran los militares imponiendo los decanos que no podía imponer; eran los militares cuidando las instalaciones de las facultades para protegerlas de las tomas; eran los militares desalojando a los estudiantes contra el alza de las matrículas; eran los militares en diversas facetas; eran los militares cerrando el Centro Federado de Derecho, el Centro Federado de Educación. Osea, los militares eran la fuerza de choque, ¡insólito en una universidad! ¿Mejor muestra de una dictadura? y de la intencionalidad, porque no solo era un tema de dictadura sino de qué cosa buscaban finalmente, que cosa han logrado y que cosa queda de todo eso hoy.

Coméntenos algún otro hecho que recuerde

Fue en 1997, fueron dos las causas para iniciar la huelga de hambre, uno contra la expulsión de estudiantes por motivos políticos y dos por el cese de la Comisión Reorganizadora porque ya había cumplido su plazo. Fue una medida muy fuerte, siete fueron los que hicieron la huelga de hambre y se movilizaron por cientos, tanto así que la Paredes amenazó con recesar la Facultad de Educación. Quince días fue la medida de huelga de hambre, fuimos siete.

¿Por qué lo expulsaron a usted?

Expresamente por ser dirigente. Pero me imputaron varias excusas, que "le había querido quitar el arma a un soldado", que "había secuestrado a un decano". Eran imputaciones exageradas y falsas. Pero bueno, uno como dirigente asume su responsabilidad. Y no solamente a mí, éramos como una veintena de dirigentes expulsados, a algunos por años a otros de por vida.

¿Por qué expulsan a los estudiantes que permanecían varios años en la universidad?

La Comisión Reorganizadora sabía que muchos de ellos tenían militancia, actividad política, experiencia. Debido a su participación política permanecían. Son gente que se entregó a una causa política y a la vez de mantener las conquistas del movimiento universitario.

¿Activaban políticamente estos estudiantes antiguos?

Claro. Era gente luchadora. Yo pienso que el servicio de inteligencia sabía quiénes eran ellos. Pero había de todo, era diverso el asunto; no todos estaban en la política.

Entonces, ¿cuál es el motivo por el que expulsan a estos estudiantes antiguos?

Si tú lees el Estatuto del 84, este no permite la separación de ningún estudiante ni por razones políticas y menos si no estudia. Porque eso se podría solucionar con asesoramiento, etc. Pero tirarte abajo a 700 o 900 estudiantes es menos gasto...todo ese gasto el ¿Estado se ahorra no? El Estado tiene menos carga. Esa misma lógica tiene que ver con el tema de sacar a todos estos estudiantes.

¿El método de crear varios criterios académicos (por ejemplo, si desapuebas un curso tres veces te botamos) generó expulsiones masivas?

Pienso que no fue tan masivo como el método de "estudiantes eternos". Aunque yo pienso que este método apuntaba más a presionar al estudiante y a condicionarlo a pagar cada vez más.

Primeras planas de diarios en relación a la intervención del 25 de mayo de 1995

VIERNES **CORTESIA**

La República

Año 14 - N° 4,893 - Precio: S/ 1.30
Perú, Viernes 26 de Mayo de 1995
Director: Alejandro Sakuda M.

Con tanquetas, soldados y policías

DESALOJAN A RECTORES

■ Oficial saca de malas maneras a rector de San Marcos de su oficina

Sanmarquinos llaman a la resistencia contra medida arbitraria

Violando la autonomía

Soldados con tanquetas y armados con fusiles ingresan a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para desalojar a los autoridades universitarias. El rector Wilson Reátegui fue obligado a abandonar sus oficinas en forma precipitada por un oficial mientras los estudiantes salían a las calles para protestar enérgicamente contra la medida que calificaron de inconstitucional.



Wilson Reátegui y Federación de Estudiantes denuncian Pretenden privatizar Universidades

Reclame hoy su VSD

CON VEINTE PAGINAS Y A SOLO S/ 0.50

Extra

EDICION NACIONAL
Director: Carlos Sánchez Fernández
Libertad 117, Miraflores
Teléfono: 4447089
N° 9383 - Lima, viernes 26 de mayo de 1995
Año XXXI

¡AUMENTAN VICTIMAS!

Idol y Lagrimas!

Muere quinto infortunado de insania terrorista

- Ayer dieron cristiana sepultura a quienes perdieron la vida en cobarde atentado en casino de Miraflores
- Pena de muerte para dementes senderistas se debate en Congreso (Pág. 3)



Gobierno dispone reorganización total

UNIVERSIDADES ESTAN QUE ARDEN!

● Sobreviven infiltrados terroristas, dicen (Pág. 2)

Parajito quería vivir libremente su romance (Pág. 4)

NIÑOS DE SIETE AÑOS FUGAN POR AMOR

Informe de Salud (Págs. 6 y 7)

POR QUE ES IMPORTANTE VACUNAR A SU NIÑO

REPÚBLICA NACIONAL DEL PERÚ **El Comercio** **CORTESIA**

14 | D. C. PREVENCIÓN
SECCIÓN FECHA:
CÓPIA
CANJE 26-5-95

Directores
Aurelio Miró Quesada S.
Alejandro Miró Quesada G.

INDEPENDENCIA Y VERACIDAD
Lima, viernes 26 de mayo de 1995 Año 156 N° 81,665

U. de San Marcos fue intervenida 24 horas antes del plazo previsto

■ Anoche se nombró comisión reorganizadora
■ No ocurrió lo mismo en 'La Cantuta'

Antes de cumplirse el plazo (a partir de hoy) para que entrara en vigencia la Ley 26457 que declara en reorganización las universidades públicas del país, efectivos policiales cerraron ayer el ingreso a las oficinas del rectorado de la Universidad Nacional de San Marcos desde las primeras horas de la mañana, impidiendo el paso de sus autoridades y de los trabajadores administrativos.

No ocurrió lo mismo en la Universidad Nacional 'Enrique Guzmán y Valle' (La Cantuta), también declarada en reorganización por la misma ley, cuyo rector, el doctor Alfonso Ramos Gólfres, siguió normalmente ejerciendo sus funciones.

El rector de la Universidad de San Marcos, Wilson Reátegui, en tanto, lamentó la intervención porque, dijo, es violatoria de la Constitución y las leyes y precisó que ha denunciado, a través de sus abogados, ante la fiscalía la violación de sus derechos.

Por la noche, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República informó que la comisión reorganizadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estará presidida por el doctor Manuel Paredes Marín, decano de la Facultad de Medicina y promotor de un pronunciamiento difundido hace varios días por los decanos de esa casa de estudios contra el favoritismo del rectorado hacia el partido Patria Roja.

Los otros cuatro integrantes de la comisión son Gabriel Huerta Díaz, Aníbal Torres Vázquez, Leoní Silva Rojas y Jaime Descalceaux Dillanto.

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y segundo vicepresidente electo, César Paredes Canto, también fue sorprendido por la medida. Luego de reunirse en Palacio de Gobierno con el presidente Alberto Fujimori afirmó que la ley de reorganización sólo se cumplirá en las universidades de San Marcos y La Cantuta y que los demás centros de estudios seguirán funcionando normalmente.

Aseguró que desconocía por completo los antecedentes de la dación de la ley que dispone la reorganización de las universidades estatales y la destitución de sus autoridades, atribuyendo a los congresistas que presentaron el proyecto como los únicos que conocen el espíritu que generó dicha norma.

En tanto, las clases se desarrollaron con normalidad al interior de la ciudad universitaria de San Marcos, presentándose algunas manifestaciones por parte de grupos de estudiantes que realizaron marchas, primero

Reducidos grupos de estudiantes sanmarquinos organizaron marchas de protesta en la Ciudad Universitaria en contra de la reorganización decretada por el CCD. Inicialmente se concentraron cerca al comedor estudiantil, en cuyo

segundo piso había piquetes de soldados montando guardia, al igual que en otros pabellones.

en el interior del recinto universitario y luego en el exterior, lo que obligó a la Policía Nacional a reforzar la vigilancia en los alrededores, en tanto que los efectivos del Ejército a cargo de la custodia de ese centro superior redoblaron el control del ingreso de los estudiantes. (DECANO DE COLEGIO DE ABOGADOS CONSIDERO QUE LA LEY ES APRESURADA. A7).



INFORMO ALERTANDO INFILTRACION DE SL

SIN precipitó reorganización de universidades

Legislador Oswaldo Sandoval emplaza a César Paredes Canto a renunciar a ANR

Un informe secreto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que advierte sobre una nueva infiltración de Sendero Luminoso en las universidades de San Marcos y Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), fue lo que precipitó la decisión de la mayoría parlamentaria a aprobar la ley que faculta la intervención del gobierno en esos centros de enseñanza.

Así lo reveló ayer el autor de la propuesta, congresista Oswaldo Sandoval, quien también emplazó al presidente de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y vicepresidente electo, César Paredes Canto, a que, consecuentemente con su línea política, renuncie a la presidencia de esa entidad académica y asuma de inmediato su participación en el próximo gobierno, sin esperar el 28 de julio.

Seguridad nacional

En rueda de prensa con los periodistas, el legislador oficialista manifestó que en la decisión de su bancada primó «el concepto de seguridad nacional ante las consideraciones de otro orden», y que siempre se coordinó con el Ejecutivo.



Pese a la protesta de grupos estudiantiles, la reorganización de San Marcos y La Cantuta se inició ayer

«Esto (el informe del SIN) es algo que no podíamos decirlo en su momento porque tenía que actuarse de una manera sorpresiva. Nosotros no podemos permitir que vuelva a recrudecer el terrorismo, y ante los hechos que sucedieron en

Miraflores era indispensable actuar con prontitud», remarco. Preguntado sobre si la intervención gubernamental era la única salida, el también presidente de la comisión de Relaciones Exteriores indicó que sí, debido a que la ANR

está incapacitada legalmente para intervenir y reorganizar las universidades, al igual que el Poder Judicial.

Tras sostener que la infiltración terrorista en San Marcos ocurrió aprovechando las pugnas internas

y las irregularidades cometidas durante la reelección del rector Wilson Reátegui, dijo que en esta universidad un solo partido, Patria Roja, copaba y disponía de todos los estamentos de gobierno.

Que renuncie

En relación a la actuación del presidente de la ANR, César Paredes Canto, el legislador evitó expresar un juicio valorativo, pero lo emplazó, «con mucha cortesía», a decidir su renuncia a la dirección de esa institución por su condición de vicepresidente en el próximo gobierno.

«Su opinión es respetable, pero yo diría que tiene que tomar una decisión; si es un vicepresidente electo, y por ende un político, desde mi modesto punto de vista, quizá ya no debería seguir ejerciendo el cargo de presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Creo yo que él tendría que decidir a qué actividad se dedicará», agregó.

Finalmente, sostuvo que el polémico proyecto fue apoyado por toda la bancada gobiernista y su elaboración se hizo con la participación del Ejecutivo.



Clara táctica de interrelacionar el atentado y la intervención como problema y solución, respectivamente. Extra, 26 de mayo-95.

Las limpiarán de terrucos y vagonetas

Purga en universidades

● Surgieron ayer los primeros problemas, protestas e incidentes en la comunidad universitaria, después que el Congreso aprobó una ley por la cual se dispone la reorganización de las universidades nacionales comenzando por San Marcos y La Cantuta. En la ciudad universitaria sanmarquina, los estudiantes bloquearon las pistas aledañas, en tanto que el rector Wilson Reátegui protestó porque efectivos policiales cercaron y hasta no permitieron el ingreso a sus oficinas de trabajo.

La ley, aprobada en la madrugada, fue promulgada por el presidente Alberto Fujimori y apareció publicada ayer mismo en "El Peruano" con el número 26457. Las circunstancias en que fue dictada, en medio de una sesión reservada del Congreso, aparte de su inmediata promulgación y rápida publicación en "El Peruano", hizo que algunos maestros, rectores y grupos de estudiantes reaccionaran contra la medida.

En tanto esto ocurría en San Marcos, en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta, se apreció un clima tranquilo. Las opiniones de los estudiantes fueron divididas, aunque la gran mayoría saludó la medida de reorganización.

Estigmatización. Aja, 26 de mayo-95

A 2 **Expreso**

MANUEL D'ORNELLAS

«5 de abril» en las universidades



No es casual que la reorganización de las universidades de San Marcos y La Cantuta, con el corte de cabezas que ella implica, se haya aprobado aceleradamente en el Congreso justo después del atentado terrorista contra el hotel miraflorentino María Angola: los informes militares indicarían, al parecer, que en ambos recintos universitarios estarían nuevamente refugiándose los mandos senderistas que han logrado reorganizarse.

Se puede discutir, y de hecho se discute, la plena legalidad de esta medida. Aunque no podría hacerle Wilson Reátegui, el rector sanmarquino que anuló las elecciones que perdió para de ese modo reelegirse, y a quien se recordará siempre por haber otorgado a Fidel Castro, en setiembre de 1990, el grado de «doctor honoris causa».

Pero eso es lo superficial; la «superestructura», como decían antes los marxistas que hoy defienden con el sable desenvainado la «democracia formal» que otrora les apataba. Lo real y fundamental es que, a partir de esta medida y tal como editorializó ayer EXPRESO, se abre la posibilidad de modernizar y «aggiornar» a la universidad más antigua de América, y de depurar de deformaciones ideológicas a la casa de estudios que forma a los profesores que moldearán las mentes juveniles.

Durante demasiadas décadas, el profesorado peruano ha estado constituido mayoritariamente por elementos marxistas, llamáranse apristas o comunistas. El vuelco de la opinión pública hacia las ideas izquierdistas que se registró entre los años sesenta y setenta, y a la que trató de pilotear la dictadura militar de Velasco, fue el fruto de ese largo indoctrinamiento pedagógico.

Hoy, esa prédica ya no produce mayores réditos, porque el mundo ha cambiado visiblemente y la tan mentada globalización de las comunicaciones sí es un hecho real. Únicamente en las poblaciones más marginales y paupérrimas podría calar un mensaje de ese tipo, que es lo que trata de conseguir Sendero Luminoso a través de sus «escuelas populares».

Los nuevos profesionales y los nuevos educadores tienen que provenir de universidades actualizadas. Donde ya no se rinda culto a Marx y Lenin, ni se galardonee a Fidel Castro.



A 34 **Expreso** EDITO

Expreso

Fin de la vieja universidad

El Congreso ha dado una ley ordenando la reorganización de las universidades San Marcos y La Cantuta. Sendas comisiones integradas por cinco miembros asumirán durante un año las funciones de gobierno en ambas universidades. Los rectores y vicerrectores cesan en sus cargos y los miembros de los consejos y asambleas universitarias dejan sus funciones. Las comisiones aplicarán un programa de incentivos al retiro voluntario del personal administrativo y docente y tomarán exámenes a fin de cesar al personal excedente. Al término de su función, convocarán a asamblea universitaria para la aprobación de un nuevo estatuto, y luego convocarán a elecciones de las autoridades con arreglo a los nuevos estatutos.

Es una medida dura, pero necesaria. Pese a que el ambiente ha mejorado mucho en San Marcos, sigue siendo una universidad muy mala en la que el dinero del contribuyente se gasta casi inútilmente y se engaña al alumnado. Es una burocracia hipertrofiada de profesores de muy bajo nivel, que posee dieciséis facultades de las cuales no más de dos o tres merecen verdaderamente el nombre de tales.

Y el problema es que San Marcos no tiene la capacidad de cambiar desde adentro, porque allí se ha enquistado una argolla de catedráticos y empleados de procedencia política, interesada en conservar el *statu quo* de sus cotos de poder. Cuando, para designar al nuevo rector el año pasado, una nueva asamblea fue elegida con una mayoría distinta a la de Patria Roja, partido al que pertenece el Rector, éste desconoció las elecciones, cambió el comité electoral, convocó a nuevas elecciones a las que ya no se presentaron los triunfadores de las anteriores, y así logró ser reelegido.

El problema es viejo. Se origina en el célebre «Grito de Córdoba» del año 1918, del cual emergió la demagógica institucionalidad del tercio estudiantil, que rige hasta ahora. Ese tercio fue ganado tradicionalmente, en las universidades peruanas, por el Apra, hasta que fue desplazada, desde los cincuenta o los sesenta, por distintos grupos comunistas, que llegaron a las aulas con la prédica de que la universidad era parte del poder burgués y que había que usarla como base del proyecto revolucionario. Controlaron, entonces, las dirigencias y los tercios estudiantiles y empezaron a demandar y conseguir el cambio de los cursos y de los profesores, y su reemplazo por materias con contenido marxista y por catedráticos de sus partidos, sin mayor consideración de idoneidad o calidad académica. Por eso, Patria Roja tiene muchos docentes en San Marcos y por eso los profesores de calidad se fueron retirando o fundaron otras universidades como la Cayetano Heredia.

Ha llegado la hora de terminar con el largo ciclo histórico del «Grito de Córdoba» y pasar a una universidad pública seria. Debe modificarse la ley universitaria. Y, al interior de San Marcos, convocar a concurso público para que nuevas generaciones de intelectuales, profesionales y científicos ingresen a dictar e investigar. Pero, eso sí, la comisión reorganizadora no puede fallar. Sólo una vez se puede tomar una medida excepcional como la que se ha adoptado.

Expreso

Del rebrote terrorista a la reforma universitaria

Con el criminal y macabro atentado contra el hotel María Angola de Miraflores, situado a pocas cuadras de Tarata para amplificar el terror con el recuerdo, una facción sobreviviente de Sendero Luminoso ha intentado conmemorar los quince años de inicio de su lucha armada golpeando a uno de los símbolos más claros de la recuperación nacional: el desarrollo del turismo.

Acto tanto más inútil cuanto que sólo sirve para recordar que todavía existe, pero nada más. Sendero no tiene ninguna posibilidad de resurgir realmente en un país que crece de manera sólida y que tiene futuro y ofrece un lugar para todos. Sí tiene, en cambio, la posibilidad de seguir cometiendo actos asesinos y destructivos de manera esporádica, sobre todo si es que el aparato de seguridad no afina su alerta y no persigue hasta el final a las últimas células del mal.

Fue acaso esa la razón por la que el gobierno decidió intervenir las universidades de San Marcos y La Cantuta en este momento, en previsión de que allí se estuviera preparando alguna clase de ofensiva terrorista para los próximos días. Pero la ley que dispone el cese de los rectores y las asambleas y el nombramiento de comisiones reorganizadoras, no menciona para nada el tema terrorista sino, implícitamente, la necesidad de sacar a esas universidades del marasmo académico y la politización estéril en que habían caído desde hace ya muchos años.

No cabe duda que el largo ciclo histórico iniciado con la reforma universitaria de Córdoba de 1918, que instituyó el tercio estudiantil en las universidades públicas, no sólo se agotó sino que terminó convirtiendo a las universidades peruanas en plataformas de lanzamiento revolucionario o en academias de marxismo barato.

El caso de la Universidad de Huamanga fue paradigmático: procreó, precisamente, al partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Pero todas las demás sufrieron, en mayor o menor medida, una dictadura estudiantil que impuso a profesores de sus partidos y degradó la enseñanza. Los mejores catedráticos emigraron, entonces, a las universidades privadas, iniciándose un proceso de decadencia y proletarianización que sólo empezó a revertirse ligeramente luego de la caída del Muro de Berlín y velozmente a partir de

1992, cuando los propios estudiantes comenzaron a pintar sus universidades, protegidos por la seguridad militar.

Sin embargo, lo que mejoró fue sobre todo el orden externo. Debajo de él, los profesores, las autoridades y la falta de recursos siguieron siendo los mismos, en un ambiente que le permite a Sendero sobrevivir y acaso realizar algún trabajo. Pero cambiar ese ambiente, refundar y recuperar una universidad como San Marcos es, sin duda, algo mucho más vasto que una mera operación policial o militar. Y así ha nacido, lamentablemente, con un procedimiento que no corresponde a la cultura de diálogo, de discusión racional y creación intelectual que se requiere para regenerar una vida universitaria que pueda disolver el dogmatismo senderista basado en la cultura de la fuerza. Ni siquiera el segundo vicepresidente electo, César Paredes Canto, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, fue consultado: no sabía nada.

Por eso, es doblemente importante que la comisión reorganizadora tome conciencia de que su tarea no es episódica, sino fundacional: la de construir una nueva institucionalidad que restaure la excelencia académica, la cultura de la razón y la esencia universitaria, lo que incluye núcleos de humanidades y de ciencias puras. Esto requiere de un profundo debate nacional para dar una nueva ley que supere los conceptos demagógicos de la reforma de Córdoba. Y, en lo que a San Marcos se refiere, exige de la comisión respectiva la capacidad de convocar a los más ilustres humanistas y científicos sanmarquinos (aunque hayan sido marxistas) de todas las épocas para diseñar un proyecto nuevo. ¿Podrá hacerlo?

Pues lo que permite seguir alojando al senderismo en las universidades estatales es el primitivismo de los partidos comunistas supérstites; pero también, salvo excepciones meritorias, el páramo intelectual y académico, el bajísimo nivel, el vacío institucional y el hecho de no ser organizaciones dinámicas con objetivos de mejoramiento y progreso.

Convertir a San Marcos y La Cantuta en organismos vivos, que sean fuente de cultura y de investigación científica, no será fácil. Hará falta el aporte y el apoyo de toda la comunidad intelectual y científica y la capacidad del Congreso y de las comisiones reorganizadoras de recoger, escuchar y aplicar esos aportes. Estaremos atentos.

César Hildebrandt



Arte rupestre

La universidad de la reforma ha terminado! —se jacta el diario gubernamental. Alude con ello a las tropas hurgando en los bolsos de los estudiantes y a la hazaña legislativa del trío Yoshiyama-Chávez-Sandoval.

Como alguna vez dijera con acierto Albert Camus, los periodistas corremos el riesgo de querer lo mejor juzgando siempre lo peor. Pero los aduladores circunstanciales enfrentan un desafío mayor: quieren ser peores que los actos que avalan, están dispuestos a llevar hasta el límite de la razón la moral de la anuencia.

—“Ha llegado la hora de terminar con el largo ciclo histórico del ‘Grito de Córdoba’ —se regodea el editorialista.

¡Vade retro Gabriel del Mazo! ¡Vade retro Haya de la Torre! ¡Vade retro José Ingenieros! La caverna, otra vez. El diario en cuestión funciona, como se sabe, cumpliendo el digno papel del decorador de interiores. Sus editorialistas no ignoran que a los Chávez y a los Sandoval el asunto de la reforma universitaria les parece indiferente y que lo único que quieren es que el caudillo al que todo le deben se sienta cada día mejor en un país de instituciones arrasadas. Pero como a la moral de la anuencia hay que sumarle la cultura de la apariencias, entonces llega el equipo editorial con sus latas de pintura, sus parqueteros y sus ebanistas y convierte la pocilga de la mera ambición de poder en una bonita habitación con vistas. La verdad es que hacen milagros. Donde había un morral de soldado ellos ponen los escaupines del viejo catedrático pre-reforma. Donde Martha Chávez hablaría directamente del SIN, ellos peroran sobre los inconvenientes “marxistoides” del tercio estudiantil. Chávez pone

la porra y ellos la toga de emergencia. Chávez trabaja para la asiaticización fujimorista del Perú. Ellos prestan el acompañamiento intelectual. Una se dirige al futuro. A ellos los devora la nostalgia y pretenden encontrar, inspeccionando el baul del abuelo, presagios ilustros.

La reforma universitaria de 1918 fue una gesta intelectual y popular que extrajo a las universidades del dominio absoluto de las clases dominantes. Haya de la Torre describió así el fenómeno en 1925: “aireamos la vieja y carcomida Universidad de San Marcos... La aireamos echando afuera dieciséis profesores en pleno proceso de momificación; la aireamos cambiando radicalmente los sistemas y obligando a una servil asamblea parlamentaria a respetarnos...”. Hoy el diario que algunos congresistas del gobierno leen todos los días complacidos, moviendo los labios y convencidos de que la dinastía Fujimori encarnará dentro de algunos años en Keiko Sofía y hasta en el precioso vástago de Martha Chávez, pretende un masivo regreso de ultratumba. Escuchando a sus representantes en el CCD advierten, con horror, que necesitan también un poco de sintaxis, una pizca de academicismo, dos cucharadas de curriculum vitae. Y si uno les preguntara qué tiene que ver esa aspiración con la ley de Sandoval, salida de los escombros de María Angola como del horror de Tarata salió el espanto de La Cantuta, di-

rán, literalmente: “allí se ha enquistado (en San Marcos) una argolla de catedráticos y empleados de procedencia política, interesada en conservar el statu quo de sus cotos de poder”. No nos detengamos en la indigencia idiomática de este párrafo. Trátemos de descifrar qué querrá decir este discípulo trasatlántico de Jean Marie Le Pen cuando habla de “procedencia política”. ¿Querrá decir que Sandoval y compañía no vienen de la más rancia de las políticas sino del más puro limbo? ¿Es que sólo la política del balbuceo asentidor está consentida en el Perú de hoy?

Entre otras muchas cosas, lo moderno consiste en tratar a los trabajadores como parte de las soluciones y no de los problemas, en darles capacidad de gestión y creciente autonomía. En pleno 1995 el diario de la máquina del tiempo solicita la abolición del tercio estudiantil y el retorno al gamonalismo de la inteligencia. La Universidad San Marcos es vista como un foco de resistencia al que hay que abatir. Lo mismo que el Jurado Nacional de Elecciones. Lo mismo que las municipalidades. Lo mismo que el Defensor del Pueblo, masacrado por lo que pudo ser.

Quieren que el Perú sea el tigre americano del siglo XXI. Pero, eso sí, con la universidad del siglo XIX, los salarios previos a la lucha por las ocho horas y el palo proverbial de varios siglos. Quieren un país lleno de

computadoras y vacío de todo asomo de altivez. Quieren mercado libre, pero no libertad. Quieren consumidores, no ciudadanos. Y quieren tapar esa grosera contradicción con el arte rupestre de sus editoriales. Quieren la reingeniería industrial y el Opus Dei al mismo tiempo. ¡Ni Franco, que si ganó una guerra, pudo lograrlo!

El patético presidente de la Asamblea Nacional de Rectores ha recibido también su cucharada de traición. Judas del tamaño del Coloso de Rodas, el caudillo necesita pisotear para afirmarse y agravar para sentir que avanza. Pero, sobre todo, practica la viciosa adicción de la deslealtad. Y una ley de madrugada, aprobada a la hora en que el Jedi imita en lo del codo a Winston Churchill, es aplicada por la policía veinticuatro horas antes de su entrada en vigor: felonía completa, hasta de lo inanimado; obra maestra de la emboscada que incluye al diario oficial.

“Fin de la vieja universidad”, regurgita el diario gubernamental. En la puerta de San Marcos, la tropa cachea a una alumna y la televisión muestra la escena. Dos soldados se miran, sonríen y manosean a sus anchas. La muchacha trata de mantenerles la mirada, se ruboriza, se indigna.

«Combat-llamó «mecánico de la concesión» a esa política que condujo a millones de franceses a la debilidad y la vergüenza: “Cada concesión hecha al enemigo y a la actitud fácil acarrea una nueva concesión. Esta última no era más grave que la primera, pero entre las dos, una tras otra, constituían una cobardía. Dos cobardías formaban el deshonor”. ¿De cuántas cobardías está formado el deshonor en el Perú de hoy?

Mirko Lauer

OBSERVADOR

Pobres
argumentos

La Asamblea Nacional de Rectores, que preside el segundo vicepresidente electo del país, acaba de reclamar la pronta derogatoria de la Ley N° 26457, que ha metido a patadas a sendas "comisiones reorganizadoras" a San Marcos y La Cantuta. En la línea de ese documento, aquí van brevísimos comentarios a tres de los principales argumentos adelantados por los defensores de esa nocturna Ley para justificarse:

1. Hay infiltración senderista. Las universidades intervenidas han venido demostrando un comportamiento gremial, cívico y político que llenaba de orgullo al propio gobierno. La marcha institucional y diversas encuestas muestran que las autoridades defenestradas permitían y conducían un proceso de normalización que incluso venía abriendo cada vez más espacio político al propio fujimorismo.

Tan inopinada ha sido esta intervención que la tropa de asalto se ha movilizado hacia universidades donde ya hacían patrullaje desde hace años efectivos de la propia Fuerza Armada. El argumento de una presencia senderista operativa en la universidad hoy es algo muy difícil de demostrar, y hasta el momento los defensores de la llamada reorganización no lo han hecho. Más bien la intervención puede reavivar alguna llama senderista.

2. Hay presencia de Patria Roja. Este es un partido político legal, que no ha impedido ninguno de los procesos electorales internos contemplados por la Ley Universitaria. Más aun, es un secreto a voces que PR ha funcionado como un aliado político del fujimorismo en muchos aspectos de la vida universitaria. Las relaciones de ambos rectores con el gobierno parecían óptimas.

Más allá de los deméritos que pudiera tener PR como partido, este argumento tiene dos implicancias: 1. continúa la satanización de los partidos políticos dentro de la estrategia de implementación de la "democracia directa" y el partido único NM-C90; y 2. el desmantelamiento de la presencia de un partido político legal puede terminar reabriendo espacios a un senderismo que estaba ya muy de salida.

3. Las autoridades tenían muchos juicios abiertos en su contra. Este argumento es un nuevo avasallamiento al Poder Judicial, que de alguna manera queda mal parado con la intervención. Además, los autores del caballazo ni siquiera se atrevieron a utilizar este dato judicial como argumento para intervenir las universidades, quizás porque hubieran tenido que explicar de qué naturaleza eran esos juicios.

Pero el argumento de los juicios, esgrimido por voceros del gobierno, revela con claridad que la llamada reorganización no es sino el uso del CCD y el Ejecutivo para favorecer al bando de los amigos en lo que es una disputa esencialmente interna, que se tramitaba en los tribunales del país. Bastarían esas declaraciones para invalidar la ley que acaba de denunciar la Asociación Nacional de Rectores.

Por César Terán Vega

Con don Roberto Ramírez del Villar, "Bobby" para sus amigos, se ha ido del foro peruano el último de los tribunos pertenecientes a una generación de abogados constitucionales que, habiendo nacido a principios de este siglo, heredaron las banderas jamás arriadas de la libertad de pensamiento y de expresión, cuyas raíces se nutren de las doctrinas democráticas nacidas en la Antigua Grecia y el Derecho Romano y que, luego de la Revolución Francesa, germinan y florecen también en América, a la luz de nuevos tiempos y nuevas realidades.

La vida de tan ilustre peruano siempre estuvo buscando una tribuna para defender la democracia y el estado de derecho en el Perú y en América Latina.

Esta apasionada defensa la asumió permanentemente, ora en la cátedra universitaria, ora como abogado constitucionalista, ora como diputado de la Nación, cinco veces reelegido, ora como periodista de pluma combatiente y también como miembro de la Asamblea Constituyente elegida en 1978.

La generación de don Roberto Ramírez del Villar fue digna heredera de aquellos políticos, constitucionales y libre pensadores que fundaron la República, como Hipólito Unzué, José Faustino Sánchez Carrión, Francisco Gonzales de Paula Vigil. Desde su formación conservadora, no fue de aquellos políticos que asumieron el pensamiento socialista; prefirió ubicarse en lo que se denominaba el "pensamiento occidental y cristiano", pero cultivó siempre la tolerancia intelectual, y el respeto a las ideas discrepantes.

Por eso es que los peruanos protagonistas de los últimos 50 años de vida republicana siempre recordaremos al democrata a carta cabal, al adversario político culto y respetuoso y, a la vez, al intransigente enemigo de las dictaduras y de los totalitarismos.

Como constitucionalista fue un maestro, tanto en la cátedra universitaria como el escaño parlamentario.

En materia de Derecho Constitucional era una verdadera autoridad. Cuando abordaba este tema en la Cámara de Diputados todas las bancadas guardaban absoluto silencio, mientras el veterano y sabio político defendía sus puntos de vista apelando a la historia del Derecho Constitucional peruano o al Derecho Constitucional comparado (con la legislación de otros países).

Siempre se recordarán sus encendidas polémicas con otros prestigiosos políticos como don Luis Alberto Sánchez, su paisano y compañero de ideas Mario Po-

Los miembros de la CORE-SM



De izquierda a derecha:
Jamie Descailleux
Dulanto, Leoni Silva
Rojas, Manuel Paredes
Manrique, Aníbal
Torres Vargas y Gabriel
Huerta Díaz, son los
miembros de la
Comisión
Reorganizadora de la
Universidad de San
Marcos que ayer
asumieron funciones en
esa casa de estudios
reemplazando a las
autoridades cesadas.



UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

SINDICATO DE DOCENTES
S.I.N.D.U.V.

FUNDADO EL 14 DE JUNIO DE 1985
Reconocido por R.D. 003-87 INAP - DNP 19-03-87
Av. Nicolás de Piérola N° 351 - Of. 33 Telfs. 4251725 - 4251825 Anexo 36 - Lima - Perú

A LA OPINION PUBLICA

1. La violación de la **AUTONOMIA UNIVERSITARIA** se inició el 1º de Mayo de 1992 al designarse una Comisión Reorganizadora de la Universidad Nacional "Federico Villarreal", Comisión que tenía un plazo de 60 días y que aún continúa, Merced a prórrogas sustentadas por la Comisión de Educación del Congreso Constituyente, presidida por el Ing. Rafael Rey Rey (Ley 26180) -26259 y 26402), avaladas por el silencio cómplice de la Asamblea Nacional de Rectores, a pesar de la Opinión Institucional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima.
2. Quienes venimos desde hace más de tres años, padeciendo ecuanimemente los efectos del Autoritarismo, ilegalidad, Prepotencia y Anticonstitucionalidad, abortados por la Absecuente mayoría del Congreso Constituyente, nos **SOLIDARIZAMOS**, con los justos reclamos de los Docentes, Alumnos y Trabajadores de las Universidades Nacionales San Marcos y Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta).
3. Denunciamos que estas actitudes no son más que una escalada en contra de las Instituciones Democráticas tal como pronosticamos en Comunicado del 12-12-94 "Alertar a las Universidades del país que lo que viene ocurriendo desde hace más de 02 años y 07 meses en la UNFV, no es otra que un ensayo de lo que ocurrirá próximamente en todas ellas".

POR EL RESPETO DE LA AUTONOMIA EN SAN MARCOS, LA CANTUTA Y VILLARREAL

**PROF. MANUEL MONTEJO
RAMIREZ**
Secretario General
L.E. 07216090

Lima, 26 de Mayo de 1995
**PROF. CARLOS ESCUDERO
REYNA**
Secretario de Defensa
L.E. 25759619



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
Pabellón de Derecho Ciudad Universitaria Telf. 527985-529124

A LA OPINION PUBLICA

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Decana de América, se dirige a la opinión pública a fin de hacer conocer su más enérgica protesta por la inconstitucional Ley de Intervención, por las siguientes consideraciones:

- 1.- El 25 de Mayo, en sesión secreta, el CCD aprobó una ley para la Intervención por el Ejecutivo de las Universidades de San Marcos y La Cantuta. Ese mismo 25 de Mayo, precipitadamente, la Ley fue promulgada por el Presidente de la República y PUBLICADA en el Diario Oficial con el N° 26457, para que entrara en vigencia al día siguiente. El mismo día, sin embargo, se ha procedido a hacer efectiva la intervención en la Universidad de San Marcos, despojando de su cargo al Rector.
- 2.- La mencionada Ley no sólo es expedida en circunstancias en que las fuerzas internas de San Marcos estaban madurando su propio cambio, sino que se la aplica contrariando claros y arraigados preceptos constitucionales. La Autonomía Universitaria, el derecho que la Constitución Política reconoce a las Universidades para gobernarse por sus propios estatutos, es desconocido por la Ley N° 26457. Al declararse la Universidad en reorganización y al someterse, durante un año al Gobierno de un ente externo, la Comisión Reorganizadora designada por el Poder Ejecutivo, se le está negando durante ese período el derecho que le confiere la Constitución a gobernarse por sus propios Estatutos.
- 3.- Pero allí no quedan las Infracciones constitucionales de la Ley 26457. El principio de la doble instancia que la Constitución reconoce como garantía del debido proceso, es desconocido por esta Ley para los procedimientos administrativos que se originen por las Resoluciones que la Comisión Reorganizadora expida. De igual modo sucede con los Derechos Laborales: la facultad de cuestionar las decisiones que afecten los derechos de los trabajadores están siendo negadas. Por tanto:
El Decano y los Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, declaran que la Ley N° 26457 es ilegítima, lo que sostendrán con el apoyo del Estudiantado y los Trabajadores de la Universidad, valiéndose de los recursos constitucionales pertinentes ante el Poder Judicial, el que sin lugar a dudas, los hará respetar como corresponde a derecho.

Dr. Washington Durán Abarca
Decano a.i

F-20462



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

COMISION DE REORGANIZACION
LEY 26457

COMUNICADO Nº 001

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LA OPINION PUBLICA

La Comisión de Reorganización de la UNMSM, nombrada por R.S. Nº 150-95-PCM, en aplicación de la ley 26457, pone en conocimiento de la Comunidad Sanmarquina y la opinión pública lo siguiente:

- 1º La Comisión de Reorganización de San Marcos al asumir esta alta responsabilidad, manifiesta su total independencia y autonomía. Nuestros objetivos coinciden con el de una amplia mayoría de docentes, estudiantes y personal administrativo en la necesaria reorganización de nuestra Alma Mater para adecuarla a los retos académicos y administrativos que la modernidad exige.
- 2º Respetamos y respetaremos la normatividad legal que consagra los principios de libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza y la participación estudiantil organizada, propiciando elevar el nivel de la producción académica y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica.
- 3º El desarrollo de las actividades académicas y administrativas continuarán con absoluta normalidad. Asimismo la estabilidad laboral y en el cargo de docentes y personal administrativo no tendrá alteración alguna en tanto se realicen las evaluaciones que determinen la necesaria racionalización.
- 4º La Comisión enfrentará como reto principal remontar el caos administrativo que actualmente sufre la universidad manifestado principalmente en la existencia de una Asamblea Universitaria espurea, la cual eligió ilegalmente al Ex-Rector, contraviniendo el ordenamiento legal plasmado en la Ley Universitaria, Estatuto de la Universidad y Reglamento General de Elecciones de San Marcos. Esta situación anómala viene afectando significativamente el desarrollo de las actividades académico administrativas en diversas Facultades.

Finalmente, invocamos a la Comunidad Sanmarquina a aglutinar esfuerzos en aras de recuperar el alto nivel académico que siempre ha caracterizado San Marcos. No escatimaremos esfuerzo en ello y mantendremos una permanente actitud de diálogo con las autoridades de las Facultades, Docentes y estudiantes.

Lima, 26 de Mayo de 1995

Comisión Reorganizadora de la UNMSM
Dr. Manuel Paredes Manrique
Presidente
Dr. Gabriel Huerta Díaz
Dr. Aníbal Torres Vásquez
Mg. Jaime Descailleux Dulanto.
Ing. Leoní Silva Rojas,



ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

COMISION DE COORDINACION INTERUNIVERSITARIA

A LA OPINION PUBLICA

Ante la promulgación de la Ley N° 26457, la Asamblea Nacional de Rectores considera que, sin perjuicio de las debatibles bases jurídicas de la norma dictada, no se ha tomado en cuenta la autonomía universitaria consagrada en el artículo 18° de nuestra carta fundamental que a la letra señala "Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno académico, administrativo y económico"; pues se ha negado a la propia Universidad la posibilidad de resolver, por ella misma, sus problemas.

Debemos hacer notar que la intervención decretada a dos Universidades públicas, tal como ha sido planteada, no constituye, precisamente, garantía para resolver los problemas de la Universidad Peruana, pues ella niega el carácter de esta Institución que se define por esencia como espacio democrático, libre y responsable, capaz de afrontar sus problemas y buscar su destino, pudiendo propiciar, en cambio, la generación de mayores conflictos y enfrentamientos internos.

Debe ser de conocimiento público que las trabas para que la Universidad se autoafirme se hallan en un ordenamiento legal que impide que las instancias universitarias puedan adoptar las medidas convenientes para su perfeccionamiento y desarrollo.

Las Universidades a través de la Asamblea Nacional de Rectores han buscado de manera reiterada se les proporcione el marco legal que permita la real solución de sus problemas. Estos pedidos, largamente desoídos, parecían finalmente haber encontrado acogida a través de una ley recientemente aprobada por el Congreso Constituyente Democrático y que espera su promulgación, sin embargo frente a esta situación, surge la Ley N° 26457 que, de algún modo, interfiere con lo que se anunciaba como camino razonable para mejorar la situación de las universidades del país.

Debemos dejar constancia de que, a pesar de las limitaciones legales mencionadas, la trayectoria de las Universidades Públicas en los últimos tiempos ha demostrado cómo ellas, concientes de sus problemas, han comenzado a superarlos, convirtiéndose además en abanderadas del proceso de pacificación integral que el país reclama. Más aún, cuando ello ha sido necesario, la misma Universidad no dudó en tomar la iniciativa para que pudieran generarse los mecanismos legales que permitieran la intervención de Universidades que ostensiblemente reclamaban tal medida. En esta ocasión ella no ha sido ni siquiera consultada, demostrándose así el escaso o nulo reconocimiento de sus esfuerzos.

Por todo lo expuesto, la Asamblea Nacional de Rectores haciéndose portavoz de sentir unánime de las Universidades del país, espera de los poderes del Estado la pronta derogatoria de la Ley N° 26457, (y la promulgación de la ley que le permita, sin interferencias, resolver sus problemas) asimismo expresa su solidaridad con los rectores afectados por la reciente ley y se reafirma en su propósito de ofrecer en breve plazo un anteproyecto de Ley de bases de la Universidad Peruana que sirva como marco para desarrollar con excelencia las actividades que permitan su pleno desarrollo en orden a servir a los altos intereses del Perú.

RECTORES DE LA ANR Y PRESIDENTES DE COMISIONES DE ORGANIZACION QUE ASISTIERON A LA SESION DEL DIA VIERNES 26 DE MAYO DE 1995.

DR. CÉSAR PAREDES CANTO

Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca y Presidente de la ANR

DR. MAURO CONCHA PÉREZ

Rector de la Universidad Nacional San Antonio - Abad

Primer Vice-Presidente de la ANR

DR. JOSÉ JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ

Rector de la Universidad del Pacífico, y

Segundo Vice-Presidente de la ANR

DR. GUILLERMO GIL MALCA

Rector de la Universidad Nacional de La Libertad

DR. JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES

Rector de la Universidad Nacional de San Agustín

DR. SALOMÓN LERNER FEBRES

Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú

ARO. JAVIER SOTA NADAL

Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería

DR. ALEJANDRO ENCINAS FERNÁNDEZ

Rector de la Universidad San Luis Gonzaga

ANTROP. JESÚS ENRIQUE GONZÁLES CARRE

Rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga

ING. LUIS FRANCISCO DELGADO DE LA FLOR BADARACCO

Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina

ING. JOSÉ TORRES VÁSQUEZ

Rector de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

DR. VÍCTOR TORRES ESTEVES

Rector de la Universidad Nacional del Altiplano

ING. FREDDY APONTE GUERRERO

Rector de la Universidad Nacional de Piura

DR. CARLOS VIDAL LAYSECA

Rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia

MSC. LUIS CARPIO ASCUÑA

Rector de la Universidad Católica de Santa María

ING. ESAU CARO MEZA

Rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú

DRA. ILSE WISOTZKY LOLI

Rectora de la Universidad de Lima

DR. CARLOS HUMBERTO VILCHEZ VERA

Rector de la Universidad San Martín de Porres

DRA. HNA. ELGA LUZ CATALINA GARCÍA ÁSTE

Rectora de la Universidad Feminina del Sagrado Corazón

DR. RAFAEL URRELO GUERRA

Rector de la Universidad Nacional Agraria de la Selva

ING. ABNER CHÁVEZ LEANDRO

Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán

DR. BENJAMÍN BOCCIO LA PAZ

Rector de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega

ING. LUIS GUZMÁN CABRERA

Rector de la Universidad Nacional Alcides Camión

DR. ANTONIO MABRES TORELLO

Rector de la Universidad de Piura

DR. GUMERCINDO CELEDONIO ADVÍNCULA

Rector de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión

ING. GUILLERMO LUDERA LUQUE

Rector de la Universidad Ricardo Palma

ING. JUAN FRANCISCO CARDOSO ROMERO

Rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo

MAG. ALBERTO COAYLA VILCA

Rector de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann

ING. JOSÉ ALEJANDRO NARVAEZ SOTO

Rector de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo

ING. PEDRO MIGUEL MONCADA MORI

Vice-Rector de la Universidad Nacional San Martín

DR. VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ VÁSQUEZ

Rector de la Universidad Nacional de Ucayali

DR. WALTER MANRIQUE PACHECO

Rector de la Universidad Unión Incaica

ING. MAXIMILIANO LARREA PORTILLA

Rector de la Universidad Particular de Chidayo

ING. LUCAS COAQUIRA CANO

Rector de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez

ING. VIDAL FERNÁNDEZ SULCA

Vice-Rector de la Universidad Privada "Los Andes"

MGR. SEGUNDO VARGAS TARRILLO

Rector de la Universidad Privada de Tarma

DR. MARIO ESCOBAR MOSCOSO

Rector de la Universidad Andina del Cusco

DR. JORGE ARTURO BENTES ROBLES

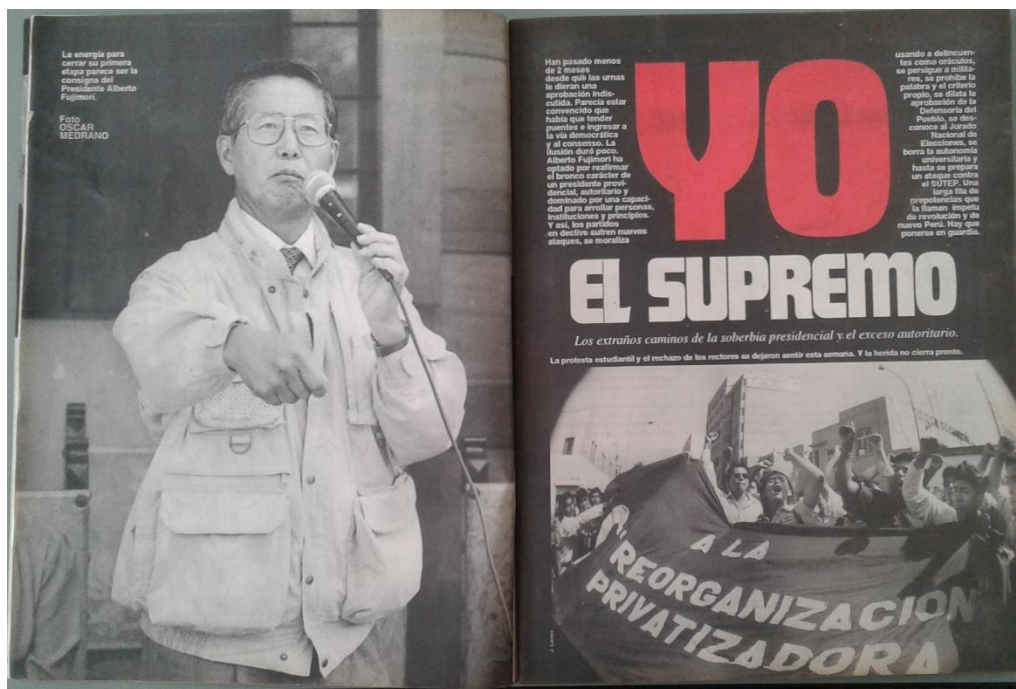
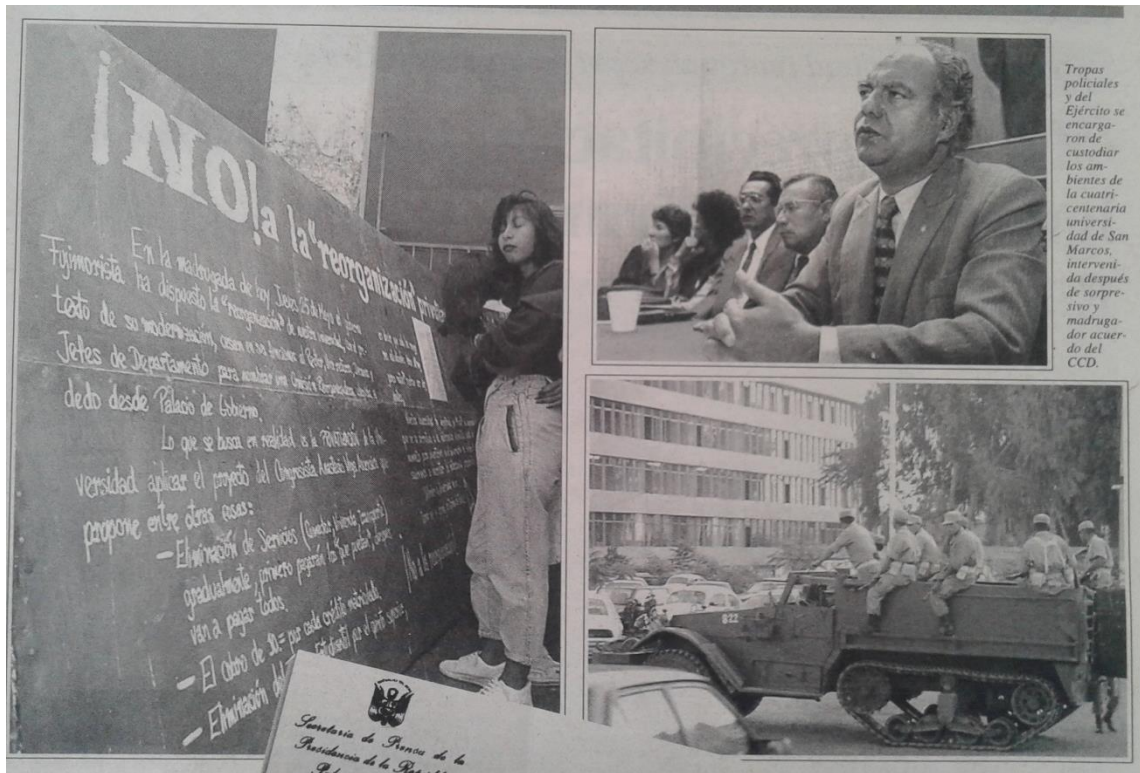
Rector de la Universidad Particular "San Pedro"

DR. ANTONIO CASTAGNETTI MORINI

Rector de la Universidad Marcelino Champagnat

Movilización estudiantil contra la Comisión Reorganizadora privatista





Caretas sobre la intervención.

ACBENO LUISA VICTOR	253	DELGADO ANA ESTHER	503	LOU PRUDENCIO CHRISTIAN	754	RAMOS CHAMPAZT DOWALDO	754
ACOSTA ROSA MARIA	254	DELGADO BELLO JULIO	504	LOPEZ FLORES FILIBEN	755	RAMOS DELGADO DARIANO	755
ACOSTA PONTE FLORES	255	DELGADO CECILIO JULIANA	505	LOPEZ CASTILLO JULIO	756	RAMON VILLALBA	756
ADAMIANE VILASQUEZ RAUL	256	DELGADO SILVIA	506	LOPEZ DAVILA	757	RAMON VILLALBA EDUARDO D.	757
ADRIANZEN TANCHIJO, ROLANDO	257	DIAZ ACOSTA ROSA MARIA	507	LOPEZ CRUZ ROSANA	758	RAMON VILLALBA GUARINO	758
AGUIAR ALFONSO JORGE	258	DIAZ CANTAGENA ALFONSO	508	LOPEZ MAS	759	RAMON VILLALBA GUARINO	759
AGUIAR FRANKO, JOSE	259	DIAZ DANIELA DIEGO	509	LOPEZ URBINA TERESA	760	RAMON VILLALBA GUARINO	760
ALFARO MEDRANO, ROSA	260	DIAZ ENOCHAS ALFONSO	510	LOPEZ VERA ERNESTANA	761	RAMON VILLALBA GUARINO	761
ALSA CH. MONICA	261	DIAZ INCHIGUI MIGUEL	511	LOPEZ VERA ERNESTANA	762	RAMON VILLALBA GUARINO	762
ALVARO JIMERO	262	DIAZ NUNEZ JESOR	512	LOPEZ VERA ERNESTANA	763	RAMON VILLALBA GUARINO	763
ALCANTARA CESAR	263	DIAZ PINO ANDRES	513	LOPEZ VERA ERNESTANA	764	RAMON VILLALBA GUARINO	764
ALEXANDRA MEZA, JORGE	264	DIAZ TAMBIN LUIS	514	LOPEZ VERA ERNESTANA	765	RAMON VILLALBA GUARINO	765
ALFARO NEPTALI	265	DIEGO CARBON JORGE	515	LOPEZ VERA ERNESTANA	766	RAMON VILLALBA GUARINO	766
ALFARO MANTILLA JULIO	266	DIESTRO DIESTRO ALBA ENCARNACION	516	LOPEZ VERA ERNESTANA	767	RAMON VILLALBA GUARINO	767
ALFARO VERA ROSA MARIA	267	DONICHO PADILLA ELISABETH	517	LOPEZ VERA ERNESTANA	768	RAMON VILLALBA GUARINO	768
ALFARO VERA ROSA MARIA	268	DONICHO RECAJO, JORGE	518	LOPEZ VERA ERNESTANA	769	RAMON VILLALBA GUARINO	769
ALFARO VERA ROSA MARIA	269	DONICHO RECAJO, JORGE	519	LOPEZ VERA ERNESTANA	770	RAMON VILLALBA GUARINO	770
ALFARO VERA ROSA MARIA	270	DONICHO RECAJO, JORGE	520	LOPEZ VERA ERNESTANA	771	RAMON VILLALBA GUARINO	771
ALFARO VERA ROSA MARIA	271	DONICHO RECAJO, JORGE	521	LOPEZ VERA ERNESTANA	772	RAMON VILLALBA GUARINO	772
ALFARO VERA ROSA MARIA	272	DONICHO RECAJO, JORGE	522	LOPEZ VERA ERNESTANA	773	RAMON VILLALBA GUARINO	773
ALFARO VERA ROSA MARIA	273	DONICHO RECAJO, JORGE	523	LOPEZ VERA ERNESTANA	774	RAMON VILLALBA GUARINO	774
ALFARO VERA ROSA MARIA	274	DONICHO RECAJO, JORGE	524	LOPEZ VERA ERNESTANA	775	RAMON VILLALBA GUARINO	775
ALFARO VERA ROSA MARIA	275	DONICHO RECAJO, JORGE	525	LOPEZ VERA ERNESTANA	776	RAMON VILLALBA GUARINO	776
ALFARO VERA ROSA MARIA	276	DONICHO RECAJO, JORGE	526	LOPEZ VERA ERNESTANA	777	RAMON VILLALBA GUARINO	777
ALFARO VERA ROSA MARIA	277	DONICHO RECAJO, JORGE	527	LOPEZ VERA ERNESTANA	778	RAMON VILLALBA GUARINO	778
ALFARO VERA ROSA MARIA	278	DONICHO RECAJO, JORGE	528	LOPEZ VERA ERNESTANA	779	RAMON VILLALBA GUARINO	779
ALFARO VERA ROSA MARIA	279	DONICHO RECAJO, JORGE	529	LOPEZ VERA ERNESTANA	780	RAMON VILLALBA GUARINO	780
ALFARO VERA ROSA MARIA	280	DONICHO RECAJO, JORGE	530	LOPEZ VERA ERNESTANA	781	RAMON VILLALBA GUARINO	781
ALFARO VERA ROSA MARIA	281	DONICHO RECAJO, JORGE	531	LOPEZ VERA ERNESTANA	782	RAMON VILLALBA GUARINO	782
ALFARO VERA ROSA MARIA	282	DONICHO RECAJO, JORGE	532	LOPEZ VERA ERNESTANA	783	RAMON VILLALBA GUARINO	783
ALFARO VERA ROSA MARIA	283	DONICHO RECAJO, JORGE	533	LOPEZ VERA ERNESTANA	784	RAMON VILLALBA GUARINO	784
ALFARO VERA ROSA MARIA	284	DONICHO RECAJO, JORGE	534	LOPEZ VERA ERNESTANA	785	RAMON VILLALBA GUARINO	785
ALFARO VERA ROSA MARIA	285	DONICHO RECAJO, JORGE	535	LOPEZ VERA ERNESTANA	786	RAMON VILLALBA GUARINO	786
ALFARO VERA ROSA MARIA	286	DONICHO RECAJO, JORGE	536	LOPEZ VERA ERNESTANA	787	RAMON VILLALBA GUARINO	787
ALFARO VERA ROSA MARIA	287	DONICHO RECAJO, JORGE	537	LOPEZ VERA ERNESTANA	788	RAMON VILLALBA GUARINO	788
ALFARO VERA ROSA MARIA	288	DONICHO RECAJO, JORGE	538	LOPEZ VERA ERNESTANA	789	RAMON VILLALBA GUARINO	789
ALFARO VERA ROSA MARIA	289	DONICHO RECAJO, JORGE	539	LOPEZ VERA ERNESTANA	790	RAMON VILLALBA GUARINO	790
ALFARO VERA ROSA MARIA	290	DONICHO RECAJO, JORGE	540	LOPEZ VERA ERNESTANA	791	RAMON VILLALBA GUARINO	791
ALFARO VERA ROSA MARIA	291	DONICHO RECAJO, JORGE	541	LOPEZ VERA ERNESTANA	792	RAMON VILLALBA GUARINO	792
ALFARO VERA ROSA MARIA	292	DONICHO RECAJO, JORGE	542	LOPEZ VERA ERNESTANA	793	RAMON VILLALBA GUARINO	793
ALFARO VERA ROSA MARIA	293	DONICHO RECAJO, JORGE	543	LOPEZ VERA ERNESTANA	794	RAMON VILLALBA GUARINO	794
ALFARO VERA ROSA MARIA	294	DONICHO RECAJO, JORGE	544	LOPEZ VERA ERNESTANA	795	RAMON VILLALBA GUARINO	795
ALFARO VERA ROSA MARIA	295	DONICHO RECAJO, JORGE	545	LOPEZ VERA ERNESTANA	796	RAMON VILLALBA GUARINO	796
ALFARO VERA ROSA MARIA	296	DONICHO RECAJO, JORGE	546	LOPEZ VERA ERNESTANA	797		

228	CH
229	CH
230	CH
231	CH
232	CH
233	CH

6